

Fernando Mayorga (coord.)

Crisis y cambio político en Bolivia

Octubre y noviembre de 2019:
La democracia en una encrucijada



CRISIS Y CAMBIO POLÍTICO EN BOLIVIA

Octubre y noviembre de 2019:
La democracia en una encrucijada

Crisis y cambio político en Bolivia

Octubre y noviembre de 2019:
La democracia en una encrucijada

Fernando Mayorga (coord.)



Mayorga, Fernando (coord.)

Crisis y cambio político en Bolivia. Octubre y noviembre de 2019 en Bolivia : la democracia en una encrucijada ; presentación por Fernando Mayorga y Carlos Aguilar – La Paz : Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón (CESU-UMSS) / Oxfam en Bolivia, 2020.

viii; 264 p. ; 21 cm – (CESU-UMSS / Oxfam en Bolivia)

ISBN 978-9917-9816-0-2 (edición impresa)

ISBN 978-9917-9816-1-9 (edición digital)

1. Ciencias políticas – Bolivia; 2. Crisis política (octubre y noviembre, 2019) – Bolivia; 3. Ensayos I. Mayorga, Fernando (coord.) II. Mayorga, Fernando y Aguilar, Carlos, presentación III. Oxfam en Bolivia / CESU-UMSS, ed.

1.ª edición, La Paz: CESU-UMSS/Oxfam en Bolivia, 2020

500 ejemplares

© CESU-UMSS/Oxfam en Bolivia

Centro de Estudios Superiores Universitarios

Universidad Mayor San Simón (CESU-UMSS)

Calle Calama E-235, entre Nataniel Aguirre y Esteban Arze

Teléfonos: (591-4) 4220317-4252951, Fax: (591-4) 4254625

Casilla 5389, Cochabamba, Bolivia

www.cesu.umss.edu.bo; e-mail: cesuumss@gmail.com

Oxfam en Bolivia

Calle 16, n.º 8232 (entre calles Claudio Aliaga

y Roberto Prudencio), Calacoto, La Paz, Bolivia

Teléf.: (591) 2771775

www.oxfam.org/es/

Edición y gestión editorial: Víctor Orduna Sánchez

Diseño y diagramación: Óscar Claros Troche

Diseño de cubierta: Óscar Claros Troche

Depósito legal: 4-1-909-20

Imprenta: Editorial 3600

Impreso en Bolivia

Las opiniones contenidas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de los autores y no necesariamente representan la postura de las instituciones que han contribuido a su financiamiento, producción o difusión.

Este libro se publica bajo licencia Creative Commons:

Atribución-No Comercial-Sin Derivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)

Esta licencia permite descargar y compartir esta obra siempre y cuando se atribuya la autoría y fuente de manera adecuada. No se permite, sin embargo, cambiar de forma alguna los contenidos ni crear obras derivadas o hacer un uso comercial.



Índice

Presentación	vii
i. Derrota política del MAS y proyecto de restauración oligárquico-señorial <i>Fernando Mayorga</i>	1
ii. Tentativa de toma gradual del poder: Prorroguismo fallido y transiciones <i>Erika Brockmann Quiroga</i>	29
iii. Movilizados, satisfechos e indiferentes: Maneras de vivir la crisis <i>Armando Ortuño Yáñez</i>	61
iv. Elecciones y gobierno de transición <i>José Luis Andia</i>	79
v. Cámaras de eco y desinformación: Efectos amplificadores de las redes digitales en la polarización social de 2019 <i>Alex Ojeda Copa</i>	111
vi. La rebelión de los blancos: Causas raciales de la caída de Evo Morales <i>Fernando Molina</i>	141
vii. Estrategias discursivas de lo femenino en política: Una <i>supermadre</i> en el poder <i>Lourdes Montero</i>	163

viii. Después del 20 de octubre:	
El antimasismo como identidad consolidada	193
<i>Marcelo Arequípa</i>	
ix. Evo Morales ante la historia	215
<i>Manuel Suárez</i>	
x. El evismo en la boca del lobo:	
Réplica populista a la afrenta autoritaria	237
<i>Yuri F. Tórrez</i>	
Los autores	259

Presentación

Este libro reúne diez ensayos que reflexionan sobre el proceso político que sufrió Bolivia entre octubre y noviembre de 2019. Algunos textos abarcan los primeros meses de gestión del gobierno interino presidido por Jeanine Áñez, empero fueron escritos antes del anuncio de su candidatura presidencial.

La intención de Oxfam en Bolivia y del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón (CESU-UMSS) es propiciar una reflexión crítica sobre los acontecimientos políticos que vivió Bolivia en esos meses turbulentos. Para cumplir tal propósito, se convocó a profesionales de diversas disciplinas y con distintas posturas que indagaran sobre los eventos acaecidos en esa compleja coyuntura.

Nuestro objetivo es promover un debate pluralista. Un debate urgente y necesario porque, durante y después del conflicto, no solamente los actores políticos y sociales sucumbieron a la polarización ideológica, también lo hicieron las y los intelectuales, sobre todo quienes actúan en la esfera pública como analistas. En estas circunstancias, es

preciso impulsar una deliberación democrática a partir de la promoción de espacios de diálogo académico y político en torno a las ideas planteadas en los ensayos compilados en este volumen.

La Paz, enero de 2020

Fernando Mayorga
Director a.i.
CESU-UMSS

Carlos Aguilar
Director
Oxfam en Bolivia

Derrota política del MAS y proyecto de restauración oligárquico-señorial

Fernando Mayorga

El 21 de febrero de 2020 se cumplieron cuatro años del referendo constitucional que rechazó, por escasa diferencia de votos, la modificación del artículo 168 de la Constitución Política del Estado (CPE). La postulación de Evo Morales a un nuevo mandato presidencial fue rechazada por esa vía plebiscitaria. En adelante, el “Respeto del 21F” se convirtió en una demanda que aglutinó a las fuerzas de oposición que, después de las elecciones del 20 de octubre, promovieron una suerte de rebelión urbana la cual, combinada con un plan de desestabilización política, culminó con la renuncia forzada de Evo Morales. Detrás de la “defensa de la democracia” anidaban otros objetivos. En ocasión del aniversario de esa consulta popular, y en referencia al rechazo de la candidatura de Evo Morales como senador en los comicios del 3 de mayo de 2020, el vocero de un gremio profesional declaró: “Ayer volvimos a cantar victoria con la inhabilitación de Evo y el propósito es *enterrar al MAS*” (Luis Larrea, presidente del Colegio Médico de La Paz, en @rtp_bolivia, cursivas nuestras). De manera menos directa y con un dejo de racismo, lo señaló la presidenta transitoria, Jeanine Áñez, a principios de este año: “No permitamos... que los arbitrarios, los violentos y...

los salvajes puedan volver al poder...” (*Correo del Sur*, 08/01/2020, cursivas nuestras).

Esas declaraciones ponen en evidencia los objetivos de un proyecto de restauración oligárquico-señorial¹ como antítesis del “proceso de cambio” impulsado por el Movimiento al Socialismo (MAS) durante casi 15 años. El carácter oligárquico de este proyecto radica en el retorno al poder de aquellos actores políticos y sociales que fueron desplazados por el MAS en 2006. El protagonismo de campesinos indígenas en el manejo del gobierno durante una década y media era una afrenta para la élite política y empresarial que había sido desplazada de los meandros del poder por dirigentes sindicales, autoridades originarias y mujeres campesinas. Por eso, desde el 10 de noviembre, el objetivo de esa élite tradicional de raigambre oligárquica es desplazar al MAS del centro del espacio político desarticulando su base social de apoyo y destruyendo la imagen de Evo Morales para evitar su postulación presidencial en el futuro. Paralelamente, pretenden retomar una política económica neoliberal para modificar el modelo Estado-céntrico impulsado por el MAS. Por otra parte,

1 La idea de restauración oligárquica se inspira en las reflexiones de René Zavaleta Mercado acerca de la “paradoja señorial”. Al respecto, como señala Luis H. Antezana: “[l]a noción de ‘paradoja señorial’, dicho sea rápidamente, apunta hacia el hecho que, pese a las grandes movilizaciones populares que marcan a la sociedad boliviana y sus más profundas crisis, bajo diversas máscaras—que no excluyen, ciertamente, la apariencia de una posible burguesía nacional—, la tradicional oligarquía se las arregla para seguir ejerciendo el poder... Por otro lado, la ‘paradoja señorial’ apunta también hacia los límites objetivos del hacer socio-político en la Bolivia contemporánea. La dominación oligárquica tiñe con sus ecos y restos coloniales los procesos de constitución, sobre todo, estatal en Bolivia. Y no es un mero factor ‘externo’ sino, en rigor, un fuerte sedimento histórico en el hacer social de este país” (2009: 123).

han establecido nuevas relaciones con el gobierno de Estados Unidos y con fuerzas políticas ultraconservadoras de diversos países. Los próximos comicios generales definirán el derrotero de este proyecto restaurador.

Este ensayo aborda la coyuntura crítica desarrollada entre el 20 de octubre y el 10 de noviembre de 2019, esto es, entre la realización de las elecciones generales y el golpe de Estado que provocó la renuncia de Evo Morales a la presidencia del Estado. Una coyuntura crítica implica una transformación en el curso del proceso político que conlleva un cambio sustantivo en la relación de fuerzas. Esto fue lo que sucedió en esos meses cruciales del año pasado. Para analizar los cambios en el campo político analizamos el despliegue del plan dirigido a provocar la caída del gobierno de Evo Morales, las características del campo opositor, la disputa por el sentido de la democracia y el desempeño del MAS durante el conflicto.

PLAN PARA UN GOLPE DE ESTADO

El punto de partida es afirmar que no hubo una alteración de los resultados para provocar la victoria de Evo Morales en primera vuelta, sin embargo, se impuso la idea de “fraude” y esa consigna fue una decisiva pieza discursiva en la conjuración opositora urdida para derrocar a Evo Morales mediante un acto de fuerza, un golpe de Estado.

La estrategia rupturista de algunas fuerzas opositoras se inició antes de las elecciones generales. En octubre de 2018, a raíz del revés diplomático en la Corte Internacional de Justicia en La Haya, algunos grupos habían pedido la “renuncia” de Evo Morales como una consigna adicional de las movilizaciones opositoras. Durante la campaña electoral varias organizaciones cívicas señalaron que no

reconocerían una victoria del MAS. En las resoluciones de un multitudinario cabildo realizado en Santa Cruz de la Sierra se mezclaron varias consignas: “voto castigo” al MAS, “voto útil” por Carlos Mesa, renuncia del binomio oficialista por “inconstitucional” y, como colofón, el desconocimiento de la victoria de Evo Morales ante un “posible fraude”; una idea alimentada con antelación con las acusaciones acerca de la subordinación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) al partido de gobierno. Precisamente, el uso de la noción de fraude fue crucial en la estrategia discursiva opositora en consonancia con las posturas de la Organización de Estados Americanos (OEA), un actor externo decisivo en el curso del conflicto.

En la noche de los comicios, con datos del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) de algo más del 80% de votos, Evo Morales superaba ampliamente el 40% de la votación pero no tenía una ventaja mayor a diez puntos respecto a Carlos Mesa. Media hora después del anuncio del TSE, el candidato de Comunidad Ciudadana (CC) declaró que la segunda vuelta era inevitable, no obstante faltaba el recuento del 17% de votos. Evo Morales anunció la victoria del MAS en senadores y diputados, y dijo que confiaba en que el voto rural les daría la victoria en primera vuelta. Se suspendió —sin ninguna explicación por parte del TSE— el avance de resultados de la TREP provocando suspicacia y desconfianza y cuando se reanudó, al día siguiente, el recuento preliminar de alrededor del 95% de votos, otorgaba una ventaja mayor al binomio del MAS, lo que implicaba descartar la segunda vuelta. La reacción de los grupos opositores fue atacar las sedes de varios Tribunales Departamentales Electorales que fueron incendiadas a pesar de la invocación a “movilizaciones pacíficas” por

parte de Carlos Mesa, quien convocó a la realización de vigiliyas contra un “fraude monumental” en curso.² Por su parte, los comités cívicos y otras organizaciones convocaron a paros y bloqueos en las ciudades, medidas que fueron aglutinando a diversos sectores bajo la consigna de “Mi voto se respeta”, sobre todo en las zonas residenciales y de clase media.

El 23 de octubre, la OEA asume una postura política en consonancia con la oposición al afirmar, en el Informe Preliminar de la Misión de Observación Electoral, que tenía que convocarse a segunda vuelta: “En estos momentos, con 96,78% de las actas computadas, el cómputo definitivo marca una diferencia de 9,48% entre los binomios más votados, lo que de mantenerse significaría una segunda vuelta. En el caso de que, concluido el cómputo, el margen de diferencia sea superior al 10%, estadísticamente es razonable concluir que será por un porcentaje ínfimo. Debido al contexto y las problemáticas evidenciadas en este proceso electoral, continuaría siendo una mejor opción convocar a una segunda vuelta”. De manera inverosímil, una misión electoral recomendaba una “opción” política antes de que concluya el recuento oficial de votos. Con esa “recomendación” dio pábulo a la idea de segunda vuelta como un hecho irremediable alimentando las protestas de la oposición. Cinco días después, el TSE anunció la finalización el cómputo oficial confirmando la victoria de Evo Morales en primera vuelta con 47,08% de votos frente al 36,51% de Carlos Mesa. La reacción opositora fue la radicalización de sus

2 Fuente: “Se está consumando fraude monumental. Candidato de CC plantea acción de unidad nacional”. Noticia emitida por Gigavisión, disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=bREcfMPZ1MQ>

protestas, como en el caso de Cochabamba, donde un cabildo convocó a “derrotar el fraude” y “movilización nacional hasta expulsar a Evo Morales” (*Opinión*, 25/10/2019).

Ante los cuestionamientos, el MAS optó por solicitar una auditoría integral a la OEA para que verifique el proceso del recuento de votos. El organismo regional aceptó el pedido pero las fuerzas de oposición rechazaron la auditoría al influjo del Comité Cívico Pro Santa Cruz cuyo presidente, Luis Fernando Camacho, empezó a liderar la protesta asumiendo posturas más radicales, a las cuales se subordinaron las organizaciones políticas, en particular CC.

Así, la consigna de “segunda vuelta” fue desplazada por otra demanda: “Nuevas elecciones y sustitución del TSE”. Esta demanda fue la antesala de una consigna más extrema, aprobada el 2 de noviembre en un cabildo del Comité Pro Santa Cruz, que dio un plazo de 48 horas a Evo Morales para renunciar y pidió a las FFAA “ponerse del lado del pueblo”. Luis Fernando Camacho sentenció: “No estamos derrocando a un gobierno, estamos liberando a toda una nación” (*Los Tiempos Digital*, 02/11/2019).

Lo había anunciado el 31 de octubre cuando Evo Morales pidió una pausa en las movilizaciones opositoras hasta que termine la auditoría de la OEA pero la respuesta del líder del Comité Pro Santa Cruz fue plantear la renuncia del presidente. El golpe estaba en marcha.

El 8 de noviembre se inició un motín policial en Cochabamba que, en un par de días, se expandió a otras unidades. Esta acción fue coordinada con grupos opositores y los cuarteles fueron rodeados por manifestantes que presionaron para que los policías se sumen al pedido de renuncia del presidente, aunque las razones expuestas por los amotinados tenían que ver con reclamos corporativos.

El 10 de noviembre, la OEA presentó el informe preliminar de auditoría electoral³ destacando que hubo manipulación informática en los comicios. La presentación del Comunicado del Grupo de Auditores de la OEA—dos días antes de lo previsto— fue parte de la asonada. A partir de los “Hallazgos preliminares” de dicho informe, Luis Almagro señaló: “En virtud de la gravedad de las denuncias y análisis respecto al proceso electoral que me ha trasladado el equipo de auditores nos cabe manifestar que la primera ronda de las elecciones... debe ser anulada y el proceso electoral debe comenzar nuevamente” (ANF, 10/11/2019). Era la pieza que faltaba para dar pábulo a la idea de fraude.⁴ En esas circunstancias, Evo Morales

3 Denominado, técnicamente, “Análisis de Integridad Electoral. Elecciones Generales en el Estado Plurinacional de Bolivia, 20 de octubre de 2019. En diciembre fue publicado el Informe Final (OEA, 2019)”.

4 *The Washington Post* publicó un reportaje de John Curiel y Jack R. Williams, a fines de febrero de 2020, titulado “Bolivia descartó sus elecciones de octubre como fraudulentas. Nuestra investigación no encontró ninguna razón para sospechar fraude. Los bolivianos celebrarán una nueva elección en mayo, sin el derrocado presidente Evo Morales”. En este texto se afirma: “No parece haber una diferencia estadísticamente significativa en el margen antes y después de la suspensión de la votación preliminar. En cambio, es muy probable que Morales haya superado el margen de 10 puntos porcentuales en la primera ronda... realizamos 1.000 simulaciones para ver si se podía predecir la diferencia entre el voto de Morales y el recuento del candidato al segundo lugar, utilizando solo los votos verificados antes de que se detuviera el conteo preliminar. En nuestras simulaciones, descubrimos que Morales podía esperar al menos una ventaja de 10,49 puntos sobre su competidor más cercano, por encima del umbral de 10 puntos porcentuales necesario para ganar directamente. Nuevamente, esto sugiere que cualquier aumento en el margen de Morales después de la detención [del sistema TREP] puede explicarse completamente por los votos ya contados... No hay respaldo estadístico para los reclamos de fraude electoral... No hay ninguna evidencia estadística de

anunció la convocatoria a nuevas elecciones generales, con nuevas autoridades electorales y nuevos actores políticos y llamó a un diálogo a las fuerzas políticas, el cual fue rechazado por Carlos Mesa. Pocas horas después, el comandante de las FFAA “sugirió” la renuncia de Evo Morales: “Ante la escalada de conflicto que atraviesa el país, velando por la vida y la seguridad de la población, sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad...” (*La Razón Digital*, 10/11/2019). Por su parte, Luis Fernando Camacho ingresó al Palacio de Gobierno con escolta policial y con una bandera tricolor y una Biblia en la mano. Al motín policial y la insubordinación militar se sumaron acciones coercitivas (quema de viviendas, secuestro de familiares, amenazas de muerte) contra autoridades, legisladores y dirigentes sindicales destinadas a debilitar al partido de gobierno. Se consignan alrededor de 40 casos entre los que sobresalen un ministro y el presidente de la Cámara de Diputados. Ante estas circunstancias, Evo Morales decidió presentar su carta de dimisión:

Estoy renunciando para que mis hermanas y hermanos dirigentes, autoridades del MAS no sigan hostigados, perseguidos, amenazados. Quiero decirles la lucha no termina acá, vamos a continuar con esta lucha por la igualdad y la paz. Lamento mucho este golpe... cívico-político-policial (*Los Tiempos Digital*, 10/11/2019).

fraude que podamos encontrar: las tendencias en el conteo preliminar, la falta de un gran salto en el apoyo a Morales después del alto y el tamaño del margen de Morales parecen legítimos. En general, el análisis estadístico y las conclusiones de la OEA parecerían profundamente defectuosos” (*La Razón Digital*, 27/01/2020).

Lo hizo desde el Chapare, su bastión electoral, porque su vida corría peligro.

El golpe de Estado se consumó y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, lo festejó con ironía: “Fue un ‘autogolpe de Evo Morales’... Dieron un golpe de Estado quienes se robaron la elección” (*Opinión*, 9/11/2019). Casi un mes después, el 4 de diciembre, recién se emitió el Informe de Análisis de Integridad Electoral de la OEA (2019) que no demuestra ningún “fraude monumental”.⁵

También, en el mes de diciembre, Luis Fernando Camacho, en un video difundido en redes sociales, relató que su padre estableció acuerdos con la Policía Nacional y las FFAA para que se sumen al plan del movimiento cívico: “Cuando pudimos consolidar que ambos [militares y policías] no iban a salir fue que dimos las 48 horas. Porque sabíamos que Santa Cruz podía trasladarse a La Paz (...). Ese fue el momento más duro que pasamos” (“Camacho dice que su padre medió con militares y policías para evitar represión”, *Los Tiempos Digital*, 28/12/2019).

5 Según el informe, los expertos en caligrafía encontraron conjuntos de actas donde dos o más actas fueron llenadas por la misma persona o las firmas fueron falsificadas. La gran mayoría de estas actas son de recintos en zonas remotas de Chuquisaca o Potosí, o de zonas cocaleras de Cochabamba o La Paz. Sin embargo, si se eliminan los votos del MAS en estas actas igual resulta en victoria de Evo en primera vuelta. Asimismo, se refieren a 1.500 actas físicas que no pudieron revisar porque pasaron directamente del sistema TREP al cómputo y no tienen registro físico. Dicen que no tienen registro físico de esas actas por problemas en la custodia. Lo que no dicen, directamente, es que no hay registro de estas actas por la quema de las instalaciones de los tribunales electorales en cinco departamentos. Finalmente, casi dos tercios del informe es acerca de las deficiencias de seguridad del sistema informático, pero de ahí no se colige que alguien haya aprovechado las deficiencias para modificar los resultados de las actas.

También a fines de diciembre surgió otro dato relativo al plan:

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) detectó, como parte de la campaña de apoyo al presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y al gobierno interino de Jeanine Áñez, que... se ha recurrido al uso de miles de cuentas falsas en Twitter desde la renuncia de Evo Morales. Los datos mostrarían alrededor de 68 mil cuentas creadas, las cuales compartieron 14 *hashtags* que habrían sido compartidas por 252.090 cuentas diferentes, que hicieron 1.048.575 tuits del 9 al 17 de noviembre. La CIDH resaltó que algunos *hashtags* utilizados como parte de la campaña son: #BoliviaLibreYDemocratica, #NoHayGolpeEnBolivia, #EvoEsFraude, #BoliviaUnida (Aristegui noticias, 28/12/2019).⁶

En suma, al margen de la narrativa opositora que señala que la causa de la caída de Evo Morales es su talante antidemocrático que se manifestó a partir del incumplimiento del resultado del referendo del 21 de febrero de 2016 es necesario destacar que los hechos no respondieron a una secuencia fortuita sino que formaron parte de una serie de actos planificados para lograr el derrocamiento de un presidente constitucional mediante una renuncia forzada con acciones de hecho y con la insubordinación de las instituciones estatales que tienen el monopolio del uso legítimo de la fuerza.

En esa medida, es posible afirmar que se trató de un golpe de Estado aunque no comporta los rasgos convencionales de eventos similares del siglo pasado. Se trató del “uso ostensible de la fuerza [que] golpea la *institución*

6 Fuente: <https://aristeginoticias.com/2812/mundo/la-cidh-identifico-68-mil-cuentas-en-twitter-creadas-en-apoyo-a-gobierno-de-facto-en-bolivia/>

impersonal del estado, desafiando a un estado constitucional de derecho que ya estaba severamente dañado por la no subordinación de dos fuerzas estatales al mando constitucional... Es, por tanto, un golpe contra la institución impersonal del estado, aunque no se trata, como en los golpes militares, de la conquista ofensiva y violenta del estado por parte de un actor colectivo, elitista y minoritario” (Lesgart, 2019: 4).⁷

En esa medida, la caída de Evo Morales fue resultado de un plan cuyo desenlace, como acontece en cualquier evento histórico, también dependió de la concurrencia de factores contingentes. Fue un plan que tuvo actores con diverso grado de protagonismo.

EL CAMPO OPOSITOR

La oposición al MAS consiguió una inesperada victoria política. Del objetivo inicial de vencer a Evo Morales en segunda vuelta —en el departamento de Santa Cruz se impuso el “voto útil” que benefició a Carlos Mesa para ese fin— transitó de manera sucesiva a demandas más radicales (nuevas elecciones y renuncia voluntaria de

7 En esa veta, Lesgart reitera: “...la ‘recomendación’ realizada por la Policía y las FFAA a Evo Morales en el momento inmediatamente posterior a que el presidente aceptara los resultados de la auditoría de la OEA y llamara a elecciones para encontrar una salida institucional a la crisis política desatada, no sólo renueva la presencia de los militares y policías en la vida pública y política, desnuda la ostensible acción de amenaza coactiva de dos de las instituciones estatales que poseen el monopolio de la violencia física, sobre el personaje político principal. Un presidente que, si hubiese funcionado el Estado Constitucional de Derecho, tendría que haber encontrado en esas dos instituciones subordinación... He aquí el núcleo principal de la situación golpista” (2019: 5).

Evo Morales) hasta concluir en la caída del gobierno del MAS y la captura del poder político. ¿Qué cambios se produjeron en la composición y accionar de los componentes del campo opositor para que se produzca este desenlace?

Durante el proceso electoral se fue forjando una coalición opositora que agrupó a organizaciones políticas, entidades cívicas y grupos sociales urbanos de clase media. Fue una articulación episódica y no tuvo mando único, aunque la orientación política durante esta coyuntura crítica fue definida por Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Pro Santa Cruz. Esa capacidad de iniciativa provino de las resoluciones de un cabildo realizado el 4 de octubre a propósito del desastre ambiental provocado por el incendio en la Chiquitania. En esa oportunidad, aparte de algunas medidas referidas al desastre natural, se aprobó una agenda política: federalismo, respeto al voto del referendo de 2016, control en los comicios y, en palabras de Luis Fernando Camacho, “rebeldía y desobediencia ante un posible fraude. Es nuestro derecho y eso no es sedición, es soberanía... Hoy empezamos a dar el punto final a las imposiciones, por eso vinimos a decidir” (“Cabildo cruceño clamó por la Chiquitania y democracia”, *El País*, 5 octubre de 2019). Asimismo, se decidió “voto castigo” a Evo Morales, quien fue acusado de “dictador”, un elemento discursivo decisivo en la fase postelectoral puesto que la antinomia entre estabilidad económica e incertidumbre que dominó el debate electoral fue desplazada por la antinomia entre democracia y dictadura, en un retorno a la disputa por el sentido de la democracia entre oficialismo y oposición, un aspecto decisivo para entender la pérdida de capacidad hegemónica del MAS. El tema de la Chiquitania no sería marginal puesto que

le permitió al discurso cívico articular otro elemento de crítica a Evo Morales (“ecocida”) y ampliar su convocatoria a las nuevas generaciones, cada vez más sensibles ante temas medioambientales.

A partir del referendo del 21 de febrero de 2016, el campo opositor se fortaleció con la presencia de nuevos actores sociales y partidos extraparlamentarios. La campaña por el No provocó la gestación de una nueva modalidad de acción política de los sectores medios urbanos disconformes con el MAS. Esta acción se organizó al margen de los partidos bajo la modalidad de “plataformas ciudadanas” con un evidente protagonismo en el uso de redes sociales digitales y denotando una capacidad de movilización inédita en años anteriores.

Las plataformas, junto con los gremios profesionales y las iglesias católica y evangelista, fueron cruciales en las protestas que derivaron en la abrogación de la ley del Código Penal en diciembre de 2018, una de las victorias opositoras más importantes pese a que no lograron vincular el rechazo a esa norma con el “Respeto al 21F”. Esa acción opositora se enlazó con los comités cívicos cuyas convocatorias a “paro nacional” no tuvieron éxito, sin embargo, se constituyeron en actores estratégicos —sobre todo el Comité Pro Santa Cruz— en esta coyuntura crítica.

Se produjo una politización de sectores urbanos de clase media, sobre todo gente con perfil de joven apartidista pero defensor de la democracia y la CPE, de origen ciudadano y sin vínculo con organizaciones sectoriales o base territorial. Es decir, con rasgos opuestos a los que caracterizan a la base social de apoyo al MAS, mayoritariamente rural y periurbana y sólidamente organizada en sindicatos. Una juventud que, además, creció durante los 14 años de presencia del MAS en el manejo del gobierno

y que, por ende, es inmune a la épica de la “guerra del gas” de octubre de 2003, del mismo modo que no organiza sus visiones del mundo a partir de temas que influyeron en sus padres: dictadura militar, neoliberalismo, antiimperialismo. Las “plataformas ciudadanas” fueron la instancia organizativa primaria de la movilización que, luego, adquirió carácter territorial porque se afincó en los vecinos quienes fueron convocados mediante redes sociales digitales para realizar bloqueos y toma de rotondas y puentes. Los jóvenes fueron movilizados con consignas genéricas como la “lucha por la libertad” y se puso de moda —sobre todo entre las mujeres— el uso de la bandera tricolor a modo de capa, proporcionando una dosis de aventura y prestigio a su presencia en las calles. A ellos se sumaron madres y abuelas convocadas por las iglesias barriales que organizaron misas nocturnas para dotarle un aditamento de fe a la movilización política. No es casual que, durante el amotinamiento policial, en las puertas de los cuarteles varias mujeres vestidas de negro rezaran con un rosario en las manos. La incorporación de las creencias religiosas como factor de movilización es relevante porque reforzó el papel que jugaran las *fake news* durante el conflicto para atizar la protesta generando miedo ante un “enemigo”. En ambos casos, la conducta está motivada por una convicción que se sustenta en la negación de la objetividad.

Otra organización que jugó un papel destacado fue el autodenominado Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) afincado en La Paz. La adopción de esa sigla no fue fortuita y era parte de la disputa por el sentido de la democracia al MAS puesto que se trata del nombre de una entidad creada por la izquierda partidista y sindical en los años ochenta para

enfrentar los golpes militares. Estuvo bajo el mando de Waldo Albarracín —entonces rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA)— con apoyo de algunas Organizaciones No Gubernamentales y la Fundación Jubileo, vinculada a la Iglesia católica. No tenía similar capacidad de convocatoria pero era un aliado clave para el Comité Pro Santa Cruz que envió miembros de un grupo de choque, Unión Juvenil Cruceñista, que fueron cobijados en la UMSA bajo órdenes del rector, para impulsar las protestas antigubernamentales en la sede de gobierno.⁸

Este fue el accionar de los actores sociales, empero ¿cuál el rol de los partidos políticos? Destaca, sin duda, un papel subordinado a las decisiones del Comité Pro Santa Cruz, algo que resalta en el caso de Carlos Mesa quien, en varias ocasiones, como en el caso de la auditoría de la OEA, revisó sus decisiones iniciales para sumarse a las directrices de Luis Fernando Camacho.

La oposición no era una coalición compacta sino un campo conformado por actores políticos y sociales con posturas diversas y variados objetivos. Este es un rasgo común de la oposición desde que el MAS se hizo cargo del gobierno en 2006, no obstante en esta fase del proceso político adquirió mayor complejidad. A la oposición partidista se sumaron los comités cívicos y otras entidades. Es preciso destacar que la oposición parlamentaria al MAS

8 En una entrevista radial con María Galindo, realizada en febrero de 2020, Waldo Albarracín reconoció este y otros hechos, como la selección de Jeanine Áñez como presidenta mediante sucesión constitucional, que se decidió en una reunión convocada por la Iglesia católica con la presencia de delegados del Comité Pro Santa Cruz, Conade y Comunidad Ciudadana y representantes diplomáticos de Brasil y la Unión Europea (Fuente: “Barricada: ‘Waldo Albarracín reconoce un error en su alianza con Camacho’”, por María Galindo, Radio Deseo, 13/01/2020. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=o81ilLAVON0>).

varió en su composición de gestión en gestión durante una década y media, así como distintos fueron los principales rivales de Evo Morales en las cuatro últimas contiendas electorales. En esta oportunidad, los partidos tomaron la iniciativa y, aparentemente, iban a conducir el accionar de la coalición opositora. Así, tres días después de los comicios se conformó una instancia colectiva denominada Coordinadora de Defensa de la Democracia que hacía augurar un accionar compacto y predecible. Entre las organizaciones políticas se consignaba la presencia de CC y Movimiento Demócrata Social (Demócratas), pero también Unidad Nacional (UN) y Soberanía y Libertad (SOL.bo). Por su parte, la oposición extra partidista estuvo representada por los comités cívicos de Santa Cruz y Potosí, y por el Conade.

No obstante, esta instancia de coordinación tuvo una existencia efímera porque solamente emitió dos comunicados: el 23 de octubre exigió la realización de la segunda vuelta y tres días después rechazó el cómputo final denunciando fraude. Posteriormente, los diversos actores jugaron sus propias cartas y adoptaron distintas posiciones en una suerte de competencia por el liderazgo de la oposición, sobre todo entre el candidato de CC y el presidente del Comité Pro Santa Cruz. Y en esta pugna fueron modificando sus objetivos. Carlos Mesa transitó del reclamo por la segunda vuelta al pedido de nuevas elecciones, manteniendo una posición ambigua respecto a la auditoría de la OEA hasta que, el 30 de octubre, el líder cívico de Santa Cruz declaró en un cabildo: "No vamos a aceptar ninguna auditoría... Queremos que se anulen las elecciones".⁹ Y esa postura

9 En un comunicado, la OEA aseguró que Carlos Mesa había aceptado, mediante conversación telefónica, los términos del

definió el accionar del conjunto de la oposición. Así, en el caso del ala cívica de la oposición, las posturas transitaron del apoyo a la segunda vuelta hacia el pedido de convocatoria de nuevas elecciones y, coetáneamente, la renuncia de Evo Morales. Aunque el día del golpe de Estado, Camacho sostuvo que se debía conformar una “junta de gobierno” conformada por “notables” (*Correo del Sur*, 10/11/2019).

La radicalización de posiciones, en el marco de una pugna por dirigir el campo opositor, fue un comportamiento constante que tuvo como consecuencia imprevista una reacción confusa del MAS en el manejo del conflicto porque unas veces su interpelación se dirigía a Carlos Mesa y, en otras ocasiones, a Luis Fernando Camacho. En suma, no existía un interlocutor oficial en las filas de la oposición y, por eso, el MAS no tuvo capacidad para enfrentar con éxito a los diversos frentes y actores del conflicto.

Finalmente, el Comité Pro Santa Cruz actuó en la línea de la sucesión constitucional y participó en las reuniones decisivas para definir el “gobierno de transición” junto con un delegado de Carlos Mesa y Waldo Albarracín, del Conade. Es decir, la bifurcación entre actores políticos y dirigentes durante el conflicto culminó, después del golpe de Estado, en un acuerdo entre los principales actores de la protesta: CC como fuerza política y Comité Pro Santa Cruz y Conade como fuerzas sociales. Y, como acontecía en el siglo pasado, la Iglesia católica jugó un papel de mediación porque también formó parte de la coalición

acuerdo con el gobierno para la realización de la auditoría con la condición de que sus resultados fueran vinculantes. Finalmente, Comunidad Ciudadana no aceptó la auditoría por presión del Comité Cívico Pro Santa Cruz (*Los Tiempos Digital*, 8/11/2019).

opositora. En un comunicado, emitido el 11 de noviembre, la Conferencia Episcopal de Bolivia declaró: “Lo que sucede en Bolivia no es un golpe de Estado, lo decimos ante los ciudadanos bolivianos y ante toda la comunidad internacional. Llamamos a los bolivianos a la paz y no cometer actos vandálicos, ni de revancha, ni nada de lo que podamos arrepentirnos (...) Los obispos también llamamos a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas de la nación a cumplir con urgencia con su rol constitucional de defensa de la propiedad y de las personas, preservando la vida y la libertad de todos” (“Reacciones. Bolivia: tras la renuncia de Evo Morales, la Iglesia boliviana dice que ‘no hay un golpe de Estado’”, *Clarín*, 11/11/2019).¹⁰ Esa declaración también fue firmada por CC, varios comités cívicos y el Conade denotando el accionar conjunto de la institución religiosa con los actores políticos y sociales de la oposición.

DISPUTA POR EL SENTIDO DE LA DEMOCRACIA

Desde la realización del referendo constitucional de 2016, el MAS enfrentó el reto de mantener la democracia como eje de su proyecto político, una noción de democracia vinculada a la ampliación de la participación popular y a la inclusión social. La presencia de indígenas y mujeres en la política eran la expresión de esos avances democratizadores. En el plano institucional se manifestó en el reconocimiento de tres formas de democracia (representativa, directa y participativa, comunitaria) bajo la noción de democracia intercultural, con diversas modalidades de ejercicio, entre ellas el referendo. La reacción del MAS

10 Fuente: https://www.clarin.com/mundo/bolivia-renuncia-evo-morales-iglesia-boliviana-dice-golpe-_0_-0eJba9F.html

frente a su derrota en esa consulta popular marcó el inicio de una disputa por el sentido de la democracia puesto que apostó por la postulación de Evo Morales mediante otras vías legales desoyendo el veredicto de las urnas. El No ganó con un escaso margen de diferencia pero el rechazo a la pretensión oficialista de la reelección de Evo Morales fue el inicio de un creciente descontento político que, más adelante, se manifestó en acciones de protesta en varias ciudades en repudio a una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional que, en noviembre de 2017, dio curso a una demanda promovida por el MAS para habilitar a Evo Morales en los comicios presidenciales de 2019 desoyendo los resultados del referendo. A partir de entonces, las protestas opositoras —como el rechazo al nuevo Código Penal y a la Ley de Organizaciones Políticas— se enlazaron con las consignas de “respeto a la soberanía popular” y “defensa de la democracia”.

La oposición enarboló el lema de “Respeto al 21F” a manera de expresión de valores democráticos tales como alternancia, pluralismo y vigencia del Estado de derecho; e inclusive de algunos principios que antes eran enarbolados por el MAS, como la soberanía popular expresada en el referendo en tanto ejercicio de democracia participativa. Frente a esta postura, el MAS defendió valores tales como inclusión social, participación popular, paridad de género e interculturalidad, bajo la consigna de “ampliación de la democracia” y resaltó la equivalencia entre democracia y justicia, remarcando el crecimiento económico con redistribución social en tanto logros del modelo económico del “proceso de cambio”.

En suma, para el MAS el objetivo de la democracia era la justicia y esta apelación se sostuvo en el clivaje Estado versus mercado; en cambio, para el discurso opositor, la

meta era la libertad y para ese fin esgrimió la antinomia dictadura versus democracia con el propósito de cuestionar la reelección de Evo Morales. En el discurso opositor se hizo cada vez más recurrente la caracterización del gobierno del MAS como “dictadura” y al presidente como “tirano”. También se hizo frecuente el uso de los vocablos “autoritarismo” y “totalitarismo” de manera indistinta o una forzada comparación con los casos de Venezuela y Nicaragua. Como en otros países, la consigna “No queremos ser otra Venezuela” fue utilizada de manera constante en las protestas opositoras.

Durante la campaña electoral, el tema económico adquirió mayor importancia y el MAS apuntó a la estabilidad con el eslogan “Futuro Seguro”, en cambio, sus rivales orientaron sus críticas —en el caso de Bolivia Dice No (“Manos limpias”)— hacia la corrupción y la necesidad de renovación política, y —en el caso de CC (“¡Ya es demasiado!”)— a la corrupción, la injusticia, el autoritarismo y el estancamiento de la economía. Sin embargo, a partir del 20 de octubre, con las denuncias de fraude ante la victoria de Evo Morales en primera vuelta, las fuerzas de oposición empuñaron con más vigor la antinomia democracia versus dictadura y con la consigna “Mi voto se respeta” se presentaron como “defensores de la democracia y la libertad”. El MAS optó por una vía institucional para responder a las denuncias de fraude estableciendo un acuerdo con la OEA para la realización de una auditoría electoral integral con el objetivo de que se establezca o desmienta la validez de los resultados. Pero ya era tarde. La oposición, sobre todo los comités cívicos, habían optado por la ruptura del orden constitucional.

El MAS perdió la batalla discursiva por el sentido de la democracia porque, esos días, la oposición articuló

varios valores a su protesta: libertad, respeto a la soberanía popular, independencia de poderes y transparencia, que no solamente le permitió desarrollar un discurso de rechazo a la legitimidad de la reelección de Evo Morales (legitimidad de origen) sino también un cuestionamiento a la presencia del MAS en el gobierno, cuyo régimen fue acusado de “dictatorial” y “autoritario”. La capacidad hegemónica del MAS llegó a su fin porque la noción de democracia fue desarticulada de su discurso y dotada de valores distintos a los que el MAS propugnó y aprobó en la Asamblea Constituyente.

A esta disputa por el sentido de la democracia es preciso adjuntar dos elementos discursivos que resultaron eficaces para la acción opositora: ecología y religión.

Como vimos, el caso de la Chiquitania le ofreció al Comité Pro Santa Cruz la posibilidad de articular elementos ecologistas a su discurso opositor y por esa vía interpelar a la juventud. También le permitió reforzar su prédica regionalista porque culparon del desastre a los campesinos colonizadores —del altiplano y de filiación oficialista— y los grupos empresariales que habían establecido acuerdos con el gobierno cerraron filas detrás de la entidad cívica.

Desde el inicio de la protesta cívica, el presidente del Comité Pro Santa Cruz esgrimió elementos religiosos y los puso en el centro de su discursividad: “La Biblia volverá al Palacio Quemado” fue la consigna central de su mensaje y tenía una doble connotación: anticomunista y antiindígena. Por un lado expresaba el rechazo al “socialismo del siglo XXI” y al vínculo del MAS con sus aliados, en particular Venezuela, que era y es usada como ejemplo de populismo de izquierda y autoritarismo. Por otro lado, la Biblia significaba el rechazo

a la presencia de indígenas en el poder político y al pluralismo religioso, concretado en el carácter laico del Estado Plurinacional. Se trataba de una combinación de retorno de la evangelización colonial para “exorcizar” el espacio político¹¹ y una apelación a valores ultra conservadores de raigambre religiosa. Estos ingredientes provocaron la adhesión de mujeres adultas (madres y abuelas) a la movilización y le otorgaron un condimento de “cruzada”. En suma, el arco de la interpelación opositora se fue ampliando en el transcurso del conflicto logrando la adhesión de diversos segmentos sociales a la “lucha por la libertad”.

LA DERIVA OFICIALISTA

El gobierno del MAS sufrió varias derrotas políticas en el pasado. En las urnas, en 2016, y en varios conflictos como el “gasolinazo”, el TIPNIS y el Código Penal. En el primer caso, en 2010, se derogó el decreto del alza de combustibles; en el segundo se promulgó una ley de intangibilidad, en 2011; y en el tercero se abrogó el proyecto de Código Penal, en 2018. En esos eventos, el gobierno demostró serias dificultades para manejar la conflictividad (Mayorga, 2019).

11 “Evo, enviado del diablo”, “Evo Satanás” fueron consignas pintadas en las paredes de algunas ciudades. Asimismo, el día del golpe de Estado, Luis Fernando Camacho ingresó a Palacio Quemado con una Biblia en las manos y la puso encima de una bandera tricolor. Entretanto, algunos policías retiraron las wiphalas de sus mástiles y las rompieron o quemaron porque consideraban que eran un símbolo del MAS. Ese acto provocó una enorme protesta popular en defensa de la bandera indígena —reconocida en la CPE como símbolo patrio— que tuvo como respuesta una serie de actos de desagravio de los jefes políticos, dirigentes cívicos y autoridades policiales.

En esta ocasión, en octubre de 2019, las reacciones del MAS denotaron la ausencia de una estrategia para encarar el conflicto que se desató en la noche de las elecciones a partir de la suspensión de la TREP. La postura de Carlos Mesa reclamando la “segunda vuelta” fue contrarrestada con un cauto discurso de espera del cómputo final —habida cuenta que faltaba contar poco más del 15%—, el cual, desde su perspectiva, confirmaría la victoria de Evo Morales con más de diez puntos de diferencia por efecto del voto leal en las zonas rurales. El voto campesino indígena fue reivindicado con una apelación a la igualdad ciudadana pero no tuvo eficacia porque el discurso opositor estaba articulado en torno a la consigna “mi voto se respeta”, como reclamo contra el supuesto fraude. Esta postura fue reiterativa durante el conflicto; así, en respuesta al pedido de renuncia a su cargo, Evo Morales declaró: “¿Qué renuncia? Aquí es hacer cumplir la Constitución Política del Estado, hacer respetar el voto del pueblo boliviano. El gran problema que tienen algunos grupos es que no aceptan el voto del movimiento indígena” (*La Razón Digital*, 5 de noviembre de 2019).

El MAS optó por la vía institucional para resolver el conflicto con la realización de la auditoría electoral de la OEA pero este procedimiento destinado a verificar los resultados fue rechazado por CC, ante la presión del movimiento cívico. Este desistimiento de la segunda fuerza más votada implicó que el sistema de partidos —la política institucional— quede al margen del proceso político decisional. Y cuando la OEA presentó su informe sugiriendo la anulación de los comicios y la convocatoria a nuevas elecciones, no tuvo otra opción que asumir esa directriz convocando a un diálogo a las cuatro fuerzas que

obtuvieron representación parlamentaria en los comicios de octubre. Ese llamado también fue rechazado por CC y los otros partidos porque las vías institucionales estaban clausuradas. El conflicto se definiría en las calles, un espacio antaño controlado por el MAS, pero que empezó a ser disputado por la oposición desde fines de 2017, cuando se confirmó la repostulación de Evo Morales.

La oposición ganó en las calles porque optó por una protesta territorial de carácter pacífico con una consigna sencilla (“Mi voto se respeta”) que le permitió ampliar su interpelación democrática. Desde el 23 de octubre se iniciaron los bloqueos y cabildos que, paulatinamente, se extendieron de Santa Cruz a otras capitales de departamento, sobre todo Potosí, Sucre y Cochabamba. Las reacciones del oficialismo estuvieron signadas por el desprecio al alcance y carácter de la protesta ciudadana. Varias declaraciones de Evo Morales denotaron esa percepción cuando señaló, por ejemplo, que los universitarios protestaban por notas o porque recibían dinero, que la suspensión de los partidos del certamen de fútbol profesional perjudicaba a la gente o que los masistas darían lecciones sobre marchas y bloqueos. A su juicio, las movilizaciones eran resultado de un “chantaje por platita o notita”. Además, “con pitita amarrada bloquean... Antes no había que obligar a nadie para que acaten (...) Soy capaz de hacer un taller o seminario sobre cómo hacer un paro o una marcha”, manifestó el presidente (*Los Tiempos*, 25/10/2019).

Posteriormente amenazó con un cerco campesino a las ciudades para debilitar las protestas opositoras: “En las ciudades dejen de perjudicar con paros, si quieren paros no hay problema, los vamos a acompañar con cerco a las ciudades para hacernos respetar, a ver si aguantan...” (“Evo:

vamos a cercar las ciudades a ver si aguantan”, *El Día Digital*, 27/10/2019). Esta declaración dañó aún más la imagen del presidente y activó el clivaje campo/ciudad provocando la ampliación y cohesión de la protesta urbana ante la existencia de un “enemigo” percibido, además, en clave racista. Este elemento fue decisivo para justificar acciones violentas de grupos irregulares contra seguidores del MAS porque en varias ciudades se instaló una suerte de histeria colectiva mediante rumores sobre una “invasión campesina”.

De manera coincidente, Evo Morales descartó un diálogo con la oposición: “Aquí no hay negociaciones políticas, aquí se respeta la Constitución y se respeta al partido que ha ganado en las últimas elecciones” (*ibid.*). Para entonces, cinco días después de las elecciones, el TSE había anunciado la culminación del escrutinio oficial que daba la victoria en primera vuelta a Evo Morales. La oposición rechazó este informe y ratificó sus denuncias acerca del sometimiento del TSE al partido de gobierno. Así, una semana después de los comicios y con varias ciudades paralizadas durante cuatro días, el MAS discurría entre la defensa de su victoria en las urnas y la impotencia frente al paro cívico que se mantenía y fortalecía en varias ciudades. La consigna movilizadora de la oposición era eficaz (“Mi voto se respeta: no al fraude”) y el oficialismo optó, como señalamos, por una vía institucional que inicialmente fue secundada por CC pero, ante la presión de los comités cívicos, se descartó como una vía de solución del conflicto.

A pesar de la pérdida de su capacidad hegemónica, el MAS obtuvo el primer lugar en los comicios. Evo Morales no consiguió la mayoría absoluta pero fue nítida su distancia respecto a su principal contendor, Carlos Mesa, quien lanzó su candidatura un año antes anunciando que haría

“respetar el 21F” en las urnas venciendo en los comicios generales. No fue así. Tampoco los votos a favor del MAS se tradujeron en acciones masivas de movilización callejera capaces de contener la protesta opositora debido, en cierta medida, a que el oficialismo no tenía una consigna tan eficaz como la “lucha por la democracia”; en este sentido, “la defensa del proceso de cambio” resultaba ajena a los intereses cotidianos y provocaba adhesión plena solamente en las organizaciones sociales campesinas. Así finalizó una fase del “proceso de cambio” que enfrenta el desafío de perdurar ante la arremetida de las élites urbanas desplazadas por el MAS. El proyecto de restauración oligárquica debe enfrentar la prueba de las urnas y la fortaleza del instrumento político de las organizaciones sindicales que mantiene el primer lugar en las preferencias electorales con miras a las elecciones del 3 de mayo de 2020. La ausencia de Evo Morales como candidato presidencial se constituye en un oportunidad idónea para la *rutinización* del carisma del líder del MAS y la posibilidad de una renovación de liderazgo, estrategia y proyecto estatal.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- Antezana J., Luis H. (2009) “Dos conceptos en la obra de René Zavaleta Mercado: formación abigarrada y democracia como autodeterminación”, en VV. AA., *Pluralismo epistemológico*, CLACSO Coediciones. La Paz: CLACSO / Muela del Diablo Editores / Comuna / CIDES-UMSA.
- Lesgart, Cecilia (2019) “En los conceptos públicos anidan las batallas políticas: Bolivia, ¿es un golpe?”, en *Bordes*, Revista digital de la Universidad Nacional de José C. Paz, Buenos Aires, 20 de noviembre de 2019.

Mayorga, Fernando (2019) *Mandato y contingencia*.

El estilo de gobierno de Evo Morales, La Paz:

Fundación Friedrich Ebert.

Organización de Estados Americanos (2019) “Informe Final.

Análisis de Integridad Electoral. Elecciones Generales en el Estado Plurinacional de Bolivia, 20 de octubre de 2019”. Emitido el 4 de diciembre de 2019.

II

Tentativa de toma gradual del poder: Prorroguismo fallido y transiciones

Erika Brockmann Quiroga

La historia de Bolivia tiene algo de extremo. Es casi siempre una historia en el límite de las posibilidades. El país experimenta las mismas tendencias que prevalecen en el resto de América Latina, pero de modo más radical. De esa manera, no se logra el efecto acumulativo que lleva habitualmente al progreso de las naciones cuando existe un acuerdo político para asegurarlo, sino más bien a un balance de oportunidades perdidas.

Luis Maira

*“Bolivia: ¿el fin del enredo?”,
Nueva Sociedad, 2007, p. 67.*

“Los gobernantes elegidos democráticamente que intentan expandir sus poderes y mantenerse en el cargo son hoy la principal amenaza a la democracia...”, concluye Melis Gülboy L. (2019: 147) luego de analizar el potencial riesgo de quiebre del orden democrático que representa la proliferación de autocracias electivas, de “tentativas de toma del poder” en distintos países de América Latina y el mundo. Sin embargo, con base en la evidencia empírica, salvo los casos de Venezuela, Nicaragua y Turquía, sería posible no solo lidiar con líderes hostiles a la democracia sino, inclusive, ganar e impedir el cumplimiento de

sus propósitos. El bloqueo a los proyectos de poder autocrático se habría producido a partir de derrotas electorales “por no haber logrado extender el límite a la reelección presidencial —basta recordar el intento fallido del expresidente colombiano Álvaro Uribe— o porque se vieron forzados a renunciar” (*ibid.*: 136).

El referido estudio incorporó a Bolivia y al gobierno encabezado por Evo Morales Ayma como un caso “de tentativa de toma gradual del poder” antes de la realización de las elecciones presidenciales del 20 de octubre de 2019, las mismas que fueron anuladas por forzar fraudulentamente un resultado favorable a una cuarta reelección. Lo vivido en Bolivia a partir del 20 de octubre sería un caso de fallida estrategia prorroguista desplegada y cocinada a fuego lento por el Movimiento al Socialismo (MAS), partido predominante en el poder desde enero del 2006.

¿Cómo explicar el estallido social crítico que decantó, por tercera vez en la historia democrática, en la renuncia intempestiva y fuera de término constitucional de un jefe de Estado en el país?¹ Para responder a esta interrogante, se tomará como referente conceptual las tensiones históricas irresueltas o fracturas étnicas, territoriales y socioeconómicas que afloraron en la crisis —y que persisten con posterioridad— y los institutos de la Democracia

1 En referencia al acortamiento del periodo de mandato constitucional de Hernán Siles Zuazo (1982-1985), de la segunda presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) y de su sucesor Carlos Mesa (2005), en contextos de crisis e ingobernabilidad resueltos mediante recursos constitucionales a fin evitar que las situaciones derivaran en la ruptura del orden constitucional democrático. Con sus particularidades, la caída del Evo Morales sería el tercer episodio de alteración de la continuidad de gestión presidencial legitimada por las urnas.

Intercultural² como marco innovador e inclusivo para la legitimación de los titulares del poder público, de los mecanismos de participación social en decisiones de interés público para asegurar el logro de los fines del Estado.

Dos son los propósitos del presente ensayo; primero, identificar y analizar la serie de recursos utilizados por el gobierno de Evo Morales Ayma en su “tentativa gradual del poder” y, segundo, analizar la compleja trama de actores, discursos y tensiones observada en la cronología de hechos que derivó en su renuncia a la presidencia, pocas semanas antes de cumplir 14 años a la cabeza del gobierno, y en su apremiante abandono del país la noche del 11 de noviembre de 2019 tras solicitar asilo al gobierno de México.

En este esfuerzo se tomará en consideración los antecedentes y los factores estructurales y coyunturales, contenidos simbólicos y discursivos, que confluyeron y permiten explicar los repertorios de la protesta ciudadana y la violencia registrada entre el 20 de octubre, día de las elecciones, y el 24 de noviembre del 2019, fecha de promulgación de la Ley 1266 de Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de Elecciones Generales, aprobada por unanimidad en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), conformada mayoritariamente por el MAS. La referida ley dejó sin efecto las elecciones del 20 de octubre³ y dispuso la realización de nuevos comicios

2 Término acuñado en la Ley 026 de Régimen Electoral consustancial a la construcción del Estado Plurinacional y la CPE y en la que se hace referencia a la República de Bolivia. Se refiere a la democracia participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres.

3 El “Informe Final. Análisis de Integridad Electoral. Elecciones Generales en el Estado Plurinacional de Bolivia, 20 de octubre de 2019”, emitido por la OEA el 4 de diciembre de 2019 dictaminó que “a partir de la abrumadora evidencia encontrada, lo que sí es posible afirmar es que ha habido una serie de

generales en el plazo de 120 días. La ley fue promulgada por la presidenta, Jeanine Áñez, posesionada el 12 de noviembre, conforme a procedimientos constitucionales aplicables a la sucesión presidencial en condiciones extraordinarias de vacío de poder. Esta ley fue la primera respuesta política e institucional conducente a restablecer bases mínimas para encaminar un proceso electoral confiable. Este hecho se produjo dos semanas después de la renuncia de Evo Morales.

LA RUTA “MULTIMODAL” PARA CONSUMAR LA TENTATIVA GRADUAL DE TOMA DEL PODER

“Las democracias hoy mueren de a poco, lentamente (...) se desangran entre la indignación del electorado y la acción corrosiva de los demagogos” (Malamud, 2019: 34), mueren desde dentro y de a poquito ya que la deriva autoritaria y el desmantelamiento gradual de la democracia se produce bajo aparente legalidad (Levitsky y Ziblatt, 2018).

Pero ¿cómo caracterizar teórica y empíricamente la idea de tentativa gradual de toma del poder como factor erosivo a de la democracia? No es fácil delimitar el concepto, sin embargo, se refiere a aquellos líderes que

operaciones dolosas encaminadas a alterar la voluntad expresada en las urnas” (OEA, 2019: 8). Este informe fue producto de una auditoría especial vinculante solicitada por el gobierno de Evo Morales. Por otra parte, también cabe destacar el seguimiento informático y las denuncias realizadas por el ingeniero de sistemas, Édgar Villegas, que fueron difundidas, primordialmente, el 24 de octubre por la Televisión Universitaria de La Paz. Lamentablemente, el proceso judicial en su fase investigativa iniciada por la Fiscalía General del Estado sobre el fraude reportado avanza lentamente. Después de su renuncia, la presidenta del TSE y otros vocales nacionales y departamentales fueron detenidos o sometidos a medidas cautelares.

intentan cambiar las reglas del régimen democrático para mantenerse en el poder, que refuerzan y concentran el poder presidencial a fin de conservar el poder “sin suspender elecciones o cerrar el legislativo”. Estos hechos deben ser “críticos y observables” (Gülboy, 2019: 140). Es usual que aprovechen su mayoría electoral e inclinen la competencia electoral a su favor, hostiguen a sus adversarios y neutralicen el control de otros órganos del Estado, este último rasgo, caracterizado como déficit de “rendición de cuentas horizontal”, es consustancial de la democracia delegativa de acuerdo a O’Donnell (1994), quien hace énfasis en la persistencia de comportamientos autoritarios como herencia de las dictaduras que precedieron las transiciones democráticas en la región.

Dicho esto, se evidencia que Evo Morales y el núcleo de poder que impulsó el “proceso de cambio” y la “revolución democrática y cultural”, como proyecto hegemónico postneoliberal, desplegó de manera sistemática una serie de medidas en su intento de consolidar su permanencia en el poder más allá de los límites constitucionalmente establecidos. Lo hizo mucho antes de la convulsión social que siguió a la realización de las anuladas elecciones de octubre de 2019. Ahora bien, ¿cuáles fueron estas disposiciones y medidas que gradualmente pusieron en riesgo el orden democrático?

El 21F: punto de inflexión y desgaste del MAS

La estrategia prorroguista de Evo Morales tuvo como punto de partida la convocatoria al Referéndum Constitucional del 21 de febrero de 2016, desde entonces referido como “21F”. La consulta desahució la posibilidad de levantar las restricciones constitucionales a la

reelección. En efecto, un 51,3% de los ciudadanos consultados votó en contra la reelección, mientras 48,7% se pronunció a favor de la modificación del artículo 168 de la CPE. Por sus resultados, Bolivia se encontró dividida y polarizada respecto a su adhesión al MAS, organización dependiente del liderazgo carismático de Morales, hasta entonces imbatible en las urnas.

Semanas antes del emblemático 21F, ante varios medios de comunicación, el presidente “expresó su plena confianza de que ganaría el referéndum señalando que en caso de que triunfe el No, el gobierno se irá callado porque ‘¿no vamos a hacer golpe de Estado?’. ‘Si el pueblo dice no, qué podemos hacer, ¿no vamos a hacer golpe de Estado? Tenemos que irnos callados’”.⁴ Días después de la derrota y, en línea con su acostumbrada retórica guerrillerista, el mandatario declaró que había “perdido la batalla, pero no la guerra” (*El Mundo*, 24/02/2016), una declaración que más tarde cobraría sentido.

Meses después, asambleístas del MAS presentaron ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) un recurso legal para evadir el cumplimiento de la voluntad ciudadana expresada el 21F. En noviembre de 2017, los magistrados del TCP, mediante Sentencia 0084/2017, declararon de “aplicación preferente” el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por ser la norma más favorable en relación a los derechos políticos, sobre los artículos 156, 168, 285, 288 de la CPE. En otras palabras, daban luz verde a la tercera postulación del binomio Evo Morales-Álvaro García Linera, bajo el argumento de que “su postulación sería un derecho humano” y que, como derecho político reconocido en una Convención

4 Fuente: <https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/201153/morales-confia-repostulacion-elecciones>

internacional, tendría mayor jerarquía que cualquier otra disposición constitucional, incluido el artículo 168 de la CPE. El debate en torno a la constitucionalidad y validez de la sentencia fue amplio.

Mucha tinta corrió alrededor de la discusión de esta sentencia. Se señaló que la misma no tenía efecto retroactivo y no habilitaba al binomio oficialista (Rivera, 2018). Por otra parte, ante una consulta interpuesta por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa, estableció:

La Comisión de Venecia opina que no existe un derecho humano específico y diferenciado a la reelección. La posibilidad de presentarse para un cargo para otro período prevista en la legislación es una modalidad, o una restricción, del derecho a la participación política y, específicamente, a contender por un cargo (...). En los sistemas presidenciales y semi presidenciales, los límites a la reelección presidencial representan entonces un medio para reducir el peligro del abuso del poder por el jefe del poder ejecutivo (Comisión de Venecia, 2018: 26 y 27).

Por otra parte, se denunció por fraude procesal y violación del procedimiento legalmente establecido en el trámite a la polémica sentencia dictada en noviembre de 2017. Curiosamente, la misma fue mencionada como antecedente de una sentencia previa (septiembre del mismo año); en otras palabras, se la utilizó como jurisprudencia para otro fallo cuando aún no había sido emitida.

La maquinaria del poder y una carrera electoral maratónica y desigual

Ya con miras a las elecciones de 2019, y con una perspectiva de proceso, son varios los hechos o medidas que se

activaron desde la “maquinaria del poder” para viabilizar la candidatura del binomio oficialista. Evo Morales, identificado como líder de proyecto histórico y refundacional del Estado, desplegó otra serie de medidas que confirmaban la percepción de que las elecciones de octubre no serían administradas en condiciones de transparencia e independencia. ¿Cuáles fueron estas disposiciones gradualmente implantadas para sustentar este extremo? Sobran los ejemplos.

La Ley 1096 de Organizaciones Políticas, promulgada el 1 de septiembre de 2018, tras un largo proceso de concertación promovido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), fue modificada puntualmente por la mayoría congresal del MAS. Lejos de sentar las bases para el fortalecimiento de las organizaciones políticas, fue desvirtuada y calificada como una medida electoral para favorecer la estrategia de reproducción de poder del MAS a partir de la introducción, de manera precipitada, de elecciones primarias obligatorias y simultáneas. Se trataba, en teoría, de una medida inédita orientada a fortalecer la “democracia interna” de las organizaciones políticas y legitimar a los binomios presidenciales. La puesta en vigencia del artículo 29 relativo a las primarias y su reglamentación marcó el inicio de una carrera electoral maratónica bajo condiciones rígidas, costosas y no competitivas, dado que en ningún caso se presentó más de un binomio por organización o frente político.⁵

5 El artículo 29 disponía, entre otras cláusulas, que las primarias eran condición necesaria para participar en las elecciones del 20 de octubre de 2019. No establecía que para su realización debieran presentarse al menos dos binomios. Planteaba que los resultados serían vinculantes y de “cumplimiento obligatorio” para las elecciones generales y que las únicas causales para revertir el carácter vinculante eran por muerte o por una

Su propósito fue desnudar la precaria o aparente existencia del bloque de organizaciones políticas opositoras y su limitada presencia territorial. Impuso plazos ajustados para regularizar el registro y consolidación de los padrones partidarios y desordenó el tablero opositor al cerrar el paso, un año antes, a toda posibilidad de convergencia o constitución de alianzas preelectorales más amplias.⁶

La “farsa instrumental de las primarias” generó un clima de confrontación y debate sobre su relevancia y pertinencia. Pese a la inicial observación del TSE a la realización de las primarias, previstas en el proyecto de ley original para el año 2025, finalmente este acató los términos de la aprobación, por dos tercios de voto del oficialismo, de la Ley de Organizaciones Políticas. Este proceso generó el desgaste del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), desembocó en la renuncia de la presidenta del TSE y en la salida, más tarde, de otros dos vocales, identificados como “institucionalistas”, además del despido y alejamiento del personal técnico y operativo de carrera de la institución. Se echó por la borda el esfuerzo por lograr reposicionar la credibilidad del TSE cuyas actuaciones estaban bajo la mira y sospecha de un grueso sector de la opinión pública.

Una vez convocadas las elecciones generales y definido el calendario electoral se adoptaron disposiciones que confirmaban la sospecha sobre el desempeño del TSE. Llamó la atención que la segunda vuelta no fuera reglamentada, tal como se lo hizo el 2014. Por otro lado,

enfermedad gravísima debidamente probada de alguno de los miembros del binomio elegido.

- 6 El 28 de noviembre era el plazo límite para la presentación de los binomios a participar en la contienda del 20 de octubre sin derecho a recomposición futura del tablero electoral. Las elecciones primarias se llevaron a cabo el 27 de enero del 2020.

debido a que la fecha oficial para la realización de las elecciones —el domingo 27 de octubre— coincidía con los comicios nacionales en la Argentina, estas se adelantaron para el 20 de octubre, a fin de garantizar la concurrencia de los bolivianos residentes en el país vecino, cuya votación terminó por consolidar el “triunfo en primera vuelta” del MAS y donde se evidenciaron el mayor número de irregularidades en el proceso de conteo de votos en el exterior.⁷

Por otra parte, se cuestionó la habilitación, contraria a la ley y “antirreglamentaria”, de nuevas candidaturas tras la renuncia de los candidatos de la alianza Bolivia Dice No (BDN) y del Partido Demócrata Cristiano (PDC).⁸

Curiosamente, ninguna falta electoral denunciada contra el abuso del MAS fue resuelta por el TSE, la justicia electoral no se atrevió a tramitar casos contra el partido oficial y menos contra Evo Morales. Es más, el TSE guardó silencio frente a manifestaciones públicas de amenazas y restricciones de los derechos políticos de terceros, especialmente en distritos y zonas predominantemente rurales controladas por organizaciones sindicales campesinas y de cultivadores de hoja de coca en el Trópico de Cochabamba, bastión del MAS.

Con guirnaldas y ofertando un plan de viviendas, y otras medidas demagógicas, el binomio oficialista participó

7 De 894 actas del exterior analizadas, 176 fueron escrutadas en la Argentina. Del total, el 38,07% presentó “inconsistencias con el número de ciudadanos que sufragaron”, lo que implica que se observó un “número mayor de votos que el total en las listas índice” (OEA, 2019).

8 Es el caso de Shirley Franco, habilitada como candidata vicepresidencial del frente BDN ante la renuncia del senador Edwin Rodríguez; también se forzó la habilitación el pastor de origen coreano, Chi Hyun Chung, como candidato presidencial, representando al PDC tras la renuncia de Jaime Paz Zamora, expresidente de Bolivia (1989-1993).

en actos de entrega de obras, rompiendo el silencio electoral; se trató de eventos transmitidos por el canal estatal y ampliamente publicitados (Red Uno, 17/10/2019).

Nada se dijo sobre el uso y abuso de ingentes recursos públicos por parte del binomio oficialista durante este maratónico proceso. De acuerdo a reglamento electoral, la restricción de propaganda gubernamental no se aplicó a empresas públicas, las que durante la jornada electoral exaltaban las bondades y logros de la gestión de gobierno. Los bolivianos pagaron la más costosa propaganda gubernamental a favor de una candidatura oficial en gestión. Según un estudio basado en información oficial del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (Linares, 2019), al 30 de septiembre de 2019, el gobierno gastó el equivalente a 47,3 millones de dólares en nueve meses, lo que implicaría aproximadamente un promedio de 175 mil dólares diarios.

Sin embargo, pese a la “cancha inclinada”, y al despliegue de medidas orientadas a forzar “la toma del poder”, ocurrieron hechos que contribuyeron a limitar la preferencia electoral favorable al binomio del MAS. Destacaron las movilizaciones ciudadanas opositoras, las que cobraron mayor impulso semanas antes del 20 de octubre tras los incendios a gran escala producidos en el Bosque Seco Chiquitano (Santa Cruz). La catástrofe ambiental fue motivo para el resurgimiento del Cabildo y de la Asamblea como formas de participación de la sociedad y el reposicionamiento del “comiteísmo cívico” en Santa Cruz, Potosí, Tarija y Chuquisaca, y del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) allí donde los comités cívicos eran irrelevantes. En cabildos multitudinarios se cuestionó el falso “discurso protector de la madre tierra”, las políticas extractivistas, las medidas improvisadas de apertura de la frontera agrícola, la alianza gubernamental con la burguesía

agroindustrial del Oriente y el pésimo manejo de la catástrofe medioambiental de la Chiquitania.

Estos hechos afectaron el comportamiento electoral perfilando nuevamente la concentración de la mayoría de la votación en dos opciones electorales: el MAS y Comunidad Ciudadana (CC), a la cabeza de Carlos Mesa. Comunidad Ciudadana fue la fórmula opositora que por primera vez abría la posibilidad de derrotar al MAS en una segunda vuelta para dar paso al “postevismo”. El fin del ciclo de Evo mediante elecciones parecía inminente, en esa encrucijada se planteaban nuevos retos para para la convivencia plural de los actores políticos poniendo a prueba la convicción democrática del MAS frente a la posible alternabilidad del poder.

LAS TURBULENTAS JORNADAS POSTELECTORALES: RELATOS EN DISPUTA, NUEVOS ACTORES Y VERDADES CONFINADAS

Cronología y complejidad de los actores en conflicto

El día 20 de octubre de 2019 se realizaron las décimas elecciones nacionales del periodo democrático inaugurado en octubre de 1982. Alrededor de seis millones y medio de electores asistieron a las urnas, registrando algo más de 88% de participación, coincidente con una cultura electoral profundamente arraigada en la sociedad desde la apertura democrática.

Sin embargo, la desconfianza en el desempeño y transparencia electoral del TSE y la sospecha de fraude empañaban el clima festivo y sereno observado durante la jornada.⁹ Para revertir esa desconfianza y promover la

9 Según la encuesta de Mercados y Muestras autorizada por el TSE, el 68% de los encuestados creía que habría fraude y un 64%

participación informada de la ciudadanía, al igual que en el referendo del 21F, se puso en marcha el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) generando la expectativa de que hasta las 22 horas de esa misma jornada electoral se tendría cubierta la transmisión y verificación de más del 90% de las actas electorales. Sin embargo, esto no ocurrió, dándose un giro dramático en los acontecimientos.

A las 20 horas de ese domingo, el TSE dio a conocer el primer reporte del TREP con un avance del 83,7%. Los resultados apuntaban a una victoria de Evo Morales (45%) pero insuficiente, lo que le obligaría a realizar una segunda vuelta con el expresidente Carlos Mesa (38%).¹⁰ Ese fue el único y último reporte de la jornada; como luego se supo, a las 19:30 de ese día la Sala Plena del TSE (en ausencia de su vicepresidente, Antonio Costas, quien renunció dos días más tarde) había instruido la suspensión de difusión de los reportes para recién reanudarse 24 horas más tarde.

Tras la inquietante suspensión del TREP, Carlos Mesa convocó a la movilización pacífica y vigiliadas para defender el voto, convencido de que se debía ir al balotaje. Por su lado, Evo Morales se proclamó ganador confiando en que

consideraba que la postulación del binomio oficialista era ilegal; no obstante, un 25% respaldaba a este binomio (*Página Siete*, 29/9/2019).

- 10 La tendencia coincidía con los resultados al 100% del conteo rápido de Vía Ciencia (empresa autorizada por el TSE) que otorgaba al MAS el 43,9% y a CC el 39,4%, así como también con las estimaciones de la alianza Tu Voto Cuenta que daba el 44,1% al MAS y el 38,6% a CC. La tercera posición en todos los registros correspondía al PDC con un promedio del 8%. Este comportamiento era similar al ejercicio estadístico incluido en el protocolo de las Misiones de Observación Electoral (MOE) de la OEA, tal como lo expresara el 23 de octubre en su informe preliminar.

el voto rural no contabilizado aún coronaría su victoria en primera vuelta. Sin embargo, en términos estadísticos, su argumento no tenía asidero. Su entorno lo sabía, pues el primer reporte del TREP ya había contabilizado el voto rural.¹¹ En realidad, dos tercios de votos del 17% de actas no transmitidas o verificadas al momento del corte eran urbanos.

Fue el momento que Evo Morales comenzó a hilvanar la línea discursiva en base a “su verdad”; la que más tarde se articuló al relato del “golpe cívico-policial”, de la derecha conservadora y colonial, para posteriormente incorporar el factor “militar” y al enemigo imperial. Se activó la estrategia de victimización del presidente indígena. El conflicto atizó sentimientos y comportamientos racistas, la profundización de las contradicciones campo-ciudad, entre vecinos y comunarios, entre cambas y collas, pobres y ricos, o sea, aquellas tensiones históricas irresueltas (étnicas, territoriales y socioeconómicas) propias de la “trilogía del conflicto boliviano”.¹² Tensiones

11 Así lo demostró la investigación realizada por peritos paceños y cruceños, promovida por la Fundación Pazos Kanki, y avalada por expertos de la Internacional en Muestreo y Estadística de Investigación de Mercados (*Página Siete*, “Casi dos tercios de votos que faltaban por contar tras el corte del TREP eran urbanos”, en: <https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/11/10/>).

12 Concepto desarrollado por la autora y referido en Brockmann (2012: 30) y otros documentos de trabajo entre 2006 y 2018. El término “trilogía” alude a la gravitación e interrelación de tres ejes de tensiones o líneas de ruptura las que, de modo dialéctico y recurrente se visibilizan en momentos constitutivos o críticos de la historia y que conceptualmente contribuye a caracterizar la lógica política y la capacidad del sistema político para resolverlas. Para Jorge Lazarte (2010), se suma una cuarta fractura, la política. Estas tensiones son identificadas como claves en el conjunto de textos incluidos en el libro *Tensiones irresueltas: Bolivia, pasado y presente* (PNUD, 2009) que configura una síntesis de diversos esfuerzos conceptuales para entender el comportamiento político

que, en 2006, el “proceso de cambio” prometió atemperar con base en los principios del pluralismo político, económico, productivo y cultural, con autonomías y garante de un ambicioso catálogo de derechos humanos consagrados por la CPE, finalmente promulgada en febrero del 2009, luego del accidentado proceso constituyente.

Bajo la mirada atenta del mundo, la extrañeza de los representantes de la comunidad internacional y una sociedad movilizada en defensa del voto, el mensaje de Evo desembocaría en la acusación de la existencia de un movimiento opositor empeñado en “discriminar y negar el voto de la población rural y otros sectores populares”. Desde ese momento, los voceros del MAS advertían sobre el despojo, el retorno de la casta colonizadora y la pérdida de los beneficios garantizados por el “proceso de cambio”. Se convocó a la Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam)¹³ a resistir y cercar las ciudades en defensa del voto del campo y contra el golpe, cuya amenaza comenzó a propagarse. El 28 de octubre, *El Diario* titulaba: “Comienza cerco a ciudades capitales”. Por su parte, el 30 del mismo

de las élites políticas, sociales y distintos sectores dominantes y subalternos de la sociedad boliviana.

- 13 La Conalcam es una organización que aglutina a los representantes de las diferentes organizaciones matrices que respaldaron el denominado “proceso de cambio”. La conformaban la Central Obrera Boliviana (COB), sindicatos fabriles, la federación de trabajadores mineros, de cooperativistas mineros y las organizaciones matrices campesinas fundadoras del MAS: la Federación Sindical Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia–Bartolina Sisa (CNMCI OB-BS) y los campesinos interculturales (excolonizadores y cocaleros), entre otros.

mes, la prensa internacional advertía: “Bolivia dividida: cercos campesinos y bloqueos urbanos en siete regiones”.¹⁴

A lo largo del conflicto, la dimensión simbólica fue un referente omnipresente, tanto escénico como discursivo. No fue casual que la wiphala y la “pollera” se convertirían no solo en símbolos depositarios de los agravios episódicos e imaginarios que el MAS y sus seguidores de manera magnificada atribuían a sus adversarios políticos. La carga simbólica de estos se asocia indefectiblemente a la negación de la inclusión lograda y al racismo de los “blancoides”. Símbolos que contrastaron con la imagen de la Biblia que irrumpió en el escenario del conflicto de la mano del movimiento cívico bajo la consigna de su “retorno al Palacio de Gobierno”. Detrás del juego de símbolos y del discurso victimizante subyacía el esfuerzo por atenuar las graves consecuencias y la deriva del proceso de “tentativa gradual de toma del poder” desplegado y su descalabro en las urnas.

Esta fue una potente excusa para desatar el revanchismo incendiario y los demonios escondidos en uno y otro bando. No es casual que, pese a reconocer implícitamente la burla y escamoteo del voto ciudadano, cuyos autores intelectuales y materiales aún no se conocen, y tras negar toda responsabilidad en esa estrategia, la noche del 10 de noviembre y con más fuerza desde la jornada del 11 comenzó a escucharse con furia el grito y consigna “ahora sí, guerra civil”. Esto ocurrió inmediatamente después de la renuncia de Evo Morales y Álvaro García Linera cuyo tenor refería a la necesidad de pacificar el país a la par que convocaba a la resistencia al “golpe cívico-policial”.

14 Fuente: <https://www.france24.com/es/20191029-bolivia-protestas-campesinos-oposicion-morales>

La palabra del líder y la autoridad pesa y es mandato en circunstancias límite. Mientras la protesta pacífica antifraude ganaba terreno, el presidente y algunos de sus ministros lanzaron mensajes que no se los llevaría el viento:

“El presidente de Bolivia, Evo Morales, dice que si continúan las protestas poselectorales, pedirá a sus bases de zonas rurales que cerquen las ciudades. ‘Si quieren paro, no hay problema, lo vamos a acompañar con cerco en las ciudades para hacer respetar (la reelección) y el voto rural, a ver si aguantan’, advirtió a varios medios” (27/10/2019).

Juan Ramón Quintana, ministro de la Presidencia, declaraba: “Bolivia se va a convertir en un gran campo de batalla, un Vietnam moderno” (entrevista en Sputnik, difundida en varios medios, 1/11/19).

Javier Zavaleta, ministro de Defensa, advertía: “...estamos a un paso de empezar a contar los muertos por docenas” (*La Razón*, 06/11/2019).

La protesta contra el “fraude” comenzó con manifestaciones pacíficas e inéditas. Sin embargo, no faltaron episodios de violencia entre grupos de la sociedad de uno y otro bando en los cuales se registraron los primeros muertos y heridos del lado opositor al MAS.¹⁵ Estos

15 En Montero (Santa Cruz) fallecieron dos miembros de la juventud cruceñista por heridas de bala, presuntamente ocasionadas por sectores afines al MAS. Por otra parte, se registró la muerte de dos jóvenes apaleados por sectores campesinos favorables al MAS en Huayculi (Cochabamba). En Sacaba (Cochabamba), el 15 de noviembre fallecieron al menos nueve personas y el 19 del mismo mes en inmediaciones de Senkata (planta de gas y combustible situada en la ciudad de El Alto) fallecieron al menos diez personas durante en una intervención del Ejército y de la Policía. En El Alto se apaleó hasta la muerte a un policía. A partir de la noche del 10 de noviembre, se quemaron e incendiaron sedes policiales, casas de opositores al MAS y 63 buses Pumakatari de transporte público municipal de La Paz.

hechos estaban atizados por la polarización discursiva y las estrategias de bloqueo y asedio a las ciudades, así como de resistencia y de defensa de las mismas. Una vez posesionado el gobierno de transición, la violencia escaló hasta sumar un total de 34 fallecidos y más de un centenar de heridos producto del conflicto en los cercos que defendían a Evo Morales, al “proceso de cambio” y contra la instauración del gobierno de transición. El gobierno alega que no fueron las fuerzas del orden las que dispararon, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la violencia del gobierno mientras este solicitó una nueva misión para profundizar la investigación. Entretanto, las certezas en torno a la verdad histórica de los hechos parecen estar confinadas detrás de versiones polarizadas y de un sistema de justicia poco creíble y en crisis.

Narrativas en disputa: la revuelta contra el fraude y la salida constitucional

Es posible identificar hechos que contribuyen a desmontar la tesis de la preexistencia de una conspiración deliberada para derrocar al presidente Evo Morales. La lógica binaria maniquea que contrapone la narrativa del “golpe de Estado cívico político-policial” a la del “fraude y al escamoteo de la voluntad popular por el régimen dictatorial y terrorista” es simplista. Esta disputa no tiene asidero ni relevancia a la hora de adoptarse una postura crítica a la excesiva carga ideológica que entraña la comprensión de la complejidad de actores presentes en los múltiples escenarios de tan dilatado conflicto.

El relato del “golpe” logró adhesiones en sectores académicos y políticos simpatizantes de Evo Morales

dentro y fuera del país y se sustenta en dos hechos. El primero tiene que ver con la sugerencia pública (el 10 de noviembre por la tarde) del Alto Mando de las FFAA, de que Evo Morales renuncie a la presidencia; solicitud posterior a 21 días de protesta, de confrontación y violencia. Protestas que llegaron a su punto álgido con el “repliegue de la Policía” o el amotinamiento de numerosas unidades policiales en todo el país presionadas por la multitud —hechos ocurridos entre el 8 y 9 de noviembre—, así como con los pedidos de renuncia presidencial también provenientes de sectores leales a Evo Morales y al “proceso de cambio”.¹⁶

La sugerencia de renuncia se produjo luego de conocerse el informe preliminar de integridad electoral de la OEA y cuando se evidenció la presencia de grupos irregulares armados presuntamente afines al gobierno del MAS (es el caso de la emboscada a la caravana de mineros por la democracia en Challapata y el atentado dinamitero contra el gasoducto Carrasco-Cochabamba en el trópico de Cochabamba, que ocurrieron entre el 9 y 12 de noviembre). Cabe señalar, también, que el referido pedido de renuncia sucedió luego de producirse la renuncia precipitada de autoridades de Oruro, Potosí y Sucre ante la respuesta revanchista al secuestro y vejámenes sufridos por estudiantes y otras personas tras el bloqueo a la caravana por la democracia en Vila Vila de parte comunarios afines al MAS. Por otra parte, también hay

16 Es el caso de la Central Obrera Boliviana (COB), de la federación de campesinos de La Paz, de la de cooperativistas mineros de Potosí y de otras organizaciones alteñas y de provincias, como la Federación Única de Trabajadores en Carne y Ramas Anexas (FUTECRA). Estas organizaciones se pronunciaron públicamente pidiendo la renuncia de Evo Morales y mostrando así fisuras en el denominado bloque popular.

que anotar que se produjo la quema de los domicilios del gobernador de Oruro y de la hermana de Evo Morales.

Es curioso, las primeras voces demandando la renuncia del presidente no vinieron de actores ni de exandidatos que participaron en las frustradas elecciones, sindicatos desde un principio como golpistas, a quienes los ciudadanos y cívicos indujeron a bajar el perfil público de sus actuaciones “por ser políticos”. Esta conducta “antipolítica” explicaría la corta vida de la Coordinadora de Defensa de la Democracia, creada el 24 de octubre que reconoció a Carlos Mesa como su conductor y a la que se alinearon otros candidatos, partidos políticos, así como el Conade y los Comités Cívicos. La demanda de renuncia surgió, en primer lugar, de grupos más radicales de uno y otro extremo del arco ideológico.¹⁷

El segundo argumento “progolpe” tiene que ver con el cuestionamiento al procedimiento de sucesión constitucional aplicable en situaciones extraordinarias y de vacío de poder que terminó recayendo en la persona de la segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Áñez. Este último recurso existente y avalado por el TCP no fue considerado como posibilidad en la estrategia de contención desplegada por Evo Morales y sus colaboradores. De hecho, este mecanismo solo podía ser activado una vez comprobada la salida del país del presidente renunciante,

17 Ahí se identifica, por ejemplo, a los comités cívicos populares de Cochabamba y Chuquisaca conformados por sectores populares y representantes de grupos de la izquierda trotskista. También destaca la actuación protagónica y temeraria desplegada por los líderes cívicos de Santa Cruz y de Potosí, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, respectivamente, y por sectores radicales de algunos actores insertos en el grupo juvenil “Resistencia K’ochala” y los denominados “motoqueros” de defensa ciudadana organizados para resistir la “arremetida de los cocaleros” hacia la ciudad de Cochabamba.

hecho que se produjo una vez que Evo Morales y su comitiva abandonaron territorio boliviano acogiéndose al asilo concedido por el gobierno mexicano y ante la renuncia de los presidentes y primeros vicepresidentes de las directivas del Senado y la Cámara de Diputados. Es en estas circunstancias de ruptura de la cadena de sucesión que se aplicó este recurso constitucional que desembocó en la juramentación a la presidencia del Estado Plurinacional de Jeanine Áñez, senadora por el Beni y militante del Movimiento Demócrata Social (MDS) del bloque minoritario opositor al MAS.

El periodista Rafael Archondo, en un artículo titulado “¿Por qué no nos creen?”, referido a lo ocurrido durante ese aciago mes de noviembre, intentó explicar el apoyo a la narrativa del golpe en algunos países y círculos de poder:

Han bastado dos o tres imágenes —*la Biblia, el crucifijo ingresando al Palacio de Gobierno y un militar en uniforme de guerra el momento de la investidura de Áñez*— y un par de crónicas chapuceras para implantar la idea de que una secta evangélica, criminal y oligárquica se ha adueñado del Palacio de Gobierno en estricta subordinación al gorilismo castrense... México o España son países que han vivido atormentados por el inmenso poder de la Iglesia, hubo guerras por motivos religiosos y por ello fue urgente apartar los rezos de la administración pública. Cuando un mexicano o un español promedio ven un santoral en un acto oficial, fruncen el ceño y se fastidian... Lo que ni la opinión pública internacional ni estos operadores informativos saben decirnos es: ¿cómo gobernará Morales una sociedad que bajo su mando solo ha aprendido a odiarse profundamente?, ¿acaso cree que él, que ya es parte del problema, podrá curar las heridas? El MAS planificó un Vietnam moderno y está a punto de convertirnos en Ruanda (Archondo, 2019, cursivas nuestras).

Esta reflexión obliga a referirse al reconocimiento de Bolivia como un Estado laico —reforma progresista y

liberal que, lamentablemente, no ha sido adecuadamente comprendida por la élite gobernante del MAS ni por otros sectores políticos altamente influenciados por corrientes evangélicas y cristianas en el país y la región—. Esta influencia tiene larga data y se confirma ante los hallazgos de la Encuesta Mundial de Valores según la cual en “la sociedad boliviana predominan los valores conservadores, tradicionales y religiosos” (Ciudadanía *et al.*, 2019: 13) como un dato sustantivo para también explicar la significativa adhesión de bases del propio MAS a la ola evangélica y conservadora que se imbrica con la política.

Por su parte, Alfonso Gumucio (2019) intenta explicar, de un modo veraz y objetivo, lo ocurrido en Bolivia en un extenso documento:

He sido víctima de cuatro golpes militares en mi vida: en dos ocasiones he salido al exilio (1971 y 1980). Puedo decir con toda firmeza que esta vez en Bolivia no pasó nada parecido. No había ni un solo soldado en las calles, ni un tanque, ninguna presencia militar. Solo cuando la Policía Nacional se vio rebasada y los grupos de choque del MAS quemaron con bombas molotov varios cuarteles policiales en el país, el comando policial hizo un llamado al ejército para ayudar a contener la violencia (...) La Policía acudió al llamado de la población para proteger la seguridad ciudadana, pero fue rebasada (Gumucio, 2019: 12).

Quedaba claro que la sucesión de hechos escaparon a una posible acción deliberada para derrocar al gobierno. Nadie estaba preparado para su desenlace y conforme escalaba la crisis se alinearon una serie de factores y estrategias que conducirían a la caída de Evo. Ni el propio MAS había previsto una reacción de tal magnitud, al punto que ni sus bases ni las fuerzas del orden reaccionaron oportunamente en defensa del “proceso de cambio”. Los policías hablaron de repliegue para no referirse a

un amotinamiento, pues además de desarmados fueron presionados por la gente para finalmente alinearse contra el fraude. El caso de las Fuerzas Armadas (FFAA) tuvo matices distintos, había motivos para pensar que acatarían la orden presidencial de reprimir a los revoltosos. ¿Cuáles son las razones? En 13 años de gobierno del cambio, hubo programas para impulsar la inclusión preferente de bases campesinas en las FFAA y estas cooperaron en jornadas de entrenamiento militar a grupos de organizaciones sociales afines al MAS. No faltaron intentos para que estos grupos desfilaran junto a los militares el día de su aniversario y durante varios años los contenidos curriculares incorporaron programas de adoctrinamiento ideológico concordantes a la consigna guevarista “Patria o Muerte”. No es casual que el mismo Evo Morales, ya asilado, se haya referido a la necesidad de crear “milicias armadas” para defender estos supuestos procesos revolucionarios.¹⁸ Lo cierto es que Morales no pudo convencerlos ni formalizar un decreto supremo autorizando la intervención militar, como protocolo normativo requerido desde el año 2003. Es probable que, en este contexto, las FFAA hayan dado un giro a raíz de la intervención persuasiva de personas afines a la dirigencia cívica cruceña, momento que llevó a Evo a evaluar la posibilidad de su renuncia.

18 Se intentó emular el modelo militarista venezolano. A continuación se señalan datos registrados el año 2019 que, entre otros, sustentan esta afirmación: 1) Serán cinco las promociones de la Escuela Antiimperialista de los Pueblos y de las FFAA “J. J. Torres”, cuya inauguración fue celebrada por chavistas y nicaragüenses, por ser puntal de la formación militar digna en la región; 2) La polémica presencia del “talibán cubano”, Hasan Pérez, dando cursos sobre seguridad nacional “antiimperialista” a las fuerzas especiales de la Presidencia, en marzo pasado (Brockmann, 2019).

Finalmente, en medio de la violencia que siguió a la juramentación de la presidenta Áñez, el 16 de noviembre se dictó el Decreto Supremo 4078, el cual autorizaba a las FFAA a realizar operaciones a fin de buscar el restablecimiento del orden público. Esta decisión motivó críticas de organizaciones de defensa de los DDHH y de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) controlada por el MAS.

Otros autores (Abruzzese, 2019; Zegada, 2019; Rojas, 2019 y Monasterio, 2019) confirman, desde distintos puntos de vista, que el conflicto desencadenado el 20 de octubre y la persistente negación de la complejidad detrás de la narrativa del golpe subestiman la cadena de eventos propiciados por la estrategia de poder o tentativa gradual de toma del poder y su tóxico efecto sobre la construcción y fortalecimiento de la democracia en el país. Más allá del debate teórico que decanta en posiciones ideológicas en torno al sentido de la democracia, a la proyección del Estado Plurinacional y del papel de las potencias en un escenario geopolítico global complicado, hay decisiones que llevaron a que Evo Morales cruce la línea roja que lo convertiría de presidente democrático en “autócrata” (por no referirse a este tipo de gobernantes como “dictadores del nuevo tiempo”).

Queda claro que lo vivido no se puede explicar al margen de la crónica desconfianza que caracteriza a los bolivianos, a la sensación de vivir en tiempos de “verdades irreconocibles” y de verdades a medias que pasan por relatos, de *fake news*, desinformación y propaganda; un contexto caracterizado también por la polarización discursiva e irresponsable, el revanchismo, la judicialización de la política, la criminalización de las políticas públicas y el fundamentalismo ideológico. En este contexto prevalece la renuencia a transparentar y dejar fluir información pública y/o especializada que al menos permita esclarecer

hechos de violencia, de corrupción y otras injusticias,¹⁹ opacidad que hace parte de la cultura y de las prácticas políticas arraigadas, del legado autoritario del MAS, de la trivialización de la política y “la banalización del mal”, como indicaría Hannah Arendt.

REFLEXIÓN FINAL: TRANSICIÓN, NUEVOS FACTORES DE PODER Y PARADOJAS DE LA INSTITUCIONALIDAD ESQUIVA

La crisis dejó un país dividido, exponiendo fracturas y tensiones históricamente irresueltas, una economía en declive y un centralismo secante. Se trata de características similares a las que afloraron entre los años 2000 y 2006 y que desembocaron en el colapso del sistema de partidos y el desplazamiento de la élite política del primer ciclo democrático. El retorno cíclico de la “trilogía del conflicto” boliviano en sus distintas manifestaciones revela, de nuevo, los déficits no solo institucionales para encararlo, sino también la imposibilidad demostrada por el MAS para enrumbar soluciones sostenibles dirigidas a afrontar las tensiones señaladas.

La “Revolución de las Pititas”²⁰ duró 21 días, tuvo cobertura y alcance en al menos seis de las diez ciudades

19 A propósito de narrativas que cierran el paso a reconocer la verdad de los hechos por mecanismos “independientes de quienes disputan el poder político” resulta pertinente recuperar la noción que plantea Hannah Arendt (2017) sobre la verdad y la mentira en la política, al señalar que es importante dar espacio a la ciencia, la academia y al fortalecimiento de un sistema judicial independiente. Mientras ello no ocurra, las muertes y la violencia experimentada no serán esclarecidas totalmente.

20 Término acuñado para destacar el carácter pacífico de la revuelta y en alusión a un comentario que hizo el presidente Morales ridiculizando la proliferación de bloqueos en las calles con delgadas cintas y pititas nada consistentes, contrastándola con los vigorosos

principales del país, así como en los Yungas paceños, y se amplió a varias ciudades capitales en el exterior del país. Se habla, en todo caso, de la insurgencia ciudadana y de las juventudes de las clases medias variopintas más extensa que se haya registrado en la historia nacional. En este bloque también participaron “las y los hijos de las polleras”, segunda y tercera generación de migrantes aymaras y quechuas en las ciudades.

El campo político cambió radicalmente sin que ello signifique que el MAS haya dejado de ser un referente dominante por el peso de la lealtad identitaria de su base social y la influencia creciente de los sindicatos cocaleros empoderados, los cuales, para decir lo menos, actúan en los límites de la informalidad e ilegalidad. Nuevos factores de poder entraron en escena, resurgió el “comiteísmo” cívico, así como las FFAA, la Policía y la Iglesia, que son otros actores visibles de esta transición. El departamento de Santa Cruz, como eje del Oriente boliviano, es hoy un factor de poder. Junto a los sectores agroindustriales diversos empoderados, por su peso económico y electoral, esta es una región gravitante en la definición del curso de los acontecimientos políticos, sin que La Paz y El Alto hayan dejado de ser decisivos. Por otra parte, el sujeto indígena originario ha mutado, no es homogéneo, aspira a la modernidad, al derecho al pluralismo político y a demandar un verdadero pacto intercultural anticolonial opuesto a la instrumentalización política y a la folklorización de lo indígena (Portugal, 2020).

bloqueos realizados por sus “movimientos sociales”. En esa oportunidad ironizó acusado a la juventud movilizada el hacerlo por “plata y por notas” (en: <https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/evo-asegura-que-los-jovenes-34por-platita-y-por-notita-34-acuden-a-marchas-en-defensa-del-voto-401869>).

Pese a la polarización discursiva, no es posible afirmar, categóricamente, que existe un nuevo poder hegemónico regresivo y conservador que permita consolidar un movimiento pendular y radical en la orientación política y económica futura del Estado.

Más allá de los factores coyunturales, intervienen factores estructurales, los mismos que se asocian a los profundos cambios socioeconómicos y demográficos, atravesados por los tecnológicos, que operaron en el país y que tuvieron efectos acumulativos desde la revolución del 52, la posterior apertura democrática y, en particular, los últimos 20 años. Muchos de estos cambios han sido prohi- jados por el mismo “proceso de cambio” y trascienden la voluntad del MAS y de las “élites políticas”. Factores a los que se suman la volatilidad del escenario internacional y los procesos de autocratización caracterizados por la crisis y el desafecho respecto al desempeño de la democracia.

A modo de corolario, corresponde destacar algunos elementos que permiten redimensionar las incongruencias y vulneraciones a los institutos reconocidos por la CPE del Estado Plurinacional con Autonomías, propiciada por el MAS.

En 13 años el gobierno de Morales no promovió el desarrollo institucional ni acuerdos plurales y de convivencia en democracia basados en los principios y en el horizonte transformador del Estado. Se evidenció la instalación de un presidencialismo híper centralista y la concepción de la política como “campo de lucha”, y de lo político como permanente antagonismo entre “amigo/enemigo”; entre “ellos (los otros)” y “nosotros (el pueblo)”. Bajo estos parámetros, el MAS mutó en una izquierda nacionalista con matices indianistas y alianzas pragmáticas a la hora de consolidar su proyecto hegemónico, siendo ambiguo su posicionamiento respecto a la noción

del Estado de Derecho y la democracia (Molina, 2015; Mayorga, 2019).

El MAS desconoció los resultados de un referéndum vinculante, instituto clave de la democracia intercultural. Lo hizo pese a que, desde su retórica, la democracia participativa era asumida como de mayor legitimidad, por reflejar la voluntad soberana de manera directa y sin las mediaciones limitantes impuestas por democracia liberal, que en su modalidad representativa resultaría insuficiente. Ya el año 2011, el gobierno de Evo Morales enfrentaría una primera crisis política y social al desconocer la consulta previa, como mecanismo de decisión vinculante aplicable a la preservación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y originarios asentados en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS).

Por otro lado, al argumento centrado en el “derecho humano a la reelección indefinida” —y en la insistencia de su primacía por encima del artículo 168 del CPE— expresaba una seria deformación —incluso inversión— de la doctrina de los derechos humanos por parte del oficialismo de entonces. ¿Acaso la génesis histórica de esta doctrina, que se inscribe como un avance cultural y civilizatorio, no tuvo como principio la necesidad de precautelar y proteger al ciudadano, a los pueblos, de los excesos y abusos de poder estatal ejercidos por quienes ocasionalmente asumen responsabilidades gubernamentales?²¹

Un tercer dato. La sociedad se movilizó contra la candidatura de Evo Morales, cuya elección hubiera consumado el tránsito a una dictadura. En ese marco, se

21 Después de la Segunda Guerra Mundial y de la creación de las Naciones Unidas, la comunidad internacional se comprometió a no permitir nunca más atrocidades como las sucedidas en ese conflicto (fuente: <https://www.un.org/es/sections/universal-declaration/history-document/index.html>).

planteó como eje la contradicción “democracia versus dictadura”. Ya en campaña, el gobierno subestimó esa contradicción planteando que lo que estaba en juego era la tensión entre la “estabilidad política, social y económica versus un horizonte incierto ante la amenaza neoliberal y el retorno del desgobierno e inestabilidad”. Sin embargo, es cierto que la estabilidad y la gobernabilidad son un reto que deberá encarar la transición; la transición hacia el tercer ciclo de la democracia demandará retomar la inconclusa construcción institucional, cultivar el valor y el respeto a la noción de Estado de Derecho así como seguir trabajando en los retos que plantea la desigualdad, la convivencia intercultural y la descentralización del poder. Se trata del legado de los ciclos democráticos precedentes aún pendiente de resolución.

La transición plantea retos a los distintos actores democráticos. Lo paradójico es que instituciones como la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y las organizaciones políticas —como instancias de mediación ninguneadas, débiles y en crisis terminal— hayan asumido la responsabilidad histórica de canalizar la solución institucional a la crisis planteada. No hay equivocación al señalar que las instituciones, en particular los partidos políticos —ahora organizaciones políticas— son esquivas, objeto de sospecha, no habiendo conseguido echar raíces ni legitimarse ni por origen ni por desempeño.

En este escenario no tiene sentido instalar el miedo respecto al “retorno neoliberal y al colonialismo racista y oligárquico”. Y es que Bolivia no es la misma que el año 2006. A juzgar por los procesos experimentados en la región se confirma la naturaleza fallida de los experimentos neoliberales, por un lado, y de los populismos del socialismo del siglo XXI que naufragan con su deriva autoritaria.

De hecho, el abrupto final de ciclo de Evo Morales en el poder es definitivamente un caso frustrado de tentativa de toma gradual del poder, esperando que lo que venga a futuro no confirme el destino pendular y disruptivo de nuestra historia.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- Abruzzese, Renzo (2019) “Evo la imagen de una derrota”, en: *Página Siete*, La Paz, 31 de diciembre de 2019.
- Archondo, Rafael (2019) “¿Por qué no nos creen?”, en: *Página Siete*. La Paz, 21 de noviembre de 2019.
- Arendt, Hannah (2017) *Verdad y mentira en la política*. Barcelona: Página indómita.
- Brockmann, Erika (2012) “El difícil camino de la construcción y del desarrollo institucional de un partido político: El caso del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) y del Movimiento Sin Miedo por Justicia y Dignidad (MSM)”, en: Brockmann, E. y Aparicio, F., *Partidos políticos y democracia: el MSM y el MIR bajo la lupa*. La Paz: FES / CIDES-UMSA, 11-215.
- (2019) “Kaliman: venezolanización de las FFAA”, en: *Página Siete* (Opinión), La Paz, 16 de agosto de 2019.
- Ciudadanía et al. (2019) *Informe nacional de la Encuesta Mundial de Valores en Bolivia*. La Paz: Ciudadanía / CIS.
- Gülboy Laebens, Melis (2019) “Enemigos internos: democracia y amenazas de autocratización”, en: *Nueva Sociedad*, N.º 282, julio-agosto, Buenos Aires: Friedrich Ebert (FES), 135-147.

- Gumucio, Alfonso (2019) "A mis amigos del mundo mundial", 31 de enero de 2020, en:
<https://www.servindi.org>.
- Lazarte, Jorge (2010) *Nuevos códigos de poder en Bolivia*. La Paz: Plural.
- Levitsky, Steven y Ziblatt, Daniel (2018) *Cómo mueren las democracias*. Buenos Aires: Ariel.
- Linares, Julio (2019) "En nueve meses, el gobierno gastó Bs 329 millones en publicidad", 31 de enero de 2020, en:
<https://www.paginasiete.bo/economia/2019/10/12/en-meses-el-gobierno-gasto-bs-329-millones-en-publicidad-234062.html>
- Lipset, Seymour y Rokkan, Stein (1967) *Party Systems and Voter Alignments*. Toronto: Free Press.
- Maira, Luis (2007) "Bolivia: ¿el fin del enredo?", *Nueva Sociedad*, N.º 209, mayo-junio, Buenos Aires: Friedrich Ebert (FES).
- Malamud, Andrés (2019) "¿Se está muriendo al democracia?", en: *Nueva Sociedad*, N.º 282, julio-agosto, Buenos Aires: Friedrich Ebert (FES), 30-42.
- Mayorga, Fernando (2019) *Mandato y contingencia: Estilo de gobierno de Evo Morales*. La Paz: FES.
- Molina, Fernando (2015) "Conversión sin fe, ocho años después", en: *Página Siete* (suplemento *Ideas*, entrevista), La Paz, 1 de noviembre de 2015.
- Monasterio, Fátima (2019) "La necesidad de decir lo incómodo", 31 de enero de 2020, en:
<http://www.servindi.org/actualidad-opinion>
- O'Donnell, Guillermo (1994) "Delegative Democracy", en: *Journal of Democracy*, vol. 5, N.º 1, January 1994: 55-69.

Disponible en español en: http://www.liderazgos-sxxi.com.ar/bibliografia/Democracia-delegativa_.pdf

Organización de Estados Americanos (OEA) (2019) “Informe Final. Análisis de Integridad Electoral. Elecciones Generales en el Estado Plurinacional de Bolivia, 20 de octubre de 2019”, emitido el 4 de diciembre de 2020.

Portugal, Pedro (2020) “¡Descolonizar!”, en: *Página Siete*, 1 de febrero de 2020.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2009) *Tensiones irresueltas: Bolivia, pasado y presente*, La Paz: Plural Editores.

Rivera, José Antonio (2018) “Según el exmagistrado José Antonio Rivera: Sentencia 0084/2017 no es aplicable al Presidente y Vicepresidente en ejercicio”. En: <https://justiciabol.blogspot.com/2018/11/segun-el-exmagistrado-jose-antonio.html>, 8 de noviembre.

Rojas O., Gonzalo (2019) “La whisky-erda internacional nos aplaza”, en: *Los Tiempos*, 19 de noviembre de 2019.

Zegada, María T. (2019) “El peligroso quiebre con la realidad”, en: *Los Tiempos*, 24 de noviembre de 2019.

III

Movilizados, satisfechos e indiferentes: Maneras de vivir la crisis

Armando Ortuño Yáñez

UN DÍA MUY PARTICULAR...

Domingo, 10 de noviembre de 2019. Media tarde en La Paz. Mientras las avenidas de la zona sur se desbordaban con la euforia de automovilistas y transeúntes que festejaban ruidosa y abiertamente la renuncia del presidente Morales; otros, dolidos y molestos, reforzaban sus bloqueos y movilizaciones en la periferia citadina, lo que auguraba una noche que terminó efectivamente siendo muy complicada. En ese mismo momento, miles de otros ciudadanos transitaban apaciblemente por la red de teleféricos, que seguía funcionando normalmente en La Paz, disfrutaban un helado con sus hijos en alguna plaza de la ciudad —sobre todo en barrios populares y de clase media emergente—; consumían y se entretenían indolentemente apenas distraídos un momento por la fantasmagórica imagen de un señor hincado con una Biblia en el *hall* principal de Palacio Quemado que alguna pantalla de televisión en los centros comerciales insistía en mostrar pese al notorio desinterés de muchos paseantes en ese espectáculo.

Era, sin duda, un día histórico para una parte del país, emocionada por la épica de una victoria liberadora,

al tiempo que, a otros les embargaba un sentimiento de fracaso respecto a una ilusión que duró 14 años. También, una extraña indiferencia, desmovilización, “nomeimportismo” o madura distancia —frente a una política alejada de la vida de los comunes— se apoderaba de otro segmento apreciable de ciudadanos. Caracterizaciones heteróclitas que muestran la diversidad de interpretaciones que se le puede dar a ese fenómeno.

Lo cierto es que aún hay mucho por comprender sobre los sentimientos de las y los bolivianos durante la crisis electoral de octubre y noviembre de 2019, no solo por la dificultad de ordenar y entender la manera cómo esta es y fue procesada en un contexto obvio de heterogeneidad socioeconómica, étnica, territorial y cultural, sino también por la nociva tendencia a intentar simplificar el conjunto de esperanzas, miedos, actitudes y percepciones que se experimentaron en esos días en narrativas binarias de los eventos que tienden a resumirlos en una confrontación insoluble y polarizada de “pititas” versus “wiphalas”, demócratas versus autoritarios, oriente versus occidente, pobres indígenas versus clases medias acomodadas...

Esto, por supuesto, no quiere decir que el país no esté notablemente dividido, lo cual es visible, sino que ese desgarramiento no puede ser explicado por una sola variable y, menos aún, que esté conformado por bloques homogéneos e ideológicamente coherentes en su interior. Hoy, nuestras incomprendiones se producen en varias dimensiones, algunas coincidentes y otras contradictorias entre sí, cuya dinámica está determinada por diferencias generacionales, socioeconómicas y un largo etcétera de factores socioculturales. Por esa razón, no es extraño encontrar “pititas” inspiradas auténticamente por valores liberales-democráticos, otras por lógicas anarco-ambientalistas y otras muchas por un

racismo visceral contra el indio. Todas existen, interactúan y eventualmente colaboran para ciertos objetivos políticos comunes, pero no son la misma cosa, ni van a evolucionar igual. De manera simétrica, el “masismo” parece seguir siendo, aún más que antes, un archipiélago con poca organicidad de las muchas maneras de ser de izquierda o simplemente como expresión de lo nacional-popular o plebeyo en la Bolivia de hoy.

Además, en este momento histórico, la complejidad sociocultural, típica de la formación histórica del país, parece haber mutado significativamente después de un ciclo excepcional de casi dos decenios de estabilidad política, crecimiento económico, progreso infraestructural y modernización social. Guste o no, la Bolivia de 2019 es bastante diferente del país de la gran crisis de Estado de fines del siglo XX o, incluso, de la nación enfrentada por el conflicto constitucional/regional de 2008. Por eso, resulta insuficiente aplicar las categorías o parámetros que se utilizaron para explicar esos otros momentos de convulsión sociopolítica. La crisis electoral de octubre y noviembre de 2019, en su naturaleza, actores y desenlaces, es hija, como veremos más adelante, de esa modernización social, quizás imperfecta, pero modernización al fin.

De otro modo, cómo se podría explicar el contraste entre la dislocación sociopolítica que vivimos y una economía boliviana que siguió siendo una de la que más creció en Sudamérica, ratificando un dinamismo que se mantiene desde hace 14 años y que ha permitido reducir la pobreza de 60% a 35% entre 2005 y 2018, ampliando la clase media en alrededor de un millón de personas. A contramano de parte de la literatura sobre las crisis, Evo Morales renuncia en un contexto de crecimiento económico estable y con una ciudadanía moderadamente satisfecha con su situación

socioeconómica y que considera que sus hijos vivirán mejor que ellos, como lo reflejaban varias mediciones de opinión pública a mediados del 2019. Algunos males-tares culturales, concentrados en ciertos segmentos de la población, fueron, al parecer, más importantes para determinar la continuidad del gobierno que las expectativas y evaluaciones socioeconómicas de las mayorías. Pero, atención, estos factores no habrían sido tan determinantes si ciertas estructuras, comportamientos y valores no hubieran cambiado sensiblemente en el país en el último decenio.

Aún más, es posible que no solamente los fracasos, sino los éxitos del proyecto político conducido por Evo Morales hayan sido los que incubaron comportamientos, percepciones y subjetividades que influyeron para que su propuesta reeleccionista fuera primero derrotada, por muy poco, en el referendo del 21 de febrero de 2016 y para que las elecciones de octubre de 2019 hayan tenido el desenlace radicalmente rupturista que tuvieron.

Aunque la dislocación de noviembre parece haber definido momentáneamente dos bloques casi cerrados en sus certitudes y exclusiones, alimentados por un discurso político y redes sociales que exacerban la polarización, la realidad es necia y persistente, vuelve a resurgir en encuestas que indican que la cultura política “masista” goza aún de buena salud o en la emergencia de un electorado fragmentado y volátil. No hay, pues, “fin de historia”, ni el pensado por un régimen que tuvo casi todo el poder y se derrumbó en un mes, ni el de una contrarrevolución que parece inviable en la medida que busque solo revancha y sin entender lo que cambió a su alrededor.

En ese sentido, el futuro de cualquier proyecto político dependerá, paradójicamente, de su capacidad de trascenderse

a sí mismo, de ir más lejos de sus circunstanciales “trincheras”, de explorar los matices e intersticios de una sociedad en transformación. El bloque conservador-liberal, por llamarlo de alguna manera, solo será perdurable si es exitoso en proponer y ejecutar un proyecto que supere al desarrollado en los últimos 14 años y, para eso, debe necesariamente entender objetiva y subjetivamente lo popular, en todas las variantes y mutaciones que emergieron en la modernización de estos años, y dar respuesta a la cuestión social aún no resuelta pese a los esfuerzos realizados. Por su parte, el “masismo” no puede pretender un retorno simple a un pasado perdido, ya que su debacle se explica justamente por su alejamiento —sino ruptura— con grandes segmentos de la población que le habían sido tradicionalmente favorables y que, en cierto momento, no encontraron respuestas a su búsqueda de nuevas autonomías y a otras formas de conducir sus vidas; segmentos de la población que, en el momento decisivo, vieron de palco su caída o incluso participaron activamente para hacerla posible.

SATISFACCIÓN ECONÓMICA, MALESTAR POLÍTICO Y DIVERSIDAD SOCIAL

La crisis tuvo su origen en la aguda desconfianza en el proceso electoral presidencial y parlamentario en el que se debía resolver la posibilidad de que el entonces presidente Evo Morales acceda a un cuarto mandato consecutivo. A lo largo de los últimos dos años se fue instalando un fuerte malestar político en torno al largo y agitado proceso de habilitación de esa candidatura.

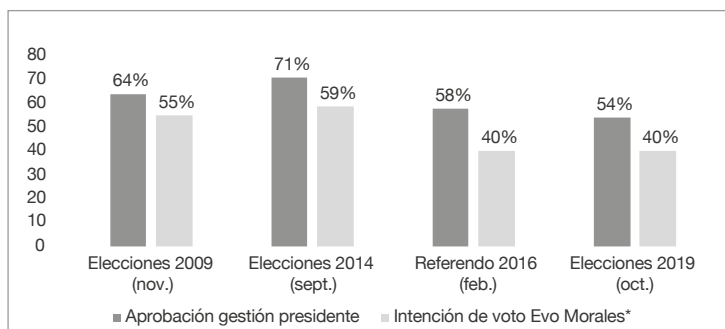
Las fuerzas políticas opositoras y una parte importante de la población rechazaron esa habilitación, que logró derrotar a la opción del sí a la reelección en un referendo y luego amplificarse con movilizaciones callejeras y acciones políticas, una vez que se revirtió esa definición mediante un fallo constitucional. Se llegó, pues, a un proceso electoral en el que la candidatura de Evo Morales nunca fue admitida por sus adversarios y en torno a la cual se instaló una aguda polarización y una gran desconfianza en las instituciones, particularmente en las relacionadas con la administración electoral.

En todos esos años, los opositores apostaron por instalar una contradicción entre autoritarismo y democracia como elemento esencial y central de la lucha político-electoral, mientras que el entonces oficialismo ponía el énfasis en la estabilidad económica y sus logros de gestión para justificar el proyecto reeleccionista. Ambas lógicas persistieron en todo este tiempo, combinándose de maneras insospechadas.

Hay consenso entre los entendidos de la opinión pública en que Evo Morales mantuvo un nivel de aprobación a su gestión relativamente elevado y estable durante la mayor parte de su mandato. Aunque no logró superar el 71% de aprobación que antecedió a su contundente victoria electoral de 2014, tanto en vísperas del referendo de 2016 como de la elección de octubre pasado mantenía una valoración positiva de alrededor del 55% de la población, que se puede considerar alta después de 14 años en el poder (ver gráfico 1). Incluso después de su renuncia, en una encuesta realizada a fines de diciembre de 2019, la evaluación retrospectiva de su gestión aún indicaba la existencia de un 44% de satisfechos. En otros estudios, anteriores y posteriores a la crisis, los datos se confirman: en todos hay mayorías significativas que apoyan las principales políticas del gobierno del MAS (nacionalización, bonos,

estabilidad económica, etc.) y su activismo en la construcción de obras públicas.

Gráfico 1 Aprobación del presidente e intención de voto (encuestas preelectorales), 2009-2019



Fuente: Elaboración propia con datos de IPSOS Bolivia.

* El porcentaje del referendo 2016 se refiere a la intención de voto en favor del Sí.

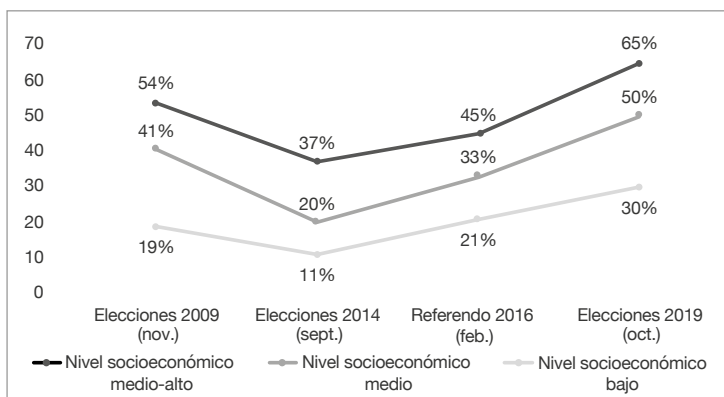
Sin embargo, eso no fue suficiente para acallar el malestar político asociado a la reelección, ganar cómodamente la elección de octubre y mitigar la movilización opositora de noviembre que acabó por forzar la renuncia del primer mandatario después de la revelación de irregularidades en el proceso electoral. Aunque, históricamente, la relación entre aprobación de gestión y voto no es lineal, esa brecha se fue ampliando significativamente desde el referendo de 2016 y se repitió en la elección de 2019: aproximadamente un tercio de las personas que tenían una valoración positiva del trabajo del gobierno y del presidente no votaron a su favor.

¿Por qué y dónde se produjo esa disociación? Al igual que la mayoría se sentía satisfecha con el balance socioeconómico del gobierno del MAS, todas las encuestas mostraban al mismo tiempo un rechazo consistente y mayoritario al proyecto prorroguista, un reclamo de “renovación”

dirigencial y una gran desconfianza en el órgano electoral. Más específicamente, en una encuesta postcrisis realizada por la empresa CIESMORI los tres principales “defectos” del gobierno de Morales identificados por los entrevistados fueron: el “abuso de poder” (45%), el “fraude” (37%) y la “corrupción” (35%). Sentimientos que no eran incompatibles para un porcentaje apreciable de los ciudadanos con una opinión positiva sobre la gestión socioeconómica del gobierno y un apoyo a sus principales políticas.

Aunque el malestar con las “formas de hacer política” del MAS y de su líder eran bastante transversales y estaban presentes en todos los segmentos, territorios y grupos etarios, este fue particularmente intenso en las clases medias-altas y se extendió bastante entre las clases medias tradicionales y emergentes. Solo los sectores populares, rurales y más desfavorecidos socialmente mantuvieron un apoyo claramente mayoritario al oficialismo, aunque ahí también se observó cierta erosión (ver gráfico 2).

Gráfico 2 Desaprobación de la gestión presidencial (por nivel socioeconómico), 2009-2019



Fuente: Elaboración propia con datos de IPSOS Bolivia.

Ya en el referendo de 2016 se observó ese desacople de las clases medias, principalmente urbanas y con mejores niveles de vida, en relación con el oficialismo, pero este alcanzó niveles muy elevados en las semanas previas a la elección de 2019: durante esos días más de dos tercios de los entrevistados pertenecientes a las clases medias altas tenían una mala imagen del gobierno, 66% estaban decididos a votar por un opositor y muchos de ellos estaban convencidos que un “fraude” era inevitable. Pero ese renovado e intenso activismo de los segmentos más educados y ricos de la sociedad estaba inmerso en un clima mucho más transversal y heterogéneo de desconfianza frente al poder masista; promovía un discurso que ya no estaba aislado y cuyos valores y propuestas lograron tener audiencias plurales.

Los resultados cuestionados de la elección de octubre reflejan también esas nuevas configuraciones sociales y territoriales que han emergido en torno a una cuestión reeleccionista mal resuelta: el MAS continuó siendo el partido más sólido después de 14 años en el poder y ratificó que era la fuerza con mayor presencia territorial y social, pero perdió mucha votación en relación a los comicios de 2014, pasando del 62% al 47% de votos y reduciendo significativamente su presencia en distritos de clases medias e incluso en muchos barrios populares. Solo su base electoral rural y popular urbana más pobre le siguió siendo mayoritariamente fiel.

A diferencia de las elecciones de 2014, en las que el masismo pudo imponerse en segmentos tradicionalmente opositores como el departamento de Santa Cruz —mostrando una capacidad de atracción transversal—, su desempeño en 2019 se limitó, sobre todo, a sus bastiones tradicionales. Se ratificó el mal humor de las clases

medias tradicionales y de una parte nada desdeñable de las clases emergentes, y las zonas urbanas modernas le fueron muy esquivas. Estos comicios fueron casi una proyección perfecta de lo que ya pasó en el referendo de 2016, lo cual indica que los sentimientos en torno a esa cuestión siguieron siendo determinantes para orientar el voto del elector; pese a sus esfuerzos, el oficialismo nunca pudo desligarse de ese malestar. Aún más, no logró explicarlo convincentemente, intentó eludirlo y lo intensificó con sus intentos de imponer la postulación de Evo Morales a la reelección.

¿El desenlace significó entonces el triunfo de una sociedad en la que se fueron imponiendo valores postmateriales a medida que mejoraban sus condiciones de ingreso? Los estudios de opinión no son contundentes al respecto, aunque la desconfianza institucional se ha ido extendiendo durante estos años y valores más relacionados con la autonomía individual y la institucionalización se propagaron entre los jóvenes y las nuevas clases medias, parecería que en una proporción significativa de los opositores las razones del malestar fueron resultado de intuiciones algo menos desarrolladas: la desconfianza frente a un poder que no se renueva y que se percibe como abusivo pero del cual, al mismo tiempo, se aprecia algunos de sus resultados y sus políticas.

Por tanto, son discutibles tanto la versión que indica que el colapso del gobierno de Evo Morales provino de una serie de operaciones políticas en clave conspirativa y no de un real malestar de amplias franjas de la población con ciertas prácticas y decisiones de ese gobierno, como la que se imagina que todos los que se movilizaron o apoyaron la insurrección opositora de octubre eran acérrimos detractores del régimen del MAS deseosos de un borrón y cuenta nueva radical.

NUEVOS ESTRATOS MEDIOS: ENTRE LA BÚSQUEDA DE ALTERNATIVAS Y EL CAMBIO EN SUS MANERAS DE PARTICIPAR EN LA POLÍTICA

El crecimiento de los estratos de ingresos medios es una de las transformaciones sociales más relevantes que el país ha experimentado en los últimos diez años. Se sabe, por una amplia literatura, que estos grupos no son homogéneos y que sus comportamientos políticos y electorales están determinados no solo por sus ingresos sino por su tipo de inserción laboral, pertenencia étnica, generacional, etc. Es muy discutible hablar de una cultura política de “clase media” única y de un comportamiento en bloque de estos segmentos. Se trata de un heteróclito grupo de ciudadanos, algunos satisfechos y otros molestos con el gobierno del MAS, o con sentimientos cambiantes y hasta contradictorios sobre ese régimen. Quizás en lo único que coinciden es en su alejamiento de las formas tradicionales de participar y hacer política. Y es, quizás, por ahí donde se puede entender las varias y paradójicas maneras en las que intervinieron durante la crisis postelectoral.

De manera general, se puede afirmar que en estos años las lealtades políticas y las formas de participación se han modificado por el ascenso del individualismo y la pérdida de influencia de los tradicionales sistemas de mediación, llámense sindicatos, comités cívicos o partidos, y por la emergencia de renovadas maneras de incidir en el ámbito público, mediante las redes sociales o la adscripción volátil a movimientos políticos con causas específicas.

En ese contexto, no es una novedad que haya emergido un electorado cambiante y más independiente, propio de cualquier proceso de modernización social. A inicios de este siglo, el país era uno de los más atrasados de Sudamérica, realidad que se reflejaba en pobreza y

exclusión estructurales. Esa modernización pendiente se fue resolviendo al ritmo de una política económica heterodoxa pragmática, grandes inversiones sociales y un entorno externo favorable. Una nueva sociedad fue emergiendo poco a poco, con más ingresos y consumo, con una cultura urbana individualista más intensa, menos preocupada de las diferencias étnicas —que se fueron limando poco a poco—, en la que las fronteras entre lo rural y lo urbano se complejizaron, pero en la que también aparecieron nuevas expectativas y problemas.

Un estrategia político comentaba, por ejemplo, que para la primera generación de migrantes urbanos, beneficiados por el cambio, Evo Morales era un personaje a emular y con el que se podían autoidentificar: era igual a ellos. En cambio, para sus hijos, el personaje ya no poseía rasgos que se vinculaban tan automáticamente con sus aspiraciones ligadas a un destino profesional y a una cultura impregnada por la vida urbana y el consumismo, experiencias de vida alejadas del mundo migrante y semirural que experimentaron sus padres al igual que Evo.

Esto no quiere decir que estos segmentos se iban a volver necesariamente reacios al MAS sino que planteaban retos a esa fuerza para comunicarse con ellos, sobre todo considerando su gran dificultad para adaptar su discurso y estructura, muy enraizados en la forma y retórica de la red de sindicatos y organizaciones populares de raigambre corporativa.

Así pues, al ritmo de la modernización social y la búsqueda de autonomías y libertades de muchos miembros de los estratos medios emergentes, se fue instalando un cansancio frente al liderazgo de Evo Morales y una desconfianza en las estructuras tradicionales del masismo, percibidas como burocráticas y poco abiertas

a sus necesidades subjetivas y objetivas. En el referendo de 2016, esa fatiga explicó, en parte, el imprevisto rechazo a la repostulación en zonas donde el MAS había sido mayoritario apenas dos años antes. Sondeos postelectorales mostraron que casi un tercio de ese voto negativo no tenía tanto que ver con los discursos de defensa de la democracia o de crítica radical a la gestión oficialista, sino con un reclamo de renovación dirigencial.

A la archiconocida coalición opositora compuesta por clases medias urbanas tradicionales y electores regionalistas de las tierras tropicales, se sumó un universo heterogéneo de votantes populares y de estratos medios emergentes satisfechos por sus logros, pero desconfiados del poder y ávidos de novedad, y así Morales fue derrotado por primera vez. Esa dinámica se habría reproducido en el voto del 20 de octubre de 2019, no tanto en beneficio de Carlos Mesa, que aglutinó mayormente a las oposiciones clásicas, sino del excéntrico candidato evangélico, el pastor Chi Hyun Chung, que alcanzó un 8,7% de votación, con un discurso ultraconservador y de rechazo a todas las élites políticas, tanto nacional-populares como liberales, transmitido en redes sociales con un lenguaje simple y lúdico.

Igualmente, durante el conflicto postelectoral, si bien la punta de lanza de la movilización opositora la ejercieron grupos provenientes de las clases medias tradicionales o de la militancia regionalista, intensamente involucrados en un activismo antimasista, estas contaron con un grado inédito de tolerancia por algunas de sus ideas en amplios segmentos de la sociedad. Las sospechas de un “fraude” y un comportamiento abusivo lograron ser mayoritarias y bastante presentes incluso entre electores del MAS.

Al parecer, el sentimiento y comportamiento de los “emergentes” en esos agitados días estuvo determinado por percepciones contradictorias: un auténtico reconocimiento y acuerdo con la gestión socioeconómica de Evo Morales, una desconfianza extendida hacia el gobierno y las instituciones, y un temor a verse envueltos en situaciones inestables que les perjudicaran e hicieran perder lo que habían logrado.

Por esas razones, la suposición de que los mundos populares saldrían a defender el “proceso de cambio” tampoco fue tan cierta debido a que no consideraba las implicaciones que significan la mejora de ingresos y la cultura individualista urbana en esos grupos. Las nociones de riesgo y las maneras de participación política se han transformado. Por ejemplo, al igual que la preferencia por la estabilidad favorecía el voto mayoritario de esas personas por el oficialismo, también desmotivaba su involucramiento en acciones de hecho callejeras. Tampoco el MAS había logrado construir nuevos mecanismos de comunicación y movilización con grupos alejados o desconectados de las organizaciones corporativas, cuyos espacios de participación política se limitaban a interacciones casuales en las redes sociales y al voto.

El saldo de esta evolución fortaleció coyunturalmente a quienes estaban intensamente movilizados y deseosos de cambiar el rumbo de la historia —en este caso mayoritariamente pertenecientes a las clases medias tradicionales—, y dificultó la movilización de los soportes sociales del oficialismo erosionados por su burocratización pero también porque muchos de sus adherentes no estaban dispuestos a salir a la calle por temor o porque su identificación identitaria se había vuelto más laxa.

En muchos sentidos, la crisis y su desenlace hicieron evidente que Evo Morales y el masismo tenían grandes

dificultades para descifrar la sociedad que ellos mismos fueron transformando y para construir una institucionalidad que la contenga y satisfaga. Pero, atención, no solamente ellos están en un brete, sus detractores tampoco han ido más allá de una articulación de una gran coalición para sacar a Evo del poder o de un intento visceral de borrar apresuradamente el pasado reciente; en su seno no hay muchos visos de una propuesta superadora que tome en cuenta las evoluciones anteriormente descritas.

Los sucesos posteriores a la renuncia de Evo Morales han complicado aún más este mar de sentimientos contradictorios y fluctuantes, sobre todo en el estratégico grupo de votantes de ingresos medios: el retorno violento a una polarización socioétnica en conversaciones cotidianas, redes sociales y medios masivos de comunicación les ha recordado a muchos que sus logros económicos no implican un reconocimiento automático y valorización de sus identidades. Se ha introducido el temor por una futura crisis económica y la pérdida de lo conseguido y se han reforzado las identidades políticas polares al ritmo de la confrontación y la emergencia de sentimientos de agravio en unos y otros.

En consecuencia, el saldo de la crisis no es solamente una sociedad más desagarrada sino una aguda complejización de los clivajes que la conforman, los cuales asumen diversas formas según la pertenencia de las personas a ciertos segmentos socioeconómicos, etarios, territoriales o étnicos. Se ha instalado la incertidumbre y la confusión frente a una realidad que no se termina de descifrar, de ahí la tentación del retorno a ciertas identidades políticas primarias o la preferencia por valores más ligados a la estabilidad y el orden que por la novedad o la (contra)revolución. En esas condiciones subjetivas, los bolivianos y bolivianas

retornarán a las urnas el 3 de mayo, en unas elecciones que, por todas estas razones, serán imprevisibles.

A MODO DE EPÍLOGO: EL DESAJUSTE INSTITUCIONAL DE LA MODERNIZACIÓN

El mayor riesgo de la crisis sociopolítica que estamos viviendo es que se entienda como un eterno retorno a las antinomias del pasado, es decir a la discusión post-2006 sobre las rupturas sociales, territoriales y étnicas que prevalecían en el país, como si, entretanto, nada hubiera pasado. No es que esos conflictos no persistan, de hecho, no nos habían abandonado del todo como algunos creían ingenuamente, sino que están tomando un cariz diferente con matices, mutaciones y complejidades que no podemos eludir. La cuestión social no puede ser, por ejemplo, inmune a una reflexión sobre las necesidades de una sociedad en la que los estratos de ingresos medios son mayoría, o el futuro de las relaciones étnicas no puede pensarse sin entender la mutación de esas identidades debido a la urbanización, al acceso al consumo globalizado o al debilitamiento de las fronteras entre raza y riqueza que se ha producido.

Tampoco las respuestas institucionales a esta dislocación son fáciles, van más allá del debate sobre un abstracto equilibrio de poderes republicano, mejor calidad de las instituciones o una mayor o menor federalización del poder, de lo que se trata, posiblemente, es de adaptar nuestras instituciones y políticas a la extraña, mutante e informal sociedad que nació bajo el mandato de Evo Morales y que volvió a confrontarse, a ratos violentamente, durante la crisis postelectoral.

La incertidumbre y la inestabilidad de estos días son quizás otro indicio más de un agudo desajuste institucional, exacerbado por los errores del gobierno del MAS en los últimos años, frente al ritmo que han tomado las transformaciones modernizadoras en la base social, que impulsaron la aparición de nuevos malestares y demandas, pero que si no son resueltos oportunamente podrían frustrar los progresos que logró el país desde inicios de siglo y sumirnos en una ingobernabilidad crónica, sea quien sea el que salga victorioso de las próximas elecciones.

Elecciones y gobierno de transición

José Luis Andia

INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo explicaremos cuáles fueron las razones previas a las elecciones nacionales de 2019 que, como se sabe, terminaron en una movilización de diferentes sectores sociales, repudiando los resultados presentados por el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y, luego, la movilización de otra parte también importante de la sociedad repudiando la renuncia del presidente Evo Morales, así como las circunstancias de esta renuncia. Analizamos también la elección atípica que vivimos, las características tan controversiales del presente gobierno, su autocaracterización y medidas tomadas intentando, al final, darle un primer abordaje a esta volátil coyuntura, compleja e interesante del presente histórico-político.

Finalmente, caracterizamos esta coyuntura, sus problemas y necesidades, para terminar tratando de esbozar un conjunto de desafíos a cumplir en el corto y mediano plazo por la política y la sociedad boliviana.

PROBLEMAS PREVIOS AL PROCESO ELECTORAL VINCULADOS AL OFICIALISMO

Referéndum del 21 de febrero 2016

En un mal cálculo político casi imposible de prever, el Movimiento al Socialismo (MAS) decide convocar a un referéndum en fecha 21 de febrero del 2016 para modificar la Constitución en su art. 168, el cual limitaba la reelección de presidente y vicepresidente de manera continua a una sola vez.

Probablemente, las razones que los llevaron a tomar esta decisión fueron que, por un lado, el MAS venía de obtener un fuerte triunfo electoral nacional en 2014, con 61,36% y más de 37% sobre el segundo (Unidad Demócrata, UD, con 24,23%) (OEP, 2014), y también, con la admisión del recurso presentado ante La Haya referido a la reivindicación marítima boliviana donde acababan de tener un triunfo internacional de gran repercusión interna.

Lo que no calcularon en ese momento fue que un referéndum, a diferencia de las elecciones nacionales, uniría la votación del descontento en torno al gobierno, pues solo habría dos alternativas en torno a este, dejando así un margen muy estrecho de victoria.

También estuvo una variable electoral poco utilizada hasta ese momento o utilizada de forma muy rudimentaria, nos referimos a la combinación de “guerra sucia” y utilización de redes sociales (“caso Zapata” y supuesto hijo no reconocido del presidente).

Estos temas, el triunfalismo del 2014 —además de la admisión de la demanda marítima en La Haya— y el caso Zapata, fueron las causas de la derrota oficialista en el referéndum constitucional del año 2016. A lo que habría que agregar la poca sostenibilidad argumental de una nueva reelección,

después de tres períodos continuos de gobierno. Aunque con pequeño margen, tema que no cuenta para la historia, esta sería la primera derrota electoral del MAS, aparentemente imbatible desde el año 2005.

Así se inició el tránsito de un periodo de “hegemonía democrática con los movimientos sociales de vanguardia” a una especie de “autocracia apoyada en los movimientos sociales”. Especialmente en ese peligroso juego de legalidad-legitimidad en que se metió el gobierno, al no reconocer el resultado de un referéndum y buscar un procedimiento judicial de habilitación, justificado en un “pedido” de los movimientos sociales”.

Órgano Electoral Plurinacional (OEP), bajo sospecha

A raíz de las críticas al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que organizó las elecciones generales del 12 de octubre de 2014, y con muchas tareas electorales pendientes, el gobierno del MAS decidió renovar esta entidad con la idea de lavarle la cara tras el desgaste al que había sido sometida.

En julio del 2015 se eligieron nuevos vocales para renovar el TSE. Aunque no existieron posibilidades de un acuerdo interpartidario en la Asamblea Legislativa Plurinacional, se nombró a profesionales con un buen currículo, experiencia y, sobre todo, respetados y conocidos. Sin embargo, no dejaron de ser calificados por la oposición como, al menos, cercanos al gobierno. El *Correo del Sur* (2015) reflejaba este momento así:

Tras más de ocho horas de debate, la Asamblea Legislativa Plurinacional eligió por dos tercios de voto del oficialismo a María Eugenia Choque Quispe, Katia Uriona Gamarra, José Luis Exeni, Idelfonso Mamani, Antonio Costas y Dunia

Sandoval como los nuevos vocales titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Tal como se esperaba, el MAS-IPSP aplicó los dos tercios en la Asamblea y su decisión terminó imponiéndose en la elección de los postulantes al TSE.

A pesar del carácter casi unilateral de la definición de los elegidos, políticamente hablando, no solo por decisión propia del oficialismo, sino por desconfianza y distancia que tomó la oposición, los profesionales que llegaron a tales cargos cumplían los requisitos y el objetivo que se había definido inicialmente. Sin embargo, con las posteriores renunciaciones de algunos de ellos —Exeni argumentando temas personales, Sandoval esgrimiendo asuntos de ética política y, finalmente, al propia presidenta, Katia Uriona, quien renunció el 22 de octubre de 2018 después de tres años de gestión y de haber logrado una considerable credibilidad al dar los resultados del referéndum del 2016 de forma rápida y clara—, empezó a desmoronarse lentamente la renovada confianza que venía ganando este órgano.

Todo esto unido a una campaña constante de sospechas crecientes de los dirigentes de la oposición y nuevos líderes sociales emergentes, además de algunos actos específicos del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), como la habilitación del binomio Morales-García Linera en las primarias o el cambio de fecha de las elecciones a pedido del presidente, contribuyeron a incrementar las dudas de la población sobre la imparcialidad del Órgano Electoral.

Elecciones con primarias

El 1 de septiembre del 2018 se aprobó la Ley 1096 de Organizaciones Políticas que, en su artículo 29 (“Elecciones primarias y candidaturas del binomio presidencial”), deja claramente establecido que los candidatos que vayan a

terciar en las elecciones nacionales previamente deben pasar o someterse a primarias internas partidarias.

El resultado del referéndum del 21 de febrero del 2016, donde se debatía la pertinencia del binomio Morales-García Linera, fue parte de la discusión de las primarias, pues la oposición planteaba que estas elecciones lo único que hacían era legalizar la presencia del binomio, es decir que el gobierno habría aprobado esta ley básicamente por dos razones políticas: confirmar que su binomio iba a la reelección y, por otra parte, apurar el proceso electoral de tal manera que no hubiera tiempo para que se organice mejor la oposición.

LA OPOSICIÓN Y SU ESTRATEGIA DE LARGO PLAZO

Dictador, dictador, dictador

Hace más de siete años, desde el Instituto Interamericano para la Democracia, dirigido por Carlos Sánchez Berzaín, exministro de Gonzalo Sánchez de Lozada, se inició una estrategia de mediano y largo plazo para desgastar al gobierno de Evo Morales, en ese momento con mucha fuerza social y electoral.

Entonces se filtró una grabación de un taller de liderazgo que Sánchez Berzaín dictó en EEUU, aparentemente para políticos bolivianos de oposición, donde explicaba cuál debería ser la estrategia de desgaste.

A raíz de este video, el conocido programa de la televisión nacional “No mentirás” (emitido por la red PAT) entrevistó a Sánchez Berzaín, vía Skype, quien se declaró perseguido político y asilado.

Berzaín repitió en televisión los conceptos que explicaba en el video referidos a que debían posesionarse en

Bolivia, entre otras ideas, que el gobierno tenía perseguidos y presos políticos; que la justicia se usaba arbitrariamente contra la oposición; que no existía libertad de prensa; que Evo Morales promovía una política de enfrentamiento; que era un gobierno corrupto y narcotraficante; y que en Bolivia no había democracia desde que depusieron al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, en octubre de 2003, con un golpe de Estado. Decía también que Evo Morales tenía un perfil de dictador como el de Fidel Castro en Cuba y que Carlos Mesa cumplió un papel de traidor y de romper la democracia por ambiciones personales.

Este libreto fue asumido lentamente por la totalidad de dirigentes políticos de oposición, no sin ayuda, en muchos casos, del propio gobierno, confirmando algunas de estas aseveraciones, tales como el fracaso de las políticas de justicia, los escándalos de corrupción y las estrategias de reelección, medianamente legales pero poco legítimas.

De hace siete años —cuando se esgrimían estos argumentos, entonces poco creíbles para la sociedad— a estos últimos años —cuando una parte importante de la población estaba convencida de estos temas—, se nota que la estrategia de repetición de esos conceptos en el mediano y largo plazo terminó dando frutos.

Gobierno antidemocrático

Una de las fortalezas que tuvo el MAS desde sus inicios fue hegemonizar y avanzar específicamente en temas de inclusión social, política y democrática, pero subordinó ese discurso a partir de la decisión de no respetar el resultado del referéndum del 21 de febrero del 2016, cediéndole este tema central a la oposición, que hasta

entonces —por su pasado— tenía serios problemas para mantenerlo.

Copamiento y subordinación de los órganos del poder

El copamiento y subordinación de los órganos del poder no hubiera sido posible sin las mayorías absolutas a favor del MAS que el pueblo boliviano votó en las elecciones de 2005 (53,72%), 2009 (64,22%) y 2014 (63,36%). Con ellas, el MAS definió los procesos de sustitución y constitución de nuevas autoridades en Órganos del Estado, como el Judicial y el Electoral, entretanto el discurso de la oposición se fortaleció al decir que esto atentaba contra el equilibrio de poderes. De todas maneras, fue un error que, en algunos casos, se dieran comportamientos demasiado subordinados de algunas importantes autoridades, que fortalecieron esa idea en la población.

Subordinación y fraude del OEP

La oposición mantuvo un discurso sostenido acerca del fraude electoral, poco creíble a inicios del periodo hegemónico, pero que les permitía justificar sus rutilantes derrotas. Esta idea fue tomando cuerpo a partir de errores oficialistas —sin que se le diera la importancia que merece— manejando de forma desprolija tanto la Constitución y después la relación con el Órgano Electoral Plurinacional (OEP). La composición de este Órgano no terminó garantizando a la población un actuar independiente, y los pocos que cumplían ese requisito, paulatinamente y por diferentes razones, fueron renunciando.

Así, la oposición, repetitiva en su estrategia, fue ganando campo con su discurso de fraude, además de que, parte de la

sociedad, cada vez más activa y movilizada, consideraba que existía un desgaste oficialista con pocas probabilidades de victoria y que, de darse esta, sería con fraude.

En ese contexto de gran incertidumbre por parte de la población sobre la imparcialidad del TSE se llegó a las elecciones del 2019. Ya en octubre, la suspensión de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y la contradictoria información sobre esta decisión gatillaron el convencimiento definitivo —sin necesidad de mayores pruebas— del fraude electoral.

Los informes ambiguos y recomendaciones sorprendentes de la comisión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) —en calidad de observadora primero, y auditora después— no hicieron más que confirmar la idea de fraude en la sociedad movilizada. Así se manifestaron diferentes líderes de las protestas (Luis Fernando Camacho y Waldo Albarracín, entre otros) manifestando que no necesitaban esperar ningún informe de la OEA pues, para ellos —y para la sociedad movilizada— el fraude estaba más que confirmado. Estos informes, más que ser pruebas para la sociedad, fueron un golpe duro a la estrategia oficialista de subordinarse a ellos como mecanismo de salida de la crisis.

Descontento creciente de la sociedad frente al gobierno

Hipótesis 1. La sociedad civil, producto de acciones erróneas del gobierno, de la crítica de los líderes de la oposición y de una campaña negativa sostenida en medios de comunicación y en redes sociales, desarrolló un descontento creciente contra el gobierno que terminaría en masivas concentraciones y en el estallido contra el fraude del 20 de octubre.

Una de las características particulares de la elección del 2019 fue que hubo un doble proceso político: por un lado, los partidos políticos y sus candidatos, terciando por la preferencia del voto ciudadano; por otro, una parte de la sociedad con organizaciones no partidarias que venían reclamando aún sobre el tema de la ilegalidad de la candidatura del binomio oficialista, a raíz del referéndum del 21 de febrero del 2016.

El Consejo Nacional Democrático (Conalde) fue una de estas organizaciones, integrada, entre otros, por el rector de la UMSA, Waldo Albarracín; también participaron los comités cívicos del país a la cabeza del cruceño Fernando Camacho, así como nuevas plataformas ciudadanas en las diferentes ciudades capitales. Hay que mencionar, del mismo modo, a algunas organizaciones gremiales de profesionales, entre las que destacaron los colegios médicos a partir de su lucha (en enero 2018) por suprimir el art. 205 del proyecto de Ley del Código del Sistema Penal que, finalmente, fue abrogado sin llegar a implementarse. Este proceso paralelo a las campañas partidarias, atípico en una campaña electoral, de inicio no tuvo el éxito que se pretendía por lo que estos sectores intentaron, desde noviembre del 2018, una escalada de protestas nacionales que inicialmente tampoco tuvo éxito. Los conatos posteriores —en febrero, agosto y septiembre del 2019— tampoco consiguieron generar una gran adhesión social. Lo que sí se logró, sin embargo, fue instalar un descontento creciente de la sociedad en contra del gobierno.

Cabildo cruceño

El cabildo realizado en Santa Cruz de la Sierra del 4 de octubre del 2019 marca el inicio de movilizaciones

nacionales a gran escala, mostrando un amplio descontento general, y en el caso específico de Santa Cruz, un furioso y frustrado descontento con el proceso político nacional. En esta masiva reunión confluyeron diversos descontentos vinculados al gobierno: los profesionales, especialmente los médicos, la clase media en general, los pequeños empresarios y sus problemas con impuestos, la juventud y su idea de democracia como alternancia, los miedos conservadores frente a un “comunismo” en ciernes, las visiones apocalípticas de las iglesias más fanáticas, etc. También frustración, pues estos sectores de la sociedad, movilizados en varias oportunidades, pidieron a los cívicos iniciar paros importantes —estrategia que hasta entonces había fracasado—, así como unidad entre los políticos de oposición para enfrentar al oficialismo; demanda que tampoco se materializó.

En ese contexto, se convocó a un cabildo, evento que el liderazgo local siempre había previsto para ocasiones fundacionales de reivindicaciones locales pero que convocado como siempre, casi improvisada e inconsultamente por el nuevo presidente del Comité Pro Santa Cruz y, por lo tanto, sin el apoyo previamente pactado de las fuerzas económicas locales, se daba bajo incógnita de su resultado.

Sin embargo, el descontento y frustración descritos líneas atrás pudo más que cualquier cálculo previo y encontró en el cabildo un espacio de canalización de todo el sobrecalentamiento político.

Este cabildo tuvo dos características importantes: en primer lugar, fue multitudinario con la autoconvocada participación de gente que, además, se controló de manera pacífica y ordenada; por otra parte, por primera vez en este tipo de actividades, hicieron uso de la palabra diferentes actores (nuevos, la mayoría) de la sociedad civil, tales

como jóvenes de las “plataformas”, miembros de agrupaciones de defensa de la ecología, grupos de voluntarios (entre ellos, de bomberos, a raíz de los incendios en la Chiquitania), presidentes de colegios de profesionales, etc. Esto era una cosa nunca antes vista y que le daba un papel protagónico a la sociedad. Cada uno de estos oradores, además, proponía al cabildo la aprobación de un tema específico; el que nos interesa estuvo a cargo de una joven de las “plataformas”, que pidió se apruebe que “de existir fraude electoral en las elecciones próximas, el pueblo se comprometía a resistir el resultado en las calles”.

Estos dos fenómenos casi de “apropiación social del cabildo” por la audiencia autoconvocada a los discursos venidos de su propio seno, terminó dando al presidente del Comité Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, un protagonismo local importante, comprometiéndose, en un discurso corto pero certero, a cumplir lo que le encargaba el cabildo.

Hubo, claro, cierto direccionamiento y selección de los temas tratados, sin embargo, la sociedad presente se sentía totalmente representada en los temas aprobados. Ese momento, el presidente del Comité Cívico inicia otra etapa y dimensión de su liderazgo local que, como sabemos, terminó teniendo repercusión nacional.

Secuelas nacionales del cabildo cruceño

El éxito del cabildo cruceño del 4 de octubre generó una serie de cabildos en el resto del país, con la idea de replicar la imponente movilización, y además con la estrategia de darle dimensión nacional al novedoso (aunque antiguo) mecanismo.

Se convocaron otros cabildos en La Paz, 31 de octubre; Cochabamba, 10 de octubre; Sucre, 25 de octubre; Potosí, 16 de octubre, entre otros. En estos eventos, con algunas variantes en cada lugar, se intentó mantener la idea de darle la palabra a la sociedad civil, en algunos casos con éxito —especialmente en lugares donde eran más homogéneas las ideas políticas— y con dificultades en otras plazas, como el caso de La Paz y la frustrada participación de María Galindo, líder del colectivo feminista Mujeres Creando.

Sin embargo, aun con esta variante muy participativa y de carácter no elitista, como había sucedido en el pasado, los cabildos no dejaron de ser una rara especie de convocatoria entre convencidos para aceptar, a cajón cerrado, lo que se pregunta a una multitud que solo tiene la opción de aceptar, eliminando el debate y el derecho al disenso en cualquier forma. Estos cabildos califican muy bien como mecanismos de movilización pero no como mecanismo democrático de decisión, pues de ser así estaríamos pasando de una democracia representativa, semidirecta e intercultural, a una especie de “monólogo pseudodemocrático”.

LAS ELECCIONES, SIN PROTAGONISMO POLÍTICO DE NADIE

Hipótesis 2. Las frustradas elecciones nacionales del 2019 fueron tremendamente atípicas, pues no ocurrió ninguna de las cosas que se tenía en expectativa previa, hubo poca y extraña participación de los candidatos, las etapas electorales también fueron inusuales, se dio un evento inesperado que prácticamente paralizó las campañas y terminó de forma sorpresiva e imprevista.

Oposición dispersa, enfrentada y sin gran discurso

La oposición participó dividida nuevamente, lo que le quitaba chances de una victoria clara o, al menos, de enfrentar efectivamente al MAS. Esta división no solo favoreció al oficialismo sino que cambió la pugna electoral que, debiendo ser entre oficialismo y oposición, devino en pugna dentro de la misma oposición por la disputa de su liderazgo (entre Óscar Ortiz y Carlos Mesa, básicamente). Mientras la “guerra sucia” ganaba terreno entre los propios opositores, ninguno de ellos tuvo ni el espacio, ni el deseo de exponer alguna propuesta alternativa al proyecto político vigente, lo que dejaba a esta oposición complicada entre acusaciones y contra acusaciones y sin constituirse en una alternativa clara.

El oficialismo, por su parte, aunque parecía beneficiarse de la pugna entre opositores, conocía que existía un importante sector de la sociedad cuyo voto todavía era indeciso y terminó sin poder manejar el ritmo electoral en esa dirección, manteniendo un discurso plano de continuidad y bienestar económico, que sin duda le alcanzó para fidelizar votos propios, pero no le permitió acercarse a esos nuevos segmentos de votantes.

Ninguno de los candidatos aceptó debatir los pocos temas que se posesionaron en campaña aunque hubo varios desafíos a debate que fueron desechados por estrategia.

Incendio del Bosque Seco Chiquitano

Entretanto —y por eso fue atípica esta elección— ocurrió un incendio de gran magnitud en la Chiquitania (Santa Cruz) que opacó el proceso electoral a tal punto que ningún candidato pudo hacer campaña y quienes

quisieron aprovecharse electoralmente del desastre fueron duramente criticados por la sociedad. El incendio marcó un alto en el proceso electoral, pues hacer campaña en medio del desastre ecológico resultaba negativo, por lo que este terminó dejando a los votantes con más dudas, con pocas propuestas y sin debates. De esa manera se llegó, con más dudas que certezas, al día de la elección.

El día de la votación

Quien sí fue, nuevamente, un gran protagonista fue la sociedad boliviana pues, a pesar de las mediocres campañas, los bolivianos acudieron masivamente a las urnas. Los seguidores del MAS lo hicieron sin mucho que definir pues tenían sus candidatos claros. Por otro lado, los votantes de oposición demostraron también madurez y protagonismo, más allá de sus líderes, definiendo un voto útil hacia Comunidad Ciudadana, que marcó el resultado político que vendrá luego.

Este fenómeno se hizo más patente en Santa Cruz, pues a pesar de que el candidato Óscar Ortiz, de Bolivia Dice No, tenía una intención de voto importante, sus seguidores —e inclusive sus militantes—, en cuestión de horas, definieron votar por Carlos Mesa, cruzando el voto en la franja uninominal para diputados de la fuerza de Ortiz.

En ese sentido, la sociedad terminó definiendo con su voto lo que los políticos de oposición no pudieron hacerlo solos: unificar la votación en torno a una opción. Se podría decir que la votación fue, como siempre, una fiesta democrática pero que, además, marcó un voto interesantemente racionalizado. Claro que, en la práctica, en pocas horas pasaríamos de “la fiesta democrática” a la lucha por la “defensa de la democracia” —para la oposición— o a la “defensa del voto popular”, para el oficialismo.

DENUNCIA DE FRAUDE E INICIO DE LAS MOVILIZACIONES

Hipótesis 3. El fraude electoral fue denunciado por la oposición al menos tres años antes de las elecciones; fue socializado a partir de redes y movilizaciones masivas; fue apoyado por decisiones equivocadas del gobierno y el OEP, prácticamente demostrado con la interrupción del TREP y reconfirmado con los informes de observación y auditoría de la OEA.

Las primeras declaraciones de fraude

Luego de una jornada electoral pacífica, con los antecedentes ya mencionados que generaron desconfianza en la población acerca del OEP, con la atención puesta en lo que serían los primeros resultados del TREP, después de presentar las primeras tendencias del voto, esta transmisión se interrumpió —en una primera instancia sin ninguna explicación, y al día siguiente con argumentos poco claros e inclusive contradictorios—. Este hecho detonó socialmente el convencimiento sobre un fraude electoral, tema que se venía advirtiendo por parte de las oposiciones, formal y rupturista.

Esto generó de forma casi inmediata protestas en todo el país y el 23 de octubre (Radio Fides, 2019) la declaratoria de “paro cívico indefinido” en Santa Cruz. Después seguirían otros departamentos con medidas de protesta y declaratorias similares de paro.

Movilizaciones contra el fraude

Como ya dijimos, en Santa Cruz, después de las definiciones del cabildo del 4 de octubre, entre las que estaba rechazar un eventual fraude electoral, el 23 de octubre se

declaró paro cívico indefinido, medida que se cumplió con mucho rigor en gran parte del departamento —y, especialmente, en la ciudad de Santa Cruz—, aunque con alguna resistencia en zonas afines al MAS.

Esta medida estuvo acompañada de protestas y concentraciones masivas todas las noches en la rotonda del Cristo Redentor, algunas de ellas para recibir informes de los líderes cívicos, otras con participaciones de oradores diversos, además de participaciones de artistas locales, e inclusive, con la presencia de evangélicos y católicos que convocaban a orar por el éxito de las protestas.

Enfrentamientos locales

En el departamento de Potosí, que ya estaba en paro cívico antes de las elecciones en protesta contra la celebración de un contrato para la explotación del litio, fue donde se registraron el mayor número de enfrentamientos, tanto entre civiles, como también con la Policía nacional. Ya el 12 de octubre, después de 6 días de paro cívico, ocurrió un primer enfrentamiento entre cívicos y defensores del gobierno en el cierre de campaña del MAS (Radio Fides, 2019). En Chuquisaca el 21 de octubre se registraron duros enfrentamientos entre civiles opositores y policías, en puertas del Tribunal Electoral Departamental (Radio Fides, 2019).

A pesar de autocalificarse como un paro cívico pacífico, siendo que en la mayor parte de la sociedad tuvo esas características, Santa Cruz fue el lugar donde se registraron algunos de los conflictos sociales más violentos, pues había sectores de la ciudad, afines al MAS, que se resistían a acatar el paro, lo que provocó un despliegue de miembros del Comité Pro Santa Cruz con el objetivo de que se acate el paro. Al llegar el contingente de cívicos

a estos lugares se iniciaron los enfrentamientos mencionados en el Plan 3000, La Guardia, Los Lotes, Cotoca, etc. El 28 de octubre, en el Plan 3000, ocurrió uno de los peores enfrentamientos, pues el resultado fue más de 30 heridos y un hospitalizado grave con impacto de bala en el abdomen, autoría que atribuyó el gobierno a la Unión Juvenil Cruceñista (*La Razón*, 2019). A raíz de este enfrentamiento, la Gobernación de Santa Cruz declaró “alerta roja” en conferencia conjunta con el Comité Cívico. Al día siguiente, se daría otro terrible enfrentamiento en Montero, con un saldo trágico de dos muertes del lado cívico.

En La Paz también fueron importantes los enfrentamientos, por ser la ciudad sede del OEP, que, aún en pleno cómputo era objeto de las protestas de fraude. En La Paz, se dieron choques entre civiles en al menos cinco zonas: Achumani, Cruce de Villas, Calacoto, avenida Periférica y avenida Arce (*La Razón*, 2019) también con muchos heridos y contusos.

Movilizaciones nacionales

Un personaje importante, sorpresivo e impredecible de esta crisis política fue Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Pro Santa Cruz que, a pesar de un inicio sombrío de gestión, y con altos y bajos hasta la fecha, terminó siendo figura central de la crisis.

Entre las cosas más importantes que hizo fue, en primer término, prácticamente revivir al Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conalde) con un par de reuniones nacionales, convocada la primera por él y participado en otras, también organizar un cabildo exitoso sin mayor apoyo de la élite cruceña, (4/10/2019) dar un ultimátum al presidente Evo Morales para su renuncia (2/11/2019) y protagonizar un viaje a La Paz (5/11/2019), en medio de

muchos incidentes, que terminó iniciando el proceso de movilizaciones nacionales y consiguiente “éxodo” (para utilizar términos bíblicos) a La Paz, de muchas personas, la mayoría jóvenes, de diferentes departamentos a esta ciudad para presionar en la propia sede de gobierno.

Esto le dio un carácter “épico” a su llegada y presencia en las movilizaciones. Una vez en La Paz, el rector de la UMSA y presidente del Conalce, Waldo Albarracín, le dio su lugar en las concentraciones organizadas a la fecha, teniendo una aceptación importante de los asistentes. También en La Paz, tuvo un encuentro importante con Marcos Pumari, líder cívico de Potosí, quien también venía luchando contra el gobierno a su estilo. El carácter novedoso y juvenil de ambos sedujo a buena parte de la sociedad.

Liderazgo de las protestas

La oposición inicialmente tuvo varias cabezas, diferentes posiciones e intentos de unificación, el más importante se llamó la Coordinadora de Defensa de la Democracia que incluso al inicio dio una declaración conjunta, pero que posteriormente no pudo funcionar de forma unificada. Más bien, se empezaron a evidenciar ciertas diferencias que, sin mayores explicaciones de sus actores, se empezaron a dar públicamente.

LA POSICIÓN OFICIAL

La espera del resultado nacional

La primera declaración del presidente Evo Morales, aunque no tuvo errores exactamente en su contenido, trajo un incremento de la susceptibilidad de la población convencida de fraude. Dijo, textualmente:

...ganamos una vez más (...) cuatro elecciones consecutivas ganamos en Bolivia (...) hemos enfrentado tantas mentiras, igual el pueblo boliviano se ha impuesto para continuar con el proceso de cambio (...) nuevamente tenemos mayoría absoluta (...) (a pesar) de las informaciones preliminares y como siempre confiados en el voto del campo (...) vamos a esperar hasta el último escrutinio del voto nacional, para seguir y continuar con nuestro proceso de cambio (Noticias Bolivia, 2019).

Este discurso sin referirse expresamente a la posible segunda vuelta, argumentando su expectativa de recibir mayor voto del campo, y declarándose ganador, sin especificar si definitivo o parcial, dejó el camino abierto a la oposición a especular que era un discurso de victoria porque sabía por anticipado el resultado, lo que “probaba” el fraude electoral.

La victoria

Al salir los resultados definitivos del OEP, con el antecedente opositor que no los reconocerían, la declaración del presidente fue la siguiente:

...a 98,35% del cómputo oficial del Tribunal Supremo Electoral, Comunidad Ciudadana con 36,7% y el MAS-IPSP con 46,83%, ya ganamos la elección en primera vuelta (...) cómo es posible que algunos grupos no reconozcan al voto indígena (...) en este momento ganamos con cerca de 600 mil votos (...) invitamos a los organismos internacionales a hacer una auditoría sobre las elecciones y el cómputo de votos (...) debemos reconocer seguramente algunos errores (...) no comparto con la misión antes de que culmine el cómputo oficial, opinando y sugiriendo [segunda vuelta] no quiero entender que la misión de la OEA ya está con golpe de Estado (...) es un golpe de Estado, interno y externo (Unitel, 2019).

A pesar de los resultados oficiales, las protestas y las exigencias ya habían mutado de “fraude electoral” a “renuncia de Evo”, sin importar el resultado de la auditoría. La mañana del domingo 27 de octubre en todos los titulares de prensa, el presidente declaraba que, si la auditoría probase fraude, iría a la segunda vuelta (Kiosko.net, 2019). Esta posición la tomaba el gobierno con la idea de pacificar las protestas, cada vez más violentas, cosa que no logró.

Se iniciaron también ataques a oficinas y viviendas en todo el país, la oposición pedía ya la anulación de las elecciones y la renuncia del presidente, se habló de resistencia civil; el gobierno denunciaba un golpe en proceso y anunciaba la defensa del voto del pueblo y bloqueos a diferentes ciudades. En medio del caos, llegaron 30 personeros de la OEA para hacer la auditoría.

DESENLACE

Hipótesis 4. Después de una participación pacífica y democrática del pueblo boliviano se iniciaron protestas y movilización, ante un eventual fraude, que derivaron en una escalada de protestas masivas nacionales llegando a la solicitud y posterior ejecución de “anulación de elecciones” y “renuncia del presidente”.

Cabildos nacionales y el pedido de renuncia de Evo

El domingo 3 de noviembre, el país entró en una semana crítica iniciada con una reunión de cívicos en el departamento de Santa Cruz y con un cabildo en el que, esa misma noche, Camacho dio un ultimátum de 48 horas al presidente para que renuncie y, además, se leyó una carta dirigida a las Fuerzas Armadas pidiéndoles no enfrentarse al pueblo (Excélsior TV, 2019). Pasadas las 48 horas

sin respuesta del presidente, el líder cívico viajó a La Paz con una carta de renuncia y con una Biblia en las manos, diciendo que no volvería sin dejar ambas en Palacio de Gobierno. Esa semana se incrementó la violencia entre ambos bandos de la sociedad movilizados en las principales ciudades del país y, especialmente, en las carreteras.

Motín policial e insubordinación de las FFAA

El viernes 8 de noviembre se inicia una escalada de amotinamientos policiales, dejando sin resguardo policial a las instituciones estatales y a las autoridades de los diferentes departamentos, las que empezaron a ser hostigadas por grupos de choque y por la población. Las FFAA, en conferencia de prensa, el 9 del mismo mes, primero definieron no salir a las calles a reprimir las protestas, no sabemos aún si en desobediencia de su comandante general y un día después, el domingo 10 de noviembre por la tarde, “recomendaron al presidente renunciar”, en clara posición de insubordinación e incumpliendo el artículo 244 de la Constitución Política del Estado, referido a garantizar la estabilidad del gobierno legalmente constituido, así como los artículos 245 y 246 de la misma, donde se define su carácter de obediencia a la jerarquía de mando, su dependencia del presidente del Estado y su prohibición de deliberar, es decir, de manifestar opinión sobre un tema político nacional como fue, claramente, la “recomendación de renuncia”.

Informe Preliminar de la OEA

Durante esas jornadas, el golpe de gracia fue el resultado preliminar del Informe de Auditoría de Integridad

Electoral de la misión de la OEA declarando fraude electoral y recomendando nuevas elecciones. El 10 de noviembre, el presidente y vicepresidente renunciaban a sus cargos en una conferencia de prensa donde indicaron, entre otros argumentos, que lo hacían para que "...Mesa y Camacho no sigan persiguiendo, secuestrando a [sus] ministros, dirigentes sindicales y a sus familiares, y para que no sigan perjudicando a comerciantes, gremiales, profesionales independientes y transportistas que tienen derecho a trabajar" (Televisa-Noticieros, 2019).

MALESTAR SOCIAL Y ANOMIA POLÍTICA

Convulsión social, rumores, amenaza de guerra civil y saqueos

Esos días posteriores a la renuncia de los mandatarios fue de convulsión social, especialmente de la sociedad afín al MAS, consecuencia de desatinados episodios como la quema de la wiphala por parte de policías, que generaría una verdadera marea de manifestantes gritando: "Ahora sí, guerra civil", con muchos enfrentamientos entre civiles. A todo esto, las fuerzas del orden estaban ausentes, por lo que además se dieron saqueos, actos vandálicos, etc.

En lo político, una anomia total, las múltiples renunciadas habían dejado la línea de sucesión constitucional en vacío legal, había diferentes ideas planteadas por los líderes opositores: unos proponían sucesión parlamentaria con convocatoria a la Asamblea Legislativa Plurinacional, otros un gobierno cívico-militar. La primera fue la que se terminó asumiendo, pero con algunas dificultades y desprolijidad procedimental.

Los militares a las calles

Con nueva presidenta posesionada en medio de vítores y también críticas, la senadora Jeanine Áñez, las FFAA recibieron la orden de pacificar al país, saliendo a cumplirla con un saldo, hasta hoy, de al menos 30 muertos y más de un centenar de heridos, en circunstancias hasta ahora poco claras.

GOLPE O TRANSICIÓN POLÍTICA CONSTITUCIONAL

Hipótesis 5. La renuncia del presidente Evo Morales y la posterior sucesión presidencial de Jeanine Áñez pueden ser consideradas, al mismo tiempo, una transición escasamente constitucional, con algunos problemas, y también un “golpe de Estado blando”, que entre sus elementos implica una sucesión dentro de cierta legalidad tolerable.

En fecha 12 de noviembre, en medio de una convulsión social creciente, con una sociedad dividida y movilizad—unos en la búsqueda de consolidar la salida del presidente, y otros con el malestar y la indignación de la renuncia de su líder en condiciones de traición y abandono—, con la idea de que era necesario y urgente resolver un vacío de poder peligroso, asumió como presidenta del país la senadora Jeanine Áñez, en una forma no necesariamente ideal. En un acto que, para los seguidores de Evo Morales, algunos analistas políticos y algunos países de la región fue ilegal, mientras que para los nuevos oficialistas, otros analistas y otros países, se trató de un procedimiento constitucional.

Para definir rápidamente esta disyuntiva diremos que, en términos legales —y aunque con temas procedimentales incumplidos— se pudo seguir una delgada línea constitucional de transición de mando; lo que calificaría

de legal esta transición, aunque sin cumplirse la totalidad de las formalidades necesarias y, por lo tanto, discutible en el detalle.

Sin embargo, hay que considerar, también, el argumento de que lo sucedido no fue legal por la “posición” inconstitucional de la declaración de las FFAA, que primero decidieron, al margen de su comandante en jefe, no salir a las calles —por lo tanto, desobedecerle— y luego “sugerir públicamente” la renuncia al presidente constitucional. Este es el argumento que sostiene la calificación de “golpe de Estado” a esa transmisión, argumento que recientemente ha sido reforzado, tanto por un video filtrado de Luis Fernando Camacho hablando con amigos, a quienes les cuenta que, antes de su ultimátum al presidente y de su posterior viaje a La Paz, ya se había “cerrado trato con militares y policías”, a cambio de “exigencias hechas por estos” para que el futuro gobierno las cumpliera.

También hay que considerar la información presentada en México por un canal de YouTube, denominado “Crítica Dura MX” (Crítica dura, 2019) de que el entonces comandante general de Ejército, Williams Kaliman, habría recibido un millón de dólares por asumir esa posición durante la crisis política, y además se habría trasladado a vivir a los EEUU. El excomandante del Ejército también enfrenta actualmente un proceso por incumpliendo de deberes, seguido por la Fiscalía de la nación (*La Razón*, 2019).

En consecuencia, la estrategia de mediano y largo plazo —ya comentada y probablemente iniciada con Sánchez Berzaín (exministro de Gonzalo Sánchez de Lozada)—, vista desde otra perspectiva, constituiría una nueva estrategia de “un tipo de golpe de Estado” que se hace derrocando un presidente o líder peligroso para intereses internacionales sin que se rompa la continuidad

constitucional. Esta maniobra se conoce como “golpe blando” o “golpe silencioso” y fue diseñada por el politólogo norteamericano Gene Sharp quien, siguiendo las experiencias de Gandhi, escribió varios libros vinculados a esta estrategia (*De la dictadura a la democracia*, 1994, entre otros). Hay crisis políticas que involucran esta estrategia en procesos como los de Yugoslavia (2000), Georgia (2003), Ucrania (2004) y el Líbano (2005). Y aunque no hay estudios al respecto, también habría que analizar los procesos de destitución de Dilma Rousseff, en Brasil; la derrota de Cristina Kirchner, en Argentina; y el intento reciente de derrocamiento de Maduro en Venezuela, que habrían seguido esta estrategia.

Analizando estos elementos, se podría hablar de “golpe de Estado” pero no de uno tradicional, sino otro más sofisticado que involucra variables más complejas de sociología política, aplicadas a la sociedad y que utiliza instrumentos tecnológicos modernos que están transformando la noción misma de la democracia como decisión soberana de la sociedad.

En resumen, las dos posibilidades pueden ser sustentadas en los hechos; desde una perspectiva legal, se puede hablar de “renuncia presidencial y sucesión constitucional”, con algunos detalles por ajustar. No obstante, también se puede hablar de “golpe de Estado” en virtud de modalidades más sofisticadas y contemporáneas de derrocar a un presidente, que dan la sensación que fue por voluntad popular.

GOBIERNO TRANSITORIO EN LA CORNISA POLÍTICA

Una transición política lo primero que genera es incertidumbre, pues las reglas y formas en que funcionaba el

sistema en crisis ya no son válidas y este se enfrenta a vacíos y distorsiones que se deben manejar con mucho cuidado, por parte de los actores políticos y también de la sociedad. Existe en esta una disponibilidad que implica un vacío que nunca es fácil de llenar, al menos en el corto plazo.

Por definición, las transiciones son de corto plazo, aunque puede llegar al mediano. Este hecho debe tenerse claro, para entender el alcance y enfoque que debe darse en gobiernos de esta naturaleza. Por otra parte, las transiciones deben fijar objetivos específicos y, por su carácter, no pueden implicar la búsqueda de continuidad ni reproducción en el poder.

Volviendo a nuestro país, después de la complicada transmisión y la atípica posesión de la presidenta Jeanine Áñez (12/11/2019) de los militares; después de algunas palabras de victoria de la mandataria en la Asamblea Legislativa y en el balcón de Palacio Quemado, Biblia en mano, el primer discurso formal de esta fue al posesionar parcialmente a su gabinete (13/11/2019), ocasión en que precisó, claramente, el carácter de su gobierno y sus dos objetivos: uno urgente y el otro importante.

La autocaracterización que hizo la presidenta Áñez de su gobierno —como un “gobierno de transición”— mostró un buen tino político, pues las peculiaridades jurídicamente imperfectas y su forma misma de poder —surgida de la crisis y no de la voluntad soberana expresada en el voto— la dejaban con un gran déficit de legitimidad en el ejercicio del poder. En ese sentido, a pesar de la delgada línea constitucional de su sucesión, el déficit claramente estaba del lado de lo político en lo referente a la legitimidad de su poder, por lo que ser un gobierno transitorio era la única manera de entender su relevancia histórica.

Áñez también dejó claro que su tarea más urgente en ese momento era la pacificación del país, cosa que preocupaba mucho a la sociedad; y la manera cómo lo hizo será todavía motivo de debate en el futuro. Finalmente, el tema central que debe ocupar a su “corto mandato” debe ser organizar, con urgencia, elecciones nacionales limpias, transparentes e imparciales que doten al país de un gobierno con la legalidad y legitimidad que otorga el voto soberano.

Así, la presidenta Áñez tuvo la claridad suficiente para caracterizar políticamente de forma adecuada a su gobierno y, además, de definir sus tareas ineludibles e inmediatas.

Qué pena que algunos de sus ministros no tuvieron la misma claridad y creyeron, equivocadamente, que podían iniciar procesos y acciones de fondo en un gobierno transitorio que en el corto plazo deberá dejar el mando. Esto ocurrió específicamente con las ministras de Relaciones Exteriores y de Comunicación, Karen Longaric y Roxana Lizárraga, respectivamente, quienes, desde el inicio, tomaron medidas que, en lugar de ayudar, le generaron problemas innecesarios a la presidenta. Quizás habría que excluir de esta crítica a ministros como el de economía que, comprendiendo claramente su carácter transitorio, lo primero que hizo fue generar señales de estabilidad y continuismo hasta el siguiente gobierno. También algunos viceministros y directores flamantemente posesionados hicieron declaraciones dispersas y tal vez poco atinadas para un gobierno transitorio.

Hasta fines de 2019, la presidenta cerró la gestión calendaria con buen perfil, resultando, inclusive, sugerida como candidata y considerada en los sondeos electorales con miras a las siguientes elecciones, aunque ella se

encargó de aclarar —otra vez de forma atinada— que no sería candidata las elecciones del 2020 y que pretendía cumplir los objetivos trazados para su corto mandato.

En resumen, el gobierno transitorio, así como la prórroga del mandato tienen justificación política en la medida que están para devolverle institucionalidad democrática plena y legitimidad el nuevo gobierno, por estas razones sería excederse en su carácter esencial que la presidenta se convierta en candidata, pues, el suyo, pasaría de ser un gobierno transitorio a ser uno en busca la continuidad el en poder. Así, se desnaturalizaría totalmente el carácter transitorio de la gestión, perdiéndose por completo el carácter imparcial en la administración estatal de las elecciones, objetivo fundamental de este gobierno.

CONCLUSIONES

El MAS, a pesar de ser la organización política más fuerte del país y de haber ejercido 14 años de gobierno de cambios fuertes y de línea ideológica definida, generó la concentración de una fuerza opositora, política y social, que en el tiempo se convirtió en explosiva e ingobernable.

En tiempos hegemónicamente democráticos, lo que no se debe subordinar o negociar es la democracia misma. El caso del MAS, al creer que era más importante la “continuidad del proceso de cambio” que la “decisión democrática” del referéndum Constitucional del 21 de febrero del 2016 cometió la equivocación de subordinar un valor sociopolítico —como la democracia (es decir, la decisión soberana mediante el voto)— a otro —el “proceso de cambio”—, resultando esto un error para nuestra cultura política democrática actual, y convirtiéndose en

catalizador social de todas las otras críticas al oficialismo, hasta entonces sin suficiente fuerza para desestabilizar al gobierno hegemónico.

La renuncia de Evo Morales no fue una decisión producto de la presión pacífica del pueblo boliviano, sino que fue una decisión tomada en condiciones de indefensión policial por su parte y por parte de una buena parte de sus dirigentes en varias partes del país, así como también en condiciones de insubordinación de las FFAA.

El gobierno de Jeanine Áñez, asumiendo una delegada línea de continuidad constitucional, con poca legitimidad institucional democrática, gozando del apoyo de parte de la sociedad que protestó contra el fraude electoral, y respaldada por las FFAA y la Policía, se ha autodefinido, acertadamente, como transitorio, y su principal desafío es organizar elecciones nacionales limpias y transparentes. Este es el mando y enfoque del que no debiera salirse.

Si la presidente se postulara como candidata, cosa legalmente factible, desnaturalizaría el carácter transitorio del gobierno, pasando este a buscar el continuismo, perdiendo su naturaleza y su carácter de imparcial y restaurador confiable de la competitividad democrática.

Bolivia, como país, su sociedad, su incipiente clase política y sus líderes políticos (viejos y nuevos) tienen dos desafíos trascendentales: uno de corto y el otro de largo plazo. El primero es el de dotarnos de un gobierno democrático, legítimo y legal, en un plazo no mayor a agosto del 2020, a través de un proceso electoral que no reproduzca los defectos, deficiencias y mañas de la política tradicional boliviana. El segundo desafío, de mediano plazo, es el de contar con un nuevo gobierno que no retroceda ante los avances políticos, económicos y sociales, y camine en pos de temas importantes como la estabilidad económica

sostenible, las políticas ambientales claras, mayores autonomías regionales, políticas de salud que lleguen a sectores sociales sin cobertura de seguridad social, y que reforme la educación nacional para generar los recursos humanos que se conviertan en agentes de implementación de ciencia y tecnología para el desarrollo.

Finalmente, el carácter transitorio y de crisis política de nuestro país hará que los acontecimientos y las decisiones se den de forma dinámica y eventualmente inesperada, por lo que los próximos días y meses puede registrarse una mayor dinámica del campo político en su conjunto y, sin duda, también del tablero electoral.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

Correo del Sur (8 de julio de 2015). Obtenido de:

https://correodelsur.com/politica/20150708_el-mas-aplica-los-dos-tercios-y-elige-a-los-seis-vocales-del-tse.html

Correo del Sur (25 de octubre de 2019). Obtenido de:

https://correodelsur.com/politica/20191025_cabildo-aprueba-cercar-instituciones-y-llama-a-un-cabildo-nacional-en-la-paz.html

Crítica dura MX (20 de noviembre de 2019). “Información de última hora. Se revela que general y militares fueron financiados y se refugian en EEUU”. Obtenido de:

<https://www.youtube.com/watch?v=CHSBqwwyy4Y>

El Potosí (16 de octubre de 2019). Obtenido de: [https://](https://elpotosi.net/local/20191016_cabildo-de-potosi-asume-el-reto-de-impulsar-el-federalismo.html)

elpotosi.net/local/20191016_cabildo-de-potosi-asume-el-reto-de-impulsar-el-federalismo.html

Excelsior TV (3 de noviembre de 2019). “Dan ultimátum a

Evo Morales; piden su renuncia en 48 horas”. Obtenido de: <https://www.youtube.com/watch?v=YecQSp7NR0>

Kiosko.net (27 de octubre de 2019). *Cambio* (portada).

Obtenido de: <http://kiosko.net/bo/2019-10-27/np/cambio.html>

La Razón (23 de octubre de 2019). Obtenido de

http://www.la-razon.com/nacional/animal_electoral/Cabildo-La-Paz-Presidente-renuncia-ni-Mesa-Morales-bolivia_0_3249275094.html

Los Tiempos (10 de octubre de 2019). *Elige*. Obtenido

de <https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191010/masivo-cabildo-democracia-cochabamba>

Noticias Bolivia (20 de octubre de 2019). *Al día Noticias*

Bolivia. Obtenido de: <https://www.youtube.com/watch?v=MK-7-xPHCXc>

OEP (2014). *OEP. Democracia en ejercicio*. Obtenido de:

<https://www.oep.org.bo/procesos-electorales-y-consultas/elecciones-generales/elecciones-generales-2014/>

Radio Fides (22 de octubre de 2019). Obtenido de:

<https://www.radiofides.com/es/2019/10/22/civicos-de-santa-cruz-convocan-al-paro-indefinido-desde-el-miercoles/>

Televisa-Noticieros (10 de noviembre de 2019). *Renuncia Evo*

Morales como presidente de Bolivia. Obtenido de: https://www.youtube.com/watch?v=6iflv7zJ_ys

Unitel (24 de octubre de 2019). *Unitel, Bolivia*. Obtenido de:

<https://www.youtube.com/watch?v=RXceNm2BePM>

Cámaras de eco y desinformación: Efectos amplificadores de las redes digitales en la polarización social de 2019

Alex Ojeda Copa

Las sociedades se mueven por varias vías. Mientras politólogos y economistas, desde sus marcos analíticos, nos dan luces sobre importantes fenómenos políticos y económicos —a veces con pretensiones de totalidad—, la sociedad no se agota en tales sucesos. No existe una matriz fundante desde la cual, por combinatoria, se pueda deducir toda la vida en sociedad, llámese Estado como quisieran los totalitarios, o mercado como quisieran los neoliberales. No obstante, es posible aprehender algunas de las líneas de movimiento de las sociedades para captar mejor algún momento específico: ir de la coyuntura al proceso y viceversa. Un tipo particular de esas líneas, importante por sí mismo pero bastante heterogéneo, involucra a los procesos sociales, que afectan las formas de interacción y relacionamiento entre individuos y colectivos.

Los procesos sociales, que ocurren dentro de lo que modernamente se denomina “sociedad civil”, suelen ser menos perceptibles que otro tipo de fenómenos que poseen una institucionalización explícita y codificada, pero no por ello son menos importantes en sus consecuencias hacia distintos niveles. También suelen poseer un ritmo más

lento, como los casos de la transformación de los referentes sociales de identidad, la familia, la comunidad, los estratos sociales, las asociaciones, los movimientos sociales, etc. En el siglo XXI, estos procesos sociales, en general, se están viendo alterados por la mediación de nuevas tecnologías digitales interactivas, como el Internet, las redes sociales digitales y los celulares inteligentes. La manera de adquirir información, conversar e interactuar está cambiando a partir de una conjunción entre modernización, individualización y tecnologías digitales, algo que a su vez afecta tanto a las formas generales de comunicación, como a la organización y acción colectivas.

Esas nuevas formas tecnosociales también están incidiendo en la política, aunque el diagnóstico de esta relación todavía es ambiguo. En menos de una década, se ha transitado de un inicial tecnooptimismo hacia un tecnopesimismo. Alrededor de 2011, ocurrieron casos tan elocuentes a nivel internacional como la Primavera Árabe, el movimiento 15-M y Occupy Wall Street, y en los años siguientes YoSoy132 en México y el Movimiento Pase Libre en Brasil, a nivel regional. En estos casos las redes sociales digitales funcionaron como medios de articulación para movimientos sociales de corte progresista, pese a la respuesta de muchos gobiernos de intentar frenar la protesta social mediante la regulación de Internet. Sin embargo, desde el 2016, a partir de la inesperada victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y del triunfo del Brexit en Europa, han surgido diagnósticos más pesimistas sobre los efectos que las redes digitales pueden estar teniendo en la democracia, particularmente en los escenarios electorales. Uno de los elementos centrales de la polémica es la desinformación, plasmada principalmente en las noticias falsas (*fake news*).

En América Latina, tenemos los casos recientes de las elecciones en Brasil, México y Colombia donde se ha percibido la presencia masiva de desinformación en las campañas electorales. Las redes sociales se han visto inundadas de noticias falsas sobre temas polarizadores, a partir tanto de una campaña deliberada de algunos partidos como de una circulación social emotiva dentro de las propias audiencias. También han aparecido nuevas modalidades de circulación de desinformación a través de ejércitos de *trolls*¹ que pueden ser contratados y de los mensajes automatizados lanzados a través de *bots*.² Ante esta situación, han aparecido algunas iniciativas puntuales para poder enfrentar la desinformación, principalmente iniciativas periodísticas de verificación de noticias³ y educación mediática.

En nuestro país se esperaba un rol central de la desinformación en las elecciones generales de 2019, por lo que también aparecieron iniciativas nacionales de verificación de noticias.⁴ Y, efectivamente, en la campaña electoral se constató la circulación de muchas noticias falsas en redes sociales. Pero lo que solo iba a ser un proceso eleccionario devino en un

-
- 1 *Trol*, usuario con identidad desconocida que publica mensajes polémicos y provocadores en foros digitales con intereses particulares de tipo político u otros (Fundación del Español Urgente, Fundéu, en línea).
 - 2 *Bot*, programa que recorre la red de Internet llevando a cabo tareas concretas e imitar el comportamiento humano (Fundación del Español Urgente, Fundéu, en línea).
 - 3 Estas consisten en iniciativas periodísticas independientes que recolectan, verifican y rectifican noticias falsas que circulan en las redes sociales. En Brasil se tiene a la Agencia Lupa, en México a Verificado y en Colombia a ColombiaCheck, entre las más importantes.
 - 4 Chequea Bolivia con sede en Cochabamba y Bolivia Verifica, ubicada en La Paz.

conflicto social que luego desembocó en una crisis política. Ante la suspensión de la transmisión de los resultados preliminares, la oposición denunció “fraude electoral” y se produjeron movilizaciones sociales de sectores medios urbanos que paralizaron el país durante casi un mes. En medio del conflicto, y con la presión de un motín policial y la retirada del apoyo del alto mando militar, el presidente renunció denunciando un golpe de Estado, desencadenándose luego mayor violencia civil y, con la asunción del nuevo gobierno, también represión militar. Una situación electoral devino inesperadamente en un conflicto muy complejo, que involucra muchas aristas estructurales sociales, políticas y económicas.

Una de esas aristas tiene que ver con el rol que las redes sociales digitales, combinándose con otros factores sociales y políticos, jugaron en el conflicto. Por un lado, y desde hace ya una década, las redes sirvieron como plataformas de disenso, activismo y movilización social, por fuera de las organizaciones sociales populares y los partidos; pero por el otro, también funcionan como canales intensos de desinformación, principalmente en contextos electorales y de crisis. Estas dos facetas se entrecruzaron en el conflicto y merecen, de forma separada cada una, un análisis respectivo, puesto que provienen de distintos procesos.⁵ En el presente trabajo, nos detendremos a analizar principalmente la segunda faceta, que ha alimentado lo que para nosotros fue un factor clave del conflicto: la polarización social. Entonces, nos preguntamos: ¿Cómo las redes sociales digitales han contribuido al desarrollo del conflicto y particularmente a la polarización social?

5 Para la primera faceta en su versión autónoma puede verse Ojeda, 2020 y para su versión más electoralista en los casos de las “plataformas ciudadanas” Ojeda, 2018.

Siendo que el conflicto es bastante complejo, no intentaremos explicar todos sus antecedentes y consecuentes. No tocamos el tema de la crisis política, los contenidos en disputa, ni la atribución de características identitarias de los sujetos involucrados, sino que nos enfocamos en los procesos sociales potenciados por tecnología que, generalmente, involucran a todos los actores en conflicto. Nuestro enfoque no es esencialista ni partisano, sino procesual y relacional. Nos concentramos en los medios más que en los mensajes, siguiendo el famoso aforismo de McLuhan (1996). En cuanto a la desinformación, tampoco agotamos todas sus vías de análisis,⁶ en nuestro caso expondremos un enfoque más sociopolítico de la desinformación ligada a la polarización, combinado con un enfoque sociotecnológico de los procesos sociales.

Siendo la polarización social nuestro foco de análisis, el principal argumento que planteamos es que, si bien había una polarización política discursiva anterior al conflicto, las redes sociales digitales han contribuido a que esta transite hacia una polarización social mediante dos mecanismos: la creación de cámaras de eco que fomentan las burbujas de opinión homogéneas y, en segundo lugar, mediante la circulación de desinformación que refuerza las posiciones

6 Existen muchas posibles entradas al tema de la desinformación. Desde la perspectiva de la psicología y sociología se podrían analizar las conductas, motivaciones y sentidos de los que producen, difunden o consumen noticias falsas. Desde el lado del periodismo, a partir de su apuesta por la verificación de noticias, se podrían analizar los contenidos de las noticias falsas. Desde el lado de la informática, se podrían analizar los *affordances* tecnológicos que fomentan los fenómenos de desinformación: los diseños de espacios digitales, los algoritmos, las interfaces, etc. Y hasta desde el ámbito de la educación mediática se podrían identificar y afianzar competencias de “alfabetización mediática e informacional”, como lo designa la Unesco (2011).

hostiles. Es decir que en el conflicto hubo una mayor polarización vía desinformación digital. Dos procesos que una vez establecidos se retroalimentan y que han generado un mayor grado de conflictividad social.

Para desarrollar nuestro argumento, expondremos primero la relación general que existe entre redes sociales y política, tanto a nivel teórico como en los casos bolivianos que son anteriores al conflicto. Se trata de mostrar que no existe un rol político esencial de las redes sociales digitales, sea para la degradación o afianzamiento de la democracia, sino que ello depende de los mecanismos que entran en juego en cada caso. Luego expondremos nuestra lectura de los aspectos esenciales del conflicto para mostrar por qué la polarización es un aspecto angular del mismo y ubicar mejor en qué momentos las redes sociales digitales han tenido mayor relevancia. Pero realizaremos esta tarea desde un marco analítico no muy convencional sobre la relación entre sociedad, política y tecnología, por lo que necesitaremos explicitar nuestros supuestos teóricos de partida. Finalmente, a partir de todo lo anterior explicaremos, a rasgos generales, cómo operaron específicamente los mecanismos de cámaras de eco y desinformación para la formación de la polarización social en el conflicto.

REDES SOCIALES Y POLÍTICA: TEORÍA Y CASOS BOLIVIANOS

Las “redes sociales”, a secas, son anteriores a los medios masivos y a los medios digitales. Una red social, desde el punto de vista sociológico, es cualquier forma de relacionamiento entre personas que se conforma por un conjunto de actores, además de un conjunto de relaciones que los vinculan. Por ejemplo, familiares unidos por

relaciones de consanguinidad, un grupo de compañeros unidos por relaciones de amistad, una comunidad rural que se rige por relaciones de apoyo mutuo, un barrio, una asociación profesional, una pandilla, etc. Las redes sociales son muy relevantes para cualquier tipo de actividad humana, pues en ellas se forman las pautas de relacionamiento con los otros, los roles, el flujo de información, las corrientes de opinión, y hasta nuestra misma identidad individual y la posibilidad de la acción colectiva (Freeman, 2012).

Pero, luego, a principios del siglo XXI el concepto de “redes sociales” se instala en la opinión pública como sinónimo de las plataformas digitales, tal es el caso de Facebook, Twitter y LinkedIn, por mencionar algunas, que permiten la conexión e interacción con otros a través de la composición de una lista de contactos y el intercambio de mensajes. Se pasa del espacio físico al hiperespacio digital y de las interacciones directas, cara a cara, a las mediadas por pantallas y dispositivos digitales. En realidad, el nombre apropiado para estas plataformas es el de “redes sociales digitales” o “medios sociales digitales” (*social media* por oposición a *mass media*). Mientras los medios masivos ofrecían un modelo de difusión de información de uno a muchos (*broadcasting*), mucho más cerrado y poco interactivo, las redes sociales digitales ofrecen uno de muchos a muchos (*multicasting*), lo que ha posibilitado la “auto comunicación de masas” (Castells, 2009). Así, las redes sociales digitales rompen con el monopolio de los medios masivos en la re-presentación de lo público. Esta situación trajo cosas positivas y negativas, como veremos más adelante.

Entonces, las redes sociales digitales son medios digitales que permiten reforzar o crear interacciones y

relaciones sociales. Las refuerzan cuando permiten contactar con los círculos sociales previos, como la familia, los grupos de amigos, los colegas de trabajo, etc.; y las crean cuando las interacciones van más allá de esos círculos y se llega a interactuar con desconocidos, lo que resulta importante en la creación de la acción colectiva en red. La interacción se da mediante el intercambio de contenido digital que puede tomar el formato de *post*, *tweet*, comentario, reacción, historia, video, audio, u otro formato multimedia. En determinados momentos, y vía viralidad, estas interacciones pueden llegar a la escala masiva, donde tienen la posibilidad de desafiar los relatos convencionales de los grandes medios, gobiernos, empresas y partidos, y ponerse en agenda pública. Este proceso que describimos se da más allá de los contenidos específicos que se promuevan. Es el mensaje del medio parafraseando a McLuhan (1996) y no los mensajes en sí mismos los que importan en esta caracterización.

Ese proceso, a su vez, puede ser desglosado en tres niveles. En un nivel informativo, promueven corrientes de opinión a través de un modelo viral de difusión, *peer-to-peer*, o uno de dos pasos mediante la aparición de líderes de opinión (*influencers*) y sus seguidores. Aquí también, frente a la desconfianza hacia los medios tradicionales, puede aparecer el “periodismo ciudadano”. Por otra parte, si no se siguen estándares claros, es probable que ocurran procesos de desinformación. En un nivel social, promueven la aparición de comunidades digitales en torno a diversos intereses, debido que el Internet promueve el asociacionismo (Ojeda, 2016). Ya en un nivel político aparece el fenómeno del ciberactivismo (De Ugarte, 2007) y la tecnopolítica (Toret, 2013) desde el lado de la ciudadanía, el primero como fenómeno online y el

segundo como acción colectiva tanto en Internet como en la calle; y desde el lado de los partidos, las campañas digitales y la comunicación política. Nos detendremos un poco más en el nivel político por ser central en nuestra discusión.

Siguiendo a Castells (2012) podemos afirmar que el poder se construye a través de dos brazos, el clásico de la coacción y el más sutil de la comunicación: la fuerza y la palabra. La comunicación es el proceso central en el intercambio de significados, “comunicar es compartir significados mediante el intercambio de información” (: 23). En ello el papel de las tecnologías de comunicación como el Internet juega un rol importante, “la transformación del entorno de las comunicaciones afecta directamente a la forma en que se construye el significado y, por tanto, a la producción de las relaciones de poder” (: 24). Y el entorno comunicativo contemporáneo “proporciona la plataforma tecnológica para la construcción de la autonomía del actor social, ya sea individual o colectivo, frente a las instituciones de la sociedad” (: 24), especialmente frente al gobierno y las empresas. Como los medios de comunicación de masas están controlados en gran medida por los gobiernos y las corporaciones, en la sociedad red la autonomía comunicativa se construye fundamentalmente en el Internet y las redes sociales digitales. Las redes sociales digitales ofrecen la posibilidad de deliberar y coordinar acciones sin trabas, por lo que desde ellos se pueden construir movimientos sociales como contrapoder.

Bajo esos parámetros se han formado varios movimientos sociales en red en el mundo, que pueden ser distinguidos en dos generaciones. En la primera generación se encuentra el movimiento zapatista y el movimiento antiglobalización de la década de 1990 (Lago y Marotías, 2006), que han utilizado Internet como un medio de

comunicación alternativo, siendo el e-mail y los sitios web las principales herramientas. En 2006, sin embargo, y con la emergencia de la Web 2.0 aparecen las redes sociales digitales como Facebook y Twitter, las cuales son más accesibles y permiten mayor interacción comunicativa. Aquí aparece la segunda generación de movimientos sociales en red, alrededor del año 2011, con la Primavera Árabe, el movimiento 15-M y Occupy Wall Street; y en América Latina el movimiento YoSoy132, PasseLivre y el movimiento estudiantil chileno (Calderón, 2011). A partir de estos movimientos se habla incluso de la aparición de un populismo sin líder, denominado como “ciudadanismo” (Gerbaudo, 2017).

No obstante, el año 2016 empiezan a entrar a escena partidos y movimientos conservadores. Se registra el inesperado triunfo de Trump y el ascenso del movimiento *alt-right*⁷ en Estados Unidos, la victoria del Brexit en Reino Unido, el triunfo del No en el plebiscito por la paz en Colombia, entre otros. La situación tiene tal magnitud que el término “posverdad” se convierte en la palabra del año para el diccionario de Oxford, y se empieza a hablar incluso de una “era de la posverdad” donde los “hechos alternativos” son los componentes centrales de la política contemporánea. La posverdad es una situación en la que “los hechos objetivos son menos influyentes en la formación de la opinión pública que las apelaciones a la emoción y las creencias personales” (Oxford, 2016), esto va en sincronía con las interpretaciones de que en las redes sociales digitales no circulan argumentos sino emociones. Aquí las *fake news* y la desinformación en general juegan un papel esencial, como medios de captación de

7 La “derecha alternativa”.

votos y movilización política. A inicios del 2018 se destaca el escándalo de Cambridge Analytica, una consultora que había colaborado en las campañas conservadoras de 2016 mediante la recolección de datos personales de usuarios en Facebook que luego usaba para crear perfiles vulnerables a ciertas noticias falsas. Una mezcla de tecnología, populismo y emociones.

¿Cómo es posible esta doble situación? ¿Fomentan las redes sociales digitales el cambio social o el conservadurismo? ¿Razón o emoción? ¿Contrahegemonía o hegemonía? Los hechos políticos del año 2011 nos hacen pensar en una mayor participación y deliberación política, frente a regímenes autoritarios o conservadores, mientras los hechos del 2016 en desinformación y afianzamiento del conservadurismo. Si bien hay una tendencia a la conexión y la distribución en las redes sociales digitales, estas pueden ser usadas de muchas formas, al igual que cualquier espacio social. Esto puede ser demostrado por vía empírica, analizando todos los casos de usos políticos de Internet o por vía lógica, observando la estructura topológica del Internet y sus *affordances* (Ojeda, 2016). No obstante, en el primer grupo de fenómenos hay más espontaneísmo civil en momentos de “política ciudadana” y en el segundo más estrategia partidaria en momentos de “política electoral”.

En Bolivia contamos con una historia previa de la relación entre Internet y política que supera el caso más mediático y electoralista del referendo de 2016. El primer movimiento que hizo uso de Internet fue el de la defensa del agua frente a la privatización del año 2000, que ya poseía rasgos de conexiones de solidaridad internacional (Choque, 2010). Este fue un movimiento social en red de primera generación, puesto que las redes sociales digitales aún no existían. El primer movimiento social en red

de segunda generación que hace un uso táctico de las redes sociales digitales fue el movimiento en defensa del TIPNIS en 2011. Tiene una gran importancia porque fue un movimiento que conectó una demanda del espacio rural con el espacio urbano mediante el espacio digital (Ojeda, 2020). Posteriormente aparecieron otros movimientos como Más y Mejor Internet para Bolivia y NiUnaMenos a nivel nacional, y en las ciudades del eje troncal, que tienen mayor acceso a Internet, movimientos locales en defensa del arbolado urbano como Colectivo Árbol y No a la Tala, entre otros. Aquí también aparece el ciberactivismo en temas animalistas, ambientalistas y feministas. Estos nuevos activismos y movimientos tienen una profunda desconfianza hacia la política partidaria y por eso mismo no intervienen en temas electorales.

Posteriormente, y esta vez relacionadas a temas electorales, a partir de los resultados del referendo de febrero de 2016 aparecen las “plataformas ciudadanas”, al mismo tiempo que el gobierno del MAS recién toma seriamente a las redes sociales digitales, intentando primero su regulación, luego creando una dirección específica para el área y finalmente declarando una “guerra digital”. Las “plataformas ciudadanas”, no obstante, se electoralizan y se desintegran para las elecciones primarias de 2019. Representaron una experiencia de movilización continua de sectores medios, pero que no fue la primera de ese tipo. En agosto de 2019, no obstante, aparece un movimiento de temática ambiental con amplia participación: #SOSChiquitania, que convoca principalmente a jóvenes, y que al mismo tiempo interpela al gobierno del MAS. Ya para la campaña de las elecciones generales del 2019, todos los partidos después de casi una década de usos políticos de las redes sociales por parte de la sociedad civil boliviana, recién toman en serio sus campañas

digitales. Aparece mucha desinformación y las mismas iniciativas de verificación de noticias para combatirla. Se percibe también el crecimiento de algunos candidatos con el apoyo de redes, especialmente el candidato conservador Chi Hyung Chun del PDC.

Después de ver, brevemente, esta diversidad de usos, no se puede plantear alguna esencialidad política de las redes. Las redes sociales digitales en nuestro país sirvieron como plataforma de acción colectiva de los sectores medios, tanto para demandas autónomas como para demandas más conservadoras. Y en momentos electorales, principalmente, canalizaron campañas de desinformación. Son casos similares a los que se vieron internacionalmente, pero a menor escala y con la novedad de la participación de sectores medios en movilizaciones, en un contexto de tradición de movilización popular. Veremos que, con el conflicto en 2019, las redes sociales digitales amplían aún más su rango de acción.

EL NUDO DEL CONFLICTO

En este apartado brindaremos una breve caracterización del conflicto, intentando agarrar su nudo, no jalando de un lado o del otro de la cuerda. En nuestro esquema involucraremos tres grandes categorías: sociedad, política y tecnología. Se nos puede cuestionar, con toda razón, la elección de nuestros términos en la descripción que hemos dado hasta ahora: ¿Acaso la política no es una síntesis de la sociedad? ¿No importan los atributos de los actores? ¿Dónde está el análisis de clases en el esquema? ¿La tecnología puede ser un actor? Tomamos posiciones particulares sobre estos asuntos generales, que ciertamente inciden en nuestro marco analítico y,

por consiguiente, en la comprensión que tenemos del conflicto. Por lo que necesitaremos explicitar nuestros supuestos teóricos de partida.

Primero, el discurso político siempre simplifica; no hay una correspondencia entre sociedad y política, pues la primera siempre desborda a la segunda y esta intenta hegemonizar y reducir la complejidad de la primera (Laclau, 1993). Segundo, la sociedad no está compuesta por bloques o “clases” sino por asociaciones, unas más organizadas y duraderas otras más espontáneas y transitorias (Elias, 2008); la visión de la sociedad de clases es una visión decimonónica y al mismo tiempo reductora de la diversidad. Se debe pasar de un análisis molar a otro molecular (Lévy, 2007). Tercero, la tecnología también es un agente (Latour, 2008). A contramano del discurso humanista que niega la agencia de cualquier otra entidad que no sea lo “humano”, vivimos hoy más que nunca la era de la hibridación, donde tanto tecnología como naturaleza también intervienen en los resultados de la acción. Cuarto, a mayor escala del grupo social de análisis, mayor diferenciación de sentido, un corolario del primer punto. Con esos supuestos de partida, describiremos algunos rasgos generales del conflicto.

Además de todo ello, nuestro énfasis está en el proceso y no en los actores. No entraremos a evaluar la validez de las pretensiones de los actores en juego ni a hacer una descripción esencialista de sus rasgos. Es decir que no discutiremos las principales narrativas en disputa, sea del “fraude” o del “golpe”. Queremos ir más allá de la lógica voluntarista de la acción y ver los procesos y sus consecuencias inesperadas (Weber). En todo caso, siguiendo el famoso “teorema de Thomas” (Merton, 1995), para el análisis sociológico a

veces pesan más las consecuencias que la validez de las propias creencias.

El conflicto comienza con el desconocimiento de los resultados del referendo de 21 de febrero de 2016. Allí empieza a acumularse la indignación que lleva a la movilización de los sectores medios que votaron por el No. Se desata un ciclo de protestas que tiene a las “plataformas ciudadanas” como protagonistas, quienes usan las redes sociales digitales como un medio principal de comunicación y acción. En este ciclo de protesta se va construyendo un “proceso enmarcador” (McAdam *et al.*, 1999) que pasa del “Bolivia dijo no” a “democracia sí, dictadura no”, que luego tendrá un mayor eco en pleno conflicto electoral del 2020. Las organizaciones sociales afines al MAS responden con movilizaciones masivas enmarcando el 21F como el “día de la mentira” y luego como el “día de la proclamación”. Es en esta etapa donde se acrecienta la desconfianza hacia instituciones políticas clave, con la validación de la reposición de parte del Tribunal Constitucional Plurinacional y el Tribunal Supremo Electoral, sumada a la ya previa desconfianza hacia los partidos políticos,⁸ y donde se genera el marco de la “posibilidad del fraude”. Pero, además, se gana experiencia con la movilización apoyada en redes sociales digitales, que funcionan, a la vez, tanto como una oportunidad política no copada por el gobierno como un repertorio de acción novedoso. Pero la movilización de las plataformas se apaga con las elecciones primarias, donde se electoralizan.

8 Bolivia es el tercer más país de la región con menor confianza en los partidos políticos, con solo un 28% (LAPOP, 2014: 9).

Las elecciones generales del 2019 parecían ser la salida pacífica para ese conflicto previo que consideramos como la primera etapa antecesora del conflicto postelectoral. Pero el día de las elecciones, ante la suspensión temporal de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), surgen las denuncias de “fraude” tanto del candidato del partido que estaba en segundo lugar (Comunidad Ciudadana), como de numerosos votantes que salen a las calles. Se reactivan las redes de las plataformas ciudadanas sumadas a una ola de indignación principalmente de jóvenes que votaron por primera vez. Surge una movilización que paraliza el país durante 20 días con una radicalización progresiva de las demandas, las cuales, sumadas a un motín policial y al retiro del apoyo del alto mando militar, logran la renuncia del entonces presidente Evo Morales, quien promueve el proceso enmarcador del “golpe de Estado”. Esta es la segunda etapa del conflicto. Luego, sin presidente y en plena incertidumbre social, surge la tercera etapa del conflicto con una mayor violencia civil. Finalmente, la cuarta etapa involucra la asunción de un nuevo gobierno ligado a una élite política conservadora, que intenta tomar el control mediante represiones militares, persecución y copamiento de espacios institucionales.

La línea principal del conflicto, según nuestra lectura, tiene que ver con la movilización social, que se ha visto aprovechada por estrategias de poder político. Por supuesto que hubo diferencias sociales en juego (de clase, étnicas, generacionales, etc.), pero estas fueron *estrategizadas* por actores políticos y amplificadas por factores tecnológicos. Si bien económicamente había estabilidad, las causas del conflicto electoral son sociopolíticas; podríamos decir que se dio una acumulación de indignación

por un sentimiento de “burla política”. En este conflicto confluyeron movilizaciones de sectores medios de la sociedad civil con táctica, pero sin estrategia, junto con élites políticas conservadoras que fueron las más beneficiadas por su posición institucional.

Una vez establecido el nuevo régimen que empieza a copar los medios de comunicación oficiales, las redes sociales digitales demuestran su capacidad de formar contrapoderes. Cuando el gobierno del MAS se encontraba en el poder, las redes sirvieron principalmente a la oposición. Pero ahora que el MAS y sus organizaciones afines se están viendo desplazadas de varios espacios mediáticos, las redes sociales digitales están funcionando crecientemente como medios alternativos de comunicación y de oposición al gobierno de Áñez. Ciertamente hay algunas diferencias en cuanto a acceso y habilidades de los perfiles sociales involucrados, pero percibimos un claro crecimiento del uso táctico de redes por parte de los seguidores del MAS y los opositores al nuevo gobierno, que incluye a una gama de izquierda conjuncionada por la polarización.

Así como durante el gobierno del MAS surgió un movimiento que lo impugnaba acusándolo de ser una dictadura que iba a consumir un fraude electoral para prorrogarse en el poder, hemos observado en redes sociales que, actualmente, también está configurándose una oposición al actual gobierno que echa mano de los mismos referentes discursivos, en relación a que esta es una dictadura, a que habrá fraude en los próximos comicios del 3 de mayo de 2020 y que, por lo tanto, se debe recuperar la democracia. Más allá de la validez de los contenidos en disputa, el mismo proceso de desconfianza y polarización

se está reforzando, lo cual puede llevar nuevamente a un golpe de Estado y a más violencia civil y militar.

La polarización es un tema central que para nosotros es la clave que explica gran parte de la hostilidad del conflicto y el futuro de la política que podría acontecer. La polarización implica el direccionamiento de las visiones hacia los extremos opuestos de un espectro ideológico,⁹ lo cual conlleva, a su vez, que el centro se debilite y disminuyan las visiones más plurales, mixtas y matizadas. Utilizando algunos conceptos de Mouffe (1999) podríamos decir que el pluralismo político se estanca momentáneamente, aparece un dualismo dominante que ya no implica el agonismo sino el descarnado antagonismo, donde el “otro” es una amenaza. Este se vuelve un ciclo en el que la radicalización de uno lleva a la radicalización del otro.

En el estilo de política que predomina en el país se intenta polarizar constantemente; en este sentido, basta con analizar la retórica del gobierno de MAS o del gobierno actual. Pero la polarización discursiva de los políticos no implica, directamente, polarización social; fenómeno que va más allá de los momentos de votación. Queremos distinguir aquí entre tipos de polarización de acuerdo a los actores involucrados. Existe una polarización política discursiva cuando los partidos políticos usan un discurso polarizador, mientras que una polarización social implica a una buena parte de la sociedad civil. Este par conceptual se asemeja a lo que Fiorina y Abrams (2008) denominan como “polarización de élite” contra “polarización de masa”.

9 Ideología en el sentido posmarxista o discursivo (Laclau, 1993).

La polarización funciona como un proceso de “alineamiento” al estilo militar que se da en contextos de guerra. Existen “generales” que dan una orden de línea o cuadramiento, y la tropa sin mayor evaluación del comando se cuadra; se trata de una toma de mando de un “cabecilla” sobre el cuerpo de la tropa. Estos “generales” pueden ser encarnados en la persona de un caudillo o en consignas abstractas, al estilo del significante del “padre” en el psicoanálisis. Las causas de esta polarización tienen raíces políticas, pero pueden ser influenciadas por otros factores, como el credo religioso o ideológico, clivajes sociales, comportamiento partisano, influencia de los medios de comunicación, desconfianza hacia a las instituciones, incertidumbre, inseguridad y violencia. A su vez, la polarización puede causar el debilitamiento de la gobernanza, la pérdida de la confianza en los procesos políticos y hasta violencia y persecución por parte del bando contrario. Esto no quiere decir que no deban existir las contradicciones y el conflicto, sino que el problema es reducirlos a un único plano de hostilidad. Los extremos relativos, no obstante, con la polarización, pueden lograr ganar seguidores, mientras el conjunto plural democrático pierde.

MECANISMOS SOCIODIGITALES EN EL CONFLICTO

En ciertos momentos del conflicto ha habido mayores picos de interacción en redes y, por tanto, mayor intervención tecnológica. A lo largo de las cuatro etapas que describimos antes, la interacción en redes ha crecido en los momentos de incertidumbre social, acrecentándose al mismo tiempo la desinformación digital. Dos momentos notables se dieron el 21 de octubre, un día después de las denuncias de fraude, cuando circularon noticias falsas de

desabastecimiento, los mercados se vaciaron y los precios subieron; y el día después de la renuncia de Evo Morales, el 11 de noviembre, con la difusión de noticias falsas sobre ataques civiles que ocasionaron la aparición de barricadas y vigiliadas en una gran cantidad de barrios. Estos dos momentos muestran el poder de la desinformación digital en momentos de conflicto. Aquí, específicamente, intervinieron dos mecanismos sociodigitales que detallaremos a continuación: las cámaras de eco y la desinformación, sobre todo, en forma de *fake news*, que además de llevar a los hechos puntuales que describimos llevaron a una mayor polarización social.

Las cámaras de eco aluden a “un entorno en el que alguien encuentra solo opiniones y creencias similares a las suyas, y no se consideran las alternativas” (Oxford, 2019). Este, en realidad, es un fenómeno normal que acontece en los grupos sociales. Es lo que se conoce sociológicamente como “homofilia” (Lazarsfeld y Merton, 1954) que es la tendencia a formar grupos con características sociales similares. No obstante, las esferas públicas y la propia política deberían complementar esos grupos, fomentando el encuentro entre diferentes. Si bien el estado normal se caracteriza por interactuar con nuestros círculos homogéneos; sea en casa, en el trabajo, en el café... Por otra parte, también deben existir espacios que nos saquen de esa monotonía, lo que se conoce como “lo público”. Pero en presencia de creencias políticas polarizadas, las cámaras de eco pueden llevar a una mayor hostilidad hacia el otro.

Con el advenimiento de las redes sociales digitales, si bien se puede trascender los círculos inmediatos a punta de voluntad, la situación, por defecto, debido al diseño de estos espacios, está determinada por esas cámaras de

eco, a raíz de los “filtros burbuja” (Pariser, 2011). Estos filtros son algoritmos que seleccionan y proveen información al usuario de acuerdo a sus interacciones previas, reforzando los propios puntos de vista y haciendo a un lado los puntos de vista distintos. Tomemos el caso de la columna de “inicio” (*news feed*) de Facebook. Debido a la gran cantidad de conexiones con amigos, páginas y grupos que publican constantemente contenido, Facebook no puede mostrar todos los posts en esta columna, por lo que los selecciona. El objetivo de Facebook es lograr una interacción constante o creciente de sus usuarios para contar con un público con el que mantener su modelo de negocio basado en publicidad segmentada. El criterio que usa para seleccionar el contenido que muestra a sus usuarios, plasmado en un algoritmo automatizado, es el de contenido similar previo con el que se interactuó, ayudando a conformar de esta manera una “burbuja de información”.

Pero las burbujas de información por sí solas no suelen crear efectos negativos; pensemos, por ejemplo, en un grupo de activistas que debe relacionarse con personas que poseen sus mismos intereses. Aquí aparece el segundo factor interviniente que es la desinformación. Mientras las cámaras de eco fomentadas por homofilia y filtros burbuja son mecanismos, la desinformación es un proceso de generación, circulación y consumo de información errónea o distorsionada, que puede ser generada de forma intencionada o por falta de habilidades informacionales (Ojeda, 2019). Podemos diferenciar la desinformación por la esfera en la que se produce y su formato predominante: una esfera interpersonal mediante la difusión de rumores; una esfera de medios masivos mediante bulos; y una esfera de medios digitales donde circulan principalmente *fake news*. La que nos interesa

acá es la última, la desinformación digital, debido a su novedad y a su rol en el conflicto.

Para el caso del conflicto, podemos diferenciar, además, dos tipos de procesos de desinformación. El primero es la desinformación política, que es una forma remozada de la clásica propaganda política adaptada a los medios digitales. Tiene como contexto principal las épocas electorales y su producción suele ser estratégica, bajo la lógica amigo/enemigo. Su circulación también se ha visto nutrida por cuentas falsas de militantes, “granjas de trolls”, “cibertropas”, uso de influencers y *bots*, centrándose en una transmisión de punto a multipunto (*broadcasting*), pues su objetivo es la opinión pública. La segunda es la desinformación social que abarca una gran cantidad de temas públicos, como la educación, la salud, los desastres, el espectáculo, el empleo, etc. A diferencia de la desinformación política, la social es producida, generalmente, de forma no deliberada, sino más bien como fruto de carencias en habilidades de evaluación de la información, relacionadas a la educación mediática. Así también su circulación se nutre principalmente del alarmismo, transmitiéndose en una lógica de viral. Es decir que inicialmente no tiene como objetivo el ámbito público, sino que a partir del engrane entre círculos cercanos logra su masificación. Estos dos tipos de desinformación pueden articularse —y, de hecho, así fue en el conflicto boliviano— por la combinación de factores políticos con violencia civil.

Uno de los formatos más compartidos de desinformación digital fue el de las noticias falsas. Una noticia falsa o *fake new* es un contenido digital que tiene como propósito hacerse pasar como una noticia verdadera, contando con las cuatro características que se señalan en el siguiente cuadro.

Cuadro 1 Características e indicadores de las noticias falsas

Característica	Indicadores
Procedencia dudosa.	No procede de medios legítimos. Los autores usan seudónimos o recurren a identidad desconocida.
Manipulación de los hechos.	Hechos descontextualizados. Hechos omitidos. Hechos inventados.
Apelación a las emociones.	Lenguaje hiperbólico.
Legitimación irregular.	Apariencia de formato de noticia. Viralidad.

Fuente: Ojeda y Peredo, 2019.

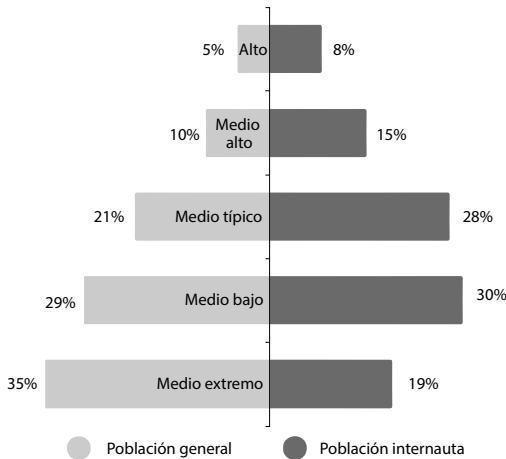
Las causas predominantes para compartir noticias falsas durante el conflicto fueron principalmente dos. Primero, por desinformación política, en una suerte de ciberactivismo y contrainformación militante. Segundo, como desinformación social, motivada principalmente por la sensación de peligro y la necesidad de protección del entorno cercano, en los picos más altos del conflicto. En ambos casos esa desinformación circuló más rápidamente debido a las cámaras de eco previas que mostraban mayoritariamente solo las noticias que uno estaba dispuesto a aceptar o impugnar.

En los datos de detección de noticias falsas de Chequea Bolivia, de mayo a septiembre de 2019, en plena campaña electoral se detectaron más noticias falsas contra el MAS (60%) que contra la oposición (30%) (Chequea Bolivia, 2019), mostrando la mayor ocupación de este espacio por parte de los sectores medios de oposición al gobierno de entonces. Sin embargo, durante el conflicto electoral y principalmente después de la renuncia de Evo Morales las noticias falsas a favor del MAS y en contra del nuevo

gobierno crecieron, equiparándose por momentos al volumen de las noticias falsas de oposición.

Ciertamente, los sectores medios urbanos, que fueron los mayores opositores al gobierno del MAS, son los que están más conectados a Internet. No es, sin embargo, una brecha de acceso abismal con otros sectores de la sociedad. En los datos de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC) (gráfico 1) sobre población internauta según el nivel socioeconómico, podemos observar que la distribución en el acceso de los estratos medio bajo y medio típico es similar; donde sí existe una marcada brecha es en el sector bajo extremo que representa a parte de la población rural.

Gráfico 1 Porcentaje de la población internauta según nivel socioeconómico



Fuente: Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC), 2017.

La diferencia más grande que observamos, sin embargo, no está en el acceso, que se ha masificado vía celulares

inteligentes e Internet móvil, sino en las habilidades informacionales de uso. De todas formas, ahora hay un repunte en el uso de redes sociales digitales por parte de simpatizantes y activistas del MAS, en vista del copiamiento de espacios de comunicación por parte del actual gobierno y la desconfianza hacia los medios tradicionales.

Si se está dentro de una burbuja de información se suele pensar que solo el bando contrario ha utilizado noticias falsas, sin embargo, viendo los datos de las verificadoras de noticias (Chequea Bolivia y Bolivia Verifica) y recorriendo los grupos de ambos bandos, se puede observar que la desinformación ha circulado en ambos sentidos. Más aún, estos procesos de desinformación aumentaron las propias posiciones polarizadas por los casos extremos mostrados en las noticias falsas. Ahora bien, como parte de las expresiones de polarización una de las más extraordinarias tuvo lugar dentro de los espacios micro-sociales. Llegó a las familias, a los grupos de amigos y los espacios de trabajo. Hubo desencuentros, peleas y hasta conexiones rotas tanto en el ámbito físico como en el digital. Esta expresión muestra la profundidad de la polarización social vivida en el país, si bien no absoluta, sí de magnitud preocupante.

Aparte de la polarización, durante el conflicto hubo muchos otros hechos que revelan otros patrones estructurales de la conflictividad, ¿por qué elegir la polarización social como un nudo clave del conflicto? ¿Acaso la formación de grupos parapoliciales, la represión militar, la discriminación, el *framing* [encuadre] de los medios masivos no son temas más urgentes? Ciertamente son temas importantes, el asunto es complejo y no se agota en una sola faceta. En nuestro caso, el interés era sacar a la luz un proceso social abarcador, que no se defina por los términos discursivos de los actores políticos coyunturales. Para mostrar la potencial gravedad de este asunto, finalmente

relataremos un hecho que hemos vivido en primera persona y que ilustra las consecuencias de la polarización social vía desinformación digital:

Si nos preguntáramos cuál fue el día más crítico de todo el conflicto por su extensión poblacional, territorial, el nivel de miedo y las actitudes violentas, ¿qué responderíamos? Hay varias opciones puesto que hubo varios tipos de violencia en el conflicto. Muchos dirían sin dudarle Huayllani y Senkata por las terribles intervenciones militares. Otros podrían ir más atrás, a Vila Vila, o los choques que hubo en Muyurina, Huayculi o en Montero. Pero un acontecimiento que no fue muy visible en los medios ni en las demandas de los activistas de ambos bandos, aconteció el lunes 11 de noviembre en la ciudad de Cochabamba, un día después de la renuncia de Evo Morales. Ese día fue el día más paralizado y hostil de toda la historia del conflicto en esta ciudad. Lo extraño es que no fue una reivindicación política la que logró esos bloqueos. No fue el reclamo del “fraude” o del “golpe” los que lograron tal movilización. Fue el rumor que circulaba en redes digitales y microsociales de que nos “venían a atacar”. Los del norte decían que los del sur, los del sur del norte, los de la ciudad que los del campo y los del campo de la ciudad. Ese día se linchó a don Filemón Soria vecino de Tamborada (zona sur), porque lo confundimos con “uno del norte” (Red Uno, 12/11/2019).¹⁰

Eran los “enemigos”, los “otros”, que venían a “atacar-nos”. Un episodio, entre muchos más, de intolerancia y violencia, pero que ya no involucraba solamente a activistas políticos, grupos de choque o cuerpos armados policiales o militares, sino a civiles. Un momento del conflicto que trasciende a sus protagonistas más belicosos hacía el común de la esfera civil.

10 Fuente: “Un hombre fue asesinado en la Tamborada”: Disponible en: <https://www.reduno.com.bo/nota/un-hombre-fue-asesinado-en-la-tamborada-20191112173124>

A MANERA DE CONCLUSIÓN

Hemos tratado de describir el rol de un proceso socio-digital que absorbe a ambos bandos del conflicto: la desinformación digital dentro de un conflicto social que devino en crisis política. Las redes sociales digitales bajo mecanismos de cámaras de eco y desinformación, conjuncionadas con un discurso político polarizador y un clima de violencia tanto civil como militar, contribuyeron a una mayor polarización social. Esta, a su vez, ha llevado a una mayor hostilidad en la conversación en redes, mayor intolerancia, reforzamiento de los estereotipos del otro y a la justificación de la violencia.

El problema aún mayor es que este proceso parece estar tornándose en un ciclo de retroalimentación. La polarización lleva a la mayor circulación de desinformación y, a la vez, esta lleva a mayor polarización. Incluso los referentes discursivos exacerbados de “dictadura”, “fraude” y “recuperación de la democracia” siguen circulando de un polo al otro, lo cual abre la posibilidad de un nuevo conflicto violento en las elecciones generales de 2020. Aquí es clave el rol de varios actores para combatir la desinformación, sin que ello se convierta en excusa para coartar la libertad de expresión. La claridad en los estándares periodísticos tanto de profesionales como de periodistas ciudadanos y activistas, la responsabilidad de los partidos políticos y la educación informacional y mediática parecen ser las mejores alternativas, en lugar de repetir intentos de regulación e intervención del Internet. En todo ello el rol de la academia nos parece que debe ser de iluminación en vez de alimentación de aquel ciclo; intentar que el Búho de Minerva despegue algo más temprano y no solo en el crepúsculo.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- AGETIC (2017) *Encuesta nacional de opinión sobre tecnologías de información y comunicación (TIC)*. La Paz: AGETIC.
- Calderón, Fernando (2011) "Movimientos culturales y la emergencia de una nueva política". En: *Política & Sociedad* 10 (18): 75-96.
- Castells, Manuel (2009) *Comunicación y poder*. Madrid: Alianza.
- (2012) *Redes de indignación y esperanza: los movimientos sociales en la era de internet*. Madrid: Alianza.
- Chequea Bolivia (2019) "Estadísticas generales. Mayo a septiembre de 2019". [Documento de trabajo].
- Choque, Marlene (2010) "Convergencia mediática en la acción social. Tecnología y movilización callejera en Bolivia". En: *Diálogos transdisciplinarios en la sociedad de la información*.
- De Ugarte, David (2007) *El poder de las redes*. Las Indias Electrónicas.
- Elias, Norbert (2008) *Sociología fundamental*. Barcelona: Gedisa.
- Fiorina, Morris y Abrams, Samuel (2008) "Political Polarization in the American Public". *Annual Review of Political Science* 11(1): 563-588.
- Freeman, Linton (2012) *El desarrollo del Análisis de Redes Sociales. Un estudio de sociología de la ciencia*. Bloomington, IN: Palibrio.
- Gerbaudo, Paolo (2017) *The Mask and the Flag: Populism, Citizenism, and Global Protest*. UK: Oxford University Press.

- Laclau, Ernesto (1993) *Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo*. Buenos Aires: Nueva Visión.
- Lago, S. y Marotias, A. (2006) "Los movimientos sociales en la era de internet". *Razón y palabra*, 54.
- LAPOP (2014) *Cultura política de la democracia en Bolivia, 2014: Hacia una democracia de ciudadanos*. Cochabamba: Ciudadanía.
- Latour, Bruno (2008) *Reensamblar lo social: una introducción a la teoría del actor-red*. Buenos Aires: Manantial.
- Lazarsfeld, Paul y Merton, Robert (1954) "Friendship as a social process: a substantive and methodological analysis". En: *Freedom and Control in Modern Society*, ed. M. Berger, pp. 18-66. New York: Van Nostrand.
- Lévy, Pierre (2007) *Cibercultura*. Barcelona: Anthropos.
- McAdam, Doug; McCarthy, John; Zald, Mayer (1999) "Oportunidades, estructuras de movilización y procesos enmarcadores: hacia una perspectiva sintética y comparada de los movimientos sociales". En: *Movimientos sociales: perspectivas comparadas*, 21-46. Barcelona: Akal.
- McLuhan, Marshall (1996) *Comprender los medios: las extensiones del ser humano*. Barcelona: Paidós.
- Merton, Robert (1995) "The Thomas Theorem and the Matthews Effect". *Soc. F.* 74: 379.
- Mouffe, Chantal (1999) *El retorno de lo político: comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia radical*. Barcelona: Paidós.
- Ojeda, Alex (2016) "Internet: de las metáforas y las caracterizaciones disciplinarias al modelo tecnosociológico". En: *Decursos 36*. Cochabamba: CESU-UMSS.

- (2018) "Las plataformas ciudadanas del 21F: Caracterización social, comunicativa e ideológica". *Foro Regional* (11).
- (2019) "Desinformación social y política". Cochabamba: Chequea Bolivia. [Documento de trabajo].
- (2020) *Movimientos ciudadanos en red: Acción colectiva, redes sociales digitales y ciudadanía en Bolivia (2010-2017)*. Cochabamba: UMSS, PUICS [en prensa].
- Ojeda, Alex y Peredo, Valeria (2019) "Fake news, viralidad y elecciones". Cochabamba: Chequea Bolivia. [Documento de trabajo].
- Oxford (2016) "Definition of post-truth". Disponible en: <https://en.oxforddictionaries.com/definition/post-truth>
- (2019) "Definition of echo chamber". Disponible en: <https://en.oxforddictionaries.com/definition/echo-chamber>
- Toret, Javier (2013) *Tecnopolítica: la potencia de las multitudes conectadas*. IN3 Working Paper Series.
- Unesco (2011) *Alfabetización mediática e informacional. Curriculum para profesores*. París: Unesco.

La rebelión de los blancos: Causas raciales de la caída de Evo Morales

Fernando Molina

ADVERTENCIA PREVIA:

En este artículo hemos preferido usar el concepto de “raza” (aunque en una acepción específica: no determinación puramente biológica, sino construcción que amalgama, con geometría variable, lo biológico, lo social y lo histórico) en lugar del usual concepto de “etnia”, que es el que suelen emplear, en este segundo sentido, los antropólogos y científicos sociales latinos. La razón reside en que, como se explicará en el texto, la sustitución de la “raza” por la “etnia” ha sido aprovechada por los blancos bolivianos como una estrategia para “desaparecer” como grupo y para hacer recaer la cuestión identitaria exclusivamente sobre los indígenas y los cholos. En esa medida, esta estrategia ha contribuido al ocultamiento social e intelectual del racismo. (F. M.)

INTRODUCCIÓN

La colonización española de Bolivia asignó funciones a los sectores poblacionales de acuerdo a su raza y a su tipo de nacimiento. La estructura social colonial fue, entonces, estamental. Sobre ella dominaban dos estamentos, el de los peninsulares y el de los criollos, que tenían en

común el hecho de ser descendientes de europeos y, por tanto, *blancos*; mientras que los demás estamentos, subordinados a estos, no lo eran. De ahí en adelante, la sociedad boliviana viviría un estado de desigualdad e injusticia raciales. Este iría modificándose, aunque perduraría hasta hoy en sus aspectos esenciales, disimulado con diferentes tipos de maquillaje, algunos de ellos muy sofisticados e imperceptibles.

Los indígenas y los cholos (mestizos populares) bolivianos solo tuvieron derecho a votar y a ser elegidos desde 1956, esto es, 131 años después que los blancos. Como muchas otras, esta discriminación racial se presentó como si fuera económica y cultural. Los ideólogos del censitarismo defendieron la necesidad de limitar los derechos políticos de quienes dependían de otros en calidad de “domésticos” o carecían de la cultura suficiente para asumir estos derechos con responsabilidad (Irurozqui, 2019). En el fondo, creían que la política y la toma de decisiones colectivas no eran asuntos que pudieran encomendarse a indios y cholos, a quienes consideraban burdos, apocados y poco vitales, sin suficiente inteligencia o brío, quebrados por la historia (Moreno, 1989) o, en cambio, aviesos, oportunistas, violentos y ebrios (Arguedas, 1995).

Este ha sido el *modus operandi* de los blancos bolivianos a lo largo de la historia: esconder públicamente los privilegios de su fenotipo haciéndolos pasar como ventajas sociales desracializadas, al mismo tiempo que en la vida cotidiana afirmaban y aprovechaban las ventajas de pertenecer a la raza blanca. Igual que los blancos de otros países del mundo (cf. Diangelo, 2018), los blancos bolivianos han procurado legitimar sus privilegios fenotípicos tratando de que se ignore la verdadera fuente de donde emanan. Han buscado que su posición se considere un resultado de la

organización normal de una colectividad, de la “marcha de la democracia”. Con esta operación, su capital biológico terminó siendo resignificado como capital moral y educativo: los “hispanos” de la Colonia pasaron a ser los “decentes” del siglo XIX y los “meritócratas” de después de 1952.

No es extraño, entonces, que, en las últimas dos décadas de historia nacional, los blancos se sintieran agraviados porque su esfuerzo de camuflaje quedara expuesto y porque, sobre el piso de la “Bolivia moderna” que pensaron haber construido, emergieran los perfiles de un sistema de privilegios raciales que ellos hubieran preferido mantener enterrados. Tampoco es extraño que sintieran las políticas de identidad del gobierno del Movimiento al Socialismo —MAS— (que apenas fue el segundo o el tercer gobierno de nuestra historia en aplicar políticas de este tipo) como afrentas directas a su primacía.

Por supuesto, no pretendo decir que el movimiento que en octubre y noviembre de 2019 derrocó a Evo Morales estuviera exclusivamente movido por razones raciales, tal como plantea Álvaro García Linera (2019). Esto sería reduccionista e incorrecto. Varios otros móviles —algunos positivos y otros, ingenuos antes que negativos— estuvieron en juego. No obstante, las cuestiones raciales alimentaron el ruido y la furia de este periodo tan intenso, definitivo y, debemos decirlo, trágico de la historia boliviana. Incluso ahora, cuando escribo esto, a dos meses de la renuncia de Morales, solo esas pulsiones raciales pueden explicar que la ira siga encendiendo los corazones, la revancha esté a la orden del día y los principales debates públicos tengan que ver, de uno u otro modo, con el partido caído, calificado por los columnistas más aplaudidos de las clases medias blancas

con calificaciones como “cáncer”, “monstruo”, “plaga” y otros por el estilo. En estas condiciones, negar el componente racial de la llamada “revolución de las pititas” sería reproducir algunas de las estrategias “negacionistas” que este texto retrata como coonestadoras del racismo.

LA PRIMACÍA BLANCA

En un estudio que realicé en 2017 demostré que todos los miembros de la alta burguesía y la alta gerencia bolivianas eran blancos y pertenecían al grupo blanco de mayor estatus social, que en Bolivia llamamos *jailón* (Molina, 2019a). Aunque no existen investigaciones empíricas similares sobre otros grupos de mucho poder, como las élites profesionales, la misma conclusión puede extenderse a ellos: por un lado, sus miembros se consideran blancos; por el otro, lo *son*, tal como se desprende de su fenotipo, sus apellidos, su participación plena en el estatus social más exclusivo y prestigioso, que es el de los *jailones*.

En los sectores económicos y culturales intermedios (burguesía comercial y agraria, pequeña burguesía, profesionales de menor reputación) resulta posible encontrar bolsones de personas de proveniencia indígena y chola, pero que se reconocen a sí mismas como blancos. Además, en general, “funcionan” como blancos en el escenario de la representación social.

En el otro extremo, existen actividades y sectores económicos exclusivamente reservados a los indígenas. Son, sin excepción, los más modestos: el servicio doméstico (que cumple un papel fundamental en la reproducción del racismo); el trabajo no calificado de albañilería, carga, reparaciones, saneamiento urbano, minería, industria, etc.

Estos ejemplos muestran que los blancos predominan cualitativamente en un país que, además, solo hasta el censo de 2012 se consideró mayoritariamente indígena. Esta mayoría fue desapareciendo paulatinamente a causa de un proceso de movilidad social que también fue racial,¹ pues permitía, a los grupos y los individuos económicamente ascendentes, *blanquearse*, esto es, repudiar sus orígenes indígenas y cholos y “avanzar” en la pirámide racial (entre otras vías, por medio del racismo contra las familias más indígenas o más cholas que ellos). Y el *blanqueamiento* también constituye un indicador, indirecto, de la primacía blanca.²

EL RACISMO BLANCO

Después de casi un siglo de ser sacudida por las transformaciones de la economía, la sociedad, las ciencias sociales y los discursos políticos, la identidad racial —en este caso, la identidad blanca— se ha relativizado y, por tanto, descompuesto en distintas “posiciones” respecto a una identidad, digamos, *ideal*: hoy en Bolivia uno puede

-
- 1 En Bolivia, la movilidad social y la movilidad racial son una y la misma porque el estatus social es primero que nada, por las razones históricas que hemos mencionado, *estatus racial*. Simultáneamente, la movilidad racial no puede verificarse sin movilidad económica. De modo que los procesos de modernización (por ejemplo el que vivimos durante las últimas dos décadas) tienen el potencial de provocar importantes cambios demográficos.
 - 2 Por cierto, al mismo tiempo, el *blanqueamiento* no tiene contraparte, es decir, no se registra ningún proceso de movilidad desde la condición blanca hacia la condición indígena, y los blancos que por alguna razón llegan a identificarse con los indios no pierden su estatus blanco.

ser blanco porque se reconoce blanco y lo es materialmente, en cuyo caso es *jailón*; o porque se reconoce blanco y *funciona* (es admitido) como tal. Esto último, sin embargo, exige la posesión de un fenotipo, una pigmentación y cierta trayectoria socioeconómica que se presten a ello. De lo contrario, quienes se reconocen blancos no son admitidos como tales en los hechos, excepto en círculos sociales muy acotados. Como ejemplo pongamos a los campesinos tarijeños con fenotipo y pigmentación europeos que no logran funcionar como blancos por su condición de campesinos, la cual, como hemos dicho, siempre ha estado asociada a la identidad indígena.

Ser blanco en Bolivia es pertenecer a un contingente aparentemente desracializado, que no quiere ni necesita justificar su ubicación superior y hegemónica. *Funcionar como blanco*, en cambio, es una dinámica que implica tensión y disputa: los ejecutantes son, en menor o mayor medida, vulnerables a la crítica, según los “méritos” fenotípicos y de pigmentación que tengan. Por esto, el racismo consta en Bolivia de dos operaciones simultáneas y antagónicas: por un lado, consiste en tratar de funcionar como blanco, una estrategia *positiva*; por el otro, consiste en defender el valor del capital biológico que se posee evitando que los advenedizos funcionen como blancos, lo que requiere la aplicación de diversas tácticas de *discriminación*. La principal de estas tácticas es la *designación*; esto es, apuntar a alguien para espetarle: “indio”, “birlocha”, “cunumi”, etc., que es lo mismo que decirle: “No obstante lo que creas, tú no eres blanco”. Las personas que no han nacido blancas, pese a su *blanqueamiento*, no están a salvo de la racialización externa, impuesta por la sociedad.

La mayoría de los blancos bolivianos solo reconocen como racistas los actos concretos de discriminación.

Generalmente los consideran negativos, lo que no impide que los practiquen ocasionalmente. Al mismo tiempo, piensan y actúan como si no existieran el sistema dentro del que esta discriminación cumple su papel y, sobre todo, la primacía blanca. Como hemos visto, camuflan esta última detrás de una supuesta o real superioridad educativa y cultural.

Así, la situación de los blancos en nuestro país es paradójica: por un lado, necesitan afirmarse cotidianamente en la vida por medio de múltiples designaciones raciales, positivas o discriminadoras, que les permiten disfrutar de, y disputar por, los privilegios fenotípicos y de pigmentación. Al mismo tiempo, normalmente necesitan negar su propia existencia como comunidad racial, de modo que estos privilegios no sean cuestionados y no les generen culpa sino, por el contrario, se conviertan en ventajas legítimas en el mundo moderno, esto es, ventajas provenientes de causas no raciales, como una mejor educación y un mayor nivel cultural.

LA “DESAPARICIÓN” DE LOS BLANCOS

Si fueran inquiridos sobre el asunto, muchísimos blancos bolivianos de hoy no se identificarían como blancos, sino como “mestizos”, y asegurarían, quizá honestamente, no ser racistas. Al mismo tiempo, no obstante, estas personas practicarían el racismo en la cotidianeidad: se enorgullecerían de ser consideradas blancas; juzgarían la “blanquitud” de los otros, desestimando a quienes pretendieran funcionar como blancos sin poseer los “méritos” fenotípicos para ello; permitirían expresiones discriminadoras en sus familias o grupos de amigos; tratarían de una manera a sus iguales raciales y de otra manera a

los indígenas que les prestaran servicios; considerarían innecesaria, peligrosa o “demagógica” la adopción de políticas estatales contra el racismo; preferirían que las diferencias raciales bolivianas efectivas fueran eludidas por los sistemas educativos que formaran a sus hijos; ignorarían el sufrimiento de sus conciudadanos indígenas (a menudo explotados u oprimidos por alguna injusticia), en tanto que se escandalizarían si las víctimas del mismo sufrimiento fueran personas blancas y, finalmente, como hemos dicho, incurrirían ocasionalmente en prácticas discriminatoras.

Muchísimos blancos son racistas en privado, pero no quieren representar públicamente este papel y asumir las consecuencias de ello, ya que estas no les serían, política y socialmente, convenientes. A lo largo del tiempo, esta disonancia cognitiva ha dado lugar a una serie de operaciones abstractas de encubrimiento del racismo concreto, que han permitido la “desaparición de los blancos” y, simultáneamente, la “etnización de los no blancos” en el discurso social. A continuación explicaremos estos procesos.

Para comenzar observemos algo de suyo evidente: el paso de la “condición indígena” a la “condición blanca”, o *blanqueamiento*, solo es posible en la medida en que no se verifica exclusivamente en la materialidad de los cuerpos, sino también en la subjetividad de la percepción social. Requiere, entonces, de una suerte de “ruptura epistemológica”: del paso de las razas en tanto realidades puramente biológicas, a las razas como conceptos biológico-sociales.

¿Cuándo y cómo ocurrió esto en Bolivia? Fue un proceso largo y complejo, y su relación completa demandaría un espacio mucho mayor al del que disponemos aquí. Contentémonos con enumerar sus principales factores contribuyentes:

La mestización de la población, que disminuyó los contingentes de "razas puras" que aparecían en los censos demográficos de comienzos de la república y, al mismo tiempo, incrementó la cantidad de bolivianos multirraciales, que podían escapar con más facilidad de las clasificaciones rígidas.

El ascenso económico de muchos cholos, sobre todo a principios del siglo XX, por las transformaciones sociales que se derivaron de la incorporación plena del país a la economía capitalista mundial.

La proliferación de los *encholamientos*, esto es, de los matrimonios entre cholos adinerados y blancos (sobre todo mujeres) empobrecidos. Esta estrategia matrimonial permitió que los fenotipos y pigmentos indígenas penetraran en el estatus blanco, transportados por los mestizos, y debilitaran la imagen corporal con la que este se presentaba ante la sociedad y se representaba ante sí mismo.

La constante urbanización de contingentes indígenas, junto con la mestización, estableció las condiciones de posibilidad de una mayor hibridación demográfica y de múltiples procesos de emulación y mezcla de los estilos de vida, las vestimentas, las formas de ocio, etc.

Los procesos políticos e intelectuales posteriores a la Segunda Guerra Mundial, que convirtieron el racismo en una conducta reprochable para un ciudadano moderno y culto (aunque esto haya ido cambiando en las últimas dos décadas), revaloraron la condición "mestiza" como la única que definía la normalidad humana y, en consecuencia, sustituyeron el lenguaje con el que se abordaba las cuestiones raciales (rebautizadas como *étnicas* y referidas especialmente a las diferencias culturales e históricas, como si estas no estuvieran entrelazadas con diferencias biológicas).

Tras estos procesos, comenzó a importar, sobre todo, el "funcionamiento" de las razas en la red de relaciones sociales y, a la vez, el "funcionamiento" de los individuos en el tejido de vínculos y oposiciones raciales. Se produjo una *subjetivización* de la realidad racial; se complejizaron al extremo las relaciones interracial, interétnicas e

identitarias. Una de las variantes de esta complejización fue la referida disonancia cognitiva de los blancos, que convirtió al racismo, que antes se asumía abiertamente, en uno de los tabúes nacionales.

Desde 1952, todos los bolivianos se volvieron “mestizos”, una identidad “paraguas” debajo de la cual se escondían los antagonismos raciales que seguían tensionando a la sociedad real. La Revolución Nacional quiso resolver el problema de la heterogeneidad racial y del racismo mediante una unificación puramente formal y oficial de los bolivianos, una medida que, en lugar de lidiar con la carga racial heredada, simplemente la dejaba de lado. Esta operación —como era previsible y quizá fue buscado— terminó por favorecer a los grupos dominantes.

Los blancos se convirtieron en “mestizos”. Esto les sirvió para decir que habían dejado de ser racistas. De ahí en adelante “desaparecieron” como grupo y con ello “desapareció”, también, convenientemente, su primacía social.

Los *blanqueados* también se convirtieron en “mestizos” y esto favoreció su búsqueda de ascenso racial. Sin embargo, este les siguió siendo elusivo: en la vida cotidiana, donde el racismo no había desaparecido, se siguió diferenciando a los “mestizos” *jailones* (de una apariencia más europea) de los “mestizos” criollos y, por supuesto, de los cholos, que conservaron sobre sí las connotaciones despectivas que el mestizaje había tenido antes de la Revolución.

Solo algunos indios resistieron, aunque más bien tardíamente, que se los identificara como “mestizos”, entendiéndolo que esto era absurdo, un truco para esconder su opresión. Desde los años 60 del siglo pasado, los pensadores indianistas han planteado de manera *fuerte* las cuestiones identitarias; muchos de ellos, aunque no los más

importantes, lo han hecho en los términos provistos por las corrientes científicas que se habían impuesto a partir de la Segunda Guerra Mundial. Esta reforma correspondió con la modernización efectiva del campo de estudio, por un lado, pero hizo menos abordable e incluso escondió ciertos aspectos de las relaciones raciales que resultaban particularmente desagradables para los grupos sociales dominantes, por el otro.

Los blancos aprovecharon esta nueva terminología, el consenso sobre el “mestizaje” y la simultánea concentración de “lo étnico” en el discurso de y sobre los indígenas, para sustraerse a sí mismos de la engorrosa problemática identitaria:³ puesto que no poseían una cultura especial, distinta de la “boliviana” (que entendían como una variación nacional de la cultura occidental), entonces no se vieron a sí mismos como una etnia; al revés, su identidad se definía justamente por su rechazo a participar en el complejo juego étnico que involucraba al resto de los bolivianos.

Como dice Loayza (2018), los blancos son los “ninguno” de los censos de población, pues responden con la palabra “ninguno” a la pregunta sobre a qué pueblo indígena pertenecen. En otras palabras, son los “no indígenas” (algo que posee prestigio en una sociedad racista y es fuente, por tanto, de estatus). Ser “no indígena” significa, de hecho, ser “no étnico”, ceder esta cuestión a otros; en suma, “desaparecer” del mapa de identidades, sin dejar, en el mundo real, de ejercer como blanco. La defensa de los blancos de “lo boliviano” por oposición a los particularismos puede darse de forma pasiva, por ejemplo respondiendo “ninguno”

3 Podría decirse que los blancos, empeñados en negar su propio racismo, terminaron usando los progresos de la antropología de las identidades para sus propios fines, algo que, por otra parte, no puede sorprendernos, ya que justamente eso es lo que hacen los grupos dominantes.

a la pregunta étnica de los censos o prefiriendo el arte urbano al folclore, o la arquitectura occidentalizada a los *cholets*; pero también puede darse de manera activa, por ejemplo oponiendo la bandera boliviana a la wiphala en las manifestaciones que antecedieron al derrocamiento de Evo Morales. En este caso implica una *desaprobación* de las identidades subnacionales.

Con el tiempo, quienes se han opuesto a la persistencia de lo colonial en Bolivia han tenido que buscar y detectar el racismo que intentaba esconderse e invisibilizarse, para combatirlo, entretanto que los defensores del *statu quo* racial se han ocupado de negar la existencia del racismo, excepto cuando se presenta de forma acotada, solo como discriminación. A mi juicio, esta opción es la que divide el espectro político boliviano en un lado progresista y otro reaccionario (Molina, 2019b).

“Sí, SOY RACISTA”

En 2017, publiqué un artículo en la revista *La Migraña* titulado “La oposición *jailona* al gobierno del MAS” (Molina, 2017), en el que señalaba que la situación política que vivía el país estaba marcada por el resultado adverso que el 21 de febrero de 2016 —denominado, desde entonces, “21F”— había obtenido el gobierno en su intención de reformar la Constitución por medio de un referendo y así habilitar nuevamente al presidente Evo Morales como candidato a la presidencia en 2019. Señalaba que este resultado había creado las condiciones para el resurgimiento político de ciertos sectores acomodados y blancos de la población, que calculaba en un 20 a 30% del electorado, que ya desde antes del mencionado referendo habían mostrado una fuerte animadversión al gobierno

del MAS. Esta animadversión parecía ser la causa de que dicho grupo tomara “los casos de corrupción y los gafes o imposturas comunicacionales [de este] y... les dé una importancia derogatoria definitiva” (Molina, 2017: 121).

Formulé entonces la hipótesis de que la intensidad del odio que manifestaba este sector del electorado mostraba que “existe una causa irracional, y probablemente inconsciente, detrás de los argumentos racionales y los hechos reales” (: 122) que se esgrimían en el debate de entonces (en un momento previo a la maniobra de noviembre de 2017, que habilitó a Morales en el Tribunal Constitucional y llevó la actitud mencionada a su paroxismo, extendiéndola a todas las clases medias y más allá).

¿Cuál era esta “causa primera”? Mi respuesta a esta pregunta tomaba en cuenta un artículo titulado “Sí, soy racista”, que había publicado la columnista cochabambina Mónica Olmos en *El blog de la Molmitos*, y había sido profusamente compartido y aprobado en las redes sociales en la primera y segunda semanas de febrero de 2017 (también cit. en Loayza, 2018: 32). Este artículo daba una pista de lo que estaba ocurriendo, y no tanto por lo que decía, cuanto por la calurosa recepción que había recibido. La autora se identificaba de dos maneras: una socioeconómica, como miembro de la clase media, y otra racial: “Soy culito blanco”, decía. Esta identificación pública con los (“culitos”) blancos resultaba rara, ya que la estrategia de estos había sido, como hemos visto, “desaparecer” del mapa racial. Se trataba, entonces, de un síntoma. Algo importante había sucedido con esta estatus social y, al parecer, este ya no se sentía cómodo en su tradicional anonimato, ni consideraba más que negar su racismo fuera una buena estrategia para la defensa de sus intereses. Olmos asumía irónicamente los tabúes de su estatus

(“soy blanca” y “sí, soy racista”) para denunciar que, en ese momento, los blancos se hallaban en una situación de inferioridad y estaban siendo discriminados, tanto por un gobierno que “los acusaba de racistas” como por los otros grupos sociales que descalificaban con sorna ciertos comportamientos tradicionalmente asociados a la clase media blanca, como viajar a Miami o “comer hamburguesas” (*ibid.*).

Olmos afirmaba que, en la Bolivia de Evo Morales, el fenotipo blanco ya no proporcionaba un capital biológico a quienes lo poseían. ¿Era cierto? Como escribí en mi artículo de *La Migraña*, estaba lejos de serlo:

A despecho del antiguo esfuerzo ideológico para desvalorar la *blanquitud*, que ha dado lugar, entre otras expresiones más antiguas, a la de “culitos blancos”, aquella sigue siendo una suerte de “ideal”... para la mayoría de la población. Tal idealización de la *blanquitud* se debe a razones ideológicas, por ejemplo, a una determinada concepción estética, que ha sido inculcada ancestralmente en la población, o al deseo, igualmente longevo, pues ha sido alentado con argumentos racionales y afectivos desde el comienzo de la república, de “parecerse a los europeos”. Pero también se debe a razones de índole económica: recordemos que la actual desigualdad en la posesión de los factores productivos, tierra, dinero, recursos naturales, educación, se originó históricamente en la distribución de estos factores entre los distintos estamentos del organismo colonial, que concedió la mejor parte de los mismos a los blancos, los cuales eran la capa dominante de esta sociedad. Desde entonces, y pese a los diversos procesos de democratización de la riqueza que se han verificado a lo largo de la historia —por ejemplo, a pesar de la reforma agraria de 1953—, la desigualdad estamental que proviene de la Colonia se ha reproducido a lo largo del tiempo. Hoy en día, la mayor parte del capital, la parte más rica de la tierra y toda la educación de calidad se hallan concentradas en manos del “estamento” blanco. El proceso de “desestamentalización”, es decir, de creación de individuos con derechos

jurídicos iguales, que ha ido siendo ejecutando en los casi 200 años de existencia del país, ha tenido un éxito parcial en cuanto al capital natural (la tierra) y al capital económico, pero ha fracasado en el campo educativo. Hoy, el “estamento” blanco goza de un virtual monopolio de todos los puestos de la economía que requieran un alto nivel de conocimientos, con la sola excepción de los puestos estatales. Los principales médicos, abogados, administradores, ingenieros, pilotos y otros profesionales de alto estándar pertenecen a este “estamento”. La abrumadora mayoría de las personas con puestos ejecutivos en las grandes empresas, también. Y dado que estas grandes empresas, si bien solo emplean al 20% de la fuerza de trabajo, en cambio generan el 80% del PIB, podemos decir que, por mediación de los gerentes de estas compañías, la mayor parte de la riqueza nacional se halla en manos del “estamento” blanco (: 122).

Sin embargo, el artículo de Olmos no era un “disparo aislado”. Como se comprobaría después, fue la primera expresión del sentimiento de una parte de la población que, a despecho de cuán importante era todavía en la realidad, se sentía debilitada y discriminada, pues creía que los otros bolivianos —y, en especial, el gobierno del MAS— eran racistas con ella.

A partir de este momento, la estrategia de los blancos cambió de manera significativa: de negar la existencia del racismo (“todos somos mestizos”) pasaron a atribuir el racismo existente que, según ellos, ocurría en contra suya, a la irrupción en la historia del MAS y sus políticas de identidad, las cuales habían roto la línea histórica de su preferencia y conveniencia; esto es, la absorción oficial de las distintas identidades nacionales en una sola identidad “paraguas”, la de los mestizos bolivianos, y, simultáneamente, la “desaparición” de los blancos. Mientras los blancos habían dominado libremente, para ellos nadie era o nadie quería ser racista. Solo cuando su dominio

tradicional fue desestabilizado por una nueva realidad histórica, comenzaron a percibir el racismo, lo visualizaron, pero era el racismo de los indígenas en su contra, creado exclusiva y “demagógicamente” por el gobierno de Morales, empeñado en aplastar a los “culitos blancos” o, en el lenguaje de sus autoridades, a los *q’aras*.

SER BLANCO EN EL “PROCESO DE CAMBIO”

¿De dónde provino esta percepción del “racismo oficial en contra de los blancos”? Tanto de la naturaleza como de las acciones del gobierno de Evo Morales. Este fue el gobierno de un indígena⁴ —eso en primer lugar— e implicó el arribo al poder de un movimiento de origen campesino. Ambas cosas hicieron arrugar las narices a más de uno. Al mismo tiempo, la revolución política o recambio total de la élite estatal que sobrevino con Evo constituyó la mayor sustracción del capital político de los blancos en toda la historia nacional, pues desplazó a una élite fuertemente *jailona* por otra fuertemente indígena y chola.

Este desplazamiento se defendió y justificó en pugna con la ideología blanca de exaltación del capital educativo elitista como medio de reproducción del poder.⁵ En detrimento del capital educativo, se revaloró el capital étnico (la identidad indígena o plebeya), lo que *invertió la jerarquía racial ancestral*. Esta es la acción simbólica que tanto blancos

4 Que, además, como dice Loayza (2018: 29), hizo de esta identidad la fuente de legitimidad de su poder.

5 Después de 1952, los blancos mantuvieron el “derecho de mando” político por su monopolio de la educación elitista o de alta calidad, considerada imprescindible para gobernar. El MAS no tocó este monopolio, pero sabotó la relación “educación elitista-gobierno” que estaba en la base del privilegio político blanco.

como indianistas críticos consideraron prueba del racismo “al revés” atribuido al llamado “proceso de cambio”.

Estos indianistas criticaron que el MAS se concentrara en la tarea de aumentar la dotación de capital simbólico de los indígenas y los cholos, mediante la revaloración oficial de su historia, su cultura y sus logros en el proceso de emancipación social. Llamaron despectivamente “pachamamismo” a esta estrategia, y la contrapusieron a la adopción de medidas de índole estructural que dieran a los indígenas agencia económica y política (por ejemplo, Macusaya, 2020: *passim*). Sin embargo, a despecho de estas opiniones, las operaciones simbólicas referidas tuvieron efectos sobre la realidad: despertaron fuerzas y voces que habían estado dormidas *en ambos lados* del antagonismo racial. Al mismo tiempo, pusieron de relieve cuestiones que tradicionalmente los blancos no habían querido develar, como ya sabemos: su existencia como grupo racial y su racismo. No es casual que Olmos respondiera a ambos cuestionamientos simultáneamente. Lo hizo, recordemos, reivindicando irónicamente ambas características: “Sí, soy racista [¿y qué?]” y “tengo el culito blanco [¿y qué?]”.

La rabia de estatus en contra del MAS se comprende perfectamente. Tanto la *designación* como la crítica a su racismo impedían a los blancos “vivir en paz”, esto es, en una sociedad donde los privilegios raciales fueran subyacentes y sobreentendidos, y no estuvieran constantemente sobre el tapete y cuestionados.

Designar a los indígenas ha sido lo ordinario en el discurso político e intelectual boliviano: políticos, sociólogos y antropólogos casi no han hecho otra cosa. En cambio, designar al blanco y designarlo como racista (como *q'ara*) resultaba inédito y ofendió profundamente a quienes se sintieron aludidos. Lo consideraron un acto

de discriminación en su contra, es decir, una vez más, un acto de “racismo al revés”.

Pero el gobierno del MAS no se limitó a revelar lo que no debía ser descubierto en el plano público —uno de los polos de la disonancia cognitiva de los blancos bolivianos—, también trató de intervenir en el otro polo de esta disonancia, en el de las relaciones cotidianas, donde el problema no era la “desaparición” de los blancos, sino su afirmación racista sobre los demás. Lo intentó con su política de “descolonización y lucha contra el racismo”, que no fue tan efectiva como podía haber sido —porque nunca pasó de ser una política secundaria y por su politización—, pero bastó para detener o empujar a la clandestinidad ciertas tácticas cotidianas de discriminación (por ejemplo, ciertos “derechos de admisión”).

Por supuesto, la mera posibilidad de que algunos blancos pudieran ser sancionados por racismo fue interpretada por este estatus como racista y autoritaria. Aunque esta posibilidad rara vez se realizó en la práctica, resultaba de todas formas tremendamente ofensiva. Así lo mostró el reciente pronunciamiento de la presidenta Jeanine Áñez sobre el proceso judicial más importante que se haya incoado nunca contra el racismo, en el que se condenó a penas de seis años a varias personas que vejaron a campesinos en la plaza principal de Sucre el 24 de mayo de 2008, mientras se producía un enfrentamiento entre los vecinos blancos de esta ciudad y el gobierno de Morales. Áñez dijo que la sanción establecida en este caso fue “infundada” y que el juicio estuvo basado en una “tergiversación de los hechos que tenía como objetivo alentar una falsa división, un enfrentamiento entre todos los bolivianos; esa ha sido una práctica recurrente en los gobernantes que se fueron” (Ariñez, 2020).

Por otra parte, el gobierno de Morales no aplicó una nueva reforma agraria ni quitó tierra a los hacendados blancos, pero, en cambio, tituló una gran cantidad de “tierras pobres”, tanto individuales como comunitarias, a nombre de los indígenas de todas partes del país. Favoreció la “colonización” de las tierras bajas por indígenas de las tierras altas, lo que generó diversos tipos de conflicto: con los indígenas originarios de estas zonas, pero también con los blancos.

Gracias a la bonanza económica de la década 2005-2015, que generó múltiples oportunidades de negocios y revalorizó el salario de los trabajadores manuales, y gracias a las políticas sociales y de construcción de infraestructura ejecutadas por Morales, se produjo una significativa redistribución económica en beneficio de sectores poblacionales indígenas y cholos.

¿Qué perdieron, entonces, los blancos con el “proceso de cambio”?:

Espacio laboral: los cargos del Estado eran los únicos que, requiriendo una alta calificación, no estaban ocupados solamente por blancos.

Influencia política: la élite política dejó de estar compuesta por *jailones* que formaban parte de una misma red social.

Desvaloración del capital biológico como medio de percepción de rentas: la posesión de capital biológico dejó de garantizar, como hasta entonces había hecho, el acceso a cargos públicos y, por tanto, perdió su capacidad de generar rentas (es decir, ingresos basados en la posición social antes que en la capacidad productiva). Esta es una pérdida dolorosa en una sociedad rentista y “empleo-público-maniaca” como la boliviana.

Capacidad de reproducción del privilegio: las estrategias de *superiorización* de los blancos y de *inferiorización* de los no blancos en la vida cotidiana resultaron obstaculizadas por las políticas gubernamentales, pero sobre todo por la propia acción de

los indígenas y los cholos, que vieron sus capitales económicos, simbólicos y políticos acrecentarse.

Esto significa que los blancos y, sobre todo, dentro de ese grupo, los *jailones*, fueron los “grandes perdedores” del “proceso de cambio”. Esta situación de derrota generó el aborrecimiento a la élite política masista y sus características que es la causa irracional que buscábamos para explicar la actitud visceralmente antioficialista que mostraron algunos desde el mismo día de la posesión de Morales como presidente, si no antes, y que se extendió como un reguero de pólvora luego del 21F, aprovechando el creciente desprestigio del gobierno del MAS entre sus bases y sus principales aliados populares.

Al final, toda esta rabia estalló en una rebelión de la facción blanca contra un hecho que la existencia, el discurso y el tipo de personal del gobierno del MAS le recordaban contantemente: que era una parte privilegiada de la sociedad y que los privilegios que había heredado estaban asociados a la opresión y, por tanto, a la culpa. En contra de esta representación, sus miembros se reivindicaron como bolivianos, embanderándose con la tricolor y enorgulleciéndose de su idiosincrasia: su fe católica, sus formas de vida y de socialización, inclusive el hacer “bloqueos con pitas” y poniendo lavadoras y mecedoras viejas en el centro de las calzadas.

De este modo, los blancos actuaron como una identidad racial discriminada que exigía que se le devolviera un espacio perdido, pero, a la vez, según es consustancial a ellos, se proyectaron como una identidad *universal*, la única que no equivalía a “etnia” sino a “personas”, y que, en el mismo momento de su victoria, “desaparecía” del espacio público. (Para ello debía hacer concesiones, como la aceptación de la wiphala como bandera nacional; o desplegar

astucias, como la de considerar el combate al racismo —Áñez *dixit*— “una falsa división” de la nacionalidad). Fueron “los bolivianos”, fueron “la gente” para, simultáneamente, afirmarse subrepticamente como blancos.

Hoy el poder está nuevamente, en teoría, en manos de “la gente”, de “los bolivianos”, y, en la práctica, en manos de una red *jailona* de relaciones, que se legitima por sus títulos académicos y que actúa violenta e implacablemente para sentar ejemplo y disciplinar, de una y definitiva vez, a los “salvajes” (cf. Tórrez, 2020).

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- Arguedas, Alcides (1995) *Pueblo enfermo*. La Paz: Juventud.
- Ariñez, Rubén (2020) “Defensora cuestiona afirmaciones de Áñez sobre el retorno de ‘salvajes’ y el ‘caso racismo’”. En: *La Razón* “Nacional”, 7 de enero. Disponible en: www.la-razon.com/nacional/Polemica-Defensora_del_Pueblo-Jeanine_Anez-salvajes-caso_racismo-Sucre-Bolivia_0_3290070979.html (fecha de la consulta: 10 de enero de 2020).
- Diangelo, Robin (2018) *White Fragility*. Boston: Beacon Press.
- García Linera, Álvaro (2019) “El odio al indio”. En: *Nodal. Noticias de América Latina y el Caribe*. Disponible en: www.nodal.am/2019/11/el-odio-al-indio-por-alvaro-garcia-linera (fecha de la consulta: 8 de enero de 2020).
- Irurozqui, Marta (2019) “A bala, piedra y palo”. *La construcción de la ciudadanía política en Bolivia, 1826-1952*. La Paz: Biblioteca del Bicentenario de Bolivia.
- Loayza, Rafael (2018) “Los rostros, los lastres y la razón del racismo habitual. Tensiones raciales en la interacción pública rutinaria en La Paz”. En Rafael Loayza (coord.),

Las caras y las taras del racismo: segregación y discriminación en Bolivia. La Paz: Plural. 25-106.

Macusaya, Carlos (2020) "Racismo, un rasgo de la sociedad boliviana". *Wiphala, crisis y memoria. Senkata, no te merecen*. La Paz. Jichha.

Molina, Fernando (2017) "La oposición 'jailona' al gobierno del MAS". En *La Migraña* 21 (primer semestre). La Paz, pp. 120-127.

(2019a) *Modos del privilegio: Alta burguesía y alta gerencia en la Bolivia contemporánea*. La Paz: Centro de Investigaciones Sociales (CIS).

(2019b) "Racismo y reacción". En *La Razón "Opinión"*, 26 de diciembre. Disponible en: www.la-razon.com/opinion/columnistas/racismo-molina-fernando-opinion-larazon_0_3282871688.html (fecha de la consulta: 8 de enero de 2020).

Molina, Fernando; Manetto, Francesco; Lafuente, Javier (2019) "Bolivia, partida en dos". En *El País "Internacionales"*, 17 de noviembre. Disponible en: elpais.com/internacional/2019/11/17/america/1573946084_680683.html (fecha de la consulta: 8 de enero de 2020).

Moreno, Gabriel-René (1989) "Nicomedes Antelo". En Gabriel-René Moreno, *Bolivia y Argentina. Notas biográficas y bibliográficas*. La Paz: Biblioteca Boliviana. 97-150.

Tórrez, Yuri (2020) "De salvajes e imaginarios coloniales". En: *La Razón "Opinión"*, 6 de enero. Disponible en: la-razon.com/opinion/columnistas/salvajes-imaginarios-coloniales_0_3289471097.html (fecha de la consulta: 10 de enero de 2020).

Estrategias discursivas de lo
femenino en política:
Una *supermadre* en el poder

Lourdes Montero

*Según Maquiavelo, para gobernar sólo es necesario
conocer la imagen que el vulgo espera de su
gobernante y, simplemente, ofrecérsela.*

D'Adamo y Freidenberg

*Medios de Comunicación, efectos políticos
y opinión pública, 2000*

Cuando Jeanine Áñez entró a Palacio Quemado cargando en sus manos una enorme Biblia, parecía la heroína en el dramático final de una serie escrita para Netflix. Visiblemente nerviosa, la senadora beniana pidió un poco de agua antes de sostener: “Esto es por Bolivia, queremos la pacificación del país”. Tan solo unas horas antes había salido de la clandestinidad donde la policía la tenía resguardada. El bloque cívico-militar-policial, que había provocado la renuncia del presidente Evo Morales, la necesitaba como sucesora para acercarse lo más posible a las formas constitucionales. En sus primeras palabras frente al país como presidenta proclamada, rompió en llanto al exclamar: “Muy difícil ha sido ver a Bolivia con maltratados del bando que sea, no podemos estar maltratándonos, yo les pido por el

amor de Dios que cese la violencia". Se inaugura así un estilo político que Ñez trae al escenario boliviano y que se muestra muy efectivo en un contexto de incertidumbre y miedo a una posible la catástrofe provocada por la partida de Evo Morales.

Cuarenta días después, la mandataria logra que las encuestas la coloquen en segundo lugar de preferencia electoral, a pesar de ser una figura política menor tan solo unos meses antes. "Paz, reconciliación y desinterés" podría ser el título del relato político que desde un inicio adopta la presidenta transitoria. Y frente a la turbulencia que se vivía en las ciudades y el desprestigio de los políticos tradicionales, este mensaje fue bienvenido por sus seguidores. El presente artículo busca explorar la estrategia discursiva de Jeanine Ñez para plantearnos que, en sociedades patriarcales como la boliviana, ser mujer en tiempos de crisis no necesariamente es perjudicial, sino más bien puede constituirse en una ventaja comparativa, aportando formas y mensajes que se conectan con la población. Asimismo, muestra cómo las mujeres en el poder buscan, con estrategias camaleónicas, adaptarse para ingresar al campo político, manteniendo al mismo tiempo fidelidad a los mandatos de su género.

Así, buscamos indagar las siguientes cuestiones: ¿Cómo consigue la mandataria transitoria este rápido ascenso de popularidad? ¿Qué recursos simbólicos predominan en la opinión pública para que surja la corriente de #Jeaninelovers? Una primera hipótesis es que, como las mujeres y los indígenas son sujetos que personifican la subordinación y la exclusión irresuelta en Bolivia, puede ser muy útil en la estrategia discursiva la sustitución de un presidente de rostro indígena por una mujer,

para contrarrestar el sentimiento de “orfandad” de los sectores populares.

EL ORIGEN CIRCUNSTANCIAL DE JEANINE

La presidenta transitoria no se cansa de repetir que jamás imaginó llegar a desempeñar el cargo de primera mandataria. En su larga carrera política, nunca estuvo bajo los reflectores de la popularidad y pocas personas la conocían más allá de su región y su organización política. De hecho, Jeanine Áñez parte de muy abajo ya que solo un par de meses antes, su partido tuvo un pésimo desempeño electoral: el Movimiento Demócrata Social (MDS) logra en las elecciones presidenciales de octubre el 4% de votos a nivel nacional, situándose en el cuarto lugar en la preferencia electoral. En esa contienda, la actual presidenta transitoria ni siquiera había sido considerada en las listas de candidatos y candidatas. Actualmente, para sorpresa de algunos, cerca del 16% de los bolivianos y bolivianas quisieran ver a Áñez como presidenta, cuadruplicando el apoyo popular que obtuvo Óscar Ortiz, el candidato de su partido. Quizás con ese cálculo anunció finalmente lo que se venía insinuando en los pasillos de Palacio: su candidatura a la presidencia en las elecciones de mayo de 2020, pese a que había negado de manera terminante esta posibilidad.

¿Será esto el inicio en Bolivia del siglo de las mujeres?¹ En el mundo, algunas optimistas sostienen

1 Varias teóricas feministas son optimistas con el siglo XXI, sobre todo por el incremento de la influencia de las mujeres en la economía y la política. Ver, por ejemplo, varios artículos sobre el tema en “El siglo de las mujeres”, *Vanguardia Dossier* n.º 73, *La Vanguardia*, julio/septiembre, 2019.

que la revolución feminista iniciada en el siglo XX está cosechando frutos en el siglo XXI. Por primera vez, en tiempos casi simultáneos, 67 mujeres en el mundo han llegado a los más altos niveles de poder político (jefas de Estado o de gobierno de este siglo) y los dirigentes de 193 países se comprometieron a acabar con la desigualdad de género para el 2030.² Es indudable que el establecimiento de cuotas aumentó el número de parlamentarias en todo el mundo y este avance global no se hubiera alcanzado sin que varias generaciones de mujeres establecieran una sólida plataforma de género y redes de interconexión insospechadas para otros movimientos sociales. En América Latina también se vive un tiempo de oportunidades para las mujeres: en los últimos 40 años hemos elegido a diez mujeres como presidentas.

Bolivia es parte de esa creciente presencia de mujeres en el centro del poder formal. Primero, con la sanción de la Ley 1779 (1997) que implicó la incorporación de cuotas de género para la elaboración de las listas partidarias, nos acostumbramos a ver algunas mujeres en los espacios de poder. Actualmente, con la aplicación de la Ley 026 del Régimen Electoral, que establece la paridad y alternancia para todos los cargos electivos, vemos cómo en poco tiempo los partidos políticos tienen que gestionar, a veces contra sus propias barreras machistas, una “marea de mujeres” compitiendo por espacios de poder.

Llevamos ya dos décadas de presencia de mujeres en la arena política, en especial en cargos de representación, y Áñez reconoce que ella misma es resultado de este proceso:

2 En septiembre de 2015, en la 70 Asamblea General de las Naciones Unidas, los países miembros se comprometieron a conseguir 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Esto incluye acabar con la desigualdad de género hasta 2030.

“Soy una política por accidente”,³ sostiene, agregando que su incursión en la política es fruto de la obligatoriedad de la Ley 026 de incorporar mujeres en las listas electorales.

Sin embargo, a pesar del avance, el incremento del acoso y la violencia ha llevado a que seamos el primer país del mundo que cuenta con una ley específica contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres. La propia presidenta interina habla desde su experiencia al afirmar: “Si bien es cierto que tenemos la necesidad (por ley) y se visibilizan las mujeres, (...) nosotras tenemos que pagar factura, tenemos que demostrar que sí pensamos, que sí aportamos y aun así muchas veces los escenarios de decisión son conformados por hombres y nosotros tenemos que obedecer (...), estorbamos, esa es la palabra, estorbamos”.⁴

Sabemos, sin embargo, que con cada ola feminista existe una respuesta patriarcal contundente. En Bolivia, justamente el año en que el feminicidio contra las mujeres supera todas las estadísticas,⁵ los tres órganos centrales del Estado boliviano (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) están liderados por mujeres. El caso que nos ocupa permite preguntarnos: ¿Qué circunstancias provocan que ser mujer funcione como una ventaja comparativa en el campo político? ¿Se puede utilizar la presencia de las mujeres para “lavar la cara de la política”?

3 Entrevista en el programa televisivo “No Mentiras”, Red PAT, diciembre, 2019. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=-H_4I37Zwi4

4 Entrevista en Bolivia TV, s. f. Disponible en:
<https://www.youtube.com/watch?v=djFRAJqoRqw>

5 El 8 de enero de 2020, el Fiscal General del Estado expresó su preocupación por la “escalada de violencia” de crímenes de género, revelando que en Bolivia cada día se denuncia un feminicidio, 25 violaciones y 98 golpizas a mujeres. *La Razón*, p. 8, 9 de enero de 2020.

¿Puede una mujer en el poder, representando una figura tradicional, aportar a una mayor profundización de los estereotipos tradicionales de género? Veamos.

EL VALOR DE UN BUEN RELATO (O CÓMO GANAR EL CORAZÓN DEL PUEBLO)

La construcción de la credibilidad en política es un proceso esencialmente discursivo. Un gobernante concentra mucho de su esfuerzo en lo que dice, cómo lo dice y dónde lo dice, puesto que necesita ser el portavoz legítimo de la verdad socialmente aceptada. La credibilidad se nutre de las palabras y las formas para comunicar un mensaje; y si logra transmitir imágenes, que nos son naturales y cercanas, pueden obtenerse discursos muy eficaces para lograr el codiciado deseo de conectarse con la gente.

Por ejemplo, cuenta la leyenda que, cuando en 2001 cayeron las Torres Gemelas, una de las primeras reuniones que George W. Bush organizó fue con los guionistas de *Jungla de cristal* (*Die Hard*) y de *El coloso en llamas* (*The Towering Inferno*). ¿El motivo? Encontrar un argumento que contrarrestara el terror que vivían los neoyorkinos. Había que escribir el guion de la segunda parte de la película que se estaba viviendo. Las imágenes posteriores del presidente en *jeans*, botas y chaqueta de cuero sobre las ruinas, los carteles de “Se busca vivo o muerto” colgados por toda la ciudad con la foto de Osama Bin Laden, el discurso apelando a un país de valientes hechos a sí mismos, las noticias repletas de historias de osados enfrentamientos de pasajeros con terroristas, los relatos de bomberos, policías y ciudadanos anónimos salvando vidas de las víctimas de los atentados, eran parte central de la construcción del arquetipo de héroe-guerrero que

adoptaría Bush para ganar apoyo en un momento tan difícil (cf. Farran, 2016).

Vayamos al primer episodio de una serie en dos actos en torno a la presencia de mujeres en la política.

El 23 de noviembre del 2019 se promulgó la ley para convocar a nuevas elecciones generales. El acto se desarrolló en Palacio Quemado con la presencia, por primera vez en un mismo escenario, de la presidenta interina Jeanine Áñez y de la presidenta del Senado, Eva Copa. Esta ley expresaba el consenso para lograr la pacificación en las calles al encaminar el proceso electoral. Al momento de la firma, la tensión era evidente. Desde que Áñez asumiera el poder, la represión de las fuerzas del orden habían cobrado más de 30 muertos y 253 heridos. Por eso, esa mañana de domingo, el país observaba conteniendo el aliento: dos mujeres ideológicamente enfrentadas prometían ser el símbolo de una posible reconciliación nacional.

El contenido del documento era crucial: dejaba sin efecto legal los comicios del 20 de octubre en los que Morales fue reelecto; establecía la renovación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de los nueve Tribunales Electorales Departamentales, y garantizaba la participación en las próximas elecciones de todas las fuerzas políticas, pero impidiendo que el anterior binomio del MAS pueda candidatear.

De pie frente a las cámaras, ambas sostienen la ley. Una, sonriendo, viste camisa blanca; la otra, inexpresiva, de luto riguroso. Una estaba cómoda frente a las cámaras, disfrutando la atención mediática; la otra, más bien inquieta, dudando de su rol en ese espacio. Ambas con cabellos largos evidenciando su feminidad; una rubia, la otra morena. En ese momento de incertidumbre

y extrañamiento, el prestigio político de ambas mujeres se basaba, al menos para un sector de la población, en que representaban la continuidad de la vida en ausencia de Evo Morales. Ironía de la historia: dos mujeres sustituyen en el poder a quien promulgó la Constitución Política y la ley que hicieron posible la paridad de género.

Así se inaugura la narrativa de un nuevo ciclo de las mujeres en la política. Son luchadoras, pero pacifistas. Son firmes, pero negociadoras. Son seguras, pero cálidas. Áñez y Copa son efectivas en la escena política porque, ante la pérdida de la protección del patriarca, se contraponen el amparo del arquetipo de la madre.⁶ Áñez con más recursos narrativos y Copa aportando su impronta indígena, construyen el despliegue de un discurso que pone la feminidad como centro de la “buena” política.

La segunda hipótesis de trabajo del presente ensayo es que la efectividad de Áñez en el contexto actual no se debe solamente a que sea mujer, sino sobre todo a su intencionalidad de asumir la figura de *supermadre*, un arquetipo recurrente en la política latinoamericana. Su despliegue discursivo tiene efecto porque se opone, en forma y fondo, al del expresidente depuesto Evo Morales, lo que acrecienta la idea de un cambio de régimen político. La comunicación política sostiene que, si un gobernante no tiene el poder de cautivar, su gobierno enfrentará serias dificultades. Ya Maquiavelo previno que, para gobernar,

6 El arquetipo proviene del psicoanálisis como un concepto propuesto por Carl Gustav Jung para referirse a una serie de imágenes inconscientes heredadas de nuestros ancestros, construidas socialmente de manera colectiva y que dan forma a nuestra manera de percibir e interpretar las experiencias que nos ocurren como individuos. De alguna manera, para Jung los arquetipos se acumulan en el fondo de nuestro inconsciente colectivo para formar un molde que le da significado a lo que nos pasa (cf. Bozal: 95-100).

“no es preciso que un príncipe posea todas las virtudes, pero es indispensable que aparente poseerlas”.

El uso instrumental de la maternidad en política no es nada nuevo en América Latina y diversos estudios han profundizado en su desempeño discursivo. En el clásico trabajo de Chaney (1992: 260), la autora plantea que las mujeres, para poder ingresar a la esfera política, debieron centrarse en elaborar una imagen de sí mismas que enfatizara en los aspectos positivos de los ideales estereotipados de género. A partir de este planteamiento, la autora elaboró la categoría de *supermadre* para nombrar las acciones de las mujeres ante un campo político adverso. Según la autora, “las mujeres han debido legitimar su papel como el de una madre de una ‘casa’ más vasta como puede ser la de una municipalidad o incluso la nación, como una especie de *supermadre*” (*ibid.*: 14). Investigaciones más recientes, como la realizada por Franceschet, Piscopo y Thomas (2016), sostienen la transformación de esta estrategia. Su tesis central es que, si bien la representación que las mujeres en política hacen de sí mismas todavía se encuentra influenciada por las narrativas de la diferencia de los géneros, estos se pueden articular en distintos marcos estratégicos: la figura tradicional de la madre, que es aquella que presenta la maternidad como el aspecto central de su identidad política y sus preocupaciones; la figura de la cuidadora tecnocrática, que enfatiza en sus credenciales profesionales sobre su rol materno ligando su experticia en los asuntos sociales; hasta la figura que niega la existencia de diferencias de género en las oportunidades y en el actuar de hombres y mujeres en la política.

En un estudio reciente de Valenzuela (2019) sobre la figura de la madre en los casos de las presidentas latinoamericanas Michelle Bachelet (Chile), Cristina Fernández

(Argentina) y Dilma Rousseff (Brasil), se plantea que la imagen de la madre como una figura del accionar político continúa teniendo un espacio relevante en los imaginarios nacionales. Sin embargo, la presentación de sí desde la dimensión de lo materno refleja una puesta en escena estratégica en la que ellas mismas determinan esta figura que les permite distinguirse del desgaste de los liderazgos masculinos.

Áñez articula su relato de la *supermadre* como un medio para legitimar su accionar en el espacio político, fundamentando sus atributos y cualidades asociados al hecho de ser mujer/madre. Podemos sostener que construye su figura de liderazgo político femenino en un ambiente dominado por el miedo y en permanente contraposición a dos sujetos antagónicos: los liderazgos masculinos belicosos (representados por el arquetipo de guerreros) y a otras mujeres que se alejan de las cualidades innatas de la buena feminidad (representadas con el arquetipo de las brujas). Toda su historia se desarrolla en torno a la metáfora de “la guerra justa”, con todos los elementos para establecer la confrontación entre el bien (guiado por Dios) y el mal (liderado por un “ateo satánico”).

En Bolivia, desde la narrativa de los defensores de la democracia y la libertad, no todas las mujeres que participan en política son respetables y adorables. Para algunos, las mujeres son las mejores víctimas de la venganza política. Ahí surge el arquetipo de la bruja.

Veamos el segundo episodio en torno a la presencia de las mujeres en la política boliviana.

Como en una escena medieval, la tarde del 6 de noviembre, integrantes del grupo “Resistencia Cochala” (motoqueros) tomaron por asalto y quemaron la Alcaldía de Vinto. Momentos antes se corrió

el rumor de que los funcionarios municipales, presuntamente enviados por la alcaldesa del MAS para levantar el bloqueo, habían asesinado a una persona. Una multitud, comandada por los denominados motoqueros, se dirigió a Vinto, de cuyo edificio municipal sacaron a la alcaldesa, Patricia Arce Guzmán, y, descalza, la arrastraron durante cinco kilómetros hasta el puente Huayculi. En el trayecto, los asaltantes, con los rostros cubiertos por pañuelos y máscaras, impedían que se registraran imágenes disparando petardos contra las ventanas desde las cuales algunos vecinos intentaban filmar.

Una vez en Huayculi y con gritos de “¡Asesina, asesina!”, los manifestantes hicieron arrodillar a la alcaldesa, le cortaron el pelo, la cubrieron de pintura roja simulando su sangre y la obligaron a firmar su renuncia en una improvisada hoja de papel. La alcaldesa apenas levantaba la voz para jurar que ella no había pagado a nadie para desbloquear y pedía que prueben las acusaciones. En un momento, frente a las cámaras de televisión, desafiante, Arce gritó a la multitud estar dispuesta a dar su vida por el proceso de cambio. La gente le encaraba: “Si va a dar su vida, mátenla”. Otro grupo contenía a la multitud sosteniendo que ellos no eran asesinos. Tras una hora de tensión, los líderes de la captura entregaron a la alcaldesa a la policía, quien fue evacuada a bordo de una motocicleta de la patrulla. Todo el acto fue observado por una treintena de policías que resguardaban el puente y que optaron por no intervenir.

Quienes vimos las imágenes televisadas de la vejación, creímos presenciar la tortura de una bruja en la lejana aldea de Salem. Si la Alcaldía de Vinto hubiera estado liderada por un hombre, los hechos seguramente hubieran

tomado otro rumbo; y no habrían sucedido si la autoridad municipal no hubiera sido militante del MAS.

El arquetipo de la bruja está relacionado con la “mala feminidad”. Durante el siglo caracterizado por la cacería de brujas, cualquier mujer que tuviera un comportamiento que molestara podía ser tachada de “bruja”. La historia nos cuenta que, bajo el concepto de brujería, se ha perseguido a las mujeres que escapan del control masculino, lo que se percibe como una amenaza social.

El contexto de nuestro relato es indudablemente el miedo. La población boliviana, especialmente en ciudades capitales, ha vivido en los sucesos posteriores al 20 de octubre de 2019 un miedo profundo provocado por un proceso de ansiedad que nos tenía al borde de un trastorno mental colectivo. En Bolivia, sentíamos “un miedo líquido, difuso”, en expresión de Zygmunt Bauman (2016), debido a nuestros temores y pesadillas sobre el “otro” —el indígena— que tienen profundas raíces y han sido siempre un arma política de primer orden.

El miedo fue la estrategia central en esta crisis y sospecho que, detrás de todo, tuvimos asustadores profesionales que nos llegaron a amedrentar hasta la parálisis, infundiendo un temor abstracto de los unos contra los otros: los blancos contra los indios; las áreas urbanas defendiéndose de las “hordas” de campesinos, los vecinos contra los choferes, los demócratas contra los masistas, los pobres contra los ricos. Como sostiene José Fouce en *El miedo como arma política* (2016), “paralizados por nuestras pesadillas, damos por bueno lo que en otras circunstancias nos resultaría inaceptable”. Claro que no fue solo miedo: también hubo dos masacres (como calificó la CIDH los sucesos ocurridos en Sacaba y Senkata) contra los “terroristas”.

Sobre todo los días posteriores a la renuncia de Evo Morales, se vivió un miedo amplificado por los medios de comunicación y las redes sociales que agrandaron las narrativas del peligro; algo que solo puede ser entendido en sociedades de violencia cotidiana como la boliviana. Salimos a las calles, armamos barricadas, confeccionamos uniformes de guerra con cascos deportivos y escudos caseros de turriles partidos por la mitad. El miedo es siempre así, no se somete al discurso de la lógica.

LA SUPERMADRE EN ACCIÓN

Durante sus primeros días de gobierno, la presidenta interina ocupó gran parte de su tiempo dándose a conocer al país, sobre todo a través de entrevistas televisadas. Aprovechamos este hecho para comprender su estilo de liderazgo.

Áñez articula su relato de la *supermadre* como un medio para legitimar su accionar en el espacio político, fundamentando sus atributos y cualidades asociados al hecho de ser mujer/madre. Áñez busca ganar el apoyo y la empatía de la ciudadanía desde la dimensión maternal para contraponerse a la alta base de apoyo popular de su antecesor, Evo Morales. Bajo la figura de una madre tradicional, sacrificada e interesada sobretodo en el bienestar de sus hijos, Áñez busca legitimar su posición de autoridad en un clima de marcada incertidumbre.

La referencia de sí misma como madre es continua, sobre todo en las entrevistas personales de la primera etapa. Actualmente, en sus intervenciones públicas prefiere dar lectura a textos preparados, lo que le ha restado ese carácter espontáneo que le daba mayor capacidad de conexión con la población.

Para el análisis hemos ordenado la descripción de su relato en cuatro categorías recurrentes que nos permiten comprender con mayor detalle la apropiación concreta que hace del arquetipo de *supermadre*. Según el contexto o la necesidad nativa, Áñez recurre a: la madre mariana, la madre con superioridad moral, la madre protectora y la madre desinteresada. Veamos en detalle cada una de estas categorías.

Madre mariana

Sus intervenciones permanentemente hacen referencia a sus lazos familiares para recordarnos que se trata de una madre dedicada, una hermana cariñosa y una hija amorosa; esto es, una mujer de familia y de Dios. Ha evitado mencionar su relación de pareja y, ante la insistencia de la prensa sobre el amor, cerró el tema diciendo: “Yo estoy enamorada del país, estoy abocada al trabajo, ya habrá tiempo después para eso”,⁷ lo que contribuye a fortalecer su imagen relacionada al mito *mariano* (el expresidente Morales, soltero, solía responder con palabras similares: “Estoy casado con la Patria”). Esta noción está inspirada en la Virgen María y se trata de un relato sobre la madre que busca solamente el bien de los hijos, destacando abnegación, sacrificio y desinterés como valores ideales que toda mujer debe aspirar (Chaney, 1992). Esto puede ser interpretado como una actitud extendida hacia la ciudadanía y sobre todo a las clases populares.

“Mis hijos son mi vida entera, ellos viven conmigo, ellos siempre están consultándome todo, siempre están

7 Entrevista en Bolivia TV, s. f. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=djFRAJqoRqw>

conmigo.”⁸ El *marianismo* condensa una identidad hegemónica del género femenino. Contiene en sí mismo una contradicción pues se basa en una figura que al mismo tiempo es virgen y madre, es decir, es simultáneamente un culto a la castidad y a la maternidad. La religión resuelve esta contradicción con la capacidad de María de “concebir sin pecado”. Así, en este relato, la familia se convierte en el centro de la vida de la madre:

La familia para mi es todo, es la fortaleza, el hecho de aspirar a ser mejor, el hecho de ser el ejemplo para mis hijos, de darles buenos consejos y tratar de que ellos sean seres humanos de bien, (...) creo que la familia es lo más importante en la vida de uno.⁹

La imagen de Áñez como *madre mariana* se complementa por su marcada religiosidad. Esto permite que asuma su rol en el marco de una “guerra justa” contra el supuesto ateísmo de su antecesor. Así, Áñez llegó a manifestar: “Soy presidente porque así lo dispuso Dios”. Cuando un periodista le consultó sobre el acto de llevar una enorme Biblia a Palacio Quemado el día de su posesión, la presidenta reaccionó así:

Fue una manifestación de fe. Cuando Evo Morales entro a gobernar, él es un hombre ateo, entonces no quería todo lo relacionado con las iglesias y con la fe, y nosotros somos unas mujeres de fe, los bolivianos somos personas de fe, y para nosotros era de mucho significado que en el palacio esté la Biblia como una manifestación de reconciliación (...).

—[Pregunta del periodista]: Pero Bolivia es un Estado laico...

8 Entrevista televisiva en el programa “Que no me pierda”, Red Uno, 13 de diciembre de 2019. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=F16IFBYhQXk>

9 Entrevista en TV Universitaria, 2 de enero de 2020. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=N5SRkFe1URM>

Eso fue una impostura del Movimiento al Socialismo, hay que tener en cuenta que ellos abusaron durante todo este tiempo de imponer a los bolivianos porque tenían los votos en el Parlamento, pero acá en el país somos el 80% personas de fe, pero en el Parlamento lo que cuentan son los votos.¹⁰

Áñez es una activista de las Plataformas por la Vida¹¹ y pertenece a una iglesia evangélica, lo que ha generado que en el corto tiempo de su mandato se generen símbolos e iconos que apelan a la relación de mujer-madre como mensajes estatales. Su religiosidad es una invocación de la fuerza de Dios sobre su destino y esto genera un halo de misticismo en relación a su presencia en el gobierno, lo que justifica la buena fe de todas sus acciones:

Yo soy una mujer de fe, me aferro mucho a la oración, si me toca llevar adelante este momento y semejante responsabilidad, pues Él me tiene que guiar (...), entonces yo iba conduciéndome en la medida en que decía: bueno se está dando y será porque Él lo quiere.¹²

A partir de las connotaciones del *marianismo* sobre instituciones como la sexualidad, la maternidad y la familia, el estatus de las mujeres latinoamericanas se establece a partir del concepto de “la decencia”. Así, las mujeres se dividen en “decentes” e “indecentes”; las

10 Entrevista en BBC Mundo, 15 de noviembre de 2019. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=aI0x5b8nOcc>

11 En su web oficial, la página oficial de la campaña “Con mis hijos no te metas” celebra el nombramiento de la mandataria con el siguiente mensaje: “Misión cumplida. Jeanine Áñez, quien participó como panelista en el Congreso Iberoamericano de la Vida y la Familia este año en Panamá, cónclave pro vida y pro familia, ha sido elegida como nueva presidenta de Bolivia”.

12 Entrevista televisiva en el programa “Que no me pierda”, Red Uno, 13 de diciembre de 2019. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=F16IFBYhQXk>

primeras se acercan al ideal mariano, las segundas constituyen su negación (Arteaga, 1996). Esta representación de Áñez como madre mariana intenta ser socavada con el estereotipo hipersexualizado de las mujeres del Oriente del país. Muchos de los ataques que sufre, sobre todo en redes sociales, refieren a aspectos de su vida sexual. El cuerpo de las mujeres y el ataque en torno a su sexualidad es una forma de ofensiva muy común en la arena política como reacción de la sociedad patriarcal, que trata de disciplinar a las mujeres políticas en el modelo tradicional dependiente del hombre a través del mensaje: “La mujer sólo tiene valor si es sexualmente deseable”.

Superioridad moral de la madre

La mandataria hace uso instrumental de la maternidad para apelar a una diferenciación de las naturalezas femenina y masculina, y afirmar la posesión de valores intrínsecos a su biología. Se trata de la concepción de una imagen de fortaleza de lo femenino desde el papel de madre como una voz moral:

El hecho de ser madres nos hace más humanas, no pensamos solamente en nosotras, pensamos en nuestros hijos (...). El hecho de tener en nuestro vientre a esa cosita que queremos desde que sabemos que la tenemos adentro nos hace mucho más humanas y nos hace perdonar, nos hace ser más reflexivas y nosotras siempre buscamos el camino del bien, somos desprendidas y todas esas cosas nos hacen como que la gente crea que estamos actuando de buena fe.¹³

13 Entrevista en TV Universitaria, 2 de enero de 2020. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=N5SRkFe1URM>

El argumento de la diferencia innata de los sexos instala la idea de una naturaleza diferente y complementaria entre hombres y mujeres, reflejada en el orden familiar. Y la familia es pensada como modelo de comunidad política en directa relación al Estado. El orden binario de los sexos reserva para las mujeres el rol de “pilar moral de la familia”:

Así como nos ven seres humanos débiles, demostramos ser seres humanos fuertes, en los momentos más difíciles sacamos fuerza de donde no sabemos porque creo que el hecho de ser madres nos da mucha fuerza.¹⁴

Con la modernidad, este sentido de madre moral ha ido cambiando en cierta forma, pero no en esencia. En una reciente investigación sobre el liderazgo de Michelle Bachelet, Mariana Valenzuela (2019) sostiene que esa “superioridad moral” es encarnada por el modelo nacional de “mujer moderna”: madre-esposa, económicamente independiente, protectora de la vida, sostén afectivo y moral de la familia y orgullosa de su diferencia de género. Es esta mujer la que representa un liderazgo diferente, con cualidades “específicamente femeninas” que vendrían a humanizar, renovar y limpiar la política. Y desde este relato, Áñez pueden “reprender” a sus copartidarios o adversarios políticos:

Pensaría si las condiciones se dan [en convocar] a una cumbre política de líderes políticos porque creo que acá hay un objetivo común en los bolivianos y es eso que queremos todos los bolivianos, no queremos dispersión del voto, no queremos que suceda lo que sucedió el 20 de octubre, que afectados estuvimos todos con esas malas decisiones, entonces ahora

14 Entrevista en Bolivia TV, s. f. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=djFRAJqoRqw>

yo creo que Bolivia tiene que estar por delante, y que le quede claro a todos porque las 'pitas' están vigilantes y entonces no vamos a permitir que se juegue todo este proceso que nos ha costado tanto.¹⁵

La madre protectora

Como una mujer que es madre, el discurso oficial de Jeanine Áñez está relacionado con el supuesto carácter pacificador, protector y de consenso de su gestión. Aunado con el misticismo religioso ya mencionado, Áñez parece sentirse responsable de proteger y pacificar a la ciudadanía. Así, al ser consultada por sus sentimientos cuando, por primera vez, se asoma al balcón de Palacio Quemado para saludar a la ciudadanía, responde:

Se siente muy lindo cuando estás arriba y ves a la gente que ve esperanza en lo que una pueda hacer por su país y eso sí que fue muy emocionante, saberme allá arriba y decir: "La gente está esperanzada en que volvamos la tranquilidad al país, en que respiremos democracia", y eso se sintió muy lindo y obviamente con mucha responsabilidad.¹⁶

Siendo una madre protectora, una de las marcas que más reclama para sí es el reconocimiento de haber logrado conducir al país a la pacificación y la reconciliación en un momento de extrema crisis social:

Sería un privilegio enorme que me recuerden como la presidenta de la reconciliación, porque ha sido muy duro lo

15 Entrevista en TV Universitaria, 2 enero de 2020. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=N5SRkFe1URM>

16 Entrevista en el programa televisivo "No mentirás", Red PAT, diciembre de 2019. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=-H_4I37Zwi4

que hemos vivido los bolivianos y todo esto que hemos conseguido hasta ahora ha sido por mucho compromiso de todos los bolivianos. Me ha tocado dar la cara, me ha tocado momentos muy duros, difíciles, hemos buscado la pacificación y yo creo que sería muy lindo que me recuerden como la presidenta de la reconciliación.¹⁷

Al recordar los momentos críticos de los primeros días de su gestión, deja entrever su habilidad en crear consensos por su desprendimiento. En ningún momento ataca a alguien de los suyos, incluyendo a su ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, a quien despidió de la gestión a tan solo tres semanas de haber sido designado. Ataca, eso sí, con mucha dureza, al expresidente y su partido.

Es significativo que Áñez siempre hable en plural, una forma incluyente que busca demostrar que los éxitos (y errores) son colectivos y que ella es portadora de un proceso que la supera como persona:

¿Qué fue lo primero que hicimos? Luis Fernando [Camacho] también tenía su gente con la que había estado trabajando todo este movimiento porque él arriesgó muchísimo, no fue fácil lo que él vivió (...) Él no impuso a nadie y eso lo celebré desde el principio porque él también tenía compromisos con organizaciones sociales que lo habían apoyado en todo el proceso y ellos daban nombres (...) ¿y yo en quién tenía que apoyarme? En la gente que conozco (...), eran la gente de mi absoluta confianza.¹⁸

Esta marca de pacificadora que busca la reconciliación nacional entra en conflicto discursivo con las acciones de su gobierno que ha desatado una persecución contra las

17 Entrevista en Bolivia TV, s. f.

18 Entrevista en el programa televisivo "No mentirás", Red PAT, diciembre de 2019. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=-H_4I37Zwi4

autoridades salientes sin precedentes en la historia del país. A través de la judicialización de la política, en una primera instancia, se ha acusado de sedición y terrorismo a las principales autoridades del gobierno de Evo Morales, quienes han pedido asilo político en México, Argentina y España. Al concluir este artículo, diez personas se encontraban refugiadas en la casa de la delegación diplomática de México en La Paz y el gobierno había declarado la apertura de 592 investigaciones contra exautoridades del Órgano Ejecutivo del anterior gobierno. Áñez nunca es vocera de este tipo de anuncios amenazadores, ese papel lo reserva para Arturo Murillo, ministro de gobierno, u otros funcionarios.

En uno de los actos más criticados a nivel nacional e internacional, Áñez emitió un decreto para eximir a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional de responsabilidad penal en la represión contra manifestantes, a raíz del conflicto postelectoral. Protegidos por este decreto, las fuerzas del orden público ejercieron acciones desproporcionadas ante la protesta provocando la muerte de más de 30 personas. La CIDH, convocada para una investigación, emitió un informe en el que registra la muerte de 20 personas en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto). El estudio advierte de que, en ambos casos, fuerzas conjuntas policiales y militares “habrían abierto fuego contra la población civil”. La comisión constata que “estos hechos pueden caracterizarse como masacres dado el número de personas que perdieron la vida en un mismo modo, tiempo y lugar, y a que se cometieron en contra de un grupo específico de personas”.

Por otro lado, con la anuencia del gobierno, se han fortalecido diversos grupos de jóvenes que conforman batallones organizados de control, bajo la denominación,

por ejemplo, de Resistencia Juvenil Cochala (RJC) o de Unión Juvenil Cruceñista (UCJ), grupos mixtos de jóvenes que infunden temor debido a los recursos y medios empleados y porque se atribuyen funciones estatales de protección y seguridad a la ciudadanía. En los días de conflicto, los miembros de RJC utilizaron armas artesanales como morteros, bazucas, rifles —que lanzaban petardos—, bombas molotov, escudos elaborados con turriles soldados, canilleras de planchas, petardos, cascos y mascarillas de protección. Todos estos pertrechos daban la impresión de que recibían entrenamiento paramilitar. Actualmente, este tipo de grupos se ha extendido a siete de los nueve departamentos del país.

Todo este despliegue, aprobado por el actual gobierno, socaba el relato pacificador del discurso oficial de la presidenta.

La madre sensible y desinteresada

Jeanine Áñez despliega acciones de caridad hacia las clases populares y se muestra con mucha sensibilidad social. Tres imágenes han sido paradigmáticas del despliegue de ese discurso: la primera, del 28 de noviembre de 2019, cuando invita a desayunar a Palacio a una viejecita que vende dulces en la calle; la segunda, del 17 de diciembre del mismo año, cuando se disfrazó de Mamá Noel para entregar regalos a los niños desfavorecidos en Palacio de Gobierno;¹⁹ y, por último, la del 3 de enero de 2020, cuando rompe protocolo en la inauguración del año judicial para acariciar a un perro callejero. Su sensibilidad es puesta en evidencia también en sus discursos:

19 Imágenes disponibles en:
https://www.youtube.com/watch?v=qw6rrh_E1V0

Yo soy llorona, así como me ve fuerte, soy humana, soy madre, un ser humano sensible y veníamos de ver tanta cosa, “no es posible”, decía yo, “cómo van a quemar las casas”, a cualquier ser humano eso lo conmueve, tanto odio, tanto salvajismo en la calle, mirar que las interceptaban a unas chicas que venían a protestar por democracia y libertad y que las emboscaron y las ultrajaron, yo decía “yo soy madre”, me acordaba de todo eso y me quebraba a cada rato.²⁰

El amor ampliado a los más desfavorecidos y a los animales es un relato permanente relacionado a la sensibilidad relativa del universo femenino. Áñez enfatiza esta empatía con el sufrimiento humano cuando se trata de otras mujeres y se establece como una figura protectora de las mujeres de la nación. El día en que se declara el 2020 como el año de lucha contra el feminicidio y el infanticidio, Áñez rompió a llorar mientras declaraba:

Aquí tienen mi mano extendida para apoyarlas porque no queremos llorar más muertes, porque están en frente de una mujer, de una madre, que siente el dolor que ustedes sienten; nuestro gobierno tiene un compromiso y le vamos a poner mucho esfuerzo a ello.²¹

Por último, es central que la mandataria cierre el círculo de la *supermadre* exponiendo su desinterés en un futuro político inmediato. En todas las entrevistas analizadas, Áñez rechaza la posibilidad de su candidatura para la presidencia o vicepresidencia. A pesar de mostrar su preocupación por la supuesta falta de un liderazgo que integre el proyecto alternativo a Evo Morales (que ella

20 Entrevista en Bolivia TV, s. f. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=djFRAJqoRqw>

21 Entrevista en la Red ATB, 13 de enero de 2020. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=iu5Sa79UpZI>

podría encarnar) ve como un acto deshonesto y oportunista usar su recién adquirida popularidad para competir en las próximas elecciones: “Yo no tengo ningún cálculo político y creo que eso es una bendición para mí (...) Yo aquí cumplo con el país”.²²

En otra entrevista sostuvo con gran énfasis:

Si dicen que estoy buscando una candidatura es una especulación de muy mal gusto. No sería honesto. El objetivo de mi gobierno es llamar elecciones y se acabó, no quiero ser candidata a nada.²³

Todo esto quedó en el pasado el 24 de enero de 2020 cuando, en un acto político transmitido por el canal estatal, Áñez anunció su candidatura a la presidencia, generando diversas críticas y, quizás, poniendo en cuestión su figura de *supermadre* que, sin embargo, está en la base de su imagen como candidata. Por su parte, sus detractores han utilizado el supuesto “desinterés” de Áñez por la candidatura como prueba de su capacidad para mentir y engañar al país, poniendo en cuestión la supuesta superioridad moral de la que hacía gala. Hasta concluir el presente artículo, no se contaba con un nuevo sondeo de opinión que pruebe el costo político de esta inconsistencia en el relato de la presidenta.

-
- 22 Entrevista en el programa televisivo “No mentirás”, Red PAT, diciembre de 2019. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=-H_4I37Zwi4
- 23 Entrevista en el programa televisivo “Que no me pierda”, Red Uno, 13 de diciembre de 2019. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=F16IFBYhQXk>

APUNTES PARA SEGUIR LA CONVERSACIÓN SOBRE EL TEMA

Si bien reconocemos el enorme avance que han realizado las mujeres en el campo de la representación política —tanto así que muchos teóricos hablan del siglo XX como siglo de las mujeres—, nuevos desafíos se presentan a la hora de disputar el poder y muchos más si se trata de transformarlo.

Siendo la credibilidad en política un proceso esencialmente discursivo, apelar a las creencias estereotipadas es fundamental a la hora de construir una imagen pública. Para comprender y actuar en el mundo, partimos de una serie de creencias sobre cómo son los hombres y las mujeres, y asumimos esas peculiaridades como atributos constitutivos de la esencia femenina o masculina, sin generalmente admitir posibilidad alguna de debate. Si algunos políticos no cumplen con esas expectativas sociales, muchas veces reciben el castigo del público (por ejemplo, si un político se muestra “afeminado” o una política no despliega las características de la “buena feminidad” pueden ser sospechosos o rechazados). De allí que la comunicación pública y, sobre todo, la mercadotecnia política, recurran a imágenes o arquetipos que nos hagan sentir cómodos como receptores de las ideas de quienes buscan ganar nuestra confianza.

En este sentido, el arquetipo de la madre tiene una utilidad instrumental para las mujeres políticas al momento de lograr una efectiva comunicación. Sin embargo, este recurso puede también limitar a las mujeres confinándolas a un esencialismo maternalista que encasilla sus valores y prácticas a partir, únicamente, desde su función reproductiva. Al presentar una figura homogénea de lo femenino, con un carácter ahistórico, se limita el potencial despliegue de otros factores que, como sujeto portador de

valores de clase, cultura y generación hace de cada sujeto femenino un actor político particular.

Así, en el caso boliviano, a pesar del encasillamiento que las expectativas sociales provocan en las mujeres, hablar de la “invasión femenina” en el espacio público es también referirse a un grupo heterogéneo en origen social, experiencia, identificación étnico-cultural, orientación religiosa y filiación partidista. Por ello, cuando lanzan la pregunta: “¿Qué quieren las mujeres?”, es pertinente responder: “¿A qué mujeres te refieres?”. Por supuesto que la agenda de sus derechos tiene un sustrato compartido que es la violencia y la exclusión patriarcal que atraviesa todas las historias de vida y, por ello, encontramos puntos de encuentro entre todas, pero la clase y la condición étnico-cultural suelen ser tan determinantes como el género, a la hora de establecer los objetivos políticos de cada sujeto. Esto permite reconocer la multiplicidad de formas que actualmente presenta la construcción de la identidad femenina, abandonando la biología para remitirse al sistema de significados que estructuran actitudes, conductas y posicionamientos políticos. Dicho de otra forma, no se puede generalizar sobre las mujeres en puestos de poder, representación o liderazgo sin ver de qué mujer se trata, es decir, cuál es su posición política concreta.

En ese sentido, al vincular su identidad de género y clase a su devenir político, cada mujer construye su propia historia. Por ello, el despliegue discursivo de Áñez establece un nexo entre su identidad de género, sus valores conservadores, su posición ideológica, su filiación político-partidaria, su fe religiosa e, incluso, su región de origen. Por ello, no es de extrañar que en su relato encontremos inconsistencias; tal vez la más notable es que, a pesar de que hace uso de lo femenino-maternal para mostrar su sensibilidad hacia

los excluidos, también registra expresiones racistas sobre los indígenas.

Diversos estudios de la región establecen que la figura de la madre, ligada al modelo de la familia, continúa teniendo una preeminencia en el imaginario político asociado a las formas de representación de sí que históricamente han producido las mujeres (Franceschet, Piscopo y Thomas, 2016). Dicho esto, es importante comprender que cada mujer articula un uso estratégico diferenciado de la figura de la madre como una manera de dotar de contenido a la representación de sí misma como líder en el campo público. En el caso concreto de Áñez, su actuación tiene dos condicionantes que fortalecen su credibilidad: una buena parte de la sociedad que siente miedo frente al futuro incierto y la sensación de “orfandad” que dejó la inesperada ausencia del liderazgo carismático de Evo Morales.

Para Áñez, asumir el rol de madre implica un relato que enfatiza su supuesto desapego respecto al campo político, llegando incluso a un menosprecio por su actuación política y atribuyendo sus logros a la suerte o a la bendición divina. Tal vez esta es una estrategia desplegada para pasar desapercibida, no causar alarma y distinguirse de su entorno donde los sujetos políticos masculinos protagonizan competencias encarnizadas por el poder.

Su ingreso a la política, personificando a la cuidadora de la sociedad, fortalece su imagen y la convierte incluso en salvadora de los varones, que son capaces de llevar al país al caos por sus afanes políticos. Esta imagen se refuerza con la idea en torno a la superioridad moral de las mujeres, sobre todo en el ámbito de la política, a menudo percibida como sucia y corrupta.

Concluimos sosteniendo que la imagen de la madre como figura de accionar político continúa teniendo un espacio relevante en los imaginarios políticos, del mismo modo que la figura del padre protector de la Patria. Este accionar debe ser interpretado como una puesta en escena estratégica en la que cada mujer determina y moviliza esta figura con características particulares. Ya sea desde un uso de carácter instrumental, desde una significación articulada a la adscripción religiosa o a elementos tradicionales que aluden a la figura de la *supermadre* en el contexto contemporáneo —o desde una representación que entremezcla elementos tradicionales y contemporáneos sobre los significados y atributos asociados a la femineidad— esta representación le permite a Jeanine Áñez distinguir su figura como la de un liderazgo político femenino.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- Arteaga, Vivian (1996) "El marianismo". En: *Imágenes y discursos en el liderazgo político femenino*. La Paz, ILDIS y Tahipamu.
- Bauman, Zygmunt (2016) *Extraños llamando a la puerta*. Barcelona: Paidós.
- Chaney, Elsa (1992) *Supermadre: La mujer dentro de la política en América Latina*. México D. F.: Fondo de Cultura Económica (FCE).
- Farran Teixidó, Eduard (2016) "Storytelling y política: cómo empezar una historia y acabar contando cuentos en COMeIN", *Revista de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación*, N.º 51 (enero de 2016), Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Fouce, José Guillermo (2016) *El miedo como arma política*. En: <https://www.psyciencia.com/el-miedo-como-arma-politica/> Fecha de consulta: 10 de enero 2020.

Franceschet, Susan; Piscopo, Jennifer y Thomas, Gwynn (2016) “*Supermadres. Maternal Legacies and Women’s Political Participation in Contemporary Latin America*”. En: *Journal of Latin American Studies*, vol. 48 (febrero), pp. 1-32.

Valenzuela, Mariana (2019) *La figura de la madre en los casos de las presidentas latinoamericanas Michelle Bachelet (Chile), Cristina Fernández (Argentina) y Dilma Rousseff (Brasil)*. En: *Revista de Estudios Sociales*, vol. 69 (julio), pp. 67-78.

VIII

Después del 20 de octubre: El antimasismo como identidad consolidada

Marcelo Arequipa

CONTEXTO PREVIO

La imagen con la que me gustaría que comencemos a visualizar el escenario que se ha ido construyendo los últimos años en lo político, desde mi punto de vista, tiene que ver con lo que ya Kierkegaard afirmaba a propósito de la naturaleza humana:

Nuestra época recuerda la de la decadencia griega: todo subsiste, pero nadie cree ya en las viejas formas. Han desaparecido los vínculos espirituales que las legitimaban, y toda la época se nos aparece tragicómica: trágica porque sombría, cómica porque aún subsiste (2006 [1843]: 124).

En ese complejo panorama, comenzamos a situarlo pieza por pieza para el análisis y consecuente debate.

Por poner cierto orden en la serie de acontecimientos políticos que terminaron por decantarse el pasado 20 de octubre de 2019, quizá más exactamente el día después de las elecciones generales, estos tienen su origen en el resultado del referéndum de 2016; proceso político en el que los bolivianos fuimos a votar por la modificación o

no del artículo 168 de la Constitución Política del Estado que contiene la idea de que se puedan reelegir presidente y vicepresidente por una sola vez de manera continua. La propuesta era cambiar a dos veces de manera continua; el resultado ajustado fue el triunfo del “No” por un margen estrecho de 2,6 puntos porcentuales de diferencia.

A partir de ahí comenzó a hacerse presente un fenómeno sociopolítico que se visualiza a nivel global como “la política de la identidad”, cuyo principal incentivo para quienes se movilizan —predominantemente clases medias— son las defensas de “causas” en la política. Sin embargo, desde una perspectiva más general, estamos ante un momento en que la política, como proyecto de futuro, se encuentra confundida porque carecemos, en términos morales, de un horizonte compartido.¹

Respecto a las “causas” en la política, es bastante conocido que, a partir de que dejamos de hablar de las ideologías como un elemento movilizador, entraron en juego otras dos variables: la identidad y los intereses. Este tipo de política provoca que se presenten fenómenos más complejos y amplios, como el surgimiento del “nacionalismo anticuado y del islam politizado”, tal y como señala Fukuyama (2019: 17). Lo más llamativo aún es que este tipo de movilización no se produce por causas de demanda económica, sino por reconocimiento social y político.

1 Quizá tenga que ver con esto que plantea Fukuyama respecto a la política y la religión como un espacio de horizonte compartido: “Las sociedades liberales modernas son herederas de la confusión moral que dejó la desaparición de un horizonte religioso compartido. Sus constituciones protegen la dignidad individual y los derechos individuales, y esa dignidad parece estar centrada en la capacidad de los individuos para tomar decisiones morales” (2019: 69).

Esto que se denomina “reconocimiento” no es —en el caso boliviano— un tema gratuito, porque si se lo sitúa en el contexto de las clases medias, encontramos instalada, como una suerte de sentido común, la idea de que quienes deben gobernar son los que se prepararon para eso; se trata de una especie de demanda del retorno de la tecnocracia porque, en el diagnóstico de la democracia actual, las clases medias parecen identificar que lo que vivimos es un “síndrome de fatiga democrática” (Van Reybrouck, 2013: 20-24) propiciada por los políticos populistas sin preparación y que, en consecuencia, ya es hora de cambiar el panorama yendo al otro extremo en procura del rescate de los especialistas.

Si a esto añadimos el factor contextual de que las personas manifiestan tener mínimas intenciones para participar como activistas político-partidarios y prefieren ser activistas ciudadanos que se movilizan defendiendo específicamente causas como el feminismo, el medioambiente, el regionalismo, etc., resulta que tenemos un marco general en el que la crítica desde la política a la izquierda consiste en que esta se habría concentrado en promover los intereses de grupos de la población considerados vulnerables, mientras “la derecha se define como patriotas que buscan proteger la identidad nacional tradicional, una identidad que a menudo está explícitamente relacionada con la raza, el origen étnico o la religión” (Fukuyama, 2019: 22-23).

De hecho, si miramos hacia los niveles formales de la política en el sistema de partidos, podemos llevarnos la amarga sorpresa de que la confianza en los partidos se encuentra por debajo de los 30 puntos sobre 100 cuando se consulta a las personas en general (estudio LAPOP de 20 años de cultura política en Bolivia, en: Ciudadanía, 2019); así, entonces, se

entiende lo que el filósofo Kwame Anthony Appiah (2019) dice respecto a que los tiempos que corren se encuentran signados por movilizaciones por parte de sectores acomodados de clase media; hoy no se movilizan necesariamente los históricamente desplazados.

Un año después del referéndum constitucional de 2016, la movilización político-social, expresada en las denominadas plataformas ciudadanas, tuvo su primer momento de protesta efectiva bloqueando calles y deteniendo las ciudades del eje central del país (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz), como antes solamente habían hecho los movimientos sociales. Nuevamente, la movilización y protesta estuvo concentrada en zonas residenciales en las que habitan las clases medias altas y tradicionales, no así en áreas periurbanas ni rurales.

Aquí también comenzamos a ver otro fenómeno muy propio de estos tiempos: la democracia reducida al número, a la cantidad de convocatoria materializada en una foto/imagen, lo que se conoce como *selfie protest* (Highfield, 2016). De hecho, comenzamos a evidenciar en la realidad boliviana el uso de las redes sociales, con la circulación cada vez mayor de fotografías de quienes bloqueaban, como si se tratara de la prueba de compromiso de quién se tomaba la *selfie* y, luego, en cada concentración general, como si fuera una competencia departamental para ver quién congregaba mayor cantidad de gente.

Al no poder conectar la movilización de las plataformas ciudadanas con otros sectores sociodemográficos distintos, y al no tener la posibilidad de darle un nuevo sentido común discursivo, la protesta en las ciudades terminó por decaer para el 2018; de hecho, de ahí vienen algunas críticas sobre

su papel poco efectivo y concentrado en su condición de clase social y de espacio de redes sociales.²

Las características específicas de esta movilización han sido las siguientes: apela al retorno de la meritocracia, a la búsqueda del prestigio social, a la reconstitución de la República. Se enmarca al gobierno de entonces, únicamente, como corrupto y narcotraficante, y se da inicio a lo que, poco a poco, será la etiqueta de esa llamada “vanguardia”: ellos son los civilizados y los masistas la barbarie.

Entre tanto, se fueron sucediendo manifestaciones en las ciudades capitales en torno, principalmente, a dos causas: género (aborto, violencia contra la mujer) y medio ambiente (TIPNIS, defensa de áreas protegidas, y contra la deforestación y los chaqueos para la ampliación de la frontera agrícola). Pero antes de continuar con la secuencia de los acontecimientos, es importante detenernos un poco en una puntualización respecto a la política de la identidad y a sus posibles efectos en nuestro sistema político.

LA IDENTIDAD TRASPASADA POR INTERESES EN LA POLÍTICA

Muy a tono con los fenómenos globales contemporáneos de la política, lo que nos pasa en Bolivia tiene que ver con una fuerte dosis de política de la identidad, que de alguna forma la comenzamos a encontrar en esa posición defensora del retorno de la “meritocracia” al poder.

Esto tiene un fuerte componente de deseo de reconocimiento basado en la obtención de cierto prestigio social que se encontraría por encima del resto de personas que

2 Al respecto, ver la columna de Cecilia Lanza titulada “Gritos veganos de las wawas anfibias”, publicada en diciembre de 2017. Disponible en: <https://www.paginasiete.bo/opinion/cecilia-lanza/2017/12/4/gritos-veganos-wawas-anfibias-161813.html>

rodean los círculos sociales que se frecuentan,³ este tipo de política de la identidad la encontramos de manera casi exclusiva en la clase media boliviana; pensemos un minuto, por ejemplo, en lo que nos dice Fukuyama a propósito de este tema, para él, las “personas de clase media no sienten que estén en los márgenes de la sociedad; más bien, suelen sentir que constituyen el núcleo de la identidad nacional” (2019: 100). Ese núcleo al que se hace referencia tiene su propia complejidad cuando creemos que la identidad otorga a nuestras vidas “un propósito y un significado, aumenta la autoestima, define quiénes somos y cómo y por qué debemos comportarnos de unas maneras normativamente especificadas... también disminuye el abatimiento y la angustia” (Guibernau, 2017: 32).

Si seguimos este hilo de cosas, encontraremos que la identidad va tomando cuerpo a partir de tres momentos, como dice Appiah (2019: 33-34): primero, se tiene asignada una serie de etiquetas; segundo, a partir de la identidad

3 “Ni el nacionalismo ni la religión estaban a punto de desaparecer como fuerzas en la política mundial. No iban a desaparecer porque, como argumenté en aquel entonces, las democracias liberales contemporáneas no habían resuelto completamente el problema del *thymos*. El *thymos* es la parte del alma que anhela el reconocimiento de la dignidad; la *isotimia* es la exigencia de ser respetado en igualdad de condiciones que los demás; mientras que la *megalotimia* es el deseo de ser reconocido como superior. Las democracias liberales modernas prometen y en gran medida brindan un grado mínimo de igual respeto, encarnado en los derechos individuales, el estado de derecho y el sufragio. Lo que esto no garantiza es que en democracia las personas sean igualmente respetadas en la práctica, particularmente los miembros de grupos con un historial de marginación. Países enteros pueden sentir que no sean respetados, lo que ha impulsado el nacionalismo agresivo, al igual que los creyentes religiosos que sienten que se denigra su fe. Por lo tanto, la *isotimia* continuará impulsando demandas de reconocimiento igualitario, que seguramente nunca se cumplirán del todo” (Fukuyama, 2019: 15).

adoptamos una forma tal de comportamiento; y tercero, de los modos anteriores comenzaremos a tratar y ser tratados por los demás, por lo que nuevamente entra aquí el factor de la necesidad de ser reconocidos⁴ por los demás:

...gran parte del peligro relativo a las identidades tiene que ver con el modo en que estas —la religión, la nación, la raza, la clase y la cultura— nos dividen y nos enfrentan (...) debemos reformarlas porque, en su mejor expresión, permiten que los grupos, pequeños y grandes, colaboren. Son las mentiras que nos unen (Appiah, 2019: 19).

La secuencia de tres momentos expresada arriba no tiene la intención de mostrar a una persona inclinada a la selección racional de sus decisiones, sino a una preferencia marcada por lo emotivo. Estas emociones se presentan con un sentido de pertenencia que nos lleva a estar fuertemente identificados con el grupo (Guibernau, 2017: 18) que se defiende en la política de la identidad. Esta identidad a la que se hace referencia no estaría completa sin añadirle algo que en el caso de Bolivia es un elemento crucial para la política: los símbolos. Estos se traducen en causas que se defienden a partir de las clases medias tradicionales urbanas y que sin duda actúan como desencadenantes de agregación social de cara a las movilizaciones políticas porque fundamentalmente son agitadores de emociones. De esta forma, la política de la identidad es dadora de la creación de enemigos en la política, la idea de los adversarios es anulada, y lo

4 Véase también a Guibernau: “Las preguntas clave respecto a la identidad son ¿quién soy yo? y ¿quiénes somos nosotros? La identidad es una definición, una interpretación del yo que establece qué es la persona y dónde se sitúa en términos tanto psicológicos como sociales. Todas las identidades surgen dentro de un sistema de representaciones y relaciones sociales... todas las identidades necesitan el reconocimiento recíproco de los demás” (2017: 29).

que es más preocupante quizá, creamos a nuestro gusto y medida los enemigos contra los que decidimos enfrentarnos, así “demostramos que lo que más nos importa es la construcción de nuestra identidad. Nos preocupa mucho que se nos etiqüete como lo que no creemos que somos” (Dudda, 2019: 45), pero sí de aquello sobre lo cual estamos plenamente convencidos que es lo que nos define:

Si anteriormente, en el mundo de la revolución, lo que regía era el impulso emancipador, el salto hacia un futuro perfecto y una utopía prístina, lo que ahora gobierna el impulso de las distintas luchas identitarias es la recuperación de lo auténtico en nosotros, de aquello que nos define verdaderamente (Del Águila, 2008: 59).

La cita anterior no podía ser más oportuna considerando dos cuestiones importantes que se encuentran presentes en los debates de hoy, como son la búsqueda de un metarrelato distinto y la política de la identidad; al parecer no es posible dar un salto más allá de lo identitario sin antes poner en la mesa de discusión una utopía, un ideal al que se quiere llegar. Por otra parte, ese sobredimensionamiento de las sociedades urbanas y de clase media tradicional por la política de la identidad encuentra en la izquierda una cuota parte de responsabilidad por dos razones: la primera es eso que se ha calificado como “fundamentalismo ideológico de izquierda” (tradúzcase, en nuestro caso, al “socialismo del siglo XXI”) y la segunda en balance que suele hacer la izquierda de una mala administración de sus éxitos, tal y como nos recuerda Jordi Gracia en un texto autocrítico cuando plantea que

...tanto el movimiento feminista como el movimiento ecologista son paradigmas de éxito de la izquierda. Han logrado instalar en el programa global del neoliberalismo a las que fueron causas emprendidas por vanguardias minoritarias y

a menudo caricaturizadas; burlarse de ellas ha sido una especialidad de la derecha (2018: 17).

Aunque, también, en un nivel organizativo previo a la administración de los éxitos políticos, para el caso boliviano cabe remarcar el apunte de que la izquierda se habría concentrado demasiado en los movimientos sociales dejando de lado la idea de pensar en la “forma partido”⁵ porque, como apunta Nancy Fraser, la izquierda hoy carece tanto de “una visión programática como de una perspectiva organizativa. Es como si hubiéramos pasado de la crítica del partido leninista al espontaneísmo neanarquista” (2019: 91-92). Este panorama también nos recuerda uno de los mejores apuntes sobre las ideologías y las causas en la política, en el sentido de que pueden terminar siendo peligrosas para las sociedades porque en un momento en que hay tantas creencias que se defienden, debemos considerar su sobreabundancia como aquello peligroso que llega a generar “exceso, implacabilidad y horror” (Del Águila, 2008: 35).

Es decir, tenemos enfrente un neoliberalismo o corriente política de derecha que habría estado esperando pacientemente los devaneos y distracciones de una izquierda que se limitó a defender causas pequeñas en comparación con ideales más generales que agreguen a la sociedad, en lugar de polemizarlas a propósito de la interpelación de demandas sectoriales específicas. Volvemos a Ricardo Dudda para enmarcar la responsabilidad de la izquierda en estos momentos:

5 En términos de la teoría política, se debe considerar también que “la posmodernidad ha provocado una curiosa mutación en la izquierda radical occidental. Nos hemos movido desde el universalismo al particularismo, desde el progreso al regreso” (Del Águila, 2008: 71).

En las guerras culturales contemporáneas, la nueva izquierda es políticamente correcta y conservadora, porque busca conservar el bienestar conseguido, y se ha apropiado de valores tradicionalmente conservadores como la seguridad y la protección; la nueva derecha, por su parte, es políticamente incorrecta, rupturista y heterodoxa, y lucha contra lo que considera ortodoxia progresista opresiva. Se han invertido los roles clásicos: hoy la derecha es *punk* y la izquierda, puritana (2019: 19).

En Bolivia, dados los últimos acontecimientos que marcaron el rumbo político, la izquierda se encuentra en un momento en el que su renovación de concepciones políticas tiene una ventana de oportunidad, en la medida que se retome la idea de hablar de aquellas cosas que son más comunes a las personas, de los problemas que se refieren a las aspiraciones de la clase media. De otro modo, la posibilidad de construir mayorías es cada vez más lejana porque, al final de cuentas, la “democracia es un sistema institucional para tomar decisiones cuando las razones se agotan sin haberse alcanzado un acuerdo” (Sánchez-Cuenca, 2018: 15).

Al final, si no estamos atentos y predispuestos a confrontar y llevar adelante una práctica política que abandone la idea amigo/enemigo por la de adversarios enfrentados, no podremos salir del círculo vicioso que Dudda describe con claridad:

...el tribalismo existe porque nos creemos las mentiras que nos contamos (...) La polarización política surge porque nos creemos los estereotipos de los otros: las mayores actitudes conservadoras se asocian a la creencia en el estereotipo de los izquierdistas, mientras que las actitudes progresistas se asocian con la creencia en el estereotipo de los derechistas. Sin ti no soy nada (2019: 45).

**PRIMER INTENTO DE SOLIDIFICAR UNA CORRIENTE POLÍTICA
ALTERNATIVA/OPUESTA AL MASISMO**

Dos acontecimientos fueron los que detonaron el primer intento serio de constituir una corriente política de oposición al gobierno del MAS: el primero fue la Sentencia Constitucional 0084/2017 emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional en fecha 28 de noviembre de 2017, que habilitó la posibilidad de que Evo Morales pudiera participar en elecciones, amparado en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esa decisión judicial, emitida a pesar del resultado del referéndum de 2016, avivó una protesta social que pretendió tener su catarsis en las elecciones judiciales —el segundo acontecimiento referido— que se celebrarían días después de haberse conocido dicha sentencia.

Pocos días después a la sentencia mencionada, el 3 de diciembre de 2017, se celebraron las elecciones judiciales. En los resultados se observa un porcentaje contundente de votos blancos y nulos que, juntos, fueron el 62,02%. Es decir que, efectivamente, hubo una protesta marcada por lo que había hecho el Tribunal Constitucional Plurinacional, además de una evidente polémica sobre lo intrascendente que resultaba la elección de magistrados de las más altas instancias judiciales ante la percepción general de que el MAS, al controlar el Órgano Legislativo, habría puesto a sus candidatos.

Sin embargo, estaba claro que la catarsis social esperada por el gobierno no se había producido aún porque, en diciembre del 2017, cuando el presidente promulgó el controvertido Código del Sistema Penal Boliviano, se activaron las protestas de dos actores sociales relevantes: un grupo corporativo (los médicos trabajadores en salud), y distintos activistas ciudadanos (movimientos contra el aborto, religiosos, cívicos y plataformas ciudadanas).

En este punto es preciso analizar lo que podría ser el sentido de la construcción discursiva de corte inclinado a una derecha política, es decir, una suerte de alineamiento de sensibilidad más conservador. Hablamos de sensibilidad porque, como se sabe, nos encontramos en un momento en que el análisis del estado de la democracia desborda los márgenes de las mediciones hasta ahora conocidas —tipo *ranking*—. Los contextos y los tiempos nos han obligado a repensar la democracia, incluso a decir de Niall Ferguson, como un sistema en el que las “emociones mandan más que las mayorías y los sentimientos cuentan más que la razón” (cit. en Gutiérrez-Rubí, 2019). En Bolivia, un acontecimiento importante al respecto fue la reactivación de lo que se conoce como el Conade (Comité Nacional de Defensa de la Democracia), cuyos principales integrantes son la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), la Fundación Jubileo y la Pastoral Social Cáritas.

Justamente, la reactivación del Conade —que estaba sin funcionamiento desde 1981— obedece a un momento en que los médicos, como grupo corporativo, llevaban liderando la protesta social contra el mencionado Código por un artículo que se refería a la mala *praxis* médica.

Otro factor que movilizó y contribuyó a que se formara una especie de coalición social urbana contra la norma fue la ampliación de las causales para la práctica del aborto legal. A partir de estas dos principales demandas, se fueron articulando otros sectores que corporativamente vieron que sus intereses estaban siendo afectados; tal fue el caso de los transportistas, los policías —quienes, mediante la Asociación de Esposas de Suboficiales, Clases y Policías manifestaron su descontento— y de los coccaleros de los Yungas de La Paz.

A este frente de movilización se unió un paro convocado por los cívicos del departamento de Santa Cruz, sumándose los empresarios privados y el Gobierno Municipal de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. La composición social de la protesta descrita derivó en que el gobierno de Evo Morales, un 21 de enero de 2018, propusiera derogar la norma cuestionada.

En el balance general que nos deja este primer intento por solidificar una corriente política de oposición al gobierno de Evo Morales se puede señalar que ya era un hecho, entonces, que la clase media urbana tradicional se iba manifestando en relación con un tipo de sensibilidad proyectada hacia valores conservadores inclinados hacia la derecha, en cuanto detentadora de principios morales y éticos, además de que el gobierno de Morales iba abandonando paulatinamente banderas simbólicas que la oposición extrapartidaria, localizada en plataformas ciudadanas y comités cívicos, se comenzaría a apropiar.

LA AMALGAMA SOLDADA: MASISMO VERSUS ANTIMASISMO

Así llegamos al 2019, con un panorama que se decantaría a fines de año a través una verdadera corriente política sellada: si antes teníamos al masismo como parte de una corriente hegemónica⁶ política, hoy tenemos al antimasismo como su opuesto consolidado, conteniendo en su interior dos tipos de tendencias políticas.

6 Hegemonía en el siguiente sentido: “No aludimos a hegemonía en el sentido liberal del término que la asimila con autoritarismo, sino en el sentido gramsciano de articulación de alianzas que permitan la dirección intelectual y moral de la sociedad, la construcción de un sentido común, cediendo lo considerado no esencial para preservar lo esencial” (Grimson, 2019: 17).

Una tendencia encabezada por Carlos Mesa, que denominaremos político-institucional por representar una posición de centro-derecha cuyos valores liberales de democracia representativa e institucional le llevaron a criticar duramente a Evo Morales en términos estrictamente políticos, jamás en lo económico ni social. El centro del mensaje de Mesa fue la recuperación de la democracia mediante un *shock*, puesto que Morales habría transgredido la línea de lo democrático para pasar a la dictadura; por tanto, el eje principal de lo que estaba en juego en la elección de octubre de 2019 era la oposición “democracia versus dictadura”.

La otra tendencia, encabezada por Luis Fernando Camacho, la denominaremos como cívico-radical, por representar una posición abierta de derecha política. En este sentido, la agenda presentada desde su primera aparición pública era rupturista y no negociadora con el gobierno del MAS. Su discurso se caracteriza por buscar el retorno a la vieja República; el ejercicio, como Estado, de la práctica religiosa y la fe católica; y el retorno de los “notables” a la política.

Esta corriente política consolidada lleva un sello de derecha política que sigue una línea de análisis desde las ciencias sociales contemporáneas identificándose como fascismo, posfascismo o neofascismo. El malestar a partir del que las sociedades reaccionan de forma conservadora se lo sitúa en un momento en que las élites gobernantes son señaladas por no responder “adecuadamente a las circunstancias cambiantes o sólo atienden a sus intereses propios” (Riemen, 2018: 9). Esa respuesta a la clase política genera como resultado la obtención de una identidad colectiva que lleva consigo misma una prueba efectiva de llegar a transformarse de ser solamente un grupo a ser un verdadero

“actor político” (Guibernau, 2017: 58) que se plantee disputar el poder, en especial, al que gobierna.

Esa disputa por el poder se manifestó a partir de la combinación de tres emociones que fueron las que se pusieron en práctica en la movilización política desde el día después de las elecciones generales hasta la actualidad, cuando ejerce el poder un gobierno transitorio opuesto al masismo. Estas tres emociones son: la venganza, el resentimiento y el miedo:

[La venganza] se interpreta y se presenta como la acción que va a enmendar las cosas, es decir, como una acción justa y moral. La venganza significa desquitarse de los agentes de la subordinación y la humillación contra los que los movimientos sociales intentan hacer valer la dignidad y los derechos de las personas que se proponen liberar o emancipar (...)

[El resentimiento] podría definirse como la condena por lo que uno secretamente anhela pero no puede conseguir (...)

[El miedo] puede deberse al poder insuficiente o a la carencia de poder del individuo y el exceso de poder de los demás. El miedo humano surge con frecuencia en contextos sociales en los que no puede huirse de la fuente del miedo (ibid.: 178, 179 y 181).

Esa mezcla de emociones fue hábilmente aprovechada por la corriente política ubicada a la derecha que revivió durante las semanas previas y posteriores a la salida del poder de Evo Morales. El escenario fue tan radical que nos devolvió a un momento que creíamos superado en nuestro organismo democrático, nos dimos cuenta que el fascismo había estado ahí vivo, como Michela Murgia lo describe:

...es como un herpes —de los organismos primitivos se aprende más que de ningún otro—: puede resistir durante

décadas en la médula de la democracia haciéndole creer que ha desaparecido para rebrotar más combativo que nunca a la primera y previsible señal de debilitamiento de su sistema inmunitario (2019: 15).

Lo vimos porque, paradójicamente, una clase media que reclama constantemente la idea de que los paros y bloqueos no hacen más que afectar la libertad de locomoción del otro, enarboló este tipo de protestas como parte del inicio de las movilizaciones. El momento en que se vio que la sociedad estaba prácticamente dividida en dos —en un sentido metafórico—, los políticos llevaron esa disputa a las calles con la perspectiva de que ahí se resuelva; el resultado, como bien sabemos, sigue siendo una herida abierta como sociedad, pero resultados efectivos momentáneos para el sector de la clase política antimasista porque lograron generar una división social entre masistas y antimasistas.

La disposición social de la sociedad urbana de clase media tradicional para situarse a la derecha devino también en una suerte de búsqueda de un líder fuerte que los proteja ante la sensación general de ser un pueblo que se sentía “víctima y amenazado” (*ibid.*: 79). Esta estrategia comenzó a tener su avanzada desde Santa Cruz, con Camacho, hacia Cochabamba, a través de la articulación de ese grupo irregular de supuesta “protección” ciudadana, llamado Resistencia Juvenil Cochala. Ese sentimiento de miedo fue acompañado, en este caso, por otro sentimiento mencionado antes: el resentimiento.⁷ Ya lo decía

7 Algo que puede tomarse como una advertencia importante es que “los progresistas, en particular, están descubriendo, sorprendidos, que han abandonado el terreno de lo emocional (valores, sentimientos, emociones...) y han descuidado el conocimiento de la percepción ciudadana. Otros lo están ocupando:

Riemen (2018: 55), el origen del fascismo contemporáneo se encuentra enraizado en el culto al resentimiento porque a partir de ahí los líderes fascistas se muestran como aquellos que llenan el vacío que se evidencia al respecto en la sociedad. Para redondear la idea de que la iniciativa de la oposición política a Morales venía desde los actores extrapartidarios, vemos que ahí se fraguaba también, de manera concreta, esta acción política derechista cuando concluimos que “todos estos movimientos implican un debilitamiento drástico, sino un liso y llano derrumbe, de la autoridad de las clases y los partidos políticos establecidos” (Fraser, 2019: 22).

Volvemos al día de las elecciones generales; ese 20 de octubre de 2019 la población dio una muestra clara de madurez democrática porque en el clima polarizado que se había estado construyendo no se registró ningún altercado mayor; tres detonantes fueron, sin embargo, las que dieron pie a las siguientes semanas de conflictos mayores; las explicamos a continuación.

La primera fue el pésimo papel que desempeñó el Tribunal Supremo Electoral en la administración de las elecciones generales como proceso. El Tribunal fue incapaz de dar respuestas prontas y adecuadas a las polémicas que se presentaban; además de tardar en responder abría el escenario a nuevas dudas. Por otra parte, el no haber sabido explicar bien por qué la transmisión rápida de resultados electorales se detuvo la misma noche de las elecciones, propagó una sensación general de que algo turbio se estaba tramando.

En segundo lugar, la misma noche de las elecciones la visualización de resultados se detuvo mostrando

los conservadores que utilizan mejor las palabras y los gestos” (Gutiérrez-Rubí, 2019: 87).

un estrecho margen entre Evo y Mesa, y dando lugar a que se propagara la idea de que lo más probable es que se tendría que llevar a cabo una segunda vuelta entre estos dos candidatos. Esa misma noche, la clase política demostró su irresponsabilidad con la situación de una sociedad boliviana prepolarizada, registrando una serie de reacciones tal y como se anota a continuación: el senador Óscar Ortiz, que quedó cuarto en la preferencia electoral, dijo que en una eventual segunda vuelta electoral haría campaña por Mesa; Chi Hyun Chung, candidato de origen surcoreano, se limitó a festejar su triunfo personal con la obtención de casi un 10% de los votos y enarbolando un discurso regresivo en términos sociales; por su parte, Carlos Mesa remarcaba su triunfo insistiendo en que, según los resultados preliminares, era incuestionable que debía haber una segunda vuelta; por último, Evo Morales se declaraba indiscutible ganador en primera vuelta.⁸

En tercer lugar, a partir de ahí comenzaron a sucederse episodios de violencia social y de bloqueos en las capitales de departamento del eje central (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz). La acción política de movilización retornó a los actores extrapartidarios que tenían protagonismo antes de la elección: cívicos, Conade, plataformas... Comenzó entonces a constituirse un sentido general de posible salida política al masismo. Al igual que en el caso argentino —donde en el peronismo y el antiperonismo son corrientes políticas muy consolidadas— el opuesto se llegó a efectivizar “muy por derecha, no por izquierda” (Grimson, 2019: 28).

8 “No hay identidades políticas de masas vacías de afectividad. No hay procesos sociales ajenos al afecto. Ni siquiera hay racionalidades políticas en las que no se jueguen emociones. Se trata de mundos, escenas, rituales y prácticas tan diferentes que parecen incomparables” (Grimson, 2019: 29).

Actualmente, nos encontramos ante una lógica binaria: masistas versus antimasistas. Lógica que se sitúa “desplegada en términos de identidades más que de ideas” (*ibid.*: 135), donde cada vez se torna más urgente construir un nuevo lenguaje político que explique el esperpento en el que vivimos; como decía Ortega y Gasset: “No sabemos lo que nos pasa y eso es precisamente lo que sabemos”. Por ello, trabajar desde el plano subjetivo de los individuos sin partir de directrices cuantitativas sino más generales, constituye una de las tareas de las ciencias sociales para disponer de un análisis más preciso del contexto. De lo contrario, los políticos serán los primeros en ser rebasados por todo esto porque “no se puede representar lo que no se entiende y, mucho menos, gobernar a la sociedad que no se comprende” (Gutiérrez-Rubí, 2019: 31).

Finalmente, cabe señalar que el factor aspiracional está presente en las clases medias ascendentes, hoy de manera más notoria. Por el momento, las banderas identitarias se encuentran más del lado de las derechas quienes, coyunturalmente, se apropiaron del ecologismo, el regionalismo y la democracia. La izquierda se enfrenta al desafío de atenuar su discurso intentando retomar posiciones estratégicas que antes le pertenecían y, que geográficamente, se encuentran situadas en los bolsones electorales numéricamente más significativos del país, como El Alto y Santa Cruz. Finalmente, no hay duda que afrontamos tiempos bastante singulares con matices grises en el sentido politológico de una posible evaluación a las actuales relaciones de poder y de la política en Bolivia. Quizá así es como se viven las transiciones políticas...

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- Appiah, Kwame Anthony (2019) *Las mentiras que nos unen. Repensar la identidad*. Madrid: Taurus.
- Ciudadanía, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública (2019) *Cultura política de la democracia en Bolivia. 20 años*. Cochabamba: Kipus.
- Del Águila, Rafael (2008) *Crítica de las ideologías. El peligro de los ideales*. Madrid: Taurus.
- Dudda, Ricardo (2019) *La verdad de la tribu. La corrección política y sus enemigos*. Barcelona: Debate.
- Fukuyama, Francis (2019) *Identidad, la demanda de dignidad y las políticas de resentimiento*. Barcelona: Deusto.
- Fraser, Nancy (2019) *¡Contrahegemonía ya! Por un populismo progresista que enfrente al neoliberalismo*. Buenos Aires: Siglo XXI editores.
- Guibernau, Montserrat (2017) *Identidad. Pertenencia, solidaridad y libertad en las sociedades modernas*. Madrid: Trotta.
- Gutiérrez-Rubí, Antoni (2019) *Gestionar las emociones políticas*. Barcelona: Gedisa.
- Gracia, Jordi (2018) *Contra la izquierda. Para seguir siendo de izquierdas en el siglo XXI*. Barcelona: Anagrama.
- Grimson, Alejandro (2019) *¿Qué es el peronismo? De Perón a los Kirchner, el movimiento que no deja de conmover la política argentina*. Buenos Aires: Siglo XXI editores.
- Highfield, Tim (2016) *Social media and everyday politics*. UK: Polity Press.
- Kierkegaard, Soren (2006) [1843]. *O lo uno o lo otro un fragmento de vida (I)*. Madrid: Trotta.

Murgia, Michela (2019) *Instrucciones para convertirse en fascista*. Barcelona: Seix Barral.

Riemen, Rob (2018) *Para combatir esta era. Consideraciones urgentes sobre el fascismo y el humanismo*. Madrid: Taurus.

Sánchez-Cuenca, Ignacio (2018) *La superioridad moral de la izquierda*. Madrid: Lengua de Trapo.

Van Reybrouck, David (2013) *Against elections. The case for Democracy*. UK: Penguin Random House.

Evo Morales ante la historia

Manuel Suárez

LO QUE ANIQUILÓ A EVO: LA CONTRADICCIÓN NACIONALISMO/CAUDILLAJE

A Morales lo aniquiló la contradicción insalvable entre su proyecto de tipo general o nacional y su proyecto de tipo caudillista o particularista. Lo aniquiló, pues, la contradicción implosiva entre nacionalismo y caudillaje. Son —fueron— dos proyectos de poder incompatibles que Evo intentó a la vez. Veamos.

Mi hipótesis, a las pocas semanas de la caída de Morales, es que su legado en la historia será doble. Por un lado, el legado nacional-popular, el legado modernizador y promotor de una Bolivia que tiende a convertirse en una sociedad moderna y de clases medias. Y por otro lado, el legado feudal y caudillista que empujó a Bolivia hacia la condición arcaica y premoderna.

Morales, en un mismo proyecto, resume la tragedia del siglo XX boliviano: la contradicción entre lo nacional-popular y el caudillaje tradicional.

Contradicción que la historia boliviana repite una y otra vez generando tantas veces la paradoja de que el caudillaje suele ser la estrategia política utilizada para instalar (precisamente) el régimen de corte nacional-popular.

Otro debate —muy distinto— es si, en efecto, el nacionalismo y su primo hermano el socialismo “modernizan”. ¿Lo hacen? Eso es tema para otro ensayo, pero reconocamos, de partida, que es aceptado en la cultura política vigente que ambas son ideologías y proyectos modernizadores.

En mi hipótesis, la caída sorprendente de Morales llega cuando la gente se cansa del Morales defensor del caudillaje. En mi visión, esa es la explicación estructural en el agotamiento y en la caída de Morales.

Las clases medias (eso que me gusta llamar “las clases modernas y modernizadoras”) que el mismo Morales impulsó y potenció con sus políticas de modernización entraron en contradicción con el caudillaje del expresidente.

Es decir, en las clases medias, de modo progresivo, fue creciendo la impresión y el sentimiento de que, a cambio del interés público que Morales generaba con sus políticas modernizadoras y de corte nacional-popular, cobraba, luego, una dosis amplia de poder y de fortaleza feudal y particularista. A más modernizador, más premoderno. A más nacionalismo, más caudillaje.

¿MORALES DEJA UN ORDEN DE TENDENCIA CAUDILLISTA O DE TENDENCIA MODERNA?

Habiendo sido Morales las dos cosas a la vez —nacionalismo y caudillaje—, ¿qué queda de ese legado doble? Es un debate abierto. Los críticos de Morales verán la huella del caudillaje y sus simpatizantes el legado nacional-popular.

Pero vamos un paso atrás para comprender el proceso.

Lo estatal en la historia

Un orden moderno es simplemente la sociedad de las clases medias. Una sociedad donde la acción (social), en general, está ajustada a motivaciones y procedimientos racionales; donde, además, la economía está relacionada con el capitalismo y el comercio y donde lo político tiende hacia la dominación, la legitimidad y la convivencia en base a la vigencia de una ley estatal, que es monopólica, imparcial y objetiva.

En la historia política, la sociedad moderna se liga al orden que conocemos como Estado moderno. Es decir, se liga a la vigencia del tipo de dominación donde la ley manda en régimen de monopolio.

Ahora bien, recordemos que, a pesar de que el Estado moderno termina (en efecto) siendo del mundo donde manda la ley, sin embargo, comienza siendo del mundo donde manda el caudillo (militar y/o religioso y/o ideológico).

No hay Estado moderno sin caudillaje previo. Pero, ojo: hay mucho caudillaje que jamás ha generado estatalidad alguna y que, de hecho, la ha impedido. La razón es sencilla: es normal que el caudillo se trague —con su enorme poder subjetivo y personal—, cualquier posibilidad de poder estatal, objetivo o legal.

Así, ya tenemos una gran receta histórica para impedir el Estado —receta que en América Latina es habitual—, a saber: los propios gobiernos impiden el desarrollo de lo estatal. Son gobiernos personalistas (gobiernos caudillistas) tan poderosos, que frenan el mando de la ley objetiva y el consecuente desarrollo de lo estatal.

Pero volvamos a los orígenes históricos de lo estatal.

El Estado moderno, que es cosa europea, es un orden donde necesariamente comienza mandando la monarquía

absolutista y termina mandando la ley imparcial. Es un proceso. Es un proceso europeo donde el monarca impone un principio básico que luego será la plataforma de la estatalidad contemporánea: "Todos deben obedecerme por igual". Posteriormente, en el marco de ese proceso, desaparecen el monarca y su régimen (por muerte natural o derrocamiento), pero sobrevive ese principio y se aplica, ya no en favor del poder subjetivo del monarca y sus círculos, sino en favor de la ley que el monarca deja escrita tras su desaparición. Y entonces, muerto el monarca, el principio opera así: "Todos, por igual, deben obedecer a la ley escrita".

Ese es el "momento" histórico cuando se acaban los privilegios y la ley vale igual para todos. Es la objetivación del orden. La ley del caudillo o del rey se ha convertido simplemente en la Ley y esta no admite poderes subjetivos que la enfrenten ni necesita poder subjetivo alguno que la sustente. Es cuando perfectamente puede darse el que haya estupendas democracias sin demócratas.

¿Es este el caso de Morales? ¿Un caso donde el caudillismo extremo ha sembrado el terreno para que, tras la desaparición del poder subjetivo del caudillaje, venga el poder objetivo del Estado? ¿El poder caudillista de Morales ha sentado las bases de la estatalidad moderna, tal y como en muchos sentidos lo hizo el poder concentrado y monopolizador de la revolución del 52?

Vamos otra vez lo histórico.

El Estado moderno nace en el siglo XVI europeo en base a las monarquías absolutistas que sociológicamente son órdenes basados en el caudillaje de tipo nacional (la España de los Reyes Católicos, la Francia de Francisco I o la Inglaterra de Enrique VIII). Se funda así el tipo de estatalidad que acaba por consagrarse en la Revolución

Francesa y que, en definitiva, lo que viene decir es que en un determinado sitio no manda “alguien” sino que manda “algo”: la ley.

Sin duda, hay una gran diferencia entre que mande el rey o mande el pueblo y la nación. Y desde luego, también hay diferencias fuertes en el sistema político: una cosa es una corte palaciega y otra un Parlamento. Pero, a pesar de cualquier diferencia, el proceso es uno solo: es el proceso de racionalización y objetivación del mando. Es el proceso de fundación del Estado. Y recordemos: las repúblicas iberoamericanas se fundan bajo los paradigmas de este proceso, allá a principios del XIX.

Por cierto, para entender todo el proceso es bueno recordar que, en el primer mundo, ese paradigma de modernización, de racionalización, de objetivación y de legalización del mando, se consolida tras la Segunda Guerra Mundial. No antes. Y por eso es probable que esa guerra tenga la misma influencia que la propia Revolución Francesa a la hora de explicar y valorar lo que verdaderamente influye en el proceso de creación del Estado.

¿Qué es lo que verdaderamente influye en aquel proceso de fundar y crear el Estado? Lo que verdaderamente influye es la dimensión y profundidad de la violencia política. A más violencia, más probabilidad de fundar el Estado. Sea violencia como revolución y guerra civil o, en su defecto, violencia como guerra exterior. Recordemos que la Revolución Francesa no es solo la violencia que produce en sí misma y durante sus diferentes fases —y ni siquiera es la violencia ligada al periodo de El Terror (eso es violencia mínima)—, la verdadera violencia que se liga a la Revolución como creadora de estatalidad consiste, en realidad, en las guerras napoleónicas

posteriores para defender e impulsar lo revolucionario y sus intereses en Europa (y en América en general).

Pues bien, antes de la Segunda Guerra Mundial Occidente navegaba aún en ambas aguas: en las de lo premoderno y en las de lo moderno, aunque es cierto que más allá de los avatares políticos y bélicos, la tendencia hacia la modernización era ya evidente y general en Occidente desde las revoluciones liberales, desde la Revolución Industrial y, por supuesto, desde la Primera Guerra Mundial.

Con estas reflexiones sobre lo histórico y lo estatal, cabe aún más la tentación de hacernos una pregunta cuya respuesta está abierta al debate: ¿Lo que deja Morales (que, recordemos la hipótesis de partida, era un proyecto con un pie puesto en lo moderno y otro en el caudillaje) es un campo social arrasado por el caudillismo o es más bien la base de una sociedad moderna y estatal?

Por ejemplo, ¿alguien de verdad logrará desmontar la tendencia igualadora y de inclusión indígena que siembra Morales? ¿Alguien en el futuro podría renunciar a ese valor y a esa legalidad que, a dudarlo poco, es un valor radicalmente modernizador, pues golpea de frente el gran tema pendiente de la igualdad moderna en Bolivia, que es el racismo contra los indígenas? ¿Alguien?

En fin, vamos a ver los dos Morales que quedan sembrados en la vida pública boliviana. Vamos a ver lo más destacado del Evo nacional-popular y modernizador, y vamos a ver lo más destacado del Evo ligado al caudillaje.

EVO NACIONAL-POPULAR

En mi perspectiva el proyecto de fondo de Morales era un proyecto de poder orientado hacia lo nacional-popular.

Es decir, un proyecto modernizador por la vía de impulsar políticas, creencias e ideas nacionalistas y estatistas. Eso, desde mi punto de vista, era Morales en su mejor versión. Es el Morales que encaja con la Revolución del 52. Sin ese Morales la Revolución hubiera quedado inconclusa. Esto de entrada descarta a dos “posibles Evos” (con los cuales se especuló en la cultura popular): por un lado, descarta al Evo socialista de raigambre marxista y por otro, descarta al Evo de militancia dogmática en la identidad indígena.

El camino socialista fue una cuestión confinada al discurso simbólico en el evismo; confinada al póster del Che en tantos salones oficialistas. El único nexo serio de Evo con el socialismo real fue el apoyo estratégico que recibió del régimen cubano en varias materias, apoyo que implicaba muchas cosas por ambas partes, excepto convertir a Bolivia en un Estado socialista o comunista.

El otro Evo, el de militancia dogmática en la identidad indígena, también era muy importante. Pero otra vez, en mi hipótesis, lo era como complemento de legitimidad a lo central que —como queda apuntado— estaba articulado en torno a lo nacional-popular. Eso sí, en lo internacional —y dada la tendencia a supervalorar las identidades originarias de los pueblos (tendencia tan en boga con la crisis de la modernidad occidental y la llegada de los vientos posmodernos)— Morales trabajó y explotó con mucha eficacia la cuestión de la militancia en la identidad indígena. Era su lado más vistoso, épico y atractivo frente al mundo.

Pero veamos con cierta perspectiva el nexo polémico entre la militancia en lo indígena y lo nacional-popular. Dos puntos de vista han prevalecido en torno a este debate.

Por un lado, el punto de vista que acusa a Morales de imponer, de modo enfático y dogmático, la impronta racista en la política boliviana, abriendo un riesgo de polarización y antagonismo de alto riesgo para la convivencia.

Y, por otro lado, la visión comprensiva; un planteamiento que insiste en que era necesario poner fuerza en la reivindicación de la identidad indígena como estrategia para luchar con éxito frente al problema estructural e histórico del racismo y la discriminación contra los indígenas en Bolivia.

Esta visión —que se concentra en reivindicar la militancia en lo indígena como lucha inteligente por la igualdad y así, reivindicándola como parte del engranaje nacional-popular orientado a lograr la igualdad moderna— guarda su parecido con la visión que justificó las políticas indigenistas de la Revolución del 52.

En contraposición, la visión crítica —que acusa a Morales de exacerbar el racismo con el riesgo que ello implica para cualquier comunidad— es la que prevalece en la perspectiva propia de la tradición liberal y universalista, contra cualquier política excesivamente centrada en las cuestiones de la identidad y, en particular, en la cuestión de la raza. Esta visión tiende a sostener que lo racial en el gobierno de Morales signa de tal modo la gestión y lo político que termina derrumbando las bases de lo nacional-popular lo cual, conceptualmente, está asociado a una idea nacional del hombre más allá de sus razas (y más allá de sus clases).

A su vez, la perspectiva comprensiva —con el énfasis y la militancia que puso Morales en la identidad indígena— tiende a ver, en esta posición del expresidente, un buen complemento de lo nacional-popular y su tradición, en el sentido de que ese complemento significa que el gobierno

de Morales aplicó políticas inclusivas inteligentes en la materia. Políticas que luego han tendido a sincerar y a curar heridas y grietas históricas muy graves de discriminación contra los indígenas y contra lo indígena en general, y que, además, al igualar y modernizar la sociedad, han hecho bien a la economía y a muchos otros ámbitos básicos de la convivencia.

Dicho en otras palabras, la perspectiva comprensiva con el énfasis de Morales en la identidad indígena entiende que esta estrategia impulsó la igualdad contemporánea. Lo cual, muy probablemente, irá quedando más claro con el paso de del tiempo y de la tensión política de coyuntura.

¿Qué es la igualdad contemporánea? La igualdad contemporánea, desde mi punto de vista, es la igualdad como inclusión de quienes han estado históricamente excluidos. Es la igualdad como empoderamiento nuevo y revolucionario, de la gente que nunca antes tomó decisiones importantes en la comunidad. Es la igualdad que supera toda forma (arcaica o moderna) de discriminación. Por ejemplo, supera el machismo y el racismo. Es una igualdad más profunda que la igualdad liberal, que es la simple igualdad ante la ley. Y es una igualdad más profunda que la igualdad comercial, que es la simple igualdad de oportunidades. En definitiva, es la igualdad no como ideal de justicia, sino como legitimidad del orden capitalista. Es la igualdad no como fantasía ideológica de la izquierda, sino como realidad imprescindible de la sociedad comercial. Es pues, esa igualdad que está más allá de la izquierda y de la derecha. Es simplemente la igualdad real —y no fantasiosa— a la que tienden las sociedades contemporáneas de clases medias.

Entiéndase: es la igualdad de la cual dependerá la sostenibilidad y la viabilidad del sistema capitalista

contemporáneo, porque no es posible el capitalismo exitoso si hay colectivos discriminados y privilegios morbosos en la sociedad. Al capitalismo contemporáneo, en efecto, no le son útiles los discriminados ni los peones ni los indígenas excluidos ni los esclavos en cualquiera de sus formas actuales. Tampoco le es útil tener mujeres en el segundo plano ni sostener etnias y nacionalidades marginadas por el sistema. Al capitalismo —en suma— no le sirven los colectivos frágiles y arrinconados.

Y por eso, la igualdad contemporánea, la que supera estas taras, se ha convertido en el fundamento sociológico del capitalismo contemporáneo. Esa igualdad es la que termina impulsando Morales con sus políticas contra el racismo.

¿Qué le sirve al capitalismo exitoso? Le sirve que todos tomen parte activa y potente del mercado y de la comunidad política; le sirve la gente empoderada porque es la que produce y consume como consumen las clases medias. Le sirve que todos produzcan bien y con eficacia. Le sirve que todos estén bien alimentados; que todos tengan buena salud; que todos tengan un techo digno; que todos estén magníficamente educados. Y que todos tengan trabajo, ingresos suficientes y tiempo de ocio.

La igualdad contemporánea —esa forma básica de las relaciones sociales en el capitalismo contemporáneo— es la igualdad que viene cuando la gente en general (y más allá de su color de piel, sexo, sexualidad, creencias o cualquier otra diferencia de origen) ha accedido a un nivel razonable de bienestar y de seguridad.

En otras palabras, se trata de la igualdad —y, consecuentemente, de la libertad— de la cual gozó el hombre blanco occidental en algunas sociedades puntuales del XX pero, esta vez, aplicada a todos; absolutamente a todos.

Y no aplicada como un derecho ni como un dictamen moral ni como ideología cristiana, socialista, nacionalista o fascista —ideologías que profesan el culto a la igualdad—, sino aplicada como una necesidad material e histórica del propio sistema capitalista.

Efectivamente, es muy probable que, gracias a la sociedad capitalista centrada en las clases medias, la discriminación y los privilegios (hasta los más sutiles y sigilosos) se conviertan, en el siglo que comienza, en un lujo absurdo y disfuncional al sistema.

Pues bien, al impulsar la modernización desde lo nacional-popular, Evo resulta un gran impulsor del capitalismo boliviano posible. Y así, resulta un gran impulsor de las clases medias y, consecuentemente, de la igualdad contemporánea que es la igualdad a la que tienden —precisamente— las sociedades de clase media.

¿Qué capitalismo impulsa el Morales nacional-popular?

Morales y su modelo nacional-popular impulsan un coctel capitalista: el capitalismo que resulta de combinar estatismo con el *boom* económico de las materias primas (incluido el despegue de la agroindustria y así del capitalismo cruceño), con el crecimiento urbano de Santa Cruz y la economía informal en todo el país. De ese coctel resulta el capitalismo nacional-popular de Evo Morales.

Se trata de un sistema económico en el que conviven múltiples formas de economía capitalista y diversos capitales. Por ejemplo, el capitalismo de Estado y sus grandes empresas estatales; el capitalismo formal y urbano que despegó en base a pequeñas, medianas y grandes empresas privadas (sobre todo de servicios e industrias básicas); el capitalismo internacional —que en la era Evo se consolida con la llegada de capitales extranjeros a la minería, a la agroindustria y con las franquicias—;

el capitalismo oligárquico (ligado a la tierra rural y a la especulación inmobiliaria urbana); y el capitalismo de base o popular asociado a la masificación del autoempleo urbano y al capitalismo informal en actividades como el contrabando y el narcotráfico.

Pues bien, probablemente, el resultado sociológico más notable de este *boom* capitalista asociado a Morales ha sido el surgimiento e impulso de las clases medias. Y las clases medias, como se sabe, llegan con un paquete amplio de visiones y prácticas; una de las más destacadas —como fenómeno modernizador— es, en efecto, la tendencia hacia lo que llamo la “igualdad contemporánea”.

Hasta aquí hemos dicho que no hubo un Evo socialista, ni tampoco un Evo dogmático en lo que respecta a la identidad indígena; hubo, más bien, un Evo nacional-popular que impulsa las clases medias y un particular modelo capitalista. Para redondear esa perspectiva, nos preguntamos: ¿Es ese Evo nacional-popular e impulsor del capitalismo un Evo desarrollista?

Hay una potente tradición nacional-popular asociada a la teoría de la dependencia y al impulso del desarrollismo, y Morales hace parte de esa tradición. Es el Morales que impulsa el crecimiento del Estado en la economía en tantos planos: el Estado empresario, el Estado protector, el Estado de mensaje industrializador y el Estado decidido a sostener una inversión pública muy fuerte, sobre todo en infraestructuras y, especialmente, en carreteras (un capítulo básico de la política desarrollista en la gestión de Evo Morales).

Este desarrollismo de Morales encontró dos críticas fuertes: una, la crítica del mundo ambientalista —que centró sus objeciones en la cuestión de la construcción de la

carretera a través del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécore (TIPNIS)— y, otra, la de quienes hubieran preferido menos inversión pública en empresas estatales y en infraestructura y más recursos en salud y educación. Llamémosle a esta crítica, la crítica socialdemócrata.

EL EVO DEL CAUDILLAJE

Hasta aquí hemos visto al Evo nacional-popular, con sus luces y sus sombras; veremos ahora al Evo del caudillaje.

¿Qué tipo de comunidad se teje en torno al caudillaje? Son comunidades de tendencia cerrada, poco objetivas en sus nexos y, más bien, basadas en los nexos afectivos y personalistas. Sus élites viven y se legitiman en función a poseer una suerte de identidad específica, cerrada y muy personalizada. Élites del tipo “los elegidos”. Y por eso, la sociedad del caudillaje tiende a la sociedad segmentada en castas.

La pertenencia a estas élites está signada por condiciones personales del sujeto: la identidad que te hace distinto y superior; la identidad que te permite la pertenencia a la familia, al partido, al gremio, a la raza, al grupo de creyentes; en suma, al grupo de los elegidos o al grupo de iniciados: de ahí nace la legitimidad de la élite.

Ahora bien, quién tiene la capacidad de decidir y, en última instancia, quiénes son los elegidos: es el caudillo. Toda pertenencia a la identidad de “los elegidos” está supeditada a la autoridad y mando del caudillo: él deja entrar y él expulsa.

Hay mucho de este tipo de sociedad en la era Evo; hay mucho de ese tipo de sociedad en la Bolivia que Evo impulsa; hay mucho de ese tipo de sociedad en la Bolivia

que Evo deja en noviembre de 2019 y, desde luego, hay mucho de ese tipo de sociedad en la Bolivia que Evo encontró al llegar al poder en enero de 2006.

Esto último es importante. Lo es porque este ensayo no sostiene la hipótesis de que Evo funda el caudillaje en Bolivia, ni siquiera de que lo profundiza o reinventa. Todo lo que Morales tuvo de caudillista y todo lo que sembró de caudillaje fue simplemente la continuación de una centenaria tradición sobre el mando y la legitimidad en Bolivia, signada —siempre— por una potente tendencia premoderna.

Así, puede decirse que Morales simplemente aplicó al terreno del caudillaje tradicional boliviano, los matices de su modelo político, económico y social, que fue el modelo nacional-popular.

Con Evo tuvimos un caudillo nacional-popular y, como dije al inicio de este ensayo, eso, en sí mismo, es una contradicción permanente entre nacionalismo y caudillaje que tiende a implosionar.

LA CAÍDA COMO FIN DE CICLO

Con la caída de Morales concluye un ciclo que duró más de una década. ¿Cuándo y cómo comienza a la crisis de ese ciclo? Hay dos circunstancias concretas que explican esa crisis: la ralentización de la economía y la suma de seis graves errores políticos.

La ralentización la economía

La bonanza económica que se inicia con el despegue de los precios de las materias primas justo al comenzar el gobierno de Morales hizo que, por muchos años, para

la sensibilidad popular fueran más notables los aciertos modernizadores del Evo nacional-popular que los tropiezos y retrocesos del Evo signado por el caudillaje. En otras palabras, la bonanza amortiguó la contradicción entre nacionalismo y caudillaje.

Sin embargo, la economía se desacelera a partir de 2014 y los estudios de opinión (encuestas y grupos focales) van mostrando —de modo paralelo— un debilitamiento lento pero sostenido en la popularidad y en la credibilidad de Morales.

Cualquier sistema político sufre si la economía no va bien, pero el modelo nacional-popular y el caudillaje son —ambos— tipos de dominación y sistemas políticos que normalmente requieren un gasto público potente. Requieren, en consecuencia, políticas y actitud de gasto “generoso” por parte del gobierno y, en particular, del líder. Requieren, en suma, un gobernante de manos abiertas.

El contexto de varios años de economía acelerada contribuyó a crear dos cosas; por un lado, el crecimiento de la clase media y, por otro, la expectativa de mejora de toda la población. Sin embargo, en 2019, ambas cosas estaban frenadas. Comenzaron a frenarse a partir de 2014. El descontento que alimenta la revuelta final contra Morales está alimentado, en gran parte, por la frustración de la clase media que ve frenadas sus expectativas de mejora y ascenso social. En parte, se trata la frustración de una nueva clase media que el propio Morales había contribuido a crear.

Seis graves errores políticos

Seis errores del gobierno, cometidos desde 2014, fueron asumidos por gran parte de la población como problemas

muy serios. En efecto, entre un 50 y un 60% del electorado se sintió frustrado y muy molesto por algunos o por varios de estos errores durante ese periodo.

Cualquiera de estos seis errores hubiera sido un golpe muy duro contra la popularidad y credibilidad de cualquier otro gobierno; sin embargo, en el escenario de la ralentización económica fueron errores aún más sentidos y frustrantes para la población crítica gestión del presidente Morales.

Por ello, fueron errores que golpearon la línea de flotación de la legitimidad del gobierno. Erosionaron, pues, los grandes mitos que sostenían el mensaje, la narrativa y, en definitiva, la estrategia del gobierno de Morales y de la propia figura del presidente.

Por razones de espacio no vamos a desarrollar una crónica a profundidad de las circunstancias específicas que rodearon cada uno de estos errores (eso queda como un trabajo pendiente), pero sí vamos a mostrar cómo, cada uno de ellos, dañó los cimientos de todo el sistema de legitimidad de Morales y cómo, en conjunto, minaron, su base de sustentación.

Planteamos estos errores tomando como base los resultados que mostraron los estudios de opinión a lo largo de todo este periodo. Es decir que son errores que vimos y estudiamos en encuestas y grupos focales.

1. *La sensación de que Morales era indolente con el medio ambiente y los indígenas de tierras bajas: caso TIPNIS*

La crisis del TINPIS golpeó dos mitos de sustentación de Morales; a saber: el mito del Morales defensor del medioambiente (el presidente inspirado por la Pachamama) y el mito del “presidente indio que defiende a los indios”.

Estos mitos no son poca cosa pues representan dos de los ejes más poderosos de toda la narrativa nacional e internacional en torno al “primer presidente indígena de Bolivia”.

Como es sabido, la sensibilidad y las creencias medioambientalistas han adquirido, en las últimas dos décadas, rango de “religión política” entre sectores bolivianos de gente joven, urbana y de clases medias y medias altas.

Con ese panorama, estos sectores exigen de los líderes y de las instituciones estatales un medioambientalismo militante; en otras palabras, un medioambientalismo del siglo XXI. Sin embargo, el apego y el mensaje de Morales a las cuestiones del medioambiente respondían, más bien, a la racionalidad y sensibilidad del siglo XX; se trataba, después de todo, de un ambientalismo ligero y declarativo. Un ambientalismo que, comparado con las grandes causas del siglo XX, quedaba en segundo plano de prioridades. Por ejemplo, para el evismo, la causa nacional —la causa de la identidad y hasta la causa del socialismo— estaban muy por encima de la militancia y del compromiso con las creencias ambientalistas.

Probablemente ya es una cuestión universal en Occidente el que la fuerza del ambientalismo en las nuevas generaciones ha dejado obsoleta la estrategia de gran parte de la izquierda incorporando las cuestiones del medioambiente asociadas al ideario de izquierdas y socialdemócrata. Para las nuevas generaciones el orden de prioridades ha cambiado: ya no se trata de ser primero socialdemócrata y luego ambientalista, ahora hay que ser ambientalista, en primer lugar, y luego ya se verá qué hacer y cómo hacer con el resto de las batallas, sean estas batallas sociales, nacionales o de cualquier otra índole.

Esa actitud dura y militante en favor del medioambiente golpeó al Morales del TIPNIS. El presidente apareció en esta polémica como un desarrollista insensible ante la naturaleza, defendiendo el diseño de una carretera que dañaría irremediablemente el ecosistema.

Pero, además, con la polémica sobre la carretera del TIPNIS surgió en la opinión pública la sospecha de que esa actitud de Morales escondía la estrategia de construir esa vía en beneficio de sus propios sindicatos cocaleros. Este no es un dato menor porque esta misma sospecha sobre Morales en relación a la ecología y los intereses de sus sindicatos del Chapare luego le pasarían factura electoral.

En efecto, en los meses previos a la elección de 2019, esa misma sensibilidad impulsada por movimientos medioambientalistas de jóvenes muy comprometidos, infringió un duro golpe a la candidatura de Morales acusándole de ser una especie de cómplice de una grave serie de incendios que se produjeron en las tierras bajas de Santa Cruz y, con mayor crudeza, en el Bosque Seco Chiquitano.

Es probable que esta acusación no restara votos a Morales pero sí contribuyó a un escenario en el cual su rival, Carlos Mesa, pudo crecer en Santa Cruz y en el cual el propio Morales se vio impedido de seguir creciendo como seguramente lo había hecho hasta antes del incendio. En suma, romper el mito del Morales ambientalista fue muy duro para la credibilidad y popularidad del presidente.

Del mismo modo, tuvo un importante impacto la caída del mito básico de que Morales defendía siempre a los indígenas. Bastará con recordar que, durante la primera marcha por el TIPNIS, una de las noticias más impactantes para la opinión pública urbana —hecho reflejado en los estudios de opinión— fue la represión contra los marchistas; las imágenes de las fuerzas gubernamentales

cargando con gran violencia contra mujeres y niños indígenas dejaron huella. La opinión pública pudo ver, en sus televisiones y en sus teléfonos móviles, durante varios días, cómo las fuerzas del gobierno de Morales reprimían a los indígenas que expresaban legítimamente su desacuerdo y que trataban de hacerse escuchar para protestar contra la carretera del TIPNIS.

En un solo evento —el conflicto del TIPNIS— caían dos mitos: Evo medioambientalista y Evo defensor a ultranza de los indígenas. Y en el mismo evento, además, se profundizaba la duda sobre un Morales dispuesto a todo para proteger e impulsar los intereses de sus propios sindicatos cocaleros.

2. *La sensación de que Morales estaba ligado a la corrupción*

Por otra parte, la creciente sospecha de que el gobierno de Morales —en todos los niveles e incluso hasta afectar de modo personal a la propia figura del presidente— estaba implicado en casos de corrupción acabó con el mito del “buen salvaje”. Es decir, resquebrajó la creencia de que Morales era un líder puro; un político distinto a los líderes manchados por los vicios de la “civilización colonial” y del viejo sistema. Los dos eventos que más impresionaron a la opinión pública sobre la corrupción asociada al gobierno de Morales fueron el caso del Fondo Indígena y el caso Zapata.

En el caso del Fondo Indígena se instala, en gran parte de la opinión pública, la percepción de que las políticas en favor de los indígenas eran, en realidad, una tapadera para esconder intereses ilegítimos, o sea, para esconder corrupción y malos manejos de los dineros del Estado.

En el caso Zapata, por otra parte, se instala la desconfianza general por las denuncias de que Morales usaba su poder presidencial para favorecer con millonarios contratos estatales a una persona con quien mantenía nexos personales, afectivos y sexuales; vínculos que, por si fuera poco, el propio Morales negó de modo sistemático hasta que la prensa y las redes sociales pusieron el caso al descubierto. Se trató de un escándalo político en toda regla y con todos los ingredientes (amor, dinero y poder) para llamar la atención del público. Un *affaire*, además, impulsado por una campaña sistemática de *spots* de televisión desde la oposición a Morales y de ataques muy fuertes desde las redes.

3. *La sensación de que había mucho despilfarro*

Con el transcurso de los años de gobierno, se fue afianzando la percepción de que aquel Evo Morales humilde de los inicios había desaparecido para dar paso al político obsesionado con los lujos del poder. La frase común en los grupos focales era: “Evo ya no es el mismo”.

A los electores les impresionó mucho que Morales apareciera asociado a gastos de lujo; les impresionó el nuevo Palacio de Gobierno llamado Casa Grande del Pueblo; les impresionó el nuevo avión presidencial y el museo de Orinoca dedicado a la persona de Morales. La opinión de que Evo despilfarraba los recursos públicos no era tanto una preocupación sobre las cuentas del Estado, sino que se refería al cambio que la gente percibía en la personalidad del presidente: se había quebrado el mito del hombre de orígenes humildes que gobierna pensando en los humildes. Evo ya no actuaba como los humildes, actuaba como los ricos.

4. *La sensación de que Evo intenta cambiar el Código Penal para perjudicar a sus enemigos y favorecer a sus amigos*

Con la polémica sobre el Código Penal se rompe el mito del hombre justo. En efecto, la gente comienza a percibir, según los estudios de opinión, que Morales no tiene sentido de lo justo: quiere leyes para perseguir a los que no piensan como él y quiere leyes para proteger a sus círculos (asociados ya a casos de corrupción, de acuerdo a la opinión de mucha gente). Aunque, en lo coyuntural, las protestas contra el Código Penal fueron, sobre todo, un conflicto entre Evo y el sector salud (con los médicos a la cabeza), en realidad, en lo político, la gente asumió el reclamo como una “cruzada” para que Morales no haga leyes injustas.

5. *El 21F: la sensación de que Evo no respeta el voto*

Con el voto del 21 de febrero de 2016 en contra de modificar la constitución para permitir una nueva repositulación del presidente, se viene abajo el mito democrático de Evo. Se acaba el mito del presidente que gobierna escuchando al pueblo. A los electores no les molestó tanto la intención de Morales de buscar una reelección más; lo que indignó fue el hecho de que Morales se negara a reconocer su derrota en las urnas y como definitivo el resultado del referendo del 21 de febrero de 2016 que le impedía presentarse a la reelección. La gente se sintió engañada: votó y su voto no contó.

6. *El fraude*

Los mencionados errores políticos de Morales, en conjunto, causaron un efecto terrible contra su imagen: sembraron grandes dudas sobre su persona. Instalaron

la sospecha de que había mentido sobre quién era y, así, sobre sus verdaderos propósitos.

Al fin, la acusación de fraude, por su parte, remató el esquema de ataque: confirmó en la mente de millones de electores que Morales, efectivamente, no tenía ya la fiabilidad suficiente para seguir en el cargo.

Es decir, la acusación de fraude, respaldada por la Organización de Estados Americanos (OEA), confirmó en la mente de medio país que Evo mentía, que violaba la ley, que no respetaba el voto, que solo le interesaba el poder y que toda la batería de principios que habían sostenido su legitimidad pública era, en realidad, tan solo un discurso vacío y manipulador.

CONCLUSIÓN

Se han ido dos Evos Morales a la vez: el nacional-popular y el caudillo. Se acabó un ciclo donde, gracias al *boom* económico, ambos Evos sobrevivieron con éxito y cierto equilibrio. La caída viene cuando ese equilibrio se rompe y el Evo nacional-popular resulta destruido a manos del Evo caudillo.

¿Qué viene después?

Tres preguntas para el futuro.

El modelo nacional-popular, después de la caída de Evo y tras del fin de este ciclo de auge económico asociado a la gestión de Morales, ¿está definitivamente agotado como camino de modernización en Bolivia? Y si así fuera, ¿cuál es el modelo alternativo que viene? Y venga lo que venga: ¿Será algo que se funde en instituciones republicanas, en valores republicanos y en eso que se conoce como libertad política? Veremos.

El evismo en la boca del lobo: Réplica populista a la afrenta autoritaria

Yuri F. Tórrez

A las seis de la mañana de un domingo, cuando los primeros rayos de sol aparecen, en un sindicato rural cochabambino los afiliados toman apuntes en cuadernos escolares e intercambian opiniones. Más allá de las encuestas urbanas, están evaluando el desarrollo de la campaña electoral en curso. Cuando ocurrió esta escena faltaban pocas semanas para las elecciones del 20 de octubre del 2019. La reunión servía para organizarse: coser y, en algunos casos, zurcir banderas viejas; planificar mítines. En fin, los campesinos estaban convencidos que el proceso político gestado por ellos mismos —denominado “proceso de cambio”— les pertenece y, en consecuencia, debe continuar. Esa lealtad se reflejó en el voto duro al Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) mediatizado, obviamente, por el liderazgo político de Evo Morales.

Se trata, pues, de un proceso político que muchos caracterizaron como *populismo*. Este dispositivo conceptual/teórico brinda un potencial epistémico para el abordaje del evismo —término que alude fundamentalmente al liderazgo de Evo Morales— y sus implicancias político-sociológicas. Este fenómeno

sociopolítico adquirió sus propias características porque Morales fue el primer gobernante indígena en la historia de Bolivia.

A pesar de la importancia analítica del *populismo* para desentrañar el evismo, este fue soslayado por las ciencias sociales bolivianas. El término *populismo*, usado en el discurso político por opositores al MAS-IPSP y por sus intelectuales sirvió para estigmatizar a este proceso político. Este afán de desportillar al evismo, por la vía peyorativa de asignarle la etiqueta de *populista*, como efecto colateral cohibió a muchos intelectuales afines al denominado “proceso de cambio” a utilizar a esta perspectiva teórico-conceptual.

El presente ensayo recupera al *populismo* como dispositivo teórico para comprender la presencia del evismo en el espectro político y, específicamente, la acción movilizadora y su despliegue discursivo como estrategia política para replicar, a fines de octubre y noviembre del 2019, a la movilización de sectores medios urbanos que precipitó el quiebre constitucional, es decir, un golpe de Estado traducido en la renuncia forzada de Evo Morales, después de 14 años, a la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia.

EVISMO, EXPRESIÓN DEL “POPULISMO”

El *populismo* es una noción con diversas acepciones; por ello, ha adquirido varios sentidos en el espectro político y académico. Esta polifonía de significaciones hace necesario recuperar su sentido originario que da cuenta de una “tendencia política que pretende atraerse a las clases populares”, o sea, “ir al pueblo”, y allí buscar el sentido de sus acciones.

La presencia de gobiernos progresistas en América Latina, a raíz del denominado “giro a la izquierda”, reavivó ese añejo debate teórico y político sobre el populismo. En el texto *La razón populista* (2005), Ernesto Laclau propone avanzar en la reflexión sobre la relación entre populismo y democracia. Mientras tanto, los sectores conservadores ven peyorativamente la impronta populista. El retorno de la izquierda representaba una amenaza para los intereses de “la élite” porque encarnaba la desigualdad política y económica. En el caso boliviano, ese miedo se explica por la cuestión del racismo colonial azuzado en la última época por la presencia de indígenas en el gobierno.

El año 2006, el exvicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, a pocos meses de la asunción presidencial de Evo Morales, definía al evismo como una estrategia de poder: “Aunque su núcleo fuerte parta de una persona, el *evismo* es un hecho colectivo revelado como una práctica política” (2006: 25-26). Entonces, uno de los rasgos del *populismo* está referido a la representación política. Vale decir, se avanza en el concepto convencional de representación de corte liberal para asumir una nueva dimensión: “El evismo es pues una forma de autorrepresentación político-estatal de la sociedad plebeya” (*ibid.*: 2006: 27). Aquí subyace el potencial político del evismo para constituirse en un sujeto político que se reconoce como tal. Así, la presencia del evismo en el espectro político suspendió la representatividad política liberal en aras de la identificación mediatizada por factores culturales. Y su aparición como un elemento aglutinador de lo *nacional-popular* se despliega como expresión de una “crisis de representación” (Laclau, 2006) o “crisis orgánica” (Gramsci, 1978). Efectivamente, la crisis estatal en Bolivia, a inicios del siglo XXI, abonó las condiciones necesarias para la

consolidación del evismo como un sujeto colectivo, como *pueblo*. Como diría Alain Touraine: “La apelación directa al *pueblo* elimina las formas de representación política habituales de Occidente” (1989: 166).

A la sazón, el surgimiento del evismo fue consecuencia de una acumulación de procesos de resistencia que se remonta a la acción del movimiento cocalero en su lucha contra las políticas antidrogas en la década de los ochenta y noventa donde incubó un discurso nacionalista y antiimperialista. Esta lucha fue central para la construcción de un dispositivo discursivo interpelador. Luego, en el decurso de la Guerra del Agua (2000) y la Guerra del Gas (2003), anclado en el sentido del *pueblo*, articuló a distintos sujetos no necesariamente referidos a un sujeto clasista, sino a un abigarrado de sujetos que se imbrican en “la presentación de las interpelaciones popular-democráticas como conjunto sintético-antagónico respecto a la ideología dominante” (Laclau, 1978: 201).

El evismo es un fenómeno político articulador de un archipiélago de interpelaciones populares-democráticas sostenido por organizaciones de indígenas/campesinos y por organizaciones sociales periurbanas que en su conjunto configuran el Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (IPSP). El IPSP se constituye, así, en el nervio sociopolítico del MAS posibilitando una mayor ampliación de esa acción de los movimientos sociales que en su composición social diversa adquirió su propio potencial democrático.

El IPSP fue la estrategia convergente que desde “abajo hacia arriba”, desde lo “popular” que, según Ernesto Laclau (2006) logra las articulaciones equivalenciales de demandas. Entonces, el evismo no solo es un sujeto

político, sino es una identidad en la que el “núcleo articulador de esa estrategia es el discurso de la identidad y la presencia indígena” (García, 2018: 7). Pero, el potencial del evismo no solamente estriba en posicionar los elementos identitarios puesto que además, se erige en articulador de lo *nacional-popular* asociado al mundo campesino/indígena como un componente sintetizador de ese populismo arraigado en las entrañas de una sociedad diversa. El evismo consolidó ese bloque popular preexistente antes de la llegada de Evo Morales al poder. En rigor, lo *nacional-popular* fue decisivo para la configuración de la Agenda de Octubre, que se perfiló en el horizonte político del accionar gubernamental del MAS-IPSP traduciéndose en la convocatoria a la Asamblea Constituyente y en la nacionalización de los recursos hidrocarburíferos.

El potencial político del evismo, por lo tanto, estriba fundamentalmente en un conglomerado de núcleos campesino-indígenas, organizaciones territoriales-vecinales y sindicatos obreros y mineros que, en su conjunto, configuran la dimensión populista expresada en lo que se conoce como lo *nacional-popular*. En el repertorio discursivo del evismo que acompaña a sus estrategias y acciones político-electorales intervienen, a la vez, las referencias a la memoria de corta y larga duración, tal y como señala Fernando García Yapur:

La llegada de Evo Morales al poder y, con él, de la masa de campesinos e indígenas al Estado, no fue un hecho fortuito; sino, el resultado de la acumulación de experiencias que a lo largo de varias décadas fue cristalizando un proyecto que logró combinar factores históricos de larga y corta duración (2018: 7).

Aquí subyace la verdadera significación del evismo: es un sujeto colectivo portador de una estrategia populista que logró no solamente condensar las diferentes dimensiones

organizativas de lo *nacional-popular* sino, a su vez, sus verdaderas memorias de lucha que relampaguean en su accionar político y en su repertorio discursivo.

EL EVISMO: SU DIMENSIÓN DISCURSIVA Y HEGEMÓNICA

Ernesto Laclau dice el populismo implica “constituir un pueblo como sujeto político” (2006: 232). Aquí radica el sentido del populismo: entre nosotros y ellos. De allí, se desprenden los discursos presidenciales de Evo Morales sean “inclusivos”; él se involucra en el “nosotros”: Evo soy yo; lo cual, según explica Fernando Mayorga, obedece a que “un líder puede ser un ‘nosotros’, puesto que somos (yo soy en minúscula) el espejo donde él se refleja” (2003: 23). Así, en sus discursos, el expresidente boliviano hiló una lealtad con sus “hermanos” (no solo compañeros) de los pueblos indígenas, o sea, con sus pares.

Esa construcción de un “nosotros” está asentada en un tipo de “pasiones”, pero no en la dimensión de “emociones” como reflejo de lo irracional, sino una pasión que sirve para la identificación del nosotros/ellos. Es el mecanismo de las identificaciones asumiendo a la identidad como un *constructo social*. Aquí encaja, como un elemento central, el lazo social —que según Sigmund Freud es de naturaleza libidinal— como factor crucial para los procesos de identificación colectiva. Así se entiende mejor ese mecanismo de identificación que existe entre el líder, en este caso específico Evo Morales, y sus bases sociales. Son procesos de identificación asociados a factores culturales: “El presidente es un indígena como nosotros, por eso nosotros estamos gobernando” (Tórrez, 2019: 16). Esta frase condensa aquellos dispositivos discursivos que entran en juego,

particularmente, en las coyunturas electorales y en los momentos conflictivos. Como dice García Yapur:

Evo Morales, gestor de la hegemonía. El presidente ha demostrado ser un exitoso gestor de la articulación hegemónica. A través de él se ejerció con éxito la política directiva de “arriba hacia abajo” y condensó, en distintos momentos, la articulación nacional-popular. Ha logrado de manera ininterrumpida la prolongación de su gobierno y, quizás, sin que se lo proponga deliberadamente, el continuo fluir de dinámicas y pulsiones que vienen y se procesan “desde abajo” (2018: 12).

Desde el año 2002, con la presencia del MAS-IPSP en el escenario electoral boliviano se estructuró un “voto duro” concentrado, territorialmente, en el área rural. Entonces, el evismo se asentó fundamentalmente en ese espacio geográfico asociado a un factor identitario fuerte vinculado, sobre todo, al liderazgo de Evo Morales. Asimismo, sucede en aquellos momentos de crisis donde la exacerbación de las identidades posibilitó la configuración de un escenario polarizado en que se reactivaron las memorias de resistencia de lo *nacional-popular*. En ese contexto polarizado, el evismo operó como un catalizador de las luchas populares contrahegemónicas. Según Laclau, esa imbricación entre el líder y bases sociales, cimentada desde los tejidos discursivos, posibilita la “construcción de una identidad popular que articula una serie de demandas insatisfechas mediante la identificación de una élite que se opone a los designios del pueblo” (2006: 189). Entonces, el populismo encarna, por lo menos en Bolivia, lo *nacional-popular*.

El *populismo* marca sus propias fronteras identitarias, a partir de las cuales establece su antagonismo político. En rigor, el evismo configuró su identidad política e ideológica en función de una matriz de diferentes dimensiones discursivas: la *soberanía* asociada, entre otras cosas, a la defensa

de los recursos naturales (su rasgo antiimperialista); y, la *descolonización* en base a la identidad indígena /campesina como un elemento constitutivo para la construcción del Estado Plurinacional. El evismo tiene distintas apelaciones discursivas y, por lo tanto, se define, a la vez, como nacionalista, anticapitalista, antinorteamericano y anticolonial. Además, el evismo se constituye en un *populismo* que se enmarca en un horizonte emancipador que encuentra su potencial en el antagonismo político.

Este despliegue político y sus diferentes enunciaciones discursivas configuraron al evismo como sujeto social y político. El evismo se basó en el control territorial de su espacio de irradiación política para luego avanzar al espacio urbano con el propósito de irradiar su potencial hegemónico. Ese avance hegemónico del evismo se tradujo en la cristalización constitucional del Estado Plurinacional. El concepto de hegemonía acuñado por Antonio Gramsci fue usado recurrentemente para comprender y explicar la irradiación político-electoral del MAS-IPSP. Gramsci (1978) planteaba la hegemonía como la capacidad de un grupo social para generar una idea "universal" sobre las particularidades, con el propósito de interpelar o convocar, a través del consenso, al conjunto de los grupos sociales de una comunidad política ampliada, marcando así las condiciones necesarias sobre las cuales quienes osen desafiar también deben moverse. Ciertamente, desde el año 2005, la hegemonía del MAS-IPSP en el campo político boliviano se extendió después de un momento de polarización, señalado con otro término gramsciano: el "empate catastrófico". Dicha hegemonía se reflejó en una irradiación territorial, avanzando inexorablemente hacia su consolidación, en base a la legitimidad del liderazgo de Evo Morales, sobre todo, en el campo electoral. Su expansión territorial fue en

aquellas zonas inexpugnables al “proceso de cambio”: las regiones de la otrora “Media luna”¹ y las ciudades donde están asentadas la clase media.

Ahora bien, es necesario articular aquel concepto de hegemonía *gramsciano* a la noción de *hegemonía* trabajada por Ernesto Laclau (1978) que definía *lo político* como la lucha por la *hegemonía* a través de la conquista de lo que denominó como “significantes flotantes” o “vacíos”, los cuales, estando sobredeterminados, discursiva y libidinalmente, articulan las diversas demandas sociales. El evismo logró articular los discursos sobre nacionalización, indignación contra la corrupción, descolonización, crecimiento económico, con la capacidad, incluso, de articular el modelo estatal de la plurinacionalidad con la cuestión de las autonomías departamentales. Posteriormente, esos “significantes flotantes” —que eran parte de una disputa antagónica— encuentran sus propias equivalencias y diferenciales en la construcción del nuevo horizonte estatal plasmado en la nueva Carta Magna. Así, el populismo del evismo, en su afán hegemónico, logró articular discursiva y libidinalmente aquellas demandas que estaban en el debate/disputa de la agenda política. A partir de lo cual estructuró

1 La Media Luna, en Bolivia, fue la denominación política informal de una zona ubicada en el Oriente del país. La Media Luna está integrada por los departamentos ubicados en la región de los llanos: el departamento de Tarija y los departamentos del Oriente boliviano: Santa Cruz, Beni y Pando. La Media Luna desempeñó un papel en la política interna de Bolivia, debido al movimiento autonomista que iniciaron los departamentos que componen la zona, luego de que en 2005 resultara electo presidente de Bolivia Evo Morales, el primer presidente indígena de la historia del país, pese a que el (62%) de la población es indígena. La disputa por las autonomías departamentales se constituyó en la principal batalla de la Media Luna contra el gobierno de Evo Morales en el contexto del debate de la Asamblea Constituyente.

un campo de acción para un proyecto estatal hegemónico del Estado Plurinacional.

REFERÉNDUM DEL 21 DE FEBRERO O DECLIVE HEGEMÓNICO DEL EVISMO

Uno de los momentos de inflexión hegemónica del evismo fue el Referéndum Constitucional del 21 de febrero del 2016 para la aprobación o rechazo del proyecto de modificación constitucional para habilitar una vez más al presidente y al vicepresidente a ser postulados nuevamente.

Ganó la opción del No (51,3%). Un día después del referéndum, Evo Morales, sostuvo que la razón principal para la votación del Sí (48,7%) es la fidelidad electoral rural a su partido que se explicaría por un “pacto de sangre” étnico-cultural (*Opinión*, 23/02/2016). Ese voto rural certificó que para los sectores rurales y/o periurbanos, la presencia de un “indio” en el poder tiene una dimensión política, cultural y simbólica. Esos resultados confirmaron la adhesión de lo *nacional-popular* al proyecto político del evismo. No debemos olvidar, la fuente de su liderazgo se asienta, sobre todo, en el movimiento campesino e indígena. Este fuerte tejido identitario, por lo tanto, se condensa en el “voto duro” que viene como mandato de sus formas originarias de organización social donde, orgánica y colectivamente, el evismo adquiere su propia legitimidad. Mientras la derrota en el ámbito urbano fue leída por Morales porque en las “ciudades no me quieren” (*Opinión*, 23/02/2016).

Entretanto, la opción ganadora: la opción del No —y su pírrica diferencia de la opción del Sí—, se explica porque los sectores urbanos fueron definiendo su voto sobre la base de cuestionamientos y rupturas previas con

el gobierno de Morales. El malestar de estos sectores por un supuesto afán de “eternizarse en el poder” abonaron las condiciones necesarias para la gestación de una subjetividad “antievista” decisiva para las movilizaciones de los sectores urbanos postelecciones nacionales del año 2019 que desembocó, entre otras cosas, en la renuncia de Morales a la presidencia y la instauración de un régimen autoritario con pretensiones de convertirse en una contrarrevolución reaccionaria.

El referéndum marcó un declive de la capacidad hegemónica del evismo. Los efectos sociales y políticos de este referéndum para desportillar la hegemonía del evismo son innegables. Una faceta poco estudiada es el mandato emergente desde las bases sociales del evismo que determinó la reelección del binomio Morales-García Linera. O sea, estos espacios se constituyeron en ámbitos sociopolíticos que sirvieron para legitimar las decisiones políticas del evismo. En efecto, el 17 de diciembre del 2016, en Montero, el IX Congreso Ordinario del MAS-IPSP, aglutinó no solamente a militantes y dirigentes de este partido, sino a organizaciones sindicales, juntas vecinales, transportistas y organizaciones indígenas/campesinos de todo el país que con el argumento: “Si se va Evo, este proceso de cambio va fracasar” (Red Uno, 11/10/2019) resolvió que Morales-García Linera sea el binomio para las elecciones de 2019. Evo Morales respondió a ese mandato de las bases señalando que irá a la reelección en aras de la “unidad del pueblo boliviano, por la unidad orgánica, social, comunal y la unidad política electoral con principios ideológicos para un programa del pueblo boliviano y no así para el imperio” (*ibid.*). Así, se desoyeron los resultados del referéndum, el IX Congreso del MAS aprobó la aplicación de cuatro vías para habilitar una nueva candidatura

de Morales. Entre esas vías estaba solicitar al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una interpretación a los convenios internacionales, basada en el Pacto de San José, por un “derecho humano” a la participación política. En diciembre del 2017, el TCP falló a favor de la reelección de Morales y García Linera. Posteriormente, el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) certificó a este binomio para las elecciones nacionales del 20 de octubre de 2019.

Mientras tanto, las movilizaciones de los sectores medios urbanos se fueron incrementando enarbolando las banderas de la democracia. Estas movilizaciones se aglutinaron por la vía de las denominadas plataformas ciudadanas. El malestar en los sectores medios urbanos por la reelección del binomio Morales-García Linera marcó un nuevo derrotero en el devenir de la democracia boliviana. A la par de ondear la bandera democrática se acompañaba con arengas racistas que, posteriormente en el curso de las movilizaciones posteriores a las elecciones del 20 de octubre del 2019.

CONFLICTO POSTELECCIONES

Las elecciones del 20 de octubre de 2019 se verificaron en un contexto caracterizado por una merma de la legitimidad del evismo, asumiendo a este como el proyecto populista encarado por el MAS-IPSP y encarnado en el liderazgo político de Evo Morales. Ciertamente, la subjetividad antievista se instaló en el imaginario de los sectores medios urbanos que activaron su resistencia a la presencia indígena en el poder.

Ante la verificación de estas elecciones, los sectores de oposición anunciaban el discurso del fraude electoral. Esa posibilidad cobró fuerza en la subjetividad de los

sectores medios urbanos la misma noche de las elecciones cuando se determinó —el recuento provisional oficial tenía un avance del 83,76% del conteo— suspender la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). Esta decisión abrió las puertas a la duda sobre la transparencia del proceso electoral. Quizás por las dificultades logísticas y técnicas, el TREP no logró “atrapar” el voto duro del evismo en la misma noche de la jornada electoral y no consiguió dar la certeza requerida para despejar cualquier especulación.

A partir de aquella noche, el discurso del fraude empezó a movilizar a los sectores opositores. Según Fernando Mayorga, “Carlos Mesa, despliega una estrategia discursiva orientada a exigir la realización de una segunda vuelta respaldándose en datos del conteo rápido. Su objetivo era instalar la idea de ‘segunda vuelta o fraude’”. Pero también ese día, una hora después, el presidente marca la línea: “El MAS ha obtenido mayoría en las dos cámaras y que solo resta esperar el recuento definitivo para asegurar su victoria porque confía en el voto rural. Su objetivo era instalar la idea de victoria en primera vuelta definida por el apoyo campesino e indígena” (Bustillos, 2019). Posteriormente a la convocatoria de Mesa, se protagonizaron quemas de varios Tribunales Departamentales Electorales por grupos de exaltados. Después de un día de suspensión, la TREP fue reactivada otorgando la victoria al MAS-IPSP, lo que desató furia por indicios de fraude. Desde ese instante, los sectores medios urbanos empezaron a protagonizar movilizaciones. El discurso del supuesto fraude electoral fue el catalizador de ese malestar de los sectores medios urbanos que venía del referéndum de 2016.

Ante la tensión social y política postescrutinio, en medio de denuncias de fraude, los llamados a la “defensa

de la democracia” vinieron acompañados por disturbios, manifestaciones intolerantes, de cuño racista, de algunos grupos urbanos. Además de esos factores coyunturales, la racialización de la sociedad urbana fue una variable explicativa para que esas movilizaciones fueran *in crescendo* en las ciudades bolivianas. Estas movilizaciones buscaban, entre otras cosas, que el “indio se vaya del gobierno”. La ciudad de Santa Cruz fue el epicentro del conflicto social. De allí surgió el líder del Comité Pro Santa Cruz (CPS), Luis Fernando Camacho quien, enarbolando un discurso ultraderechista fue convocando, a través de cabildos, a la resistencia al gobierno de Morales.

EL EVISMO EN (RE)ACCIÓN

El evismo se encaramó como una estrategia que posibilitó articular a ese núcleo de lo *nacional-popular* en base a “factores de poder que hacen imposible establecimientos de una estructura jerárquica o definitiva” (García Linera, 2018). No debemos olvidar que el despliegue de esas acciones colectivas se constituyó en un eje fundamental en la estrategia de poder del evismo “para hacerse del poder”. La expansión de las diferentes estructuras del evismo se reactivó como respuesta a las movilizaciones de los sectores medios urbanos, sobre todo, tras el quiebre constitucional que derivó en la renuncia de Evo Morales a la presidencia del Estado Plurinacional.

El populismo del evismo radica en su discurso identitario, que se hace más fuerte en un momento de conflictividad política. Al discurso del fraude esgrimido por sectores opositores, se contrapuso el discurso del “escamoteo del voto rural”. Evo Morales en un tuit decía: “Exhortamos a la derecha boliviana a dejar de provocar

enfrentamiento entre bolivianos. No siembren odio y desprecio a los sectores populares. Desconocer el voto de los sectores populares es actuar con racismo”.²

Entonces, el “escamoteo del voto rural” se asoció con el racismo contra los sectores populares que sirvió como un mecanismo discursivo de antagonismo, es decir, establecer esa oposición entre amigo (nosotros) y enemigo (ellos) que siempre fue fundamental en las elocuciones de Morales. Ese tipo de interpelaciones estaba dirigido, sobre todo, a sus bases sociales. Así marcaba una relación antagónica, en este caso en torno al racismo. El respeto al “voto duro” se erigió en una estrategia discursiva que sirvió para reactivar esa memoria de exclusión de los sectores populares. En este contexto discursivo tiene sentido la frase de Morales repetida en el curso del conflicto: “Mi delito es ser presidente indio” (*Opinión*, 24/10/2019). El evismo como expresión del populismo asienta su discurso en esa forma de antagonizar para, a partir de allí, reforzar lazos identitarios con sus bases y, por lo tanto, reforzar “el argumento de que todas las movilizaciones y movilizadas tenían inclinaciones racistas y estaban dirigidas contra los sectores populares”.³

El discurso del respeto del “voto duro” en esa coyuntura conflictiva articuló esa añeja exclusión de los sectores populares por parte de las élites bolivianas. No es casual que, en el contexto de las movilizaciones de los sectores urbanos, los dirigentes campesinos de las federaciones Tupak Katari y Bartolina Sisa de La Paz amenazaran con usar armas y chicotes para defender

2 Fuente: <https://twitter.com/evoespueblo/status/1203361064462749697>

3 Fuente: “Racismo y regionalismo: la táctica del MAS en la crisis”, Rafael Archondo, *Página Siete*, 8/11/2019.

a Morales y al “proceso de cambio”. Entonces, el eje discursivo se concentraba en el respeto al “voto mayoritario” de los campesinos e indígenas que, según los datos preliminares oficiales, le otorgó, en la primera vuelta, la victoria electoral a Morales.

En ese contexto de alta conflictividad, Morales optó por arrimarse a sus bases sociales, especialmente cocaleñas, para encontrar en estos espacios un refugio político frente al acecho de los sectores opositores al MAS-IPSP. Al mismo tiempo, anunciaba que iban “a acompañar [al paro cívico] con cerco [campesino] a las ciudades” (*Página 7*, 27/10/2019). Asimismo, sectores aliados al evismo como la Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam) —núcleo articulador de varias organizaciones sociales que apoyan al MAS— anunciaban “estado de emergencia” y “movilización permanente”.

Cuando la conflictividad estaba en pleno incremento, la disputa política registró un giro discursivo. Mientras desde el gobierno se advertía que estaba en curso un “golpe de Estado”, del lado opositor el discurso sobre la “la segunda vuelta” mutó, primero, hacia la demanda de “nuevas elecciones” y, luego, al pedido de la renuncia al cargo de Evo Morales. La acción de los movimientos sociales se desplegó en defensa del “proceso de cambio” para enfrentar a grupos cívicos exaltados que inclusive se estaban organizando en grupos irregulares para amedrentar y amenazar a sectores populares.

El día de difuntos, el 2 de noviembre, a los pies del Cristo Redentor de Santa Cruz, frente a un conglomerado de gentío, el presidente del Comité Pro Santa Cruz (CPS), Luis Fernando Camacho, le dio un ultimátum al presidente Morales para que en 48 horas dimita a su cargo. Cumplido

el plazo, el dirigente cívico aseveró que llevaría una carta de renuncia a La Paz para que Morales firme.

Morales apeló a la capacidad de acción colectiva de los movimientos sociales evocando que “los campesinos y los mineros” fueron los protagonistas para recuperar la democracia. En este escenario conflictivo, el 6 de noviembre, en la localidad cochabambina de Vinto, la alcaldesa del MAS-IPSP fue retenida y humillada por parte de grupos opositores: le cortaron el pelo y le rociaron con pintura roja. Este hecho se explica por la presencia de sectores aliados al evismo que buscaban desbloquear aquellos sectores interrumpidos en la ciudad de Cochabamba y se acusó a la autoridad edil haber cobijado a varios cocaleros que habían arribado a Vinto para el desbloqueo. Así, Cochabamba se constituyó en un escenario de la confrontación entre sectores cívicos y sectores populares.

Ante el amotinamiento policial, el 8 de noviembre, la cúpula del MAS-IPSP convocó a sus bases a resguardar Palacio de Gobierno (la Casa Grande del Pueblo). Un comunicado oficial señalaba que el objetivo era “defender la revolución democrática cultural y la democracia lograda con la lucha del pueblo, defender nuestro voto del campo y la ciudad en favor del binomio ganador Evo-Álvaro, y expulsar definitivamente al fascista y sus sicarios de la ciudad de La Paz” (*Página 7*, 09/11/2019). De manera pacífica, varios simpatizantes del evismo, ante la ausencia de los policías que se encontraban amotinados, fueron ocupando Plaza Murillo.

En medio de ese asedio policial y cívico, la Central Obrera Boliviana (COB), aliada del evismo, en un pronunciamiento público pedía la renuncia del presidente Morales argumentando que no sería “cómplice del derramamiento

de sangre (...) ni del luto” y aclarando que la “COB siempre estará con sus organizaciones” (Página 7, 10/11/2019).

Aprovechando el motín policial en Potosí, el domingo 10 de noviembre, grupos violentos con fines de amedrentamiento y amenaza ejecutaron el ataque contra autoridades y dirigentes del MAS-IPSP. A esos actos violentos se sumó la “sugerencia” de una alta autoridad castrense para que el Presidente “renuncie”. Frente a este panorama desolador, Evo Morales se refugió en el trópico cochabambino para ser resguardado por sus bases sociales. Después de tres semanas de protesta y tras perder el apoyo de las Fuerzas Armadas, Morales dimitió de la presidencia.

Luego de la renuncia presidencial, las primeras reacciones de grupos aliados al evismo fueron precisamente en el trópico cochabambino donde los partidarios salieron a quemar puestos policiales con la arenga de “guerra civil”. En aquel atardecer dominical, Plaza Murillo quedó vacía; solo las palomas consuetudinarias ocupaban el contorno de la plaza y las calles aledañas. En ese ambiente desolador, el entonces líder cívico, Luis Fernando Camacho, junto con el líder cívico potosino Marco Antonio Pumari y el abogado Eduardo León, “con el apoyo y protección de la Policía y las Fuerzas Armadas, entraron al Palacio de Gobierno, extendieron la bandera de Bolivia en el suelo [el *hall*] y sobre ella, una Biblia” (Cordero, 2019: 23) Así, “mientras festejaba en La Paz el derrocamiento del presidente, en la calle quemaban wiphalas y gritaban ‘¡Echamos al comunismo!’” (Molina y Stefanoni, 2019). Quizás esa arremetida inicial de los sectores conservadores se tradujo en ese acto simbólico de quemar la wiphala. Este hecho indignante provocó la movilización de lo *nacional-popular*. El 13 de noviembre,

la senadora Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta interina y fue investida por un militar, para luego dirigirse al Palacio de Gobierno con una enorme Biblia en las manos, dándole “gracias a Dios que ha permitido que la Biblia vuelva a entrar a Palacio; que él nos bendiga e ilumine” (Cordero, 2019: 23).

La autoproclamación de Áñez como presidenta de Bolivia provocó indignación en los sectores populares. Los primeros días de su posesión fueron signados por una fuerte reacción popular. La ciudad de El Alto se erigió en el espacio para la movilización popular. Esta acción colectiva alteña demostró que la esencia del *evismo* no radica simplemente en Evo Morales, sino trasciende su liderazgo. Aquí está la paradoja de la denominación de *evismo*. Una muestra fue la acción colectiva de las organizaciones sociales de El Alto en el curso de la resistencia popular al ejercicio autoritario del gobierno ultraderechista de Áñez. Esta movilización reveló que tiene su propia lógica organizativa territorial, su propia subjetividad y, por lo tanto, su propia narrativa movilizadora, independiente del MAS y de las directrices del propio Evo Morales. Esta acción colectiva se enclava en la memoria de larga y corta duración de la resistencia popular.

En el inicio de la presidencia de Áñez, esta movilización popular expresó ese potencial político del *evismo*. La estrategia usada por el gobierno transitorio para apaciguar la protesta popular devino en masacres en Sacaba y El Alto. Este carácter represivo del gobierno posibilitó la rearticulación de la acción movilizadora del *evismo* que logró, coyunturalmente, parar la “mano dura” gubernamental. Y, en lo simbólico, consiguió reivindicar a la wiphala, no solamente como símbolo nacional, sino como un ícono de la identidad de los pueblos indígenas/campesinos.

Finalmente, ante la ausencia de Evo Morales, exiliado en Argentina e imposibilitado de participar como candidato presidencial, se abrió la posibilidad de que otros liderazgos puedan erigirse como candidatos del MAS-IPSP. En este contexto, los diferentes núcleos campesinos e indígenas y urbanos postulan a sus candidatos. En todo caso, esta dinámica política no es una amenaza interna para el MAS-IPSP, sino, todo lo contrario: la recuperación del potencial populista democratizador de lo *nacional-popular* del evismo. Quizás aquí radica la capacidad política del evismo para contrarrestar la contrarrevolución conservadora en curso.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- Bustillos, Iván (2019) "Mutua desconfianza". *Animal Político, La Razón*, 31/10/2019.
- Cordero, Sofía (2019) "Lo plurinacional tras las elecciones". *Animal Político, La Razón*, 25/12/2019.
- García Linera, Álvaro (2006) *El evismo: lo nacional-popular en acción*. Buenos Aires: CLACSO.
- García Yapur, Fernando (2019) "Evismo y Eva Copa". *Los Tiempos*, 21/12/2019.
- (2018) "Devenir estatal de lo campesino indígena". *La Razón*, 10/10/2018.
- Gramsci, Antonio (1978) *Notas sobre Maquiavelo, sobre Política y sobre el Estado Moderno*. México D. F.: Juan Pablos Editor.
- Laclau, Ernesto (2006) *La razón populista*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica (FCE).
- (1978) *Política e ideología en la teoría marxista: capitalismo, fascismo, populismo*. México D. F.: Siglo XXI.

Mayorga, Fernando (2003) *Antinomias: el azaroso camino de la reforma política*. Cochabamba: CESU.

Molina, Fernando y Stefanoni, Pablo (2019) ¿Cómo derrocaron a Evo? Disponible en: <https://www.nodal.am/2019/11/como-derrocaron-a-evo-por-pablo-stefanoni-y-fernando-molina/>

Tórrez, Yuri (2019) “Más allá del populismo”. Disponible en: <https://hurgandoelavispero1.wordpress.com/2019/11/25/mas-alla-del-evismo-por-yuri-f-torrez/>

Touraine, Alain (1989) *América Latina. Política y sociedad*. Madrid: Espasa.

Los autores

JOSÉ LUIS ANDIA

Licenciado en Derecho, especialista en Investigación Científica y Epistemología, máster en Ciencia Política y Políticas de Desarrollo y doctor en Ciencias Sociales con mención en Política Latinoamericana. Profesor universitario, investigador y consultor. Su publicación más reciente es *Historia Política, Social y Económica de América Latina. Primera Parte* (Kipus, 2018).

MARCELO AREQUIPA AZURDUY

Politólogo, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente trabaja como docente investigador en la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”. Sus trabajos tienen que ver con temas de teoría política, cultura política y partidos políticos.

ERIKA BROCKMANN QUIROGA

Psicóloga y magister en Ciencia Política. Fundadora del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza. Docente universitaria. Fue parlamentaria (1997-2006), miembro del Tribunal Nacional de Ética Periodística

y de misiones de observación electoral. Consultora de UNwomen, PNUD, IDEA y columnista de medios de prensa escrita.

FERNANDO MAYORGA

Sociólogo y doctor en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Catedrático en la Facultad de Ciencias Sociales y director del Centro de Estudios Superiores Universitarios (CESU) de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS). Coordinador del Grupo de Trabajo “Ciudadanía, organizaciones populares y representación política” de CLACSO. Sus últimas publicaciones son *Mandato y contingencia. El estilo de gobierno de Evo Morales* (Fundación Friedrich Ebert, 2019) y *Antología de la ciencia política boliviana* (Biblioteca del Bicentenario de Bolivia, 2019, ant.).

FERNANDO MOLINA

Periodista y escritor. Autor de numerosos ensayos y biografías y de una *Historia contemporánea de Bolivia: De la UDP al nacimiento del Estado Plurinacional* (Gente de Blanco, 2016). Como investigador social, es autor de *Modos del privilegio. Alta burguesía y alta gerencia en la Bolivia contemporánea* (CIS, 2019), entre otros trabajos.

LOURDES MONTERO

Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Fue especialista en la Subsecretaría de Asuntos de Género, así como vicedirectora de la Pequeña Producción del Ministerio de

Desarrollo Económico. Milita en el movimiento feminista de Bolivia y ha dirigido la ONG Centro Gregoria Apaza en la ciudad de El Alto. Actualmente es columnista del periódico *La Razón* y se desempeña como coordinadora del Programa de Justicia de Género en Oxfam.

ALEX OJEDA COPA

Licenciado en sociología, con especialidad en informática. Magíster en Investigación en Ciencias Sociales y doctorante en Estudios Sociales en el CESU-UMSS. Ha publicado artículos sociológicos sobre Internet y nuevas tecnologías en distintas publicaciones académicas.

ARMANDO ORTUÑO YÁÑEZ

Licenciado en Economía y con una maestría en Econometría en la Universidad de Ginebra, Suiza. Entre 1998 y 2003 fue investigador en la Oficina del Informe de Desarrollo Humano del PNUD en Bolivia. Entre 2004 y 2006 ejerció funciones públicas como viceministro de Planificación y como embajador ante la Unión Europea. Ha ejercido la docencia en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y en la Universidad Católica Boliviana "San Pablo".

MANUEL SUÁREZ ÁVILA

Doctor en ciencias políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Consultor electoral y docente universitario. Ejerció funciones diplomáticas como consejero en la Embajada de Bolivia en Madrid (1995) y en la representación boliviana en Naciones Unidas (Ginebra). Fue elegido diputado (MNR) por el Beni en 1997. Ha sido

designado como viceministro de Relaciones Exteriores el 12 de febrero de 2020.

YURI F. TÓRREZ

Sociólogo y comunicador. Magíster en Ciencias Políticas y doctor en Estudios Culturales Latinoamericanos. Docente universitario. Fue responsable del Área Política y Jurídica del CESU y coordinador del Área de Investigación del Centro Cuarto Intermedio. En 2014 publicó, en coautoría, *Construcción simbólica del Estado Plurinacional* (PIEB).

Este libro se terminó de imprimir
en junio de 2020, en los talleres de
Grupo Impresor S.R.L.
La Paz, Bolivia

Este libro reúne diez ensayos que reflexionan sobre el proceso político que sufrió Bolivia entre octubre y noviembre de 2019. Algunos textos abarcan los primeros meses de gestión del gobierno interino presidido por Jeanine Áñez, empero fueron escritos antes del anuncio de su candidatura presidencial.

La intención de Oxfam en Bolivia y del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón (CESU-UMSS) es propiciar una reflexión crítica sobre los acontecimientos políticos que vivió Bolivia en esos meses turbulentos. Para cumplir tal propósito, se convocó a profesionales de diversas disciplinas y con distintas posturas que indagan sobre los eventos acaecidos en esa compleja coyuntura.

